

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**La libertad religiosa y la blasfemia ante el derecho penal**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**Ignacio María Gordillo Álvarez-Valdés**

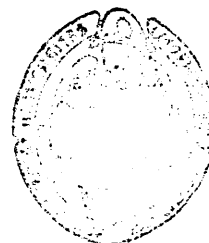
**Madrid, 2015**

913 1505

"LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA BLASFEMIA ANTE EL

DERECHO PENAL"

Tesis doctoral de Ignacio Gordillo  
Alvarez-Valdés, dirigida por el Ca  
tedrático D. Antonio Ferrer Sama.



BIBLIOTECA  
DE DERECHO

Madrid, 1.983

## S U M A R I O

- Introducción. (Págs. 4 a 6)

I - La doctrina.

A) Delitos y faltas contra la libertad religiosa:  
(Págs. 7 a 32)

- La libertad religiosa hasta el Concilio Vaticano II y doctrina pontificia. (Págs. 33 a 65)

- La libertad religiosa después del Concilio Vaticano II. (Págs. 65 a 95)

B) Especial examen de la blasfemia. (Págs. 96 a 118)

II - El derecho español.

A) Derecho histórico. (Págs. 119 a 158)  
B) Derecho vigente. (Págs. 159 a 273)  
C) Jurisprudencia. (Págs. 274 a 318)

III - El derecho comparado. (Págs. 319 a 357)

IV - Conclusiones (Págs. 358 a 371)

NOTAS (Págs. 372 a 376)

Bibliografía. (Págs. 377 a 392)

I N T R O D U C C I O N



## I N T R O D U C C I O N

Al buscar un tema de interés, a la vez que actual, para realizar la tesis doctoral, después del examen de múltiples posibilidades y materias en que basar mi trabajo, encontré en el Derecho Penal uno - del que se había escrito poco e igualmente eran escasas las referencias que al mismo hacían nuestras leyes. Se trata de la blasfemia, regulada en el artículo 239 del Código Penal, dentro de los "Delitos contra la Seguridad Interior del Estado", y a la que dedica un capítulo entero. El tema era de indudable importancia y transcendencia para todos, pero más aún - para quienes tenemos creencias religiosas.

Sin embargo, el tratar únicamente de la blasfemia sin hacerlo de otros temas con ella relacionados, dejaría el trabajo incompleto y las posibilidades de - llegar a alguna conclusión serían muy escasas. Por tal motivo lo he ampliado al interesantísimo y siempre actual de la libertad religiosa.

Una vez comenzado el trabajo, mientras me dedicaba a buscar antecedentes legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, nuestro país experimentó una serie de importantes reformas en todos los órdenes, pero sobre todo en el legislativo. Buena prueba de ello es la nueva Constitución de 1.978, el proyecto del nuevo Código Penal y una nueva Ley de libertad religiosa que - sustituye a la de 20 de junio de 1.968.

La aprobación de la Constitución determina una serie de reformas de las leyes vigentes, y en especial de nuestro Código Penal, no siendo de extrañar que, al afirmarse la aconfesionalidad del Estado, la blasfemia fuese modificada o, incluso, suprimida de nuestro Código.

Tratar la blasfemia implica tener en cuenta las creencias religiosas y por ello vamos a precisar el examen del tema no solo desde el aspecto jurídico sino también desde el religioso. Resulta, pues, fundamental la distinción entre delito y pecado. Recordemos que antiguamente en Roma la alteración de lindes era castigada como sacrilegio por estar éstas bajo la directa protección del dios Terminus, con lo que se confundían los aspectos religiosos y los jurídicos. Hoy en día la distinción parece que es clara, y cada acción delictiva o pecaminosa tiene su peculiar castigo. Sin embargo, observamos que en muchos ordenamientos para que se castigue la blasfemia es necesario que esta vaya acompañada de desórdenes públicos, estando tipificado como un delito contra el orden público.

Por mucho que se admita, como en la Constitución de 1.931, la aconfesionalidad del Estado así como una más amplia libertad religiosa y de cultos, nunca podrá permitirse que se ofenda impunemente a Dios, a la Virgen o a los Santos. Asimismo, deben ser protegidas todas las creencias religiosas. El respeto a las ideas religiosas de los demás es uno de los puntos básicos de

la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídico europeos. No se puede consentir que las calles u otro lugares públicos sean sitios donde, por costumbre o simplemente por actitudes permisivas, se ofenda e injurie a aquello por lo que la mayoría siente un profundo respeto.

Analizaremos desde diversos aspectos la problemática planteada por la blasfemia en relación con la libertad religiosa, y también el tema en el derecho comparado. Los puntos de vista de la doctrina, de la jurisprudencia y, sobre todo, de la legislación, tanto españoles como extranjeros, servirán para llegar a algunas conclusiones de interés en nuestro trabajo doctoral.

- I -

LA DOCTRINA:

A) Delitos y faltas contra la libertad religiosa.

El concepto de libertad religiosa ha sido incorporado recientemente a la doctrina católica. Tiene - una significación y alcance muy definidos, considerán- dolo como el medio que se juzga más apto para lograr la finalidad pastoral a que antes atendía la idea de tole- rancia civil, tal y como fué formulada a partir de León XIII y mantenida en la enseñanza de la Iglesia hasta el pontificado de Pío XII. (1).

Dicho concepto de libertad religiosa reemplaza con ventajas al de tolerancia civil, por significar un punto de coincidencia entre un buen número de esti- mables y variadas tendencias, unas católicas y otras no católicas, en el tratamiento de un problema anteriormente polémico cual es la actitud que deben adoptar los - ordenamientos civiles ante la profesión de una fé reli- giosa por parte de los individuos, considerando a éstos individualmente o en grupos o comunidades más o menos - organizadas de carácter religioso.

La coincidencia entre ambos conceptos se ha - logrado mediante una consideración realista que, definiendo un mínimo esencial siempre en relación única y exclusiva con el ordenamiento civil abstrae del tema de la - profesión religiosa aquellos elementos que hacen imposi- ble el asentimiento de los hombres de buena voluntad, al ser doversamente estimados dichos elementos al existir - varias confesiones religiosas.

La liberead religiosa se entiende hoy como -

una exigencia de la dignidad humana, un postulado de Derecho Natural que impone al Estado el deber de garantizar a las personas una cierta esfera de autonomía en todo lo que toca, ya sea directa ya indirectamente, a la profesión de sus creencias religiosas. Como veremos en su momento, la mayoría de los Estados recogen el derecho a la libertad religiosa en sus textos constitucionales o en sus cartas fundamentales, incluso considerándolo en repetidas ocasiones como un derecho de carácter fundamental.

El derecho a la libertad religiosa se trata de - un derecho de inmunidad que necesita para su reconocimiento efectivo de una norma del ordenamiento civil, cuya función primordial es la defensa de la persona contra toda - coacción en la vida secular que le impida o dificulte realizar aquellos actos que integran su vida religiosa.

En el caso concreto de España, buena prueba de ello es la reciente promulgación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa el pasado día 5 de julio de 1.980.

El mínimo esencial de la inmunidad garantizada por el ordenamiento civil, constituye el objeto del que se denomina genéricamente derecho de libertad religiosa, que se compone de varias facultades o derechos en particular.

(2). Los más importantes son:

a) derecho a la libertad de fé: como el derecho de profesar en cada momento la fé religiosa abrazada voluntariamente, según el parecer subjetivo personal, así como el derecho de no profesar ninguna creencia religiosa;

b) derecho a la liberead de culto: como el derecho de -

honrar a Dios privada o públicamente, de acuerdo con el credo confesado y elegido voluntariamente;

c) derecho a la libertad de asociación religiosa: como el derecho que permite a las personas que profesas las mismas creencias religiosas agruparse en comunidades o - confesiones religiosas que, con autonomía corporativa y - disponiendo de sus propios ministros, facilitan a los individuos agrupados el ejercicio de su libertad religiosa;

d) derecho de propaganda religiosa: como el derecho que permite dar testimonio y enseñar a otros las creencias pro fesadas;

e) derechos religiosos de caracter familiar: son los - relativos a la celebración de matrimonio y a la elección de escuelas para la educación de los hijos.

La doctrina considera de manera uniforme que el derecho de libertad religiosa es un verdadero derecho positivo en cuanto necesita estar reconocido, garantizado y definido con precisión por el ordenamiento civil. Este es el caso español que desde el año 1.967, año en que se publicó la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1.967, hoy derogada por la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1.980, ha venido reconociendo su or denamiento civil el derecho de libertad religiosa. Recordemos, aunque sólo sea de manera rápida, pues en otro apar tado lo estudiaremos más detenidamente, que la presente Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce en el art. 2º los siguientes derechos:

a) derecho de profesar la creencia religiosa que libre-

mente se elija o de no profesar ninguna;

b) derecho de practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión;

c) derecho de recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole.

d) derecho a reunirse y manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas.

Los tratadistas lo consideran igualmente un derecho de carácter negativo, en cuanto la norma que lo consagra se abstiene de cualquier calificación de los credos religiosos, salvo en lo que mira a sus relaciones con el - bien común temporal, y deja a la conciencia de los súbditos la estimación de sus deberes personales para con Dios, de los que, intencionadamente, no se hace cuestión civil. En tal sentido el derecho de libertad religiosa es un puro estatuto de inmunidad en la esfera religiosa, tanto para las personas individuales como para las comunidades o confesiones. Precisamente en eso se distingue esencialmente de la tolerancia civil, que presupone siempre un punto de vista dogmático por parte del ordenamiento secular.

En cuanto a la dimensión social del derecho de - libertad religiosa debemos decir que el nuevo concepto de libertad religiosa pone gran énfasis en la directa referencoa a la persona humana, cuya dignidad se trata de amparar y defender, por lo que se define como un derecho subjetivo



que ha de ser reconocido en la estructura jurídica de la sociedad civil. Pero junto a éste aspeceo personal o subjetivo que constituye el fundamento y la raíz última de la libertad religiosa, no se puede dejar de lado la dimensión social del tema, que exige contemplarlo desde el puneo de vista del bien común temporal, teniendo en cuenta que éste es el criterio principal que el Estado tiene en cuenta en la elaboración de sus normas jurídicas. El bien común temporal entra necesariamente en juego para definir concretamente el estatuto civil de la libertad religiosa. El ejercicio de la libertad religiosa deberá ser limitado y aún suprimido por exigencias del bien común de la sociedad civil en aquellas situaciones excepcionales en que pudiera - dañar gravemente el orden público, es decir, cuando perturbara la paz pública, violara la moralidad pública o lesionara los derechos de otros hombres.

Sin embargo, el derecho a la libertad religiosa sirve igualmente al bien común al consagrarlo legalmente con su contenido mínimo esencial, por servir al bien común temporal, en cuanto representa una garantía de la paz social.

Buena parte de la doctrina católica toma toda - vía en cuenta el bien común temporal en sus relaciones con la libertad religiosa en otro aspecto que merece subrayarse. No basta reconocer siempre que sea posible, es decir, siempre que no se den las excepciones impuestas por el orden público, el derecho de libertad religiosa con su contenido mínimo esencial. Es necesario afirmar, con repulsa de

cualquier laicismo, que relega la religión a la esfera individual, como si fuera un valor exclusivamente interior, - que el hecho religioso, cuando se enraiza en la vida social, y llega a ser por eso un hecho social, merece ser considerado por el ordenamiento profano, por ser entonces también un elemento de la vida presente que forma parte del bien común temporal. Y esto lleva consigo la necesidad, siempre con un planteamiento de puro derecho natural, aceptable por todos los hombres de buena voluntad, de que la libertad religiosa sea reconocida por los Estados de manera positiva, ateniéndose a las circunstancias reales de cada sociedad civil, según la variedad de supuestos de hechos posibles. (3).

El Papa Juan XXIII, tanto en la encíclica "Pacem in terris" como en la "Mater et Magistra" (4) proclama de manera solemne que la dimensión religiosa de la persona humana es un elemento integrante del bien común temporal. El mismo Juan XXIII dijo en el radio-mensaje al Congreso Eucarístico Internacional de Munich de 1.960 que "la unidad en la verdadera fé es, ciertamente, la que más puede desearse, la más saludable, la más hermola".

Es necesario tener muy en cuenta que el fenómeno del actual pluralismo religioso es una realidad, no sólo desde el punto de vista de los individuos, sino también desde el punto de vista de la actual presencia histórico sociológica de los diferentes credos religiosos en las distintas comunidades civiles. Es evidente que son numerosos los Estados que realizan, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, una verdadera discriminación entre las confesiones religiosas, procurando promover aquella que está enraizada en sus tradiciones populares y que ha configurado las instituciones de la sociedad. Esto ocurre en algunos casos en relación con el

catolicismo, pero también son numerosos los Estados que profesan oficialmente otras religiones, el Islam, el bu dismo....., que han contribuido de modo decisivo y pro - fundo a modelar las instituciones de las sociedades donde están sociológicamente enraizadas.

El concepto de libertad religiosa tiene como - objetivo conseguir un estatuto justo que ampare a los in dividuos y a las minorías contra cualquier exceso del po der civil. Este objetivo sirve también al bien común de - la sociedad internacional y favorece la difusión por me - doos lícitos de las distintas confesiones. Por lo dicho al principio de la libertad religiosa es perfectamente com patible con un régimen civil que dispense un trato prefe - rente a la religión común de los ciudadanos. Cuando la prácti ca de un determinado credo religioso es sentida por la - comunidad político estatal como un bien público común, el estatuto de la libertad religiosa, que está inspirado en la necesidad de amparar de modo afectivo a las minorías disiden tes, debe hacerse compatible con el trato preferente a la - religión de la mayoría, por exigirlo así la solidaridad del Estado con sus ciudadanos, según un planteamiento político auténticamente democrático.

Son varias las definiciones que se dan de la li - bertad religiosa. Ninguno ~~de~~ nuestros actuales textos lega - les dá una definición de la misma, limitándose a enumerar - sus elementos, límites, posibilidades de protección jurídi - ca..... Como ya vimos, la Constitución califica de derecho fundatental el derecho a la libertad religiosa en el artícu - lo 16, dentro del Capítulo "Derechos y libertades". (5).

Por regla general se conceptúa la libertad religiosa como el derecho de todos de profesar la propia - fé religiosa, en cualquier forma, individual o socialmente, y ejercitar en público o privadamente el culto, siempre que no sea contrario al bien común, o al orden público como dice nuestra Constitución.

Es interesante la diferenciación que hace Francesco Ruffini al señalar que son diferentes la libertad de pensamiento, la libertad eclesiástica y la libertad religiosa. La primera equivale a la libertad ideológica, sin tener especial referencia a la materia religiosa. La libertad de eclesiástica está relacionada con la creencia y profesión de una determinada iglesia. Por último, la libertad religiosa es la libertad de conciencia, de fé o de confesión. No se puede considerar el concepto de libertad religiosa como un concepto filosófico, no teológico, como puede ser el relativo a la libertad eclesiástica, sino - que es un concepto o principio esencialmente jurídico.(6).

Es interesante, igualmente, la teoría expuesta por Amadeo de Fuenmayor en sus varios escritos sobre el tema de la libertad religiosa (7). Empieza por afirmar que la libertad religiosa es una exigencia de la dignidad humana y un postulado de Derecho natural.

El Estado tiene el deber de garaneizar a los ciudadanos una esfera de autonomía en todo lo referente, directa o indirectamente, a la profesión de sus creencias religiosas. Dicho tratadista señala que el derecho a la libertad religiosa se compone de los siguientes derechos:

- derecho a la libertad de fé;
- derecho a la libertad de culto;

- derecho a la libertad de asociación religiosa;
- derecho a la propaganda religiosa;
- derecho religioso de caracter familiar;

Estos componentes del derecho a la libertad religiosa los estudiaremos más adelante.

El proyecto de Ley de Libertad religiosa dice en su artículo segundo que dicho derecho comprende:

- derecho de profesar o no profesar alguna confesión religiosa;
- derecho de manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas;
- derecho de practicar los actos del culto de una confesión;
- derecho de impartir y recibir enseñanza e información religiosa;
- derecho de reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos;
- derecho de asociarse con idénticos fines.

El Papa Juan XXIII trata la cuestión de la libertad religiosa en la encíclica "Pacem in terris" al considerar dicho derecho como un derecho de caracter subjetivo y perteneciente a toda persona humana.

El Concilio Vaticano II dice: "Como la libertad

religiosa que los hombres exigen para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios mira a la inmunidad de coacción en la sociedad civil deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los - hombres y de las sociedades para con la verdadera reli - gión y la única Iglesia de Cristo". (8).

El escritor Guizot en la "Historia de la civilización en Europa" dice entre otras cosas: "En fin, la Iglesia iniciaba un gran hecho: la separación del poder espiritual y el poder temporal. Esta separación es la fuente de la libertad de conciencia: su principio es el mismo que - sirve de fundamento a la libertad de conciencia más rigurosa y más amplia. La separación de lo temporal y lo espiritual se funda sobre la idea de que la fuerza material no tiene derecho ni poder sobre los espíritus, sobre la conciencia, sobre la verdad. Deriva de la distinción establecida entre el mundo del pensamiento y el mundo de acción, el mundo de los hechos interiores y de los hechos exteriores. De suerte que este principio de la libertad de conciencia por el cual Europa ha combatido tanto, ha sufrido tanto, a menudo contra el deseo del clero, estaba depositado, bajo el nombre de separación de lo espiritual y lo temporal, en la cuna de la civilización europea, y fué la Iglesia - cristiana quien por una necesidad de su situación, por defenderse entoncer contra la barbarie, lo introdujo en ella y lo sostuvo". (9).

Es igualmente interesante la Declaración "Dignitatis Humanae".

Las declaraciones exponen el punto de vista de

la Iglesia sobre una situación o un problema concreto del tiempo presente. Tienen una intención dirigida en cierto modo hacia fuera de la Iglesia, con un aspecto de proclamación al mundo de una determinada postura de la Iglesia, no puramente concreta como en los decretos, - no absolutamente permanente y definitiva como en las - constituciones. Concretamente dice: "Si consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una - comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas".

La Constitución dogmática "Lumen gentium" sobre la Iglesia en el número 36 dice: "Así como la Iglesia debe reconocer que la ciudad terrestre, vinculada justamente a las preocupaciones temporales, se rige por principios propios, con la misma razón hay que rechazar la infausta doctrina que intenta edificar a la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca o destruye la libertad religiosa de los ciudadanos".

El derecho a la libertad religiosa es tan antiguo que en el año 313 encontramos el prescrito de los emperadores Licinio y Constantino, el famoso edicto de Milán, que ya decía: "hemos acordado reconocer a los cristianos y a todos los demás hombres la libertad y la posibilidad de practicar la religión que cada uno quiera".

El escritor Jacques Maritain, en su libro "El

campesino de Garona", decía: "Reconforta el pensar que ahora ha sido proclamada la libertad religiosa. La así denominada no es la libertad que yo tendría que creer o de no creer según mis disposiciones del momento y de fabricarme un ídolo a mi gusto, como si yo tuviera un deber primordial con relación a la Verdad; es la libertad que tiene cada persona humana, cara al Estado o cualquier poder temporal, de velar por su destino eterno buscando la verdad con toda su alma y conformándose a ella tal como ella la conoce y obedece según su conciencia aquello que ella considera como verdadero en relación a las cosas religiosas (mi conciencia no es infalible y al mismo tiempo nunca tengo el derecho de actuar contra ella). Y al mismo tiempo que proclamaba la libertad religiosa, el Concilio ha puesto bajo una nueva luz, de la que nuestro tiempo tiene especial necesidad, los tesoros sagrados de la doctrina católica que conciernen a la Iglesia y a la Revelación". (11).

El Derecho Constitucional español ha considerado durante mucho tiempo la religión católica como la única de la nación española, y a la cual se protegía y garantizaba su práctica de modo exclusivo. Como ya veremos en su momento, la situación actual ha sido modificada con la promulgación de la vigente Constitución de 1.978.

Sin embargo, es de destacar que la Ley de Libertad religiosa del año 1.967 significó un paso importante en el campo de las libertades fundamentales y entre estas se encontraba la libertad religiosa de manera principal. Pasábamos de una religión oficial, o dominante y por lo -



cual tutelada, o del Estado, a una plena libertad de creencias y de cultos, en igualdad de situación todas las confesiones o creencias de caracter religioso.

León XIII intérprete de una tradición doctrinal que llega hasta Pío XII considera la cuestión de la libertad religiosa desde el punto de vista de la verdad objetiva. La verdad y el error viene a afirmarse, no pueden considerarse iguales y; por consiguiente, con los mismos derechos. Solo lo verdadero, lo justo y lo moral, tienen derecho al respeto y a la protección. Lo falso, lo injusto o lo inmo-  
ral solo cabrá tolerarlo sin aprobarlo por sí mismo, en -  
cuanto que su prohibición pudiera acarrear males mayores -  
que los producidos pemitiendo su existencia.

El Vaticano II, siguiendo a Juan XXIII, considera la cuestión desde otro punto de vista: el respeto debido a la persona humana en la búsqueda de la verdad, que debe quedar exenta de todo tipo de coacción.

Insistiendo en esta idea el Vaticano II afirma -  
que los hombres "impulsados por su propia naturaleza a bus-  
car la verdad, tienen la obligación de buscarla, sobre todo  
la que se refiere a la religión. Pero no pueden satisfacer  
esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si  
no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de in-  
munidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a  
la libertad religiosa no se funda en la disposición subjeti  
va de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual,  
el derecho a esta inmunidad permanece tambien en aquellos -

que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, y no puede impedirse su ejercicio con tal - que se respete el justo orden público".

Indudablemente ha variado el enfoque de la cues ti ón. Antes se consideraba el derecho que corresponde a la verdad; ahora se entiende al respeto debido a la dignidad de la persona en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, el resultado práctico a que se llega es el mismo porque en - una sociedad pluralista y tan intercomunicada como la ac - tual, la tol er an cia tendría que llegar a su límite máximo coincidiendo con la libertad religiosa, que también tiene sus l<sup>i</sup> ti tes en el justo orden público.

El Vaticano II se ha referido de manera específi ca a la libertad religiosa en la declaración Dignitatis Hu ma nae, pero también ha aludido a ella en otros documentos. Resumiendo esta doctrina la podemos concretar en los siguien tes puntos:

I) La Libertad religiosa puede entenderse en un doble sen tido. En primer término como la posibilidad práctica de cum plir o no "el deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo", punto en que el Concilio "deja íntegra la doctrina tradicio - nal católica" y no se ocupa directamente del mismo (LR, I. CF. respecto a la libertad para la búsqueda de la verdad y la libertad del acto de fé. LR, 2, 3 y 10).

En segundo lugar, la libertad religiosa puede en - tenderse como inmunidad de coacción, de manera "que en mate ria religiosa ni se obligue a nadie a obrar con tra su con -

tra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos" (LR, 2).

2) El derecho a la libertad religiosa, así entendida, se funda en la dignidad de la persona humana y debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad y convertido en un derecho civil.

3) El poder civil se extralimitaría si pretendiese dirigir o impedir los actos religiosos, según hemos indicado (LR, 3, 6 y 15).

4) El derecho a la libertad religiosa corresponde a los hombres no solo considerados individualmente, sino también asociados.

Las comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social del hombre, y de la religión. Con tal de que no violen las justas exigencias del orden público tienen derecho a:

- regirse por sus propias normas.
- honrar a la Divinidad con culto público.
- ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerlos mediante la doctrina.
- promover instituciones adecuadas para ordenar la vida de sus seguidores, según sus propios principios religiosos.

- seleccionar, formar, nombrar y trasladar a sus minis tros.

comunicarse con las autoridades y comunidades religiosas con sede en otras partes;

- erigir edificios religiosos y adquirir y disfrutar - los bienes convenientes.

- enseñar y profesar públicamente, de palabra o por - escrito su fé.

- manifestar el valor de su doctrina para la ordena- ción de la sociedad y la vitalización de toda actividad humana.

- reunirse libremente y establecer asociaciones edu- cativas, culturales, caritativas y sociales .

5) Cada familia, en cuanto sociedad, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa bajo la dirección de los padres.

El poder civil debe respetar la libertad para la elección de escuelas u otros medios educativos, sin - obligar a que se asista a elecciones inadecuadas a la con- vicción religiosa de los padres ni imponer un sistema edu- cativo que excluya la formación religiosa.

6) "Si en atención a circunstancias peculiares de los pueblos se otorgase a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en el ordenamiento jurídico de la - sociedad, se ha de reconocer y respetar a todos los ciu- dadanos y comunidades religiosas el derecho a la liberead religiosa, evitando que jamás, no abierta ni ocultamente,

se lesione la igualdad jurídica de los ciudadanos, por motivos religiosos, ni se establezca entre ellos discriminación alguna".

7) El derecho a la libertad religiosa está sometido a normas reguladoras. Hay que tener en cuenta los derechos ajenos, los deberes hacia los demás y hacia el bien común. En la difusión de la fé religiosa hay que abstenerse de toda clase de actos que signifiquen coacción o persuasión inhonestas o menos recta, sobre todo traeándose de personas rudas o necesitadas.

Corresponde principalmente al poder civil los abusos sin hacerlo arbitrariamente o favoreciendo con injusticia a una parte, sino con normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo, para la tutela eficaz de todos los ciudadanos; la armonización de sus derechos; la adecuada promoción de la paz pública y la custodia de la moralidad pública. Todo lo cual se comprende en la noción de orden público, parte fundamental del bien común.

8) La Iglesia, en la sociedad humana y ante cualquier poder público, reivindica para sí la libertad como autoridad espiritual a la que por mandato divino incumbe predicar el Evangelio a toda criatura; y la reivindica también como sociedad de hombres que tienen derecho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fé cristiana. La libertad de la Iglesia constituye el principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil.

Cuando el Vaticano II se refiere a la posibilidad de que "en atención a circunstancias de los pueblos, se otorga a una comunidad religiosa determinada un especial reconocimiento civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad" tampoco se refiere de una manera directa al problema de la confesionalidad. Ese especial reconocimiento puede tener matices muy variados: puede ir desde el simple apoyo económico a la confesionalidad propiamente dicha.

Las Constituciones españolas de 1.837 y 1.869, por ejemplo, otorgaron un especial reconocimiento a la religión católica, en cuanto que establecían el apoyo económico a la Iglesia pero no proclamaron la confesionalidad católica del Estado. Lo único que pretende afirmar el Vaticano II es que, aún en el supuesto de aquel especial reconocimiento a una comunidad religiosa quede firmemente garantizada la libertad religiosa para los miembros de otras religiones.

Cabría afirmar que el Vaticano II considera deseable el Estado confesional y tolera el aconfesional, siempre en el supuesto de que se reconozca y favorezca la vida religiosa de los ciudadanos sin pretender dirigir o impedir los actos religiosos; lo que rechaza es el Estado anticonfesional o ateo ya que "se obra contra la voluntad de Dios y los sagrados derechos de la persona y de la familia de los pueblos cuando se usa la fuerza bajo cualquier forma a fin de eliminar o cohibir la religión, sea en todo el género humano, sea en alguna región o en un grupo determinado".

Conviene distinguir entre la legitimidad de la

confesionalidad católica del Estado y la oportunidad de su proclamación. El Vaticano II insiste repetida -  
menee al exponer su doctrina que deben ser tenidas en  
cuenta las circunstancias de lugar y de tiempo.

Entendemos que la legitimidad del Estado ca-  
tólico no ofrece dudas en la doctrina del Vaticano II.  
La proclamación de la confesionalidad católica del Es-  
tado dependerá de las circunstancias de tiempo y de lu-  
gar.

Nuestros promeros penalistas de la época con-  
temporánea temiendo que perturbase su serena ciencia -  
las declamaciones y apasionamiento que en el campo del  
derecho político y de la contienda política se produje-  
ron desde que se planteó, como de libertad de cultos, -  
rehuían tratar estos delitos, pasaban sobre ellos domi-  
nados por este temor y se limitaron a alguna declaración  
más de tipo político que jurídico.

Ya sea por temor al apasionamiento por el des-  
dén y abandono en que se tuvo el estudio de los delitos  
en particular, o por el fin y naturaleza de las obras en  
que se consideraron, ceñidas a las limitadas necesidades  
de la cátedra o de la oposición, un estudio, una exposi-  
ción completa de estos delitos no se ha hecho en España,  
pese a su apasionado interés y permanente actualidad.  
La comparación de nuestra legislación en esta materia -  
con la de otros países solo tiene en nuestra literatura  
jurídico-penal una nota necesariamente sucinta de Cuello  
Calón, el valor orientador de la jurisprudencia produci

cida sobre el Código Penal de 1.870 en la interpretación del actual no se ha destacado, los concretos antecedentes históricos de sus preceptos no se han buscado y, sobre todo, no se ha ahondado en la advertida correlación entre las concepciones políticas reflejadas en las Constituciones y la sanción penal, no en la relación con ella el por qué de su colocación en los Códigos españoles a partir de 1.870 como delitos contra el Estado, referidos a su constitución o a su seguridad interior, entre los que atacan derechos individuales especialmente protegidos, no ha sido analizada ni explicada.

Hemos de recordar que en la Roma pagana el culto religioso era función del Estado, y la violación de los deberes religiosos equivalía a la inobservancia de deberes civiles (20) que como delitos contra el Estado fueron apareciendo la *affectatio regni*, la *coectum nocturnarum agitatio*, el *perduellio* y la *proditio*, y al lado de ellos se fueron configurando otros que como la revelación de los oráculos sibilinos, la violación de los preceptos religiosos relativos a fiestas y ceremonias, acabaron constituyendo el crimen *laesae romanae religionis*, y que cuando los primeros se subsumen y forman el crimen *laesae maiestatis* absorben los últimos al rendirse en vida culto divino a los emperadores y que ya católico el imperio, en Bizancio, Constantino y Justiniano castigan la herejía como delito político (21) e inician con ésto la evolución que ha de llevar a la consideración de *laesae maiestatis divinae* a los delitos contra la religión ya oficial, concepción que ya perdurara durante la



Edad Media y se vigorizara en el principio de la Moderna.

Pero la necesidad de humanizar las penas que castigaban la *lasae maiestatis* propiamente dicha, hace que al finalizar la época moderna estos delitos se consideren no contra la Magestad del Rey, sino contra el Estado del que el Rey es cabeza, pero solo eso, contra la seguridad de su funcionamiento, y nacen los delitos contra la seguridad del Estado, que cuando la codificación advino, se entiende creado para la protección de los derechos individuales, de tal forma que el ataque a estos es un delito contra aquella seguridad.

La proclamación de estos derechos individuales como base, fundamento y justificación de un Estado no podía hacerse para los que existían ya, sino para alguno que se crease, por mucho que fuese el predicamento de los filósofos que los promulgaban. La ocasión Histórica fué la Secesión americana, la rebelión de las trece colonias que la Corona inglesa tenía en la costa atlántica del norte de América. La primera justificación de esta rebelión fué la política; como miembros de la comunidad inglesa, como súbditos de la monarquía inglesa, los colonos no debían satisfacer más impuestos que los que sus representantes habían concurrido a votar.

Estos derechos son de tan diversa índole, que el primer problema que se plantea a los penalistas que han de estudiarlo para protegerlos con la sanción penal, es el de clasificarlos. Batbie los divide en individuales y políticos, siendo éstos últimos los concedidos por las Cartas Constitucionales. Rossi distingue en ellos derechos civiles, políticos y públicos, siendo políticos los que se refieren a la -

participación de los individuos en la gobernación del Estado y públicos los consagrados en la Carta constitucional francesa, libertad individual, religiosa, industrial, de comercio, etc., Jllinek al crear su teoría de los derechos públicos ssubjctivos, de los que tiene el individuo frente al Estado, los divide en derechos públicos, que son los referentes a su participación en la soberanía a través de la Constitución, y derechos de libertad, siendo éstos para Romano los que protegen al individuo frente a las ilegales intromisiones en sus actividades.

Solo nos interesan los derechos que Batbie llama individuales. Rossi civiles y Romano desarrollando la teoría de Jellinek, derechos de libertad, vistos por Florian como un único derecho a la libertad, de los que cada uno de los enumerados de libre emisión del pensamiento, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, etc., son sólo aspectos.

Queda ahora por ver como los delitos contra estos derechos son considerados como delitos contra la seguridad del Estado.

Es natural que esta concepción de los derechos individuales como base del Estado en cuanto su gobernación depende de su libre ejercicio, porque en su aspecto de derechos políticos llegan a ser la base del ejercicio de la soberanía, y en su aspecto de derechos civiles son la justificación del Estado, creado según el fonra russioniano de ella para asegurarlos, se regleje más directamente en los Códigos franceses, en los que las constelaciones de delitos se protegen estos -

derechos, los políticos, y los individuales, se coloquen entre los contra la Constitución y, en estos últimos en un epígrafe de delitos contra los derechos cívicos y contra la libertad, y aún una rúbrica más de delitos contra la paz pública, que es la seguridad interior del Estado, entre los que se incluyen los abusos de la autoridad contra los particulares y los que a nosotros más nos interesan, contra el libre ejercicio de los cultos.

Es natural que esta concepción y sistematiza -  
ción iniluya sobre los Códigos que siguen a las Constituciones a que hemos hecho referencia, reforzándolas y va-  
riando al adaptarlas a las peculiaridades nacionales propias, se reflejen en los Códigos europeo-continetales -  
del siglo XIX y actual y en los de Sudamérica, aunque sea poco perceptible en los Códigos germánicos, porque éstos pueblos consideran la libertad como uno cualquiera de los bienes jurídicos a tutelar por la Ley penal, más que derechos nacidos con las Constituciones y para servir las de -  
fundamento.

Reinó durante mucho tiempo la mayor confusión -  
respecto a los delitos en materia de religión. La existen-  
cia de una religión oficial e incluyente hacia que todo -  
ataque a ella se sancionase con los más duros castigos, -  
tanto por lo que ofendian al sentimiento religioso nacio-  
nal, como, porque se esperaba que con tan duro castigo pa-  
ra estos delitos, sobre todo, para los de sacrilegio y blas-  
femia, se desarmase la cólera divina con su comisión.

El dogma era protegido no solamente contra los

que abiertamente lo atacaban o renegaban de él, sino contra los que erróneamente lo interpretaban, realizaban prácticas que eran supervivencias de religiones extinguidas u ofendían a la Iglesia o al sentimiento religioso, así Campolongo estudia los siguientes delitos en materia de religión: herejía, apostasía, cisma, sacrilegio, sortilegio o magia, simonía, violación de clausura, simulación de sacerdocio, proselitismo, blasfemia, perjurio, violación de sepulturas y usura (22).

Esto hizo que al llegar el liberalismo, al atacar los enciclopedistas la existencia de los delitos de religión en nombre de la liberead de conciencia, englobasen todos en el ataque, aunque en nombre de esa misma libertad tuviesen que proteger el sentimiento religioso expresado en el culto, y ésta confusión se exterioriza en las vacilaciones de los Códigos, mientras se vá abriendo paso una diferenciación.

Esta es la de considerar distintos los delitos de religión o disidencia de la religión oficial de los delitos contra la religión, creados para proteger ya la oficial del Estado, ya las admitidas, donde se admitan más de una, el decir, del sentimiento religioso y de los delitos contra el culto, creados para proteger el de la religión oficial o los de las admitidas, es decir, la manifestación de dicho sentimiento y sobre todo de separar totalmente de ellos los que solo por ser castigados por la Iglesia se consideraban en este grupo:

Los primeros -apostasía, herejía, cisma y proseletismo- fueron más o menos rapidamente eliminados de los Códigos; los contra el culto permanecen en ellos sin discu

sión; los últimos han ido a engrosar otras agrupaciones de delitos.

Son los delitos contra la religión los que han dado lugar a vacilaciones, pues si por una parte ideas políticas que plasman en constituciones permiten la crítica racional de los ritos, creencias y ceremonias religiosas, o mejor, los fundamentos de ellas, en general, o referidos a la religión oficial o a las permitidas, no llegan, salvo la excepción rusa, a omitir en sus constituciones un precepto cuyo desarrollo suponga la protección penal del sentimiento y el culto religioso, como exteriorización de lo más noble de la personalidad humana. Esta protección que también se dá a los derechos individuales que las constituciones declaran, a que nos hemos referido, hace que los delitos creados para dársela vayan en la mayoría de las legislaciones junto con los creados para la de dichos derechos individuales, en correlación y consecuencia con los establecidos en los ordenamientos jurídico-políticos fundamentales. (12).

Consideración aparte merece la blasfemia, ultraje contra Dios, los santos y las cosas sagradas, que siempre se ha castigado y se sigue castigando en su forma breve, en la de horrenda interjección, en la frase hedionda, aunque varíe la gravedad de la pena conminada y el lugar de los códigos en se conmine, pero ha dejado de castigarse la herejía, consistente en la atribución a Dios de una cualidad contraria a su esencia o en la negación de alguna que le es esencial, por ser éste un delito de religión. (15).

LA LIBERTAD RELIGIOSA

LA LIBERTAD RELIGIOSA HASTA EL CONCILIO VATICANO II  
Y LA DOCTRINA PONTIFICIA.

I.- Epoca patristica. San Agustín.

Los acontecimientos que se suelen señalar con el nombre de "edicto de Milán", no solamente marcan un cambio radical en el estatuto del cristianismo, que de la ilegalidad pasa a ser religión reconocida en el imperio. Además - señala un viraje en el modo de expresarse los escritores - cristianos. En efecto, entre los Santos Padres es preciso hacer una separación entre los que escriben antes del edicto y los que lo hacen después. Los primeros defienden la - liberead religiosa. Los Santos Padres posteriores al edicto de Milan se pronuncian, en general, contra la libertad religiosa, tal como la entendemos hoy, aunque condenan la pena de muerte por delitos religiosos y proclaman la liber- tad del acto de fé.

En la carta de Licinio, que promulga los acuerdos celebrados por él y Constantino sobre la libertad religiosa y otros asuntos de Estado, y que fué recogida y transmitida por Lactancio y Eusebio (documentos que constituyen el llamado "edicto de Milán") se establece libertad para los cristianos y todos los demás, de forma que cada cual puede seguir la religión que más le plazca.

Poco después (hacoo el año 355) escribe San Hila-

rio pidiendo a las autoridades civiles que impidan a los herejes ejercer violencia para atraer adeptos y que nunca les favorezcan.

### San Agustín.-

La postura de San Agustín en este punto habría de tener una repercusión inmensa en toda la Edad Media. San Agustín sostuvo en los primeros años de su enseñanza la ilicitud de todo castigo físico a los herejes y que no se debía ejercer sobre ellos ninguna presión por medio de amenazas sino solamente con la discusión y el razonamiento, "ne fictos catholicos haberemss, quos hereticos noveramus". Más tarde retractó este modo de pensar y justificó el empleo de la fuerza contra los herejes. Apoya esta tesis en argumentos de razón y de escritura. Los primeros pueden resumir en esto: hay que considerar el bien hacia el que se obliga, no los medios con los que se realiza la violencia obligatoria. Explana esto con múltiples ejemplos: si vemos a un hombre correr hacia un precipicio ejerceríamos sobre él toda la violencia disuasoria, conscientes de que más tarde nos lo agradecería. Como de hecho continúa el Santo- ya nos lo están agradeciendo muchos circunceliones, que han abandonado sus errores movidos por las severas leyes, que<sup>a</sup> algunos parecen injustificadas.

En cuanto a los argumentos tomados en la Sagrada Escritura a cualquier lector de hoy le causarán verdadera extrañeza. Ningún exégeta puede dar valor a semejantes textos. Fué necesaria una gran dosis de imaginación y literalismo -como muy bien dice J. Lecler- para tales interpretaciones. Así, por ejemplo, hace incapié el gran Doctor en



textos como éste: "Quoscumque inueneritis cogite intrare" (luc. 14,23). Y este otro: "Nemo venit ad me, nisi quem Pater atraxerit" (Joan 6,44). En estos textos no hay nada que insinúe, ni remotamente, una violencia física para imponer la verdad.

Lo importante, concluye San Agustín, es que muchos hallan la verdad y exclaman, agradecidos: "nos ad eat cognoscendam metus recit intentos".

Constantino privó a los herejes de los privilegios concedidos a los cristianos y además les impuso especiales gravámenes

Esta ideología inspiró enseguida las leyes del imperio. Valentiniano y Teodosio prohíben las reuniones de los herejes. Quienes vuelven de nuevo al paganismo son declarados incapaces para testar, Los judios son tratados con relativa benevolencia, actitud que se mantendrá durante la Edad Media. Se declaran legítimos la religión y el culto judío. Algunas veces se prohíbe la construcción de nuevas sinagogas, aunque se asegure el respeto y la protección para las existentes. Sin embargo, se establecen severísimas penas para los cristianos que se hagan judíos y la pena de muerte para los judíos que molesten con amenazas a los seguidores de su religión que se hubieran convertido al cristianismo.

En seguida se promulgan leyes que cierran los

templos paganos y prohíben los sacrificios. Más tarde se ordena la demolición de los templos.

El Papa León I escribe al emperador León Augusto, recordándole que el poder imperial le ha sido - concedido para defender la Iglesia, castigando a quienes corrompan la fé.

San Gregorio Magno se muestra extremadamente tolerante con los judíos, tomando medidas para la construcción de sus templos y el ejercicio pacífico de su culto. En cambio, ordena castigos severísimos contra los seguidores de culto pagano.

## II.- Edad Media. Santo Tomás.

Se recoge el pensamiento de los Padres a través de San Isidoro, el cual afirma que el poder civil está dentro de la Iglesia para imponer por el terror la disciplina y la fidelidad a la fé.

Los escolásticos repiten los argumentos escitúristicos que ya habíamos visto en San Agustín. Se equipara la herejía a la blasfemia y se le aplican todas las penas que establecía el Antiguo Testamento. Se defiende la tolerancia con los judíos y con los infieles, siempre que no constituyen un peligro. Pero con el hereje no hay benevolencia alguna. Postura, en parte, motivada por la situación de cristiandad medieval, basada en la unidad religiosa en el interior y en la lucha permanente con el

infiel en el exterior. De este modo el hereje era un traidor, que ponía en peligro la unidad interna y la seguridad amenazada por los enemigos del exterior.

Con el fin de no dispersar la atención, en muchos autores examinaremos solamente la enseñanza del más significativo de los doctores medievales: Santo Tomás.

Se aprecia una benevolencia especial para con los judíos. Según el Doctor Angélico, los ritos de los judíos deben ser tolerados, en primer lugar, porque el gobierno humano debe imitar el de Dios, quien permite el mal, aunque pudiera impedirlo (argumento que se repite muchas veces en el Magisterio posterior); y, además, por otra razón a saber: porque en los ritos judíos se prefiguraba la verdad católica, y así cuando se celebran son un testimonio y un símbolo de la verdadera fé.

Con relación a los demás infieles (es decir, - arreligiosos o seguidores de cualquier otra religión, que nunca hubieran sido cristianos) el Aquinate admite la posibilidad de tolerancia, pero con muchas restricciones. De suyo, más bien no deben ser tolerados, salvo que se den algunas de estas dos circunstancias: temor a una sublevación (cuando son muchos), o esperanzas de que, al ser tolerados se convertirán algún día.

Con relación al hereje, la doctrina de Santo Tomás es de intolerancia absoluta. El hereje jamás debe ser tolerado. Es un delincuente, comparable al traidor de lesa majestad y al falsificador de moneda, y como ellos reo

de muerte. La Iglesia recibe en su seno al hereje arrepentido, siguiendo la enseñanza del Apostol (Tito 3,10). Pero si, una vez perdonado, reincide, entonces la Iglesia lo entrega al brazo secular para hacerlo morir. Es imposible -añade Santo Tomás- que todavía, en su fuero interno, esté arrepentido, pero de dicha interioridad - juzga Dios, que conoce los secretos del corazón humano, pero la Iglesia se atiene a los signos externos y presume legítimamente que puede volver a caer, y, en consecuencia, lo entrega a la muerte, a través del poder civil, aunque le perdona los pecados antes de morir: "recipiuntur quidem ad poenitentiam, non taten ut liberentur a sententia mortis".

Santo Tomás reconoce la libertad religiosa para comenzar a creer, pero no para abandonar la fé que se ha tenido algún dia. El infiel que nunca ha tenido fé - no debe ser forzado a abrazarla, si bien debe impedírsele que la perjudique de cualquier manera, y así se justifican las guerras religiosas o cruzadas. En la mentalidad de Santo Tomás y, en general, de la cristiandad medieval, no se concibe para el infiel libertad de propaganda de su religión no cristiana o de su irreligiosidad.

Y por lo que se refiere al hereje y al apóstata, se les niega toda libertad: "accipere fides est voluntatis, sed tenere jam acceptam est necessitatis".

Para el hereje y para el apóstata reincidentes no existe más que una sentencia: la pena capital. Pero la Iglesia no la impone por si misma. Santo Tomás esta-

blece que esto no es conveniente a la dignidad y misión de los sacerdotes. El poder civil, que en la cristianidad medieval era un ejecutor ministerial a las órdenes de la Iglesia, según veremos en la segunda parte de nuestro trabajo, se encargará de imponer y ejecutar la sentencia de pena capital contra los delincuentes en materia de fé. En la concepción medieval era imposible distinguir entre delitos contra la fé y delitos contra el Estado.

Con relación a la doctrina de Santo Tomás que acaba de ser expuesta, hay que hacer tres observaciones:

1ª.- El Angélico no distingue entre hereje formal que, siendo católico, un día niega, y aquellos que nacen en una sociedad cristiana nó católica y reciben un patrimonio religioso incompleto. En la Edad Media no era concebible el reconocimiento de una iglesia herética en el corazón de la Europa cristiana. Los herejes (Valdenses, Albigenses...) fueron aniquilados por la fuerza de las armas. Sin embargo, en el sistema de Santo Tomás hay lugar para distinguir entre aquellos que se apartan de la fé (herejía formal y apostásica) y quienes nunca la tuvieron por haber nacido en una comunidad no católica. La intolerancia se establece únicamente para los primeros. La imposibilidad de perder la fé sin culpa es una tesis de Santo Tomás. Sobre este asunto volveremos a tratar en el curso de nuestro trabajo.

2ª.- Es interesante un repaso a los textos bíblicos citados por Santo Tomás. Casi todos fueron usados por -

San Agustín. Por ejemplo Luc 14,23: Exi in vias et saepe el compelle intrare, ut impleatur domus". Ningún - exégeta puede admitir hoy la posibilidad de interpretar el compelle como una justificación del recurso de la fuerza física para obligar al hereje a abjurar sus errores. Tampoco puede justificarse la intolerancia con aquel otro texto que Santo Tomás aduce en el "sed contra" del artículo 3 de la cuestión 11 de la II-II: "Herecticum hominem, post primam et secundam correptionem, devita, sciens quia subversus est qui ejusmodi est". El Apostol manda que el hereje sea separado de la comunidad y que los fieles rehu<sup>ya</sup> su trato. Pero no puede concluirse el recurso a la - violencia física para obligar al hereje a cambiar su actividad religiosa.

3ª.- Santo Tomás, es hijo de su tiempo. No queda empañada su gloria por haber adoptado semejante actitud. Lo extraño hubiera sido pensado así. Habría sido algo insólito, casi milagroso. Pero tampoco parece razonable apegarse a un literalismo interpretativo a la hora de recoger las lecciones de Santo Tomás, enfrentándolo torpemente con el pensamiento católico de nuestros días.

### III.- A partir de la Reforma.

La paz religiosa de Augsburgo significó el reconocimiento político de formas no católicas de cristianismo. La Edad Media cristiana no había conocido semejante situación. Pero este reconocimiento de Iglesias cristianas no católicas no fué admitido por la doctrina católica de entonces. Fué, por el contrario, una imposición de

los principes protestantes al emperador, que hubo de acceder ante lo irremediable y a pesar de seguir siendo personalmente católico. Se trataba de compromisos y equilibrios de fuerza, no de ideas de tolerancia. Por ello seguirían - durante un siglo, las guerras de religión. Por otra parte, el reconocimiento obligado de las confesiones protestantes no implicaba el principio de tolerancia, y mucho menos de libertad religiosa, para los individuos. En cada Estados los súbditos deberían someterse a la religión oficial (católica, unas veces; protestante, otras) o abandonar sus hogares hacia el exilio.

La implicación del principio "cujus regio, ejus religio" fué el atentado más brutal contra la conciencia religiosa de las personas y suponía vigente el confesionalismo del Estado, que ahora podía ser signo católico o protestante.

Hay que llegar al año 1598 para que se reconozca la posibilidad de que un reino pueda estar integrado, a la vez, por católicos y protestantes. El edicto de Nantes significaba un gran paso en el camino hacia la libertad religiosa. Pero los ánimos no estaban preparados aún para reconocerla. Para los franceses de entonces -tanto católicos como protestantes- aquello no significaba sino una tregua, que podría suspenderse en cualquier momento. "En uno y otro campo, violar las estipulaciones del texto era servir a Dios y a la verdad". Roma no estaba de acuerdo con el edicto de Nantes. "Esto me crucifica -exclamó el Papa Clemente VIII al

leer el texto del edicto-; la libertad de conciencia es la peor cosa del mundo".

Algunos espíritus selectos comenzaban a valorar el significado de la tolerancia. Grotio, por ejemplo, en la dedicatoria de su libro *De jure belli ac pacis* al rey Luis XIII, escribía: "nec vim affer animis circa divina doversum a te sentientibus". Lo cual, ciertamente, era el mejor elogio que podía tributarse al monarca francés.

Sin embargo, esta tesis no podía seguir vigente. A parte de las razones políticas indudables que habían provocado el asedio de la Rochela, a saber, el peligro de un Estado dentro de otro Estado, influyeron razones religiosas en la decisión de Luis XIV para revocar el edicto de Nantes (1.685). Razones religiosas, de una religión entendida en un sentido un tanto estrecho y que nos parece -en definitiva- poco cristiana, pero que era la de la inmensa mayoría de sus contemporáneos. Luis XIV restaura en Francia la Política de absoluta intolerancia religiosa, en todo idéntica a la de los reyes de España, y por las mismas razones: religiosas y políticas a un tiempo.

#### IV.- Libertad religiosa del Liberalismo.

##### Actitud de la Iglesia.

Cuando Pio VI condenó los principios de la Revolución francesa, rechazó de modo explícito el intento de revocar el estatuto religioso que había estado vigente en el Antiguo Régimen: es decir, el confesionalismo religioso de



Estado, con exclusión de cualquier otra religión. El Papa nos distingue entre los atropellos cometidos por la revolución y la proclamación del principio de libertad religiosa. Más aún, rechaza el principio de libertad religiosa, porque anula el poder dominador de la Iglesia en la sociedad.

El espíritu de la Revolución francesa invadió todos los ámbitos de la vida durante el siglo XIX, con el nombre de "liberalismo".

### 1º.- Significado del Liberalismo.

El liberalismo es una realidad complejísima y muy difícilmente definible. Es un modo de vida y, a la vez, un sistema ideológico. Lleva consigo una actitud práctica en - política y economía, y comporta, al mismo tiempo, una concepción filosófica. Adopta formas distintas en los diversos países. Por ejemplo, hay una marcada diferencia entre el liberalismo anglosajón (más pragmático que teórico) y el de los países latinos (fundamentalmente ideológico).

Tampoco fué un sistema inmutable en el tiempo; es muy distinto el liberalismo de la primera parte del siglo - XIX y el de finales del mismo siglo y primeros lustros del XX; y éste, a su vez, difiere del liberalismo actual.

En el aspeceo religioso, el liberalismo de la primera etapa es laico, pero no laicista, es decir, preconiza el temporalismo, la independencia del Estado en la realización de los fines temporales, el reconocimiento de la libertad religiosa... El de la segunda etapa es laicista, es de

cir, pasa al ataque y a la negación de una religión revelada y "única verdadera". Este último es el liberalismo -  
pujante en los días de León XIII. El liberalismo de la primera etapa es anticlerical y, si se quiere, antieclesiástico; el de la segunda es antirreligioso. El liberalista de nuestros días vuelve a adoptar actitudes similares al de la primera etapa.

Tal vez en el siglo XIX ningún autor haya podido llegar a comprender y expresar los contornos precisos del liberalismo. Unos se fijaron en unos aspectos; otros destacaron vertientes diferentes. Hace falta una perspectiva, que requiere cierta lejanía en el tiempo, para captar, en toda su amplitud y exactitud, un sistema filosófico-social, para decir todo lo que es y sólo lo que es esencial al mismo. Tal vez haya que tener esto en cuenta a la hora de leer los Documentos Pontificios del siglo XIX sobre el liberalismo.

De ahí que debamos aceptar con mucha cautela las definiciones "telegráficas" del Liberalismo. Por ejemplo, aquella de Maritain, que lo define así: "La doctrina según la cual la libertad humana no tiene otra regla o medida que ella misma". O aquella otra definición de F. Perroux: "El hombre es libre cuando puede hacer lo que desea, sin atar ni subordinar su voluntad a nada que sea exterior o superior a la voluntad misma, y, sobre todo, sin atarla ni subordinarla a la voluntad de otro".

El liberalismo religioso trajo ventajas para las Iglesias minoritarias y oprimidas. Algunas veces los beneficiarios fueron católicos: por ejemplo, en los Estados Uni

dos, en Inglaterra (ley de emancipación católica de - 1.829) y en Prusia (Constitución de 1.850).

Sin embargo, los Papas condenaron el liberalismo religioso con rara unanimidad, con frases severas y - sin establecer distinción de ninguna clase.

2ª.- Gregorio XVI.

La condenación de la libertad de conciencia es tá expresada con frases durísimas, y citas de San Agustín, cuyo pensamiento sobre este particular hemos examinado an tes. Pero siempre se liga la libertad de conciencia al - indiferentismo religioso y se condena, por tanto, en este sentido.

3ª.- Pio IX.

Usa idéntico lenguaje al de Gregorio XVI, ligan do igualmente la libertad de conciencia al indiferentismo. Así por ejemplo, la proposición 15 del Syllabus dice: "To do hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de su razón". ¿Que se condena en esta proposición? El indiferentismo religioso. No se condena la libertad psicológica del hombre en el acto de fé, pues ésta es una verdad enseñada por toda la tra dición. El hombre es libre para creer, es decir, su asentimiento no es nunca impuesto, ni por una fuerza exterior ni por la evidencia del objeto. El acto de fé es lícito - del entendimiento e imperado por la voluntad, que se mue-

ve ayudada por razones de credibilidad e impulsada en, última instancia, por la gracia divina.

Tampoco se condena la inmunidad de coacción - política por parte del Estado o de otros grupos religiosos, de quienes profesan una religión que no sea la católica.

¿Que se condena entonces? Pues la afirmación de que el hombre no está obligado a buscar la única religión verdadera, que es la católica. Es decir, se condena la libertad moral, como si el hombre pudiera, moralmente hablando, optar entre el bien y el mal, la verdad y el error, - eligiendo conscientemente cualquiera de ellos, sin culpa - por su parte. Hay una única religión objetivamente verdadera que es la católica. Los hombres están obligados a buscarla y aceptarla. Pero en tanto no la busquen, o, buscándola, no la encuentren, culpablemente o sin culpa (lo cual es posible), deben permanecer libres en el ejercicio de la religión que estiman verdadera o en no practicar ninguna. No hay contradicción en estas afirmaciones.

Más difícilmente compaginables resultan las proposiciones 77, 78 y 79 de Syllabus y el Magisterio del Concilio Vaticano II. Las proposiciones de referencia suenan así: "En la época actual no es necesario ya que la religión católica sea considerada como la única religión del Estado, con exclusión de todos los demás cultos". En esta proposición se emite un juicio de conveniencia para un momento dado de la historia ("en la época actual"). Se expresa en ella una verdad de carácter histórico-prudencial. Nada extraño

que, pasados cien años, se haya cambiado el juicio de valor. Hoy el Concilio Vaticano II considera que los - demás cultos no deben ser nunca excluidos (unicamente - pueden ser limitados, según exigencias de orden público). Por otra parte, hay que recordar, una vez más, que esta proposición ha sido sacada de una Alocución (Nemoe Vestrum, del 26 de julio de 1.855), y que no tiene el - mismo valor, en el Magisterio de la Iglesia, una alocución que es una declaración conciliar.

En términos parecidos se expresa la proposición 78 del Syllabus: "Por esto no es de alabar la legislación promulgada en algunas naciones caeólicas en virtud de la cual los extranjeros que a ellas emigran pueden ejercer lícitamente el ejercicio ppublico de su propio culto" - (alocución Acerbissimum, de 27 de septiembre de 1.852). (14),

#### 4º.- León XIII.

Este gran Papa sometió el tema de la libertad a un lúcido y penetrante análisis, desde una perspectiva filosófico-teológica.

Hay muchos parajes de sus encíclicas en los que se expresa en un lenguaje semejante al de Pío IX. En ellos se condena la libertad de cultos, ligando siempre este concepto al indiferentismo. Esta conexión entre el indiferentismo y la libertad religiosa no responde a la naturaleza de las cosas, pues se trata de conceptos distintos.

Sin embargo, los Papas, al establecer conexión entre ellas y condenarlas de modo conjunto, no actuaban caprichosamente, sino haciéndose eco de la situación histórica del momento. Históricamente la libertad de cultos era pedida en nombre de una filosofía racionalista, que negaba la existencia de la religión revelada, y en nombre del indiferentismo religioso (esto es valedero, al menos para los grupos más representativos del liberalismo en los países latinos).

Cuando esta circunstancia histórica ha desaparecido, no hay razones para señalar con idéntica etiqueta el indiferentismo y la libertad religiosa. De ahí la nueva actitud del Magisterio contemporáneo.

Veamos, por ejemplo, un pasaje de la encíclica *Libertas*: "Esa libertad tan contraria a la virtud religion, la llamada libertad de cultos, libertad fundada en la tesis de que cada uno puede, a su arbitrio, profesar la religión que prefiera o no profesar ninguna. Esta tesis es contraria a la verdad. Porque de todas las obligaciones del hombre, la mayor y más sagrada es, sin duda alguna la que nos manda dar a Dios el culto de la religión y de la piedad". En este pasaje y en tantos otros del mismo León XIII, se condena la tesis según la cual el hombre no está moralmente obligado a buscar la verdadera religión, que es la católica. Tesis condenada por el Concilio Vaticano II. Con la diferencia de que éste último formuló la enseñanza de manera positiva según veremos.

Pero esto no contradice la afirmación de la libertad psicológica, según la cual, de hecho, el hombre

tiene poder físico -concedido por Dios- de elegir el bien y el mal, la verdad y el error.... y el Estado y los demás grupos deben respetar esta libertad radical. Hay que ayudar al hombre a usar bien su libertad, hay que iluminar su mente para que elija la verdadera religión, pero no es lícito violentar su voluntad, aniquilando su libertad radical.

En algunos pasajes León XIII condena el liberalismo religioso por sus intenciones, es decir, no precisamente por sus afirmaciones objetivas, sino por la finalidad con que dichas afirmaciones están proclamadas. "Piénsese -dice- en el origen de esas libertades y en las intenciones de quienes las defienden.

La experiencia ha demostrado suficientemente los resultados que producen en la sociedad".

No puede dudarse de que León XIII tenía razón para mirar con recelo las intenciones de los liberales más representativos de su tiempo, aunque no se puede generalizar. Tampoco se puede poner en duda que los partidarios de la libertad religiosa en nuestros días (en el campo no católico), en general, no obran movidos por espíritu de hostilidad. Nada extraño, en consecuencia, que haya cambiado la actitud de los últimos Pontífices y del Concilio Vaticano II, cuya doctrina expondremos detenidamente en páginas siguientes.

Cuando se estudia el tema de la libertad religiosa en León XIII y se comparan sus afirmaciones con las del Magisterio posterior, hay que hacer hincapié en otra

distinción importante, a saber: la libertad puede ser considerada en su realización ideal o en sus estadios más imperfectos. Con otras palabras una es la libertad en el estado terminal y otra es la libertad en el punto de partida.

León XIII habla siempre de la libertad en el - primer sentido. Es la libertad para el bien, que discurre por un solo camino de verdad y de virtud, sin inclinarse al mal.

El poder elegir el mal y adherirse al error (en nuestro caso, a una religión no católica) no es esencial a la libertad, sino que es su debilidad, su fallo. Por eso Dios, que es libérrimo, no puede elegir el mal. Pero de - hecho, antes de llegar a la posesión del bien, el hombre corre el riesgo de equivocarse su camino y elegir el mal. Y esto, porque Dios lo ha hecho así. El liberalismo contemporáneo de León XIII acentuaba este aspecto inicial de la libertad humana (capacidad del bien y mal) y era contrario a toda intervención que impusiera al hombre el bien (la religión católica, en el caso de la opción religiosa). Frente a ellos, León XIII insiste en que lo importante es la adhesión a la verdad, y, en nuestro caso, a la única religión verdadera.

y Estaría justificada, y hasta exigida, la intervencción del Estado confesional que impidiera el extravío - de las inteligencias tras el error. Veámos que ésta había sido la postura de San Agustín cuando afirmaba que lo im -



portante es el bien, al que es preciso llegar, sin reparar en la coacción que se despliegue para ir a él. Para León XIII esto, lejos de destruir la libertad, la ayudaría. Y, en el sentido en que hablaba él, es muy cierto. Quería decir: un ordenamiento jurídico confesional católico ayuda al hombre a adherirse a la verdad religiosa, y en esta adhesión consistente la realización ideal de la libertad, su plenitud.

Sin embargo, en León XIII hay una abertura en relación con Pío IX. Admite la posibilidad de que el Estado católico tolere cultos no católicos. Escribía en la *Inmortale Dei*: "si bien la Iglesia juzga ilícito que las diversas clases de culto divino gocen del mismo derecho que tienen la religión verdadera, no por esto, lin embargo, condena a los gobernantes que para conseguir un bien más importante o para evitar un grave mal toleran pacientemente, en la práctica, la existencia de dichos cultos en el Estado".

En otro pasaje, León XIII afirma que la Iglesia hace este reconocimiento de la tolerancia religiosa porque "no ignora la trayectoria que describe la historia espiritual y política de nuestros tiempos. Por esta causa, aún concedidos derechos sola y exclusivamente a la verdad y a la virtud, no se opone la Iglesia, sin embargo, a la tolerancia por parece de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un bien mayor".

Se ve, por las frases citadas, que León XIII

poseía un vivo sentido de evolución y acomodación prudente a las exigencias de su época. León XIII no habla el mismo lenguaje que Juan XXIII o en Concilio Vaticano II, pero se diferencia también en Pío IX.

En León XIII, pues, aparece claro e indiscutible:

1º.- Que no sólo el hombre como individuo, sino el Estado mismo en cuanto tal, el poder civil en cuanto encarnado en tales personas físicas o morales, ha de tributar culto a Dios; y ha de profesar la religión verdadera que es la católica, y como tal es conocida por los países católicos.

2º.- Que no se ha de comportar de igual modo con respecto a las diversas religiones ni otorgarles a todas iguales derechos.

3º.- Que la religión católica es la que han de conservar y proteger los gobernantes.

4º.- Que ese deber de protección de la religión católica exige al Estado abstenerse de toda medida que ceda en su detrimento, y adoptar las que son necesarias para favorecerla.

5º.- Que, en concreto, ambas potestades, civil y eclesiástica, deben actuar cada una en su campo propio, pero en amigable inteligencia.

6º.- Que las normas de estas relaciones mutuas deben ser:

a) que la Iglesia es absolutamente independiente del Estado y goza de potestad exclusiva en cuanto a

ña a la vida sobrenatural.

b) que el Estado está sometido directamente a la Iglesia en cuanto se refiere a los asuntos religiosos-morales.

c) que el Estado es soberano en los asuntos puramente temporales.

7º.- Que para evitar un mal mayor, y en la imposibilidad real de tal régimen católico ideal, de un país dividido, se impondrá a veces la tolerancia de los cultos desidentes y aún la igualdad Jurídica con el católico; y hasta la aconfesionalidad del Estado en cuanto a tal (15).

#### 5º.- San Pío X.

En el tema de la tolerancia, este santo Pontífice da un paso atrás en relación con León XIII. No hay ningún texto donde apruebe la tolerancia. En cambio hay muchos en los que la rechaza. "La doctrina católica -dice- nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas, por muy sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica entre el error o el vicio en que vemos caídos a nuestros hermanos".

#### 6º.- Pío XII.

Pío XII se plantea el caso de que un Estado cualquiera pretenda formar parte de una comunidad de pueblos que imponga a todos los Estados miembros un es

tatuto de libertad en materia religiosa, y se pregunta: ¿Puede un Estado católico aceptar semejante regulación y entrar así a formar parte de una comunidad supranacional?. Pío XII contesta: "En este punto, con relación a los intereses religiosos y morales, se plantea una doble cuestión. La primera concierne a la verdad objetiva y a la obligación de la conciencia hacia lo que es objetivamente verdadero y bueno; la segunda atañe a la conducta afectiva de la comunidad de los pueblos con todo Estado soberano y de éste con la comunidad de los pueblos en las materias de religión y moral. La primera cuestión difícilmente puede ser objeto de una discusión y de una regulación entre Estados particulares y la comunidad de Estados, especialmente en el caso de una pluralidad de confesiones religiosas dentro de la misma comunidad. La segunda, en cambio, puede ser de máxima importancia y urgencia (...). ¿Puede ocurrir que en determinadas circunstancias Dios nos dé a los hombres mandato alguno, no imponga deber alguno de impedir y de reprimir lo que el error y falso?. Una mirada a la realidad de una respuesta afirmativa.

La realidad enseña que el error y el pecado se encuentran en el mundo en amplia proporción. Dios los reprueba, y sin embargo, los deja existir. Por consiguiente, la afirmación: el extravío religioso y moral debe ser siempre impedido, cuando es posible, porque su tolerancia es en sí misma inmoral, no puede valer en su forma absoluta incondicional. Por otra parte, Dios no ha dado a la autoridad humana un precepto semejante absoluto y universal, ni en el cam

po de la fé ni en el de la moral.

No conocen semejante precepto ni la común convicción de los hombres, ni las fuentes de la revelación, ni la conciencia cristiana, ni la práctica de la Iglesia... El deber de reprimir las desviaciones - morales y religiosas no puede ser, por tanto, una última norma de acción. Debe estar subordinado a normas más altas y generales, las cuales, en determinadas - circunstancias, permiten e incluso hacen a veces aparecer como mejor camino no impedir el error a fin de conseguir un bien mayor".

7º.- Una afirmación del Cardenal Bea.

Resultó desconcertante que el Cardenal Bea, conocido por sus antecedentes de prestigioso hombre de ciencia (ex-director del Instituto Bíblico), por su madurez (octogenario y ex-confesor de Pio XII) y -lo que és más importante- por su alto cargo en la Curia Romana (presidente del Secretario para la Unión de Cristianos), hiciera la declaración siguiente: "Las dolorosas guerras de religión fueron la consecuencia de un amor a la verdad falsamente entendido, puesto que se intentó, en nombre de la verdad, imponer por la fuerza a otros - hombres determinadas convicciones, olvidando con ello un hecho no menos fundamental a saber, la libertad humana. Esta libertad supone el derecho del ser humano a decidir su propio destino, según los dictados de su conciencia. A aquellos que pretenden oponerse a esta libertad, adu-

ciendo que el error no tiene derecho a la existencia, basta con reprenderles que el error es algo abstracto y, por consiguiente, no es sujeto de derecho, mientras que el hombre es sujeto de derecho, incluso cuando él, inevitablemente se equivoca sin poder corregirse a sí mismo."

Como se sabe, estas palabras no representan hoy novedad alguna, porque fueron aprobadas (y llevadas incluso más lejos) por el Vaticano II. Pero cuando fueron pronunciadas representaban una novedad, sobre todo en boca de una alta autoridad de la Curia Romana.

La declaración del Cardenal Bea hacia una distinción fundamental: entre el error y el errante. Y abría el camino para una justificación del derecho de los no católicos a la práctica privada y pública de sus religiones.

Se condenaban las guerras de religión, lo cual no era una novedad, pues antes habían sido repudiadas en nombre de la dignidad de la persona.

### 3º.- La "Pacem in Terris de Juan XXIII".

La encíclica de Juan XXIII iba a hacer suya, casi literalmente, la declaración del Cardenal Bea. En ella se encuentran estos dos textos significativos: "Entre los derechos humanos débese enumerar también el poder de venerar a Dios, según la recta norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en público". Y esto -

otro: "Importa distinguir siempre entre el error y el hombre que lo profesa, aunque se trate de personas que desconocen por entero la verdad o la desconocen solo a medias en el orden religioso o en el de la moral práctica.

Porque el hombre que yerra no queda por ello despojado de su condición de hombre, ni automáticamente pierde jamás su dignidad de persona, dignidad que debe ser tenuta siempre en cuenta. Además, en la naturaleza humana nunca desaparece la capacidad de superar el error y de buscar el camino de la verdad".

Estos textos de la Pacem in terris dieron lugar a multitud de estudios y polémicas. Los comentaristas entendían que se reconocía en ellos el derecho de los no católicos a la práctica privada y pública de su fé. Y razonaban del modo siguiente: norma recta de su conciencia es, en el lenguaje común de los hombres de Iglesia de nuestro tiempo, la conciencia verdadera y la invenciblemente errónea. Si el Papa hubiera querido afirmar exclusivamente el derecho de los católicos no hubiera usado - formula tan equívoca.

Habría sido más explícito. Por otra parte, el segundo texto citado y el espíritu general de la Pacem in terris no permiten una exégesis restrictiva del texto, como si afirmara exclusivamente el derecho de los católicos.

Una minoría de autores seguía negándose a reconocer en el texto de la Pacem in terris una proclamación

del derecho de los no católicos a la práctica pública de su religión. Razonaba diciendo que conciencia pública se identifica según Santo Tomás con conciencia verdadera. Añadían que el Papa usa la terminología de Santo Tomás. Y concluían: luego el Papa reconoce exclusivamente el derecho de quienes practican la religión que les dicta su conciencia verdadera, es decir, la religión católica. Porque -siguen argumentando estos autores- - quien tenga conciencia de que una religión no católica debe ser practicada no posee conciencia verdadera ni recta.

El razonamiento de estos autores es difícilmente compatible con la fidelidad al texto de la *Pacem in terris*. No hay razón para afirmar que el Papa usa el término conciencia recta según el sentido que tiene en Santo Tomás. Lo razonable es pensar que lo usa en el sentido que tiene hoy en el lenguaje común de autores y hombres de Iglesia en general. Y este sentido considera la conciencia invenciblemente errónea como conciencia recta.

En todo caso, esta polémica no tiene ya más - que una importancia anecdótica, después de la declaración *Dignitatis humanae* del Vaticano II.

Desde luego, la discrepancia de opiniones antes del Concilio se refería más a la teoría que a la práctica. Todos (o casi todos) estaban de acuerdo en afirmar en la práctica la libertad religiosa debe ser concedida en la mayoría de los países, aunque con limitaciones variables según las circunstancias.

Pero en teoría la discrepancia era radical. -



Unos entendían que la libertad religiosa de los no católicos puede ser objeto de tolerancia, pero jamás de un derecho natural. Otros creían que la libertad religiosa es objeto de un derecho natural anterior al ordenamiento jurídico de los Estados, que éstos deben respetar y recoger en sus leyes, haciéndolo derecho civil - (16).

Al terminar el estudio sobre la libertad religiosa podemos establecer las siguientes conclusiones:

1ª) La proclamación del derecho a la libertad en materia religiosa, tal como es formulada en el Concilio, representa una novedad. El pensamiento tradicional católico afirmó siempre la libertad para creer (para comenzar a creer), pero jamás para abandonar la fe. Con relación al hereje y al apóstata, no solamente se negaba su derecho al ejercicio de un culto disidente, sino que ni siquiera se admitía la tesis de la tolerancia en el terreno de los principios, aunque ésta se impusiera a veces - por la fuerza de los hechos.

Para quien no había sido nunca creyente, se afirmó siempre la tesis de la tolerancia, pero jamás el derecho al ejercicio de un culto no católico. En el terreno de los hechos, incluso la tolerancia del infiel era sometida a severas limitaciones. Con frecuencia era puesto en la disyuntiva de convertirse a la verdadera fe o salir para el destierro.

Los últimos Papas mantuvieron firme la negación

del derecho a la libertad de cultos. Incluso se mostraron reticentes en relación con la tolerancia, a excepción de Leon XIII y Pio XII (sobre todo éste último).

La encíclica *Pacem in terris* es el primer - documentos oficial del Magisterio que proclama el derecho a la libertad religiosa.

¿Estamos ante una rectificación?

Una respuesta afirmativa no debería ser escandalosa, ya que no está en juego ninguna verdad dogmática, pues el derecho a la libertad religiosa, proclamado por el Concilio, se refiere a la configuración del - orden social y su relación con la persona. Y en este terreno la Iglesia es tributaria del desarrollo histórico.

Sin embargo, más que de una rectificación hay que hablar de desarrollo, de perfeccionamiento de la - doctrina, de profundización en las fuentes de la revelación y en el conocimiento de la naturaleza de la persona humana y sus relaciones con la sociedad.

El derecho a la inmunidad de coacción en el - ejercicio de una religión no puede concebirse desgajado de todo un sistema político en el que los derechos - de la persona son reconocidos. No podemos pretender que el estatuto social de la vida religiosa, en el pasado, fuera una excepción. La doctrina de la Iglesia estaba - condicionada por el contexto histórico de los hechos y de las instituciones de entonces.

Cuando los ideales de la libertad individual

invaden el ámbito de la vida y toman arraigo en las -  
conciencias, a partir de la revolución francesa, se -  
confunde la libertad de inmunidad ante los poderes pú-  
blicos con la autonomía absoluta del individuo, que no  
estaría ligado por ninguna verdad trascendente no obli-  
gado por ningún precepto.

Esta libertad de conciencia o indiferentismo religioso es condenado por el Magisterio de los Papas - durante los siglos XIX y XX. En este sentido la doctrina del Concilio Vaticano II no significa cambio de ninguna clase. El indiferentismo religioso es explícitamente rechazado por el Concilio y se proclama la obligación moral que tienen los individuos y la sociedad de buscar y aceptar la verdad religiosa, que se encuentra en la - Iglesia Católica, única religión verdadera. La libertad religiosa del Vaticano II se refiere a la inmunidad de coacción por parte de los poderes públicos y de los demás grupos e individuos. En este sentido la enseñanza del Concilio significa "desarrollo de la doctrina de - los últimos Pontífices sobre los derechos inviolables de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad". La Iglesia "viviendo en la historia debe escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio".

Al proclamar el derecho a la libertad religio-  
sa el Concilio lo hace "secundando con diligencia" los  
"anhelos de los espíritus" de nuestro tiempo, entre los  
que destaca como ningún otro, la "exigencia de libertad  
en la sociedad humana", sobre todo en lo referente a los  
bienes del espíritu, "principalmente a aquellos que ata-  
ne al libre ejercicio de la religión en la sociedad".

2ª) El reconocimiento de la autonomía del Estado en la realización de la temporalidad pasó por sucesivas etapas. Los hitos más significativos de esa evolución histórica corresponden a la teoría del poder directo, teoría del poder indirecto y teoría del poder directivo. "Parece indiscutible que las diversas teorías tienen una relación con el estado histórico del tiempo en que vieron la luz del día; reflejan una situación. Esto es evidente para la teoría del poder directo. Admitimos que esto es cierto incluso para la teoría del poder directivo; pero a condición de subrayar que las circunstancias aquí conducen más a la Iglesia hacia la pureza de sus orígenes y a la naturaleza esencial de las cosas.

Puede creerse que la Iglesia no podía formular su verdadera relación con el mundo antes de haber hecho ciertas experiencias históricas y mientras el estado de cosas de una cristiandad hierocrática no estuviera liquidado.

La independencia de la Iglesia, la *Libertas Ecclesiae*, en el cumplimiento de su misión espiritual, es una verdad ininterrumpidamente enseñada por la tradición y por el magisterio, si bien en el pasado se vió obstaculizada y oscurecida por la doctrina que introducía el poder secular dentro y al servicio de la Iglesia. El poder secular protector terminaba siempre influyendo e, incluso, dominando en las decisiones de la Iglesia.

El Concilio defiende la *libertas Ecclesiae* con nuevos argumentos enmarcándola en el cuadro más amplio de la libertad religiosa para todas las confesiones. Por otra parte, al mismo tiempo que se pone énfasis en la afirmación de la autonomía del Estado y en la renuncia por parte de la Iglesia a cualquier clase de poder temporal, el Concilio exige, con más urgencia y como justa réplica, la abstención

del poder secular en el régimen interno de la Iglesia.

3ª) Iglesia y Estado colaboran en el servicio al hombre y a la sociedad. Deben vivir en concordia. Esta verdad, así enunciada, ha sido ininterrumpidamente enseñada por el Magisterio y es reiterada por el Concilio.

Pero en el Magisterio del Vaticano II esta doctrina se completa con matices nuevos.

Es Estado -institucionalización de la comunidad política a través del derecho- debe respetar la elección religiosa que hagan los individuos y la sociedad global y no imponer orientación determinada. Los individuos y la sociedad están en el deber moral de buscar la verdad religiosa que se encuentra en la Iglesia Católica, pero si no cumplen con su deber de buscar la verdad religiosa, o si, buscándola, no la encuentran, el Estado no debe imponer, ni directa ni indirectamente, una determinada religión.

Debe proteger todas las formas de religiosidad que respeten el orden público y las exigencias de la moral natural. La igualdad jurídica de todos los individuos y grupos jamás debe ser vulnerada, ni abierta, ni ocultamente, por motivaciones religiosas.

El Estado debe proteger las formas legítimas de religiosidad desde fuera, en tanto que hechos sociales, sin interferir jamás en su vida interna y sin pronunciamientos dogmáticos, para los que no es competente, y que traicionan su papel de instrumento jurídico, organizador imparcial de la convivencia de todos los ciudadanos, al margen de ideologías religiosas.

podrá suceder que una comunidad religiosa sea especialmente reconocida en la ordenación jurídica de la sociedad, pero esto dependerá de "las peculiares circunstancias de los pueblos", no de exigencias dogmáticas, a base de verdad o de error. Que esto es así no puede ser puesto en duda desde el momento que este reconocimiento especial puede ser concedido a la religión católica o a otra comunidad religiosa. Lo que decide la justificación de semejante "especial reconocimiento en la ordenación jurídica de la sociedad" es el consenso mayoritario con que la comunidad religiosa de que se trate sea, de hecho, recibida en la sociedad.

#### LA LIBERTAD RELIGIOSA DESPUES DEL CONCILIO VATICANO II.-

Pocos temas como el de la libertad religiosa han sido tan discutidos y, como vemos, con opiniones tan distintas: primero, en el campo científico, por teólogos, filósofos, sociólogos y juristas; y, más tarde, con ocasión del Concilio Vaticano II, por los Padres conciliares y aún por el gran público, bien por motivos religiosos o bien por las repercusiones que la Declaración de la Iglesia pudiera tener en un orden político, al implicar innovación o cambio en el ordenamiento de algunos Estados, como es el caso de nuestro país.

El día 7 de diciembre de 1.965 era aprobada por el Concilio su "Declaración sobre la libertad religiosa" -

que se titula "Dignitatis humanae", tras una activísima labor. Prueba de ello es que el esquema originario fué - reelaborado seis veces, a consecuencia de haberse presentado centenares de modos o enmiendas. La votación final - tuvo lugar el día 19 de noviembre de 1.965 con el resultado de 1.954 votos a favor, 249 en contra y 13 nulos. (17).

Las discusiones en el aula conciliar fueron seguidas en todo el mundo temiendo algunos y esperando otros que la Iglesia adoptara en cierta manera una postura "revolucionaria", con olvido del Magisterio anterior, por pensar unos y otros que los Padres se dejarían impresionar por la mentalidad contemporánea y por el dato sociológico del pluralismo religioso.

Después de haber pasado varios años de la terminación del Concilio aún algunos católicos se muestran confusos, pues no aciertan a responder a numerosas cuestiones que les mantienen en perplejidad. ¿Hay contradicción?, se preguntan, entre la doctrina del Concilio acerca de la libertad religiosa y la propuesta de los Pontífices a lo largo del Siglo - XIX y en los primeros decenios del XX, es decir, desde Gregorio XVI a Benedicto XV?. ¿Es que tenía razón Lammennais?. ¿Consagra el Concilio su doctrina liberal?. ¿No resulta ahora injusta la actitud de Gregorio XVI en su encíclica Mirari vos, publicada el 15 de agosto de 1.832?.

Para poder responder con acierto a todas esas cuestiones es preciso contemplar los criterios y doctrinas que contiene el texto de la Dignitatis humanae desde una perspectiva adecuada.

En primer lugar, es casi un lugar común el que lle

va a recordar que, históricamente, la libertad religiosa ha venido a sustituir a la tolerancia civil. Con esto quiere significarse que asistimos a algo nuevo, y en tal sentido suele de ordinario subrayarse exclusivamente la novedad mediante el contraste entre libertad y tolerancia.

Sin negar, naturalmente, lo que hay de nuevo en la etapa actual de la libertad religiosa ahora nos importa advertir, por el contrario, lo que tiene de común con la anterior etapa de tolerancia civil. La consideración de esta coincidencia constituye, a nuestro entender, un punto de mira muy útil para contemplar la novedad en su verdadero marco y para señalar con precisión el campo a que pertenece el tema de la libertad religiosa, según la perspectiva adoptada por el Declaración Conciliar.

Tolerancia civil y libertad religiosa son dos especies de un sólo género: dos ediciones del régimen jurídico civil que tiene por objeto la esfera de autonomía de las personas y comunidades. El régimen de tolerancia se denomina justamente "civil" para expresar inequívocamente su naturaleza. Y para evitar también equívocos, en la "Declaración Dignitatis Humanae" el título mismo "Sobre la libertad religiosa" es aclarado por el subtítulo - "Sobre el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa". Con estas palabras del subtítulo ha querido dejarse claro desde el inicio del documento, que la Declaración, al tratar de la libertad, lo hace principalmente para proclamar la necesidad de un régimen de autonomía jurídico-civil. Este es el campo al que pertenece el tema de la libertad religiosa,



según la perspectiva adoptada por el Concilio Vaticano II: la libertad religiosa no se define en relación con Dios, sino en relación a una institución civil, El Estado (18). Se trata, simplemente, de una autonomía jurídica, y en modo alguno de una autonomía jurídico-civil que -al igual que ocurría en el régimen de tolerancia- para nada se refiere al estatus del fiel dentro de la Iglesia.

Bueno será recordar que hay palabras engañosas, por equívocas. No suelen padecer de este achaque las que figuran en el vocabulario propio del reino físico. Las engañosas suelen ser esas otras palabras correspondientes a la terminología -incluso técnica- relativa al orden moral. Y se comprende, porque aquí los vocablos reciben muchas veces significaciones diversas, por el influjo de diferentes concepciones o sistemas -religiosos, filosóficos, éticos, jurídicos, etc-, de tal suerte que, al utilizarlos, exige la lealtad una previa definición, o al menos la noble y sincera declaración del sentido en que se emplean, para evitar justamente el engaño, el error o el equívoco que puede producirse sin esa confesión honrada. (19).

Un ejemplo de lo dicho nos ofrece el término libertad, empleado en sentidos muy diversos por los pensadores, de acuerdo con un sistema respectivo; y también la expresión libertad religiosa, usada para significar cosas muy diferentes entre sí.

Por eso, la Declaración conciliar quiere evitar equívocos y, a tal efecto, dice en su proemio que al tratar de la libertad religiosa "pretende desarrollar la doctrina de los últimos Pontífices sobre los derechos inviola

bles de la persona humana y sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad". La Declaración usa el término libertad religiosa exclusivamente desde una perspectiva jurídica; para ella libertad religiosa -como vimos anunciar ya en el subtítulo de la Declaración- es igual a "derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa". "Esta libertad consiste- al decir del n. 2- en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos".

La Declaración del Vaticano II es una verdadera pieza de artesanía, una pequeña obra de arte, lograda mediante una sutilísima labor que ha consistido en distinguir sablamente, con la ineludible asistencia del Espíritu Santo, los diferentes planos en que, con anterioridad, se encontraba confusamente instalada la cuestión de la libertad religiosa: un plano humano y otro sobrenatural, con sus consiguientes enfoques filosófico y dogmático; un plano ético y otro jurídico; un plano eclesial y otro meramente civil o secular.

La libertad religiosa, según la noción que de ella da el Concilio, queda situada en el plano de las exigencias de la naturaleza humana. Sin embargo, es importante decir que no se ha querido apartar -en el exa

men de esa noción y en el régimen que se propone como ade  
cuado a su naturaleza- la luz sobrenatural de la revelación  
cristiana. Por el contrario, se ha tomado en consideración  
en dos sentidos diversos y complementarios:

a) Si bien se trata de verdades de razón, la Iglesia ha  
tenido en cuenta también, al explicarlas, la luz de la reve  
lación, que confirma esas verdades, dándoles una extraordinari  
a fortaleza. Es de notar que, en el propio documento, la  
Iglesia invoca un título sobrenatural al referirse a sus en  
señanzas de orden natural: "por voluntad de Crísto, la Igles  
ia Católica es la maestra de la verdad, y su misión consiste  
en anunciar y enseñar auténticamente la verdad, que es -  
Cristo, y al mismo tietpo declarar y confirmar con su autoridad  
los principios de orden moral que fluyen de la misma natural  
eza humana".

b) Por otra parte, la consideración de la libertad religi  
osa es un plano natural, -donde pueden encontrarse los católi  
cos con todos los demás hombres de buena voluntad- es, en  
las actuales circunstancias del mundo, el medio más apto para  
preparar el acceso al plano sobrenatural.

La noción la ofrece el Concilio acerca de la liberta  
d religiosa; tiene su origen en una abstracción del plano  
sobrenatural, porque se plantea de intento esa libertad en el  
plano de los principiol de orden moral que fluyen de la misma  
naturaleza humana. Bien entendido que tal abstracción no  
significa sustracción y menos negación del orden sobrenatura  
l, que la Iglesia no podía en modo alguno desconocer ni de  
jar en la penumbra. En esto consiste justamente la originalida  
d del planteamiento conciliar.

Al contemplar la libertad religiosa desde una perspe

pectiva jurídica, el Concilio tuvo que enfrentarse con un gran interrogante, que exige distinguir entre derecho positivo civil y derecho de la persona, fundado en su dignidad, y, por tanto, anterior al ordenamiento jurídico que - debe reconocerlo y consagrarlo mediante las adecuadas normas.

El interrogante permaneció en pie durante todo el largo proceso de elaboración del texto conciliar, hasta el último momento de las deliberaciones. En la *expensio modorum* que acompaña a la sexta redacción, se explican con claridad las razones que aconsejaron zanjar esta importantísima cuestión en el sentido de incluir el derecho a la - libertad religiosa entre los derechos inviolables de la persona humana:

"No hay todavía unanimidad sobre la ulterior explicación doctrinal, que aparece en los últimos documentos pontificios y que se expone y establece en nuestro esquema. Nuestro documento afirma que la libertad religiosa es un verdadero derecho de la persona, fundado en su dignidad humana y que debe ser reconocido como derecho civil en la sociedad civil".

"Hay Padres que desean suprimir en todos los lugares del texto la afirmación del derecho de la persona a la libertad religiosa, porque admiten tan solo el derecho positivo civil que ha de establecerse para ordenar la sociedad actual. Nos causa mucho dolor no haber podido satisfacer a estos Padres al examinar los Modos. Tengan en cuenta, por favor, estos Padres lo siguiente:

a) Esta afirmación de un derecho civil meramente positi

vo cambiaría la sustancia del texto, aprobado por una mayoría superior a las dos terceras partes de los Padres, y no mantendría el sentido de todo nuestro documento.

b) Esta afirmación de un derecho únicamente positivo, sería muy peligrosa para la libertad de la misma Iglesia Católica y el cumplimiento de su misión divina, El derecho positivo civil es creado por el legislador civil. Si se declara que la libertad de la Iglesia depende de la voluntad del legislador, ¿que ocurriría en las sociedades civiles donde el legislador es hostil a la Iglesia o donde no se hace distinción entre la religión (no cristiana) y el Estado? ¿No se entrega así, de hecho, la libertad y sagrada independencia de la Iglesia de Cristo y la voluntad del brazo secular?. En la declaración conciliar hay que atender el bien de toda la Iglesia.

c) De esto que decimos, no debe, sin embargo, concluirse que éste Sínodo admite la libertad religiosa por la sola utilidad de la Iglesia Católica. En nuestra declaración se afirma explícitamente que la intunidad de coacción externa es exigida por la misma verdad objetiva, es decir, por la misma naturaleza del hombre; pues se funda en la dignidad de la persona humana, a la que Dios dotó a su imagen, de libre arbitrio y responsabilidad personal.

En el texto que acabamos de transcribir, deben subrayarse algunas afirmaciones de particular interés. Se dice que la Declaración conciliar ha tenido en cuenta el bien de toda la Iglesia. Junto a los países donde la Iglesia tenía reconocida su libertad antes del Vaticano II, - hay que pensar también en otras situaciones: hostilidad del ordenamiento civil frente a la Iglesia (20); y países donde se encuentra unido el Estado a una determinada religión no cristiana. (21). Se advierte también que el Conciu

lio admite y defiende la libertad religiosa sin pensar exclusivamente en la utilidad de la Iglesia Católica; con ello se alude a uno de los rasgos característicos de la noción conciliar de libertad religiosa, al ser un régimen de inmunidad que debe sancionarse en el ordenamiento jurídico civil en favor de todas las personas y comunidades religiosas.

¿Por qué caminos se ha llegado en el Magisterio de la Iglesia, a la afirmación de que la libertad religiosa es un verdadero derecho de la persona, fundado en su dignidad humana y que debe ser reconocido como derecho civil en la sociedad civil?.

El Vaticano II ha tomado en cuenta tres importantes distinciones formuladas por Pío XI, Pío XII y Juan XXIII, al enfrentarse con realidades y fenómenos nuevos aparecidos sucesivamente en la sociedad civil.

Ante el totalitarismo del Estado fascista italiano, Pío XI levanta su voz de protesta, en su encíclica "Non abbiamo bisogno", contra las coacciones y violencias perpetradas por el poder civil en materias relacionadas con la vida religiosa de los ciudadanos. El Papa se muestra alegre y orgulloso "de combatir -son sus palabras- la buena batalla por la libertad de las conciencias, no ya (como alguno, tal vez sin advertirlo nos ha hecho decir) por la libertad de conciencia, frase equívoca y de la que se ha abusado demasiado para significar la absoluta independencia de la conciencia, cosa absurda en el alma creada y redimida por Dios".

Ante las exigencias del bien común internacional, Pío XII, en un célebre discurso sobre la tolerancia, establece tres importantísimas afirmaciones: a) "Lo que no responde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente

derecho alguno ni a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción"; b) "el no impedirlo por medio de leyes estatales y de disposiciones coercitivas puede, sin embargo, hallarse justificado por el interés de - un bien superior y más universal, c) "ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de Estados, sea el que sea su carácter religioso, puede dar un mandato positivo o una positiva autorización de enseñar o de hacer lo que sería contrario a la verdad religiosa o al bien moral". Se vé aquí una base firme - que permite distinguir, como es indispensable para llegar a la noción conciliar de la libertad religiosa, entre autonomía jurídica de los ciudadanos -esfera de justificada independencia civil frente al poder coactivo del Estado- y autonomía moral, es decir, injustificada independencia del hombre respecto de Dios y de la - ley divina dictada a su conciencia. Distinción que enlaza perfectamente con la de Pío XI entre libertad de - las conciencias (amparo legítimo contra la coacción estatal) y libertad de conciencia, es decir, pretensión - de absoluta independencia en el fuero interior.

Ante la viva estimación, en los tiempos recientes, de los derechos de la persona humana, Juan XXIII - presentará de nuevo la distinción -de antiguo abolengo en la doctrina católica y que tiene sus raíces en el Evangelio- entre el error y el errante y se servirá de ella para adelantar una formulación del derecho a la libertad religiosa: -"Siempre se ha de distinguir entre el que yerra y el error, aunque se trate de hombres que no conocen la verdad o la conocen sólo a medias, ya en el orden religioso, ya en el orden de la moral práctica; porque el que yerra no por eso está despojado de su condición de -

hombre ni ha perdido su dignidad de persona y merece siempre la consideración que deriva de este hecho".

- "Entre los derechos del hombre hay que reconocer también el que tiene de honrar a Dios según el dictamen de su recta conciencia y profesar la religión privada y públicamente.

Esta última distinción entre el error y el erranee, con el congruente reconocimiento del derecho del hombre de honrar a Dios según el diceamen de su recta conciencia, parece -y tal juzgo- fué la mente de Juan XXIII al referir el derecho de profesar la religión privada y públicamente tan solo a las personas - que obran de acuerdo con el dictamen de su conciencia, sin pensar en otros posibles titulares.

La Declaración Dignitatis humanae -al cumplir su propósito de "desarrollar la doctrina de los últimos Pontífices"-, -vá más allá, pues define la libertad religiosa como un derecho "permanecer también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella".

Para entender la amplia noción conciliar de libertad religiosa, es necesario tener en cuenta una importante distinción, que expone con gran claridad Millán Puelles en una luminosa página que vamos a transcribir por extenso.

"Ser persona es un rango, una categoría, que no tienen los seres irracionales. Esta prestancia o supe



rioridad del ser humano sobre los que carecen de razón es lo que se llama dignidad de la persona humana".

"Cuando usamos la palabra dignidad la podemos tomar en dos sentidos. La mayoría de las veces expresamos con ella un sentimiento que lleva a comportarse rectamente, es decir, a obrar con serenidad y p<sup>u</sup>ndonor. En este sentido, la dignidad es algo que no se puede, en principio, atribuir a todas las personas, sino únicamente a las que en la práctica proceden de una manera recta y decorosa. Pero otras veces la palabra dignidad significa la superioridad o la import<sup>a</sup>ncia que corresponde a un ser, independientemente de la forma en que éste se comporte. Y así, cuando se habla en general de la dignidad de la persona humana, no se piensa tan solo en el valor de los hombres que actúan rectamente, sino en que todo hombre, por el hecho de ser una persona, tiene una categoría superior a la de cualquier ser irracional.

"Esta categoría o dignidad de toda persona humana es completamente independiente de la situación en que uno pueda hallarse y de las cualidades que posea. Entre dos hombres de distinta inteligencia no cabe duda de que en igualdad de condiciones, es el mejor dotado el que puede obtener más ventajas; pero esto no le dá ningún derecho a proceder como si el otro fuera igualmente una persona. Y lo mismo hay que decir si se comparan un hombre que obra moralmente bien y otro cuya conducta es reprobable. Tan persona es el uno como el otro, aunque el primero sea mejor persona". (23).

A la luz de la anterior distinción se entiende

perfectamente un texto de gran importancia que encontramos en el nº 2 de la Declaración conciliar: "el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona. Por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece tambien en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella; y su ejercicio no puede ser impedido con tal de que se guarde el justo orden público".

Al llegar a este punto, conviene advertir que la libertad religiosa es ciertamente un derecho de la persona -y en esto se identifica con los restantes derechos fundamentales del hombre, pues corresponde a toda persona con independencia de sus disposiciones subjetivas-, pero tiene como nota distintiva última el hacer referencia a la relación del hombre con Dios, y no solamente a la relación con los demás hombres y con la sociedad civil. Por eso es de capital importancia situar la libertad religiosa exactamente en el plano donde la ha situado el Concilio -que es el plano jurídico civil- y evitar que la noción de libertad religiosa le desplace al plano moral, porque este deslizamiento daría origen a graves confusiones.

La libertad religiosa es una especie de libertad civil y, como ésta, "consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana". Se trata de una "exigencia de libertad en la sociedad humana", del "libre ejercicio de la religión en la sociedad", de una "inmunidad de coacción en la sociedad civil".

En rigor, es la demanda de una esfera de inde-

pendencia civil frente al poder del Estado para que "en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos".

La libertad religiosa, según la mente del Vaticano II, exige "la delimitación jurídica del poder público a fin de que no se restrinjan demasiado los confines de la justa libertad, tanto de las personas como de las asociaciones". Por eso se define como un "derecho de la persona" que "ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil".

Se trata -es conveniente repetirlo- de una autonomía jurídica civil. Esta es la única cuestión. Cosas muy distintas son la libertad religiosa en el orden moral. Las relaciones entre ambas permiten esclarecer en grado máximo la noción conciliar de libertad religiosa:

a) "La rectitud de la ley (humana) -dice Santo Tomás-, depende de su ordenación a la utilidad común, a la cual no le convienen siempre las mismas cosas; por eso eal rectitud está sujeta a variaciones". La ley humana puede cambiar se por un doble motivo: "por parte de la razón, porque vemos que es natural a ésta avanzar gradualmente de lo imperfecto"; y por parte de los hombre, "ya que cambian las condiciones de los hombres, los cuales llenan sus necesidades según sus diversas situaciones".

b) Las exigencias de la dignidad humana "se han ido - haciendo más patentes cada vez a la razón humana a través de la experiencia de los siglos". "Es evidente que todas

las gentes tienden de día hacia la unidad, que los hombres de diversa cultura y religión se ligan con lazos cada vez más estrechos y que se acrecienta la conciencia de la responsabilidad propia de cada uno". "La igualdad fundamental entre todos los hombre exige un reconocimiento cada vez mayor", que se traduce en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.

Ese doble motivo -progreso de razón, con el esclarecimiento de los derechos fundamentales de la persona, y -afán de unidad entre los hombres de diversa cultura y religión- justifica plenatentē un cambio de reforma de la ley civil, que se pliega y avanza a la vez, en lo que mira a la vida religiosa. Se repliega en el sentido de que -salvo las limitaciones exigidas por la defensa del orden público- el Estado no toma a su cargo -en la medida en que antes lo hacía- la tutela de los ciudadanos en el orden religioso y no evita coactivamente el riesgo de que algunos hagan un uso moralmente reprobable de su libertad, incumpliendo su deber de buscar la verdad y de adherirse a ella. Pero ese repliegue de la ley civil, lejos de significar un desprecio de -los deberes morales del hombre, se origina por el contrario en lo que constituye un gran avance del reconocimiento de las exigencias de la ley moral, porque la nueva estafa de la autonomía jurídico-civil se funda en el deber que tiene el hombre de respetar -de no coaccionar- a sus semejantes en materia religiosa, por al excelsa dignidad de la persona humana, considerada en sí misma, con independencia de la disposición subjetiva del individuo.

c) En rigor no puede hablarse de autonomía moral -en el sentido que hablamos de autonomía jurídica-, porque ello -significaría afirmar la independencia del hombre respecto -de la ley moral.

En un punto coinciden ciertamente la ley civil que reglamenta la autonomía jurídica y la ley moral en la materia religiosa. Ambas respetan la libertad psicológica, es decir, la conciencia que tiene el hombre de su libre - arbitrio; la facultad que tiene de determinarse a obrar - (libertas contradictionis) y de hacerlo con responsabilidad personal. Pero esa coincidencia no sitúa al hombre en igual posición respecto de la ley civil y de la norma moral; mientras aquella le reconoce autonomía en el orden puramente civil, haciéndole inmune de coacción por parte de cualquier potestad humana, aún en el caso de desoír la voz de su conciencia, siempre que con su conducta no atenta al justo orden público; la ley moral le exige imperativamente la obligación que tiene de seguir, por medio de su conciencia, los dictámenes de la ley divina, de tal modo que el ejercicio abusivo de la libertad en el orden moral es un claro incumplimiento de los deberes que tiene en relación con Dios.

Son muy claras las palabras del texto conciliar: "Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y, por tanto, enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción extrema. (24).

El contraste lo señalaba claramente Pío XI en la distinción antes recordada, entre la "libertad de conciencia"

(autonomía moral reprobable) y "libertad de las conciencias" (inmunidad de coacción extrema, garantizada con el reconocimiento de una esfera de su autonomía jurídica civil).

Ya tenemos situada la libertad religiosa en el lugar donde la puso la Declaración conciliar, -o mejor, en el lugar donde la encontró, según comentaremos más tarde-; y, ahora, ya en el campo estrictamente jurídico-civil, preguntamos: ¿Son equivalentes los términos "inmunidad de coacción" y "autonomía jurídica"? ¿Que se quiere hacer notar -especialmente cuando se utiliza uno u otro?. Esto nos lleva a nuevas distinciones (hasta ahora no hemos hechos, en rigor, otra cosa que distinguir; para evitar confusiones) en torno a la naturaleza del derecho a la libertad religiosa.

Dejemos por un momento la Declaración conciliar para preguntar a los juristas civiles qué entienden ellos por libertad religiosa. Su respuesta -discrepante entre otros puntos y, por eso, variable de unos autores a otros- es unánime en el que ahora nos interesa considerar. Todos coinciden en advertir que el de libertad religiosa es uno entre los muchos "derechos de libertad", así llamados porque, históricamente, estos derechos logran su consagración legislativa cuando se atenúan o abrogan las restricciones vigentes hasta el momento de su promulgación o reconocimiento, que se contiene de ordinario en textos constitucionales. (25).

Aquí conviene recordar una distinción, a propósito de la libertad, que ilumina toda la problemática que nos interesa. Según un concepto negativo de la libertad, se li

bre quiere decir ser libre de algo; según un concepto positivo, significa ser libre para algo. Se trata, estrictamente, de dos momentos de la libertad considerada de modo más com-preensivo.

El derecho de libertad religiosa -según el parecer de los juristas civiles contemporáneos-, se caracteriza, ante todo, por su carácter negativo, nota también distintiva de todos los derechos de libertad. En tal sentido -por razón, principal aunque no exclusivamente, de su origen histórico- los derechos llamados de libertad reciben de éste su concepto negativo. A través de estos derechos el hombre se libra de algo; queda en paz, está libre de las restricciones que antes disminuían su libertad. El hombre, a través de estos derechos, se vé inmune de la coacción que antes ejercían sobre él el Estado y otros sujetos dentro del Estado; ha conquistado una independencia, una esfera de licitud civil, donde antes existían para él prohibiciones e incapacidades de orden jurídico.

Los juristas civiles contemporáneos se sienten movidos también a definir la libertad religiosa -como los demás derechos de libertad- de modo negativo por otras consideraciones, ajenas a su origen histórico y que se refieren a su objeto, que consiste en una abstención u omisión impuesta a todos- al Estado y a los ciudadanos para adoptar el titular de una -esfera de independencia. De los dos momentos de la libertad, el Derecho sólo toma en consideración y dá relevancia al primero, meramente negaeivo, sin importarle el uso que haga de la libertad su titular, salvo que, por extralimitarse, afecte al orden jurídico establecido. Lo que tiene relevancia jurídica, a los efectos de definir y caracterizar los derechos de libertad, no son las manifestaciones concretas positivas de la libertad, sino solamente los límites establecidos, para que esas

manifestaciones sean civilmente ilícitas, y el deber negativo del Estado y de todos los miembros de la sociedad civil en relación a ellos. Todo lo demás está fuera del ámbito jurídico; las manifestaciones múltiples que resultan de esos derechos de libertad son manifestaciones meta-jurídicas, es decir, carentes de relevancia jurídica.(26).

Las normas sancionadoras de estos derechos de libertad proporcionan a sus titulares lo único que modestamente pueden darles: una libertad civil, una esfera de licitud civil, una independencia de índole civil. Y aquí conviene recordar otra distinción: la que existe entre lo lícito civil y lo lícito moral, que no siempre son coincidentes. Justamente, para evitar confusiones -que en éste punto serían especialmente graves- la Declaración conciliar define la libertad religiosa como "inmunidad de coacción". De tal modo quiere indicarse -con expresión muy significativa y adecuada- que el régimen jurídico civil que consagra la libertad religiosa tiene, esencialmente, un carácter negativo, en cuanto su objeto consiste en imponer a todos los miembros de la sociedad civil y al Estatuto el deber de abstenerse de intervenir en la esfera a que alcanza la libertad religiosa.

Recordemos que la libertad religiosa tiene como nota distintiva el hacer referencia a la relación del hombre con Dios, y no solamente a la relación con el Estado y con la sociedad civil. Por eso importa mucho añadir que, desde un punto de vista ético religioso, se trata también de un derecho negativo; la norma civil que consagra este derecho se abstiene de cualquier calificación de los credos



religiosos, salvo en lo que mira al bien común temporal, y deja a la conciencia de los ciudadanos la estimación de sus deberes personales con Dios, de lo que intencionadamente no se hace cuestión civil.

Entendida así la libertad religiosa -según la concepción que de ella tienen los juristas civiles contemporáneos- nada hay en ella reprochable. Entendida como inmunidad de coacción, queda circunscrita al campo que le corresponde -el campo de lo lícito civil- sin inmiscuirse en otro campo -el de la licitud moral-, al que no alcanza en modo alguno el régimen jurídico civil de la libertad religiosa. El carácter esencialmente negativo -por su objeto o contenido- del derecho de libertad religiosa significa, pura y simplemente, que su titular está jurídicamente facultado para exigir que nadie le coaccione en la sociedad civil en lo que se relaciona con la vida religiosa. Cosa distinta es que el Derecho civil le autorice positivamente para hacer esto o aquello en uso de su libertad, de modo que la calificación moral de esas acciones esté determinada por el Derecho civil. Si se mantiene en sus respectivas esferas la licitud civil y la moral -como algo exigido por la naturaleza negativa de los derechos de libertad-, es claro que el Derecho civil solo aprecia y valora la libertad en su primer momento negativo, pues sólo se interesa por la libertad religiosa para conseguir que los titulares de este derecho sean seres libres de toda injusta coacción civil. El derecho -según las concepciones jurídicas contemporáneas- se detiene en ese punto; lo demás -las manifestaciones positivas de esa libertad- es algo metajurídico, cuya censura y valoración corresponde a la moral. El cómo y para qué se usa la libertad el titular del

derecho -mientras no resulte ofensivo, de modo apreciable, al bien común temporal- es algo que no interesa al Estado.

Cuanto llevamos dicho a propósito de la naturaleza del derecho de libertad religiosa puede resumirse en esta afirmación: el aspecto jurídicamente relevante no es el interno y positivo, sino solo el extremo negativo. Pero de esta definición negativa de la libertad religiosa -a la que nos referimos especialmente cuando utilizamos el término "inmunidad de coacción"- no puede deducirse que la libertad religiosa carezca de contenido jurídico. Por eso -para dar relieve a este contenido, que constituye el aspecto positivo del régimen civil de la libertad religiosa- se emplea también el término "autonomía jurídica", con el cual nos referimos a la esfera de independencia civil que aquel derecho implica; autonomía que necesita de un régimen integrado por las normas jurídicas -que reconocen y tutelan la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Esas normas señalan los titulares del derecho, su extensión, los límites de su ejercicio y las garantías que aseguran su efectividad. A ellos se refiere el Concilio cuando dice que la potestad civil debe "asumir eficazmente la protección de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas" ( 27).

El régimen jurídico civil de la libertad religiosa, -es decir, el estatuto que reconozca y tutele la inmunidad de coacción en este campo- es descrito, en sus líneas fundamentales, por la Declaración conciliar, que considera el alcance de aquel derecho en abstracto, sin referencia a las diversas situaciones sociológicas, y señala los criterios que ha de tener en cuenta el legisla-

por civil para consagrarlo en su ordenamiento, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada sociedad.

El Concilio declara que la libertad religiosa "consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de las personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos".

En el pasaje transcrito se presentan, compendiadamente, los aspectos más relevantes de la libertad religiosa; los titulares de este derecho (personas individuales y comunidades religiosas); los sujetos pasivos (sobre quien recae el deber de no coaccionar); el ámbito de la esfera de autonomía (actuación libre en materia religiosa, en privado y en público); y la existencia de límites en el ejercicio del derecho. Cada uno de estos puntos son tratados con mayor amplitud en otros lugares de la Declaración. Merecen subrayarse algunos de ellos.

Entre los sujetos pasivos, se hace referencia más amplia a las autoridades civiles. Y así dice que la autoridad civil "excede sus límites si pretende dirigir o impedir los actos religiosos"; y que "no es lícito al poder público el imponer a los ciudadanos por la violencia, el temor u otros medios la profesión o el rechazo de cualquier religión, o el impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandone. En mayor medida - todavía se contradicen la voluntad de Dios y los sagrados derechos de la persona y de la familia de los pueblos

cuando se usa la fuerza bajo cualquier forma a fin de eliminar o cohibir la religión, sea en todo el género humano, sea en alguna región o en un grupo determinado".

Al decir que nadie debe ser impedido, en materia religiosa, a actuar "solo o asociado con otros" se incluye, entre los titulares del derecho, a las comunidades religiosas; punto que se reitera y explica más tarde: "La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que compete a las personas individualmente consideradas, debe serles reconocida también cuando actúan en común. Porque la naturaleza social tanto del hombre como de la religión exige que este... profese su religión en forma comunitaria".

En relación con las comunidades religiosas, el texto conciliar se detiene a indicar una serie de exigencias - que -al recordar antiguas restricciones y al reclamar normal tutelares- son particularmente expresivas de los dos aspectos que especialmente se subrayan cuando se utilizan los términos "inmunidad de coacción" y "autonomía jurídica":

- "inmunidad para regirse por ~~sus~~ propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerles mediante la doctrina, así como para promover instituciones - en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios.

- "derecho de no ser impedido por medios legales, o por la coacción administrativa de la autoridad civil en la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, en la comunicación con las autoridades y comu-  
nidades

des que tiene su sede en otras partes del mundo, en la erección de edificios religiosos y en la adquisición y uso de los bienes convenientes".

- "derecho a no ser impedidos en la enseñanza y en la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fé".

- "el que no se les prohíba manifestar libremente el - valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la so ciedad y para la vitalización de toda actividad humana".

Es de interés señalar la diversa valoración que el Concilio dá al principio de igualdad jurídica respecto de lal personas individuales y de las comunidades religiosas, temas ambos considerados expresamente en el nº. 6 de la Declaración.

Con referencia a las personas individuales dice: "la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos, la cual pertenece al bien común de la sociedad, jamás, ni abierta, ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, ni que se establezca entre ellos - ninguna discriminación".

Esta exigencia de igualdad jurídica está en la - entraña misma de la libertad religiosa cuando se trata de los ciudadanos, es decir, de las personas individuales, por que lo contrario -la desigualdad de trato por motivos reli giosos- sería una modalidad de coacción ejercida por el El tado, a través de su ordenamiento jurídico.

Cosa muy distinta ocurre con referencia a las co munitades religiosas, para lal que el criterio conciliar se expresa en un pasaje redactado con particular esmero: "si

en atención a las peculiares circunstancias de los pueblos, se atribuye a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se respete el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas". Se contemplan aquí la hipótesis del Estado confesional -con una confesionalidad religiosa católica o no católica- para admitirla como lícita, siempre que -cumplan la única condición que exige la justicia: que se respete a las minorías el derecho de libertad religiosa con la extensión y características que describe el Concilio. Es claro que este derecho es un mínimo que -si se respeta- no tiene por qué entrar en colisión con un régimen más favorable para la confesión religiosa especialmente reconocida por ser la tradicional en el país, la que profesa la mayoría de sus ciudadanos, etc.

El Concilio ha hecho especiales declaraciones sobre las exigencias de la libertad religiosa en relación con la familia:

- Cada familia "tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres".

- Los padres tienen "el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según su propia convicción religiosa".

- Contra el monopolio estatal y el laicismo escolar se dice: "la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin importarles directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan, además los derechos de los padres si se obliga a -

los hijos a asistir a elecciones escolares que no correspondan a la convicción religiosa de los padres o si se impone un sistema único de enseñanza del cual se excluya totalmente la formación religiosa".

La Declaración conciliar habla también -dentro del contenido propio del derecho de libertad religiosa- de los derechos de reunión y asociación: "en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentido religioso, puede reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales".

El derecho de libertad religiosa ha de ser reconocido "dentro de los límites debidos". De esos límites se ocupa la Declaración ampliamente en el nº 7., donde se acoge la noción de orden público, como parte fundamental del bien común, para proteger a la sociedad civil contra los abusos que puedan darse so pretexto de libertad religiosa. El orden público procura la pacífica composición de los derechos de todos los ciudadanos, la adecuada promoción de la paz pública y la custodia de la moral pública.

En varios lugares de la Declaración se hace especial referencia al orden público, sin duda con una intención pedagógica, para advertir la existencia de límites en las materias más delicadas.

Fieles a nuestro propósito de indicar algunos puntos de mira que ayuden a entender el alcance de la Declaración Dignitatis humanae hemos tenido que considerar, a lo largo de nuestro trabajo, una serie de distinciones;

entre la libertad de conciencia y la libertad de las conciencias; autonomía jurídica y autonomía moral; el error y el errante; libertad positiva y libertad negativa; lo lícito civil y lo lícito moral; inmunidad de coacción y - autonomía jurídica; tolerancia civil y libertad religiosa. Todas estas distinciones son necesarias para contemplar la noción conciliar de libertad religiosa desde una adecuada perspectiva, sin la cual la compleja temática que aquella noción encierra quedaría espuesta a oscuridades y confusiones. Este riesgo existe también si no se distingue convenientemente entre dos nociones -la libertad de la Iglesia y la libertad religiosa- que, el propio Concilio ha juzgado necesario contristar en su Declaración. Se trata de una distinción importantísima, a la que es oportuno referirse -o al menos, tomar en cuenta- siempre que se estudia alguna cuestión relativa a la libertad religiosa.

Es conveniente advertir que la Declaración sólo habla de la Iglesia Católica en su proemio y en su segunda parte, que estudia la libertad religiosa a la luz de la Revelación; e implícitamente en su conclusión. No se alude a la Iglesia en la parte primera dedicada a considerar la naturaleza y características de la libertad religiosa, donde se exponen sucesivamente: su objeto y fundamento; la libertad religiosa y la vinculación del hombre con Dios; la libertad de las comunidades religiosas; la libertad religiosa de la familia; la tutela de la libertad religiosa; sus límites; y la educación para su ejercicio. Estos siete números centrales son los que propiamente describen la libertad religiosa, según la noción que de ella tiene el Concilio. Distinta de esta libertad religiosa es la que el propio documento denomina la libertad de la Iglesia y se ocupa especialmente de ella en el n.º. 13.



Que se trata de dos nociones distintas, aunque estrechamente emparentadas, nos lo dice la Declaración: - "Hay, pues, una concordancia entre la libertad de la Iglesia y la libertad religiosa que debe reconocerse como un derecho de todos los hombres y comunidades y sancionarse en el ordenamiento jurídico".

Sin poder ocuparnos ahora por extenso de la libertad de la Iglesia, nos parece oportuno exponer algunas consideraciones que permitan apreciar sus principales conexiones con la libertad religiosa. Y, ante todo, es bueno recordar que, mientras la libertad de la Iglesia es un tema de nuestro tiempo, en cuanto se trata de un régimen jurídico civil, ahora dictaminado por el Magisterio de la Iglesia con censura favorable. Las razones que llevaron a la Iglesia a condenar el liberalismo en el siglo XIX, son las que ahora le han movido a calificar, de modo positivo, el régimen de libertad religiosa.

La Iglesia ha aplicado en estas materias el consejo de San Pablo a los de Tesalónica: "Omnia autem probate: quod bonum est tenete" -"probadlo todo, quedaos con lo bueno" (Thes. 5,21). Porque "probaron" la libertad del liberalismo -con su planteamiento y su actuación antieclesiástica- Gregorio XVI y sus sucesores condenaron aquella libertad, por contraria a las libertas Ecclesiae. Porque la libertad en su versión actual no es una libertad frente a la Iglesia -para librarse de las "trabas" de ésta- sino frente al Estado, para liberarse de injustas coacciones de la ley civil, en el reciente Concilio ha proclamado este régimen de libertad religiosa como algo correcto y deseable, pero se ha cuidado de describir con gran rigor las caracte

rísticas de este régimen, para que no se levanten equívocos acerca de lo que la Iglesia califica con censura - aprobatoria. (29).

El n° 13 de la Dignitatis humanae, al hablar de la libertad de la Iglesia dice de ella:

- que es una "libertad sagrada, con la que el Unigénito Hijo de Dios enriqueció la Iglesia, adquirida con su sangre.

- que "quienes la impugnan obran contra la voluntad de Dios".

- que es un "principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil".

- que debe defenderse contra todo ataque el que "la Iglesia disfrute de tanta libertad de acción cuanto requiere el cuidado de la salvación de los hombres".

En el apartado 2 recordará el doble título por que la Iglesia vindica su libertad ante la potestad civil:

a) Por ser "una autoridad espiritual, constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el deber de ir a todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda criatura". Se trata de un título de naturaleza sobrenatural, que corresponde en exclusiva a la Iglesia, por ser "la única verdadera religión, a la cual el Señor Jesus confió la obligación de difundirla a todos los hombres", quienes "están obligados a buscar la verdad, lobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla".

b) "En cuanto es una sociedad de hombres que tienen de

recho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fé cristiana". Se trata de un título natural, que no pertenece tan solo a la Iglesia; corresponde también a todos los grupos de personas que viven comunitariamente su religión. Este segundo título es el que se toma en cuenta en el régimen de libertad religiosa de que habla la Declaración conciliar.

Con la Declaración sobre la libertad religiosa la Iglesia pretende, además de garantizar y defender la dignidad de la persona humana, crear en todas partes - las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de su labor apostólica y misionera. Esta finalidad no debe nunca perderse de vista, pues su recuerdo coneribuye a una exégesis más profunda de los textos conciliares.

Lo verdaderamente importante, lo que en todo momento debe ponerse al abrigo de cualquier ataque, lo que constituye el principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil, es la libertad de la Iglesia, hoy como ayer y como siempre, desde que la Iglesia existe.

Si el actual régimen civil de libertad religiosa -tal como lo expone la Declaración conciliar- es llevado a la práctica con sinceridad, habrá "concordancia entre la libertad de la Iglesia y la libertad religiosa". En otro caso, si existe conflicto, el criterio decisivo será la defensa de la libertad de la Iglesia.

Es tambien de suma importancia el advertir que -por tratarse de un régimen jurídico-civil- la libertad religiosa es, según el planteamiento actual que acepta y aprueatólica una fórmula que se estima justa,

en cuanto garantiza los derechos de las comunidades religiosas minoritarias, a quienes se trata de proteger, en todas partes, con un estatuto de inmunidad y, por consiguiente, de autonomía jurídica. El régimen de libertad religiosa es el mínimo exigible tanto por la Iglesia como por las demás comunidades religiosas.

Pero sería un error pensar que ese estatuto mínimo es el único posible. Por eso hay que decir también que el Vaticano II no ha consagrado las doctrinas de algunos pensadores católicos que, al defender la libertad religiosa, estimaron que era incompatible con el Estado confesional católico. El Concilio ha superado la aparente contradicción, y ha dejado establecida la compatibilidad de un régimen de libertad religiosa con la confesionalidad católica o no del Estado. Pero éste es un tema que bien merece una amplia consideración, que reservamos a otra oportunidad.

B) Especial examen de la blasfemia

## B) ESPECIAL EXAMEN DE LA BLASFEMIA.-

Antes de entrar a desarrollar el tema de la blasfemia es interesante hacer un análisis etimológico del concepto. Los orígenes los encontramos en el griego y en el latín. Así pues, de un lado, proviene del griego "blasphemos", de las palabras "blapeein", que significa dañar o perjudicar, y de "pheme" que se traduce por palabra; de otro lado su origen es del latín "blasphemus".

El concepto etimológico de la palabra blasfemia - equivale a "mal decir" de alguien, pero desde los primeros - tiempos de la Iglesia se restringió preferentemente a los - ataques orales o escritos a la Divinidad. Este es el senti- do que parece haber tenido en el antiguo testamento en el - que, al menos las formas más graves, se castigaban con la muerte de quien la profiriese, y así se puede leer en el libro de Job: "mal decir de Dios y morir" (Job II, 9).

Sin embargo, con el transcurso de los tiempos, la palabra blasfemia fué extendiéndose a la falsa atribución de cualidades a la Divinidad, a los Santos, a los Angeles y, - según algunos teólogos, contra los propios demonios o ange- les caídos. La doctrina actual coincide en definir la blasfemia como toda palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los Santos, considerando dentro del término injuriosa cual- quier forma de maldecir o vituperar.

Como vemos la significación de la palabra blasfe- mia no ha variado en el transcurso de los tiempos. Desde - aquella definición latina "convicium" contra Deum vel Sanc- tos" hasta la empleada en nuestros días, apenas hay diferen-

cia.

Posteriormente este concepto se amplió y se incorporó a la definición la negación de algún atributo a Dios: "Cum de Deo aliquid negatos quod ee convenit.... et ideo is qui derogat divinae maiestati eius potestatis, vel paledecum prolatum in Deum vel", así como atribuirle el que no tiene. Este es el concepto teológico, el cual es distinto del jurídico. Quintano Ripollés es el que inicia esa diferenciación de conceptos al distinguir entre delitos de religión y delitos contra la religión. Como ya veremos en su momento, los Códigos penales, no sólo los españoles sino también los europeos, han venido configurando la blasfemia como delito, como falta o simplemente sin tratarla en los textos legales según el momento histórico de cada país y, en concreto, según la confesionalidad o separación de poderes que estableciese la Constitución imperante en cada momento. Como sabemos el Código Penal español vigente castiga la blasfemia como delito, a diferencia del Código de 1.928 que sólo la consideraba falta, pero exigiendo una de las dos formas siguientes:

a) Por escrito y con publicidad.

b) Con palabras o actos que produzcan grave escándalo público.

La pena establecida para este delito en el artículo 239 es la de arresto mayor y multa.

El Tribunal Supremo dice que la blasfemia se puede cometer principalmente de tres modos:

1º) Negando a Dios alguno de los atributos que le compe-

ten o atribuyéndole defectos que repugnan a su infinita perfección (como decir que Dios es injusto).

2º) Deseando a Dios un mal que lo es entre los hombres.

3º) Proferir semejantes palabras contumeliosas contra la Virgen o los Santos.

Por lo tanto, la blasfemia se viene a considerar como la ofensa dirigida a Dios, la Virgen o los Santos. Esa es la fórmula lógica cuando se trata de un Estado confesional como el español hasta la aprobación de la vigente Constitución de 1.978, aunque en el artículo 16, apartado tercero, al señalar que ninguna religión tendrá carácter estatal, dice que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesionales". Es lógico esa breve referencia a la Iglesia Católica si consideramos que hoy por hoy la inmensa mayoría del pueblo español practica o al menos profesa la religión católica. Sin embargo, cuando nos encontramos dentro de la libertad de cultos y creencias quizás habría que ampliar el concepto de blasfemia y no restringirlo a la Iglesia católica sino también a los ministros y dogmas de cualquier otra confesión que esté legalmente reconocida al equipararse la protección jurídica a las demás confesiones que no sean la católica con ésta.

Es difícil hacer una diferenciación de las diversas clases de blasfemia. Como veremos, la historia ha conocido múltiples clases de blasfemia, aunque muchas son las mismas sólo que con distinta denominación. La diferencia entre la blasfemia heretical y las demás, sirvió para determinar la jurisdicción competente para castigarlas, pues la



determinación de la existencia de la primera, era competencia de los Tribunales de la Inquisición, como todo lo referente a la herejía, mientras que el castigo de las demás se atribuía a los Tribunales seculares. En este segundo caso dejaron de castigarse cuando desaparecieron de los Códigos los delitos de religión.

La blasfemia puede ser: INMEDIATA, que es la más directamente afecta al mismo Dios; MEDIANA, que es la que afecta por medio de los Santos y de las cosas Sagradas. Esta diferenciación es según la persona o cosa ofendida. Según la forma de realizarse se distingue entre la blasfemia BREVE, que es el juramento grosero, la horrenda interjección, la frase ofensiva y de desprecio con que se ofende a Dios; la RAZONADA, MALEDICIENTE, o de IRRISION, que es la blasfemia herética que niega algún punto de la fé o la fé en si mista. También debemos de señalar la IMPRECATIVA, que es la que contiene maldiciones contra el prójimo.

También es necesario destacar las diferentes clases de blasfemia en la SIMPLE y la HERETICAL. Esta segunda a su vez se divide en: atributiva: cuando se aplica a Dios un atributo contrario a su esencia; recitativa: cuando se niega un atributo que le pertenece y, finalmente, en imprecativa: cuando se auguraba un mal a Dios o a los santos. También se distingue entre AIRADAS, que son las hechas con imprecación, es decir, en un momeneo de ofuscación, y DELIBERADAS, que es cuando se blasfema después de meditar profundamente lo que se va a decir o a hacer. De palabras y por escrito Ambrosio Negro en su tratado de "Dei delictis" contro la liberta" divide la blasfemia, además de las ya vistas, en -

REAL, realizada mediante actos, y VERBAL, que es la hecha por palabras injuriosas u ofensivas. También distingue entre deonostativa e imprecativa, como ya vimos anteriormente.

Carrara dice que las divisiones de la blasfemia no son aptas para el jurista o al menos que no son de ninguna utilidad.

Dentro del proceso de diferenciación entre delitos de "religión" y delitos "contra la religión" se distingue entre que los actos contra la religión son de dos naturalezas, uno contra la fè o el dogma y otros - contra el respeto, la decencia, las costumbres o la moral, y que para castigar estos últimos basta que el Estado reconozca y respete el sentimiento religioso, y que está obligado a proteger del escarnio las ceremonias del culto de la religión del Estado.

Carrara distingue tres formas del delito religioso, según contra que se ataque; bien sea a la religión como creencia divulgando falsos dogmas, y entonces estamos ante el delito del proselitismo, bien sea a la religión como culto externo, y se comete el delito de ultraje al culto, bien sea a la religión como último sentimiento de afecto en el corazón del creyente, y entonces será cuando, según siempre la teoría de Carrara en su "Programa de Derecho Criminal", estaremos ante el auténtico delito de blasfemia.

Antes de pasar a la naturaleza jurídica de la blasfemia es necesario hacer una distinción entre el pecado y el delito de blasfemia. La confusión pecado y delito no es típica de los delitos de religión. Basta re-

cordar que en Roma la alteración de las lindes era castigada como sacrilegio por estar éstas bajo la protección directa del dios Terminus. La primera fase del Derecho penal fué el castigo de las acciones humanas en cuanto éstas ofendían a la divinidad, cuyos vengadores eran los jueces y la pena la medida de la venganza según la gravedad de la ofensa. Con el progreso de la ciencia la diferenciación delito-pecado se fué haciendo cada vez más clara. Respecto a la blasfemia el problema se planteó por Jouse cuando preguntaba si la punición había de extenderse al hebreo que blasfemase de Cristo, ya que observaba que en la práctica no se castigaba por creer que sería risible que se castigase la blasfemia del hebreo. Es interesante el punto de vista de algún comentarista antiguo que llegó a decir que la blasfemia del hebreo no se debía penar y en caso contrario la pena debía de ser menor porque perturba la tranquilidad pública. Es de destacar la tesis de Carrara que es partidaria de extender la punición al infiel, porque una vez establecido como delito se pena por ser un hecho antijurídico, y no por ser pecaminoso. La lesión al bien jurídico protegido es la ofensa que se produce en el creyente cualquiera que sea la eventual opinión del que blasfema. Sin embargo, la mayor distinción entre delito y pecado consiste en los dos campos distintos en que se mueven. El delito dentro del terreno jurídico y se penará conforme a la ley establecida por el Estado. El pecado en el terreno moral y se penará según establezca la ley moral, y la conciencia de cada uno.

En cuaneo a la naturaleza jurídica de la blasfemia hay diversas teorías. (33). Carrara nos dice que la blasfemia se castiga por ser un acto antijurídico, mientras que Binding (34) nos dirá que por ser contrario a Derecho. Merkel afirma que es sancionable por violar las normas de cul-

tura y Garófalo por ofender el sentimiento de piedad causando un mal moral. Desde diversos puntos de vista se llega a la conclusión de que constituye un hecho punible ya sea dentro del campo del delito o del de la falta. Pero el problema es determinar la naturaleza jurídica de ese delito. Una primer concepción lo considera como un desacato, el más terrible de los desacatos, el desacato a Dios. Esta doctrina dominó durante mucho tiempo y las penas que se imponían eran de una gran dureza, pues así considerado cualquier pena es leve para tan horrible crimen. Posteriormente se consideró como injuria o difamación igualmente horrenda por referirse a Dios.

Es interesante que estas dos anteriores teorías no tienen como sujeto pasivo del delito a Dios mismo, pués entonces la norma penal tuteladora del sujeto pasivo tutelaría a Dios, que así resultaría protegido por la ley de los hombres. El derecho de los hombres y para los hombres sólo puede tutelar un derecho humano, y en el presente caso el derecho tutelado es el derecho del respeto al sentimiento religioso de los demás.

Carrara señala que es interesante el dato de la publicidad, que debe ser considerado como elemento esencial en dicho delito y no como mero indicativo de un valor mesurativo. La publicidad en la comisión de el delito es lo que separa en los delitos de religión, el que diferencia el pecado de los delitos de blasfemia. Si esta se profiere privadamente, aunque solo se piense, no cabe duda que existe el pecado de blasfemia, pero no se podrá afirmar que existe el delito, ya que entonces habría que considerar que existen los delitos de religión.

La publicidad nos lleva a la conclusión de que es un requisito esencial pués es elementos imprescindible el he-

cho de producir escándalo, es decir, que no se castiga en sí, sino por la reacción producida por el que los presencia o conoce. Es necesario ofender el sentimiento religioso, la reacción es el escándalo público. Así pues, la mayoría de los tratadistas consideran la blasfemia como un delito de escándalo público. También existe un grupo que lo cataloga dentro de los delitos de religión o contra la creencia oficial, según el régimen imperante en cada Estado que puede acoger el sistema de la confesionalidad o el de la libertad de cultos. Como veremos en su momento, el Código Penal español castiga la blasfemia en un capítulo aparte (el séptimo) dentro del Título II del libro segundo bajo la denominación de "Delitos contra la seguridad interior del Estado", y dentro de las "Faltas contra el Orden Público" en el nº 1º del artículo 567.

Dentro del problema de la graduación de la blasfemia vamos a estudiarlo desde tres aspectos: 1º. La graduación de la acción; 2º. La de la culpabilidad; y 3º. la de la gravedad. (35).

En la graduación de la acción se pueden dar todos los grados de ejecución. Es posible la consumación, la tentativa e incluso la frustración. Si se trata de ofender el sentimiento religioso de varias personas, puede intentarse y no lograrse por la imperfección de los medios empleados o bien lograrse plenamente. Si por ejemplo la acción consiste en vocear una blasfemia puede no herir a nadie porque la distancia lo impida, o porque ~~un~~ ruido inesperado que se oiga aunque la distancia sea próxima, o finalmente puede oírse perfectamente por el grupo al cual vá dirigido y cuyo sentimiento religioso es herido.

En cuanto a la graduación de la culpabilidad caben igualmente los distintos grados de culpabilidad. Es posible dolosamente y culposamente blasfemar. Lo mismo cabe decir - del posible delito preterintencional cuando, por ejemplo, se pretende herir el sentimiento religioso de un grupo de adultos pero además se hiere el de unos niños causando un mal de más gravedad que el que se tenía intención de causar. Son - posibles dentro del delito de blasfemia las causas de inimputabilidad que examina y regula el Código Penal.

En cuanto a la graduación de la gravedad está unida directamente a la reacción que produce. Cuanto mayor sea el escándalo causado, mayor será la gravedad delictual. Esto irpa ligado directamente a la cuestión de la publicidad que ya vimos, así como a la forma y al contenido de la blasfemia. Es interesante desde el punto de vista de los textos legales que como el español distingue entre el delito y la falta de blasfemia en la mayor o menor reacción producida, es decir, en el mayor o menor escándalo producido. Será un problema de interpretación que serán los Tribunales los encargados de - aclarar. Así pues, será el escándalo el que servirá de crité-rio mesurador y diferencial entre el delito y la falta. Nuestro Código diferencia el delito y la falta en la posibilidad de que aquel se cometa con palabras o actos, mientras - que la falta sólo es posible si se realiza de palabra; siendo el escándalo público el dato diferenciador.

En cuanto a la punición de la blasfemia existen - diversos criterios. Por lo general, y al estar incluida dentro de las categorías de delito o de falta, se castiga. El problema y a su vez la diferenciación entre países así como entre momentos históricos está en la mayor o menor dureza de

la pena. Los Códigos penales de Alemania, Austria, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Suecia y Suiza castigan la blasfemia. A estas legislaciones hay que añadir las de Holanda y España, que habiéndola abandonado han vuelto a castigarla, la primera por la ley de 4 de noviembre de 1.932 y la segunda por la reforma del Código Penal de 19 de julio de 1.944. El estudio de las legislaciones extranjeras lo dejamos para el apartado tercero de nuestra tesis "Derecho Comparado". En el Derecho español (36) el Fuero Juzgo la consideraba como una "infamia perpetua" y la sancionaba con el "perdimento de todos sus bienes". Las Novelas de Justiniano la castigaban con una serie de torturas físicas y a los que reincidían les penaba a muerte. En el Fuero Real se castigaba la blasfemia cuando fuese herética a la pena de muerte y al judío con 100 azotes y multa de 10 maravedis. Las Partidas castigaban con la pérdida de tierras, así como con seis meses de cárcel la primera vez y la segunda con otros seis y multa, y la tercera con el clásico clavamiento de lengua. Esto ocurría si el blasfemo era villano, - pues si gozaba de la condición de noble se libraba con la pena de un año de destierro y multa de dos mil maravedises. En el Código de 1.822 (artº 235), que todavía castiga con la pena de muerte los atentados más graves contra la religión y que tipificaba la apostasía, sancionaba la blasfemia sólo con la pena de arresto de 15 días a cuatro meses, que eran duplicados cuando el blasfemo fuese funcionario o eclesiástico. El Código de 1.848 la consideró como falta y la castigaba con la pena de uno a quince días de arresto y multa de tres a quince duros y represión, según el nº 1º del artículo 470. En el de 1.870 persiste la categoría de falta y se sanciona con uno a diez días de arresto y multa de cinco a cincuenta pesetas, según el artº 536 nº 2, y si es realizada a través de la imprenta el nº 4 del artº 534 castiga con multa de 25 125 pesetas. El artículo 240 nº 3 sanciona con prisión correccional la blasfemia realizada con escarnio o befa. El código de 1.923 -

conservó (artº 818) la falta de blasfemia, junto con el escarnecimiento a la Religión en el artículo 274. En el Código de 1.932 la blasfemia no se castigó al desaparecer tanto como delito como falta, aunque la jurisprudencia - pudo algunas veces asimilar algunas de sus formas a la - delincuencia contra la libertad de cultos. Es de mencionar asimismo el Registro especial de blasfemos creado por ley del mes de mayo de 1.909, que estaría situado en las Comisarías a la orden directa del Jefe Superior de Policía de Madrid, así como la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo del 31 de enero de 1.945 (37) en la que se define la blasfemia como proferir palabras injuriosas contra - Dios, la Virgen o los Santos.

El vigente Código castiga en el artículo 239 la blasfemia con las penas de arresto mayor y multa, y con la pena de uno a diez días de arresto menor y multa la falta del artículo 567 nº 1.

En el orden gubernativo se previno por el Ministerio de la Gobernación a los gobernadores que encargasen muy especialmente a sus dependientes y subordinados que - entregaran a los autores de estos hechos a los Tribunales de Justicia para que se les impusiera la pena merecida.

Igualmente hasta hace poco tiempo era frecuente que los gobernadores aplicasen a los blasfemos el correctivo que autorizaba el artículo 22 de la Ley Provincial para la Represión de los actos contrarios a la moral y a la decencia pública.

Con las salvedades que acabamos de hacer, destaca la benignidad de la pena que contrasta con la gravedad



prevista en otros tiempos, cuando la ley penal civil consideraba ciertamente la civilidad misma como sujeto pasivo del delito. La gravedad de la pena fué siempre mayor en el extranjero que en España.

En el delito de blasfemia hay que distinguir varios puntos que son interesantes. En primer lugar en cuanto al sujeto tanto activo como pasivo. La mayoría de la doctrina está de acuerdo en que el sujeto activo del delito de blasfemia puede ser cualquiera, es decir, que puede ser nacional o extranjero, sacerdote o laico, con independencia de la fé religiosa profesada. El Código Penal español al castigar el delito de blasfemia se pronuncia por esta postura ya que dice: "El que blasfemare....", con lo que incluye a cualquier persona como posible sujeto activo.

¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de - blasfemia?. La blasfemia ofende el sentimiento religioso de la comunidad católica organizada, por lo que se - puede decir que el sujeto pasivo será el Estado el cual ha de tutelar el bien ético-social de la fé Católica, como religión profesada por la mayoría de la colectividad y siempre que consideremos la blasfemia en el aspecto restrictivo de ofender simplemente a la religión Católica y no a las demás ~~confesiones~~ religiosas. Como ya hemos visto, la blasfemia significa una ofensa a Dios, la Virgen o los Santos, pero ¿no sería posible considerar igualmente como blasfemia ~~la~~ ofensa a los dioses de otros cultos o confesiones?. El Estado está, pués, obligado a tutelar tanto una como otra religión al admitir la libertad de cultos.

El objeto jurídico del delito de blasfemia debe considerarse el sentimiento religioso de la colectividad - que profesa, en su mayoría, la Religión Católica. Es, pues, ese sentimiento religioso de una comunidad el que se siente herido al ofenderse por escrito o con palabras a Dios, la Virgen o los Santos.

En cuanto al elemento material de este delito es la forma en que se realiza, que puede ser:

- a) mediante un escrito.
- b) mediante actos.
- c) mediante palabras.

La doctrina añade, junto a estos elementos de orden material, un elemento de carácter psicológico, el cual es la voluntad consciente y libre de profesar palabras o escritos injuriosos contra Dios, la Virgen o los Santos. Es decir, que se requiere un especial ánimo de injuriar, aunque no debemos olvidar que se admite la comisión tanto dolosa como culposa de la blasfemia.

La doctrina en lo que si está de acuerdo es en señalar los tres requisitos imprescindibles para que se dé la blasfemia (39):

- a) La blasfemia debe ser pública.
- b) La blasfemia debe ser una injuria contra Dios, los Simbolos o contra las Personas.
- c) La blasfemia debe de consistir en un escrito o palabra injuriosa.

Sería interesante ver a continuación la definición

que de la blasfemia hace el Código Penal Italiano (39):

"Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerate nelle religioni professate nello Stato é punito con l'ammenda da lire duemila a sessantamila. La stessa pena si applica, se il fatto é commesso con scritti o disegni. L'ammenda non puo essere inferiore a lire cinquemila, se il fatto é commesso contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerata nella religione cattolica".

Esta definición de la blasfemia vemos como recoge todos los requisitos que veíamos anteriormente. Tanto la publicidad, como la ofensa injuriosa a Dios, los Simbolos o las Personas veneradas, así como la posibilidad de ser por palabras o escritos, se recogen en el texto penal italiano que es uno de los más completos en esta materia.

Aunque solo sea brevemente debemos hacer mención al procedimiento que se sigue para enjuiciar el delito de blasfemia.

La Ley de 8 de abril de 1.967 modificó, por una parte, determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por otra, alteró todo el Título III del Libro IV de la misma, de dedicado al "Procedimiento de urgencia para determinados delitos" m rúbrica que sustituyó a la antigua "Del procedimiento en los ca sos de flagrante delito" y que se mantuvo hasta su reforma por Ley de 8 de junio de 1.957 m que introdujo la actual. (40).

Debemos recordar que aunque el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal continúa con la antigua rúbrica "Del procedimiento de urgencia para determinados deli tos", como si se tratara de un sólo procedimiento, en realidad

se comprenden actualmente dentro del mismo dos procedimientos de urgencia: uno, el del capítulo tercero para delitos de competencia de las Audiencias, es decir, el primitivo procedimiento de urgencia, con ligeras variaciones, y otro, el del capítulo segundo, para delitos cuyo fallo compete a los Juzgados de Instrucción, o sea, el que recoge, en gran parte, el derogado procedimiento especial de la Ley del Automovil. Por eso los procesalistas hablan de dos procedimientos distintos: uno el procedimiento sumario de urgencia y otro el procedimiento sumarísimo de urgencia, siendo competencia el primero de las Audiencias y el segundo de los Juzgados de Instrucción. Al estar castigada la blasfemia con la pena de arresto mayor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas, según el artículo 239 del Código Penal, es el segundo de los procedimientos el que nos interesa pues el - que enjuiciará este delito conforme a las reglas de competencia que más adelante veremos.

Las características de este procedimiento sumarísimo de urgencia son:

a) Este procedimiento ~~se~~ desenvuelve ante el Juez de Instrucción tanto la fase de instrucción como de juicio oral.

b) Es el mismo órgano unipersonal el que asume las funciones de instructor y juzgador, ya que se confiere al juez de - instrucción tanto la etapa preparatoria del juicio como éste y el fallo.

c) Este procedimiento adopta el sistema de doble instancia, lo mismo que el juicio de faltas.

d) Son sólo los delitos sancionados con pena menor los que deben ser enjuiciados por este procedimiento.

e) En este procedimiento se suprime la clásica institución del procesamiento.

Vistas las notas características de éste procedimiento debemos señalar para qué delitos son competentes los jueces de instrucción. Según el artículo 14-3º, "los jueces de instrucción son competentes para conocer y fallar las causas por delitos perseguibles de oficio castigados con pena no superior a arresto mayor, privación del permiso de conducir, multa que no exceda de 100.000 pesetas, o cualquiera de ellas conjuntamente con las demás o con una de ellas, salvo cuando por razón de los antecedentes penales del inculpado o por cualquier otra circunstancia deba imponerse pena superior, esté comprendido el hecho entre los delitos que figuran en el artículo 3º de la Ley de 2 de diciembre de 1.963 (delitos sometidos a la competencia del Tribunal de Orden Público, que ya fué suprimido), o por expresa disposición legal esté reservado el procesamiento a la Audiencia Provincial".

Es decir, que esta norma exige los siguientes factores, unos de índole positivo y otros de índole negativo:

Elementos delimitadores de caracter positivo:

a) que el delito sea perseguible de oficio, como lo es el delito de blasfemia.

b) que la pena con que esté castigado no sea superior a arresto mayor, privación del permiso de conducir o multa que no exceda de 100.000 pesetas, cualquiera de ellas sólo o conjuntamente, como lo es la pena con que se castiga en el artículo 239 del Código Penal el delito de blasfemia, que como ya vimos es la de arresto mayor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas.

En cuanto a los elementos delimitadores de caracter negativo encontramos:

a) que la pena no exceda de los límites referidos.

b) que el procesamiento no esté reservado a la Audiencia.

c) Que no se trate de delitos sometidos a la competencia privativa del Juzgado y Tribunal de Orden Público, que como ya decíamos anteriormente fué suprimido.

Antes de entrar en las distintas fases del procedimiento, vamos a detenernos brevemente en los principios que -informan este tipo de proceso, al cual hay que considerar no como un proceso especial sino como una modalidad del proceso común u ordinario (en este sentido ver la Memoria de la Fiscalía del Tribunal Supremo del año 1.968). (41).

Los principios fundamentales son:

a) En primer lugar se prescinde de la publicidad en cuanto a la presencia del acusado, puesto que "por la ausencia del acusado o del tercero civilmente responsable que tuvieran domicilio conocido, no se suspenderá la celebración del juicio, siempre que conste habérseles citado personalmente y el Juez es time que existen elementos suficientes para juzgarlos" (artº 791-3ª pfo. 2ª).

b) El principio de oralidad cede ante el de escritura, por que en el juicio oral sólo son admisibles las pruebas que, -siendo pertinentes, no hubieran sido practicadas durante la -tramitación de las diligencias, por causas ajenas a la voluntad del proponente o que se hubieran realizado sin citación de la parte que las proponga (artº 791-6ª pfo. 2ª). De este modo la prueba no será oral, en cuanto que el juicio constará solo de su reducción a escrito. Igualmente, en determinados casos,

puede autorizarse al Letrado designado de oficio que formule por escrito la defensa, que será leída en el acto del juicio y se incorporará a las actuaciones.

c) El principio de contradicción y de justicia rogada han sido fortalecidos en la fase de Diligencias Preparatorias. Como ya sabemos, concluidas las diligencias previas se ponen de manifiesto las actuaciones al Ministerio Fiscal, al querellante y al perjudicado que se hubieren personado y a los responsables para que puedan solicitar la practica de nuevas diligencias (art. 790 pfo. 1ª). Se amplía, por tanto, la intervención de los sujetos en el llamado periodo intermedio, y con ello el principio acusatorio, al mismo tiempo que se reduce el secreto, que junto con la investigación de oficio rige en las Diligencias Previas.

d) Se incrementan los poderes del Juez, no solo en cuanto a sus funciones, (fallo y ejecución), sino en la dirección del procedimiento. En efecto, no existe límite temporal para las Diligencias Previas, en las cuales el Juez puede agotar la investigación y adoptar medidas cautelares, personales o reales.

Por otra parte, no son recurribles los autos del Juez sobre admisión de pruebas en las Diligencias Preparatorias (artº 790-1ª), ni contra el auto de apertura del juicio oral y admisión de pruebas (artº 791-6ª. pfo. 3º y 7ª pfo. 4º), ni contra los pronunciamientos relativos a medidas cautelares, salvo el auto de prisión (artº 791. pfo. 4º). El Juez puede acordar que las pruebas se practiquen antes del juicio oral, con citación de todas las partes, sin que contra la resolución quepa recursos alguno (artº. 791-6ª y 7ª).

El procedimiento consta de las siguientes fases o etapas:

- a) Diligencias previas.
- b) Diligencias preparatorias.
- c) Juicio oral.
- d) Ejecución.

A) Las diligencias previas son la instrucción inicial indiferenciada, es decir, que lo mismo puede ser antecedentes de este procedimiento que de otro. En cuanto a lo que a nosotros nos interesa en este trabajo debemos decir que constituyen necesariamente la etapa preliminar del procedimiento sumarísimo de urgencia, pues el auto que determina el cauce procesal a seguir, por entender que el hecho perseguido corresponde al conocimiento del Juzgado de Instrucción, es al mismo tiempo la resolución inicial de las llamadas diligencias preparatorias.

El objeto de las diligencias previas es "determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el procedimiento aplicable" (artº. 789. pº. 1º). Están investidas por los principios de investigación de oficio y secreto de las actuaciones.

Las diligencias previas pueden concluir:

a) Con su archivo, por considerar que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que, siéndolo, no hubiera autor conocido

b) Con la remisión al Juez competente por entender que el hecho es constitutivo de falta (recordemos la falta de blasfemia en el artículo 567. pº. 1º) o por estar atribuido su conocimiento a una jurisdicción especial (artº. 789-2º y 3º).

c) Con su transformación en sumario o en diligencias preparatorias (artº. 789 - 4º y 5º).



B) Acordada la instrucción de las Diligencias Preparatorias, cuando el hecho constituya delito menos grave, se ponen las actuaciones de manifiesto al Ministerio Fiscal, al querellante y al perjudicado que se hubiere personado, así como a las personas contra las que en su calidad de responsables directos o subsidiarios se hubiere adoptado alguna medida, para que en el plazo común de tres días puedan solicitar la práctica de nuevas diligencias (artº. 790. pro.1º).

Las Diligencias Preparatorias constituyen, pues, una introducción complementaria y contingente de las Diligencias Previas, siendo indispensable que las partes soliciten la práctica de nuevas diligencias, sin que el Juez pueda acordarlas de oficio.

El Juez acordará la práctica de las diligencias solicitadas si las considera pertinentes y útiles, las cuales habrán de practicarse en el plazo de diez días, citándolas a las personas que estuvieren personadas en las actuaciones con objeto de que puedan intervenir asistidos de letrado y procurador. Si las diligencias tuvieran que practicarse en localidad distinta a la sede del Juzgado, se ampliara dicho plazo a quince días (artº. 790, regla 1ª).

Transcurrido dicho plazo se entregará la causa por tres días sucesivos al fiscal y al acusador particular para que soliciten lo que estimen oportuno acerca del sobreseimiento o apertura del juicio oral, y, en este último supuesto, califiquen por escrito los hechos. (artº. 790, regla 2ª).

El escrito de calificación comprenderá, además de la solicitud de apertura del juicio oral y de la identificación de la persona o personas contra las que se dirige la -

acusación, la adopción, modificación o suspensión de las medidas cautelares a que se refiere el artículo 735, así como la cancelación de las tomadas en cuanto a las personas contra las que no se dirija la acusación. (artículo - 790, regla 3ª).

C) Solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal, el Juez la acordará salvo que estime que concurre el supuesto de sobreseimiento libre del número 2º - del artículo 637, es decir, cuando el hecho no sea constitutivo de delito. Si el hecho revistiese caracteres de falta, acordará en el mismo auto en que así lo declare, que se remitan las actuaciones al Juzgado competente a los efectos procedentes. (artº 791, regla 1ª).

Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa, lo acordará el - Juez, adoptando las decisiones complementarias que procedan.

Solicitado el sobreseimiento por el Ministerio Fiscal, si el acusador particular pidiera la apertura del juicio oral, la acordará el Juez si lo estima procedente, ordenando de nuevo el traslado de la causa al Ministerio Fiscal para calificación por plazo de tres días. (artº 791, regla 4ª)

Cuando el Ministerio Fiscal solicite la formación de sumario, por estimar que el hecho enjuiciado es de la competencia de la Audiencia Provincial, el Juez dictará auto - ordenando la acomodación del procedimiento y siguiendo el - que corresponda conforme a lo pedido (artº 791, regla 4ª).

Sólo serán admisibles en este momento las pruebas que siendo pertinentes no hubieren sido practicadas duran-

te la tramitación de las diligencias por causas ajenas a la volunead del proponente o que se hubieren realizado sin citación de la parte que las proponga. Las pruebas no admitidas podrán ser de nuevo solicitadas en el acto del juicio. (artº. 791, regla 6ª).

Abierto el juicio oral, si el acusado no tuviere - domicilio conocido o se hallare en ignorado paradero, se mandará expedir requisitoria para su llamamiento y busca, declarándosele, si no compareciere o fuere habido, rebelde. Posteriormente, una vez que sean emplazados los acusados, se entregarán las actuaciones por cinco días sucesivos a los acusados para que formulen su calificación, proponiendo las defensas y excepciones de que intenten valerse y la prueba que estimen procedente. El Juez resolverá, sin ulterior recurso, sobre las pruebas propuestas y sobre su práctica y señalará día para el comienzo de las sesiones del juicio oral dentro de los quince días siguientes . (artº. 791, regla 7ª).

El juicio oral se celebrará ajustándose a la forma ordinaria. Por la ausencia injustificada del acusado que tuviere domicilio conocido no se suspenderá la celebración del juicio, siempre que conlte habersele citado personalmente y el Juez estime que existen elementos suficientes para juzgarlo.

Contra la sentencia dictada por el Juez cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, conforme al - articulo 792.

El recurso de apelación deberá interponerse en el plazo de cinco días, expresando sucintamente los fundamentos

## II - DERECHO ESPAÑOL

### A) Derecho Histórico

Vamos a intentar de hacer un estudio de los diversos momentos por los que ha pasado el tema de la blasfemia. Empezaremos por la Sagrada Biblia, el más antiguo texto en el que encontraremos referencias a la cuestión de la blasfemia, para terminar por las leyes que hasta hace pocas fechas estaban en vigencia.

En la Sagrada Biblia, en el Antiguo Testamento, en el capítulo XXIII, apartado 15, del Libro del Eclesiástico, se afirma que la blasfemia es mortífera. En el capítulo XXIV del Libro del Levítico se anuncia su castigo señalando que - el blasfemo "será conducido ante Moisés". Asimismo se habla de las blasfemias de Rabshaces en el Libro IV del Rey, y de las terribles penas a los blasfemos en el Libro de Job (capítulo XIII apartado 16), en la Profecía de Isaías (libro - I, apartado 4 v. 24 XLVIII), en la Profecía de Jeremías (Libro XXV apartado 17), Ezequiel (Libro XX apartado 28), y la ley de Nabucodonosor está contra ella, siendo castigados Moab y Ammon por sus blasfemias (Daniel Libro IV apartado 96 y Profecía de Sofonías II apartado 8).

Pero no solo en el Antiguo Testamento existen referencias a la blasfemia. En el Nuevo Testamento también encontramos citas a la blasfemia, y quizás en número superior a las de aquél. Así en el Libro I de Timoteo está prohibida - cualquier forma de blasfemia. En el Evangelio según San Ma-

teo (capítulo IX apartado 3, XXVI. 65) y San Juan (X /33) Jesucristo es acusado de blasfemo, como también lo es San Esteban en el Libro VI (apartado II) de los Hechos de los Apóstoles.

Igualmente Mateo (Libro XXVII. 39) y Lucas (Libro XXIII. 39) señalan que los transeuntes y los principes de los sacerdotes, escribas y ancianos, y el ladrón blasfeman de Jesucristo cuando se encuentra pendiente de la cruz.

En los Hechos de los Apóstoles (XVIII.6) los judíos blasfeman de manera brutal contra San Pablo. Asimismo los falsos doctores del camino de la verdad y de la sana doctrina (Pedro II, 2 y 10).

Los libros de Judas (VIII), Santiago (II.7) y Apocalipsis (XIII.6 y XVI.9, II.21) hablan constantemente de los blasfemos definiéndolos como los impíos del nombre de Dios.

Judas (XII.10) menciona el castigo de aquellos que blasfeman de todo aquello que ignoran. Los castigos llegan en muchos casos hasta la muerte del culpable. En el mismo sentido Mateo (Libro XII. 31 y 32) afirma que los que blasfeman contra el espíritu de Dios no han de ser perdonados con facilidad pues su castigo ha de ser en correlación con el hecho cometido.

Finalmente el Apocalipsis y la revelación del Apóstol San Juan (Libro XIII. 1 y XVII.3) están llenos de nombres de blasfemias como ejemplos de las muchas que se pueden pronunciar.

No sólo en la Sagrada Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se encuentran referencias a la

blasfemia. En el Derecho Antiguo tambien las encontramos y buena prueba de ello son las Leyes que dentro del Fuero Juzgo, las Partidas o la Novisima Recopilación tratan del tema. (43).

El Libro II, Titulo I, del Fuero Juzgo, en la Ley VII el Rey Don Flavio o Recisvindo dice que "ningun - omne deve blasphemar el principe, ni maldecir". Así cuemo nos defendemos que ninguno non prueve ninguna trayción, ni ningún mal, ni muerte contra la persona del principe: otro si non queremos sogrir que ninguno nolg ponga ninguna culpa falsa mientras, ni lo maldiga. Ca la sancta escriptura manda que ningún omne nin diga mal contra su proximo. Hy en otro logar dice, que quien mal ficiere o dixiere al principe, deve seer culpado de tod el pueblo. E por esto establescemos que tod omne que apustere algun mal al principe falsa mientras, o que lo non amonesto ante en bondad de su vida, mas quierese levantar contra el soberviosa mientras, e con sarna: e tod omne que dize cosas villanas, o palabras torpes, o tortizeras, si es omne de grand guisa, o ordenado, o lego, pues que fuere descubierto, pierda la meeta de todas sus cosas, y el principe faga dellas lo que quisiere. E si fuere persona vil, que non aya nenguna dignidad, faga el principe del lo que quisiere, e de sus cosas. Ay esto mismo mandamos guardar de los que dizen mal del rey despues de su muerte. Ca aquel que es vivo, en vano dize mal del muerto, ca el muerto non puede ya entender el castigo, ni se puede enmendar: e porque semeia loco - aquel que dice mal del muerto que non siente, per ende - aquel que lo dize deve recibir azotes, e callarse a de su locura. Mas este poder daños a cada un omne, que mientras que el principe vive, o despues que es muerto, que pueda -

razonar por sus pleytos, e por sus cosas, e asi cuemo per  
tenesce al pleyto, e asi cuemo es derecho. Ca en tal manera  
queremos nos guardar la ondra del principe, que non tol  
gamos su derecho a cada uno.

Asimismo las partidas tratan el tema. Concretamente  
el titulo V "cual debe el Rey ser en obras", de la Segunda  
Partida la Ley IV dice: de como el Rey se deue guardar que  
non diga palabras desconuenientes.

Desconuenientes non deuen ser las palabras del Rey, eserian  
etalos en dos maneras. La primera, como si las direse gran  
alabança de si; ca esta es cosa que esta mala todo omne, -  
porque si el bueno fuesse sus obras le locilan segund dixo  
Seneca el filosofho, que quien mucho se alaba, que enuiles-  
ce su honra. E otrosi dixo el Rey Salomon: la boca de otri  
te alabe e non la tuya: que per la agona es ome alabado , e  
non per la suya. E otrosi mon deue alabar a otri, diziendo  
del mas bien de lo que ha en el, porque tal alabança como es  
ta, es lisonja que quiere tanto dezir como loor engañoso e  
cosa que esta mal a todo ome que lo faze, e mayormente al  
Rey. E por ende dixo Seneca, quien alabar quier otri, que lo  
deue facer templadamente: ca el alabança que es ademas, sale  
de su logar, e tornase en denuesto que es de las tres mane-  
ras de denostar, e aun mas encarnida de todas. E la otra es  
dizendo mal de sus mayoresles assi como de Dios e de sus san  
tos e otrosi de los señores terrenales assi como de los re-  
yes suyos vassayos naturales son: o de los que quien descen-  
den por la linna derecha, assi como padre, o madre e donde  
arriba. Ca denostar a Dios, es contra natura assi como dezir  
mal la fechura del facedor, e de mas es cosa que non puede ser  
diziendo mal de aquel quien non lo ay. E denostar los san-  
tos es muy grand locura; ca a ellos han los omes per media-

nero si e Dios. E por ende los que los denuestan, son tales, como los que escupen contra el cielo, e les cae en los rostos. Ca pues el denuestro que les dizen, non eu ellos, por fuerça conuiene que se torne en los que lo dizen. E dezir mal de los Reyes e de los otros señores es atreuimiento, e deslealtad, como denostar aquellos en cuyo poder son, e de quien resciben bien, e de linaje dezir palabra de denuestro es gran mal estancia o necesidad e demas es cosa que se torna en denuestro todo en ellos mismos. E estos denuestos que diximos conuiene menos dezir que a otro ome. Ca que es tenuto de escarmentar a los que tales palabras dixeron, mucho mas deben guardar a si mismos de las dezir. E aun se deue guardar en la tercera manera de dezir mal de los omes denostandoles, seye ante el, o en otro logar, non meresciendo poeque el Rey que denuesta a los omes ante el, en tal manera que los omes lo oyan, mas semeja que los quiere enfamar, que castigarlos. E denostandolos quando non esten ante el, o assacandoles algun mal, en que non ouiessem culpa, muestra que su palabra, es mas a saño que a pro, porque non estan delante aquellas contra quien lo dize. Onde de todas estas palabras que debe auemos, se deue el Rey mucho guardar. Ca sin mal estancia que faria en decirlas, podria ende venir gra daño a su gente, porque los omes que las oyessen tomarlas y en porciertas en guisa que fincarian entamados aquellos, contra quien las dixessen. E sobre esto, castigo Aristoteles al Rey Alexandre diziendo que guardasse mucho las palabras que dezia, que la boca del Rey sale vida e muerte a su pueblo: honra e desonra: e mal e bien. E ha menester que ruegue a Dios que le ayude en ello, assi como dixo el Rey en su oracion: pon Señor guarda a la mi boca cerradura e puerta en los mis labios. E por esse puerta señaladamente, porque la pudiesse abrir para dezir las palabras que conuiene, e cerrarla para callar las que non fuessen para dezir. Onde el Rey desta guisa non guardare su boca, e yssasse dezir las palabras desconuenientes que desuso diximos



darle y e Dios muy grandes penas en este mundo: y e que los omes touiessen en vil sus palabras su utreuiessen a dezir - mal del, como en manera vengança, e en el otro es dar ley e pena del mal dezir la razon, que es muy grand pecado: e pesa mucho a Dios.

Igualmente en la Septima Partida encontramos referencias al tema. El Titulo XXVIII trata de los que denuestan a Dios, e a Santa Maria e a los otros santos.

Despues segun mostraremos, es cosa que dizan los omes unos a otros con despecho, queriendo luego tomar vengança por palabra: e si esto non cae en aquellos omes que non han fecho cosa, porque gelo puedan dezir, nin porque se puedan vengar los dezidores mucho menos cae a Dios, contra quien non pueden con derecho, nin con razon ser asmada, nin dicha alguna cosa si non bien. E por ende pues que en los titulos ante desde fablamos de los judios, e de los moros, e de los herejes, e de los desesperados, que todos estos cuydando creer en Dios, e cuydando que lo loan lo denuestan: queremos aqui dezir de otros que con saña cuydan denostar a el, e a sus santos. E denontraremos quien puede acusar a estos, e quales, e ante quien, e que pena merecen tales denostadores como estos despues que les fuere prouado.

LEY I.- Quien puede acusar a los que denuestan a Dios, e a Santa Maria, e a los otros santos, e ante quien e en que manera.

Por los yerros, e por los denuestos que los omes fazen si lo fizieren contra Dios, o contra Santa Maria, o contra los Santos tenemos por vien, e mandamos que todo ome a quien non es defendido por las leyes deste nuestro libro, puede acu

sar a quien quier que los faga, o los diga delante del juzgador del lugar do fuere fecho el denuesto. E si acaesciere que fuere ome rafez el que fiziere alguno de estos yerros sobredichos, mandamos que qualesquier que sean los que se acertaren y, les puedan acusar, o testimoniar contra el. E si el acusador lo pudiere prouar aya el tercio, que ouiere a pechar por pena el fazedor del yerro, si la pena fuere de dineros, o de auer. E si el acusador non lo pudiere prouar, finque por mentiroso, e despues desto pecho al acusado las costas, e missiones, que fizo por razon del acusamiento.

LEY II.- Que pena merece el rico ome que denostare a Dios o a Santa Maria o a los otros santos.

Los omes quanto son de mayor linaje, e mas de noble sangre, tanto deuen ser mas mesurados, e mas apercebidos para guardarse de yerro. E a los omes del mundo a que mas contiene de ser apuestos en sus palabras o en sus fechos, ellos son, - porque quanto Dios mas deshonra les fizo, e quanto mas honrrado, e mejor lugar tienen, tanto peor les esta el yerro que fazen. E por ende mandamos que si algund rico ome de nuestro señorío denostare a Dios, o a santa Maria, por la primera vez - pierda la tierra que tuviere por un año, e por la segunda vez pierdala por dos años, e por la tercera pierdala de llano.

LEY III.- Que pena merece el cauallero , o el escudero que tenga tierra, si denostare a Dios, o a santa Maria, por la primera vez pierda por un año lo que tuviere del señor, a la segunda vez, pierdalo por dos años e a la tercera pierdala por - toda la via. E si non touiere tierra, e touiere cauallo o armas, pierdalo por la primera vez. E si nom touiere cauallo nin

armas, e touiere una bestia, pierdala. E si non touiere - bestia, e quiere paños nuenos, tuelgaelos al señor, e partalo de si. E si el señor non lo fisera, peche al Rey doblado, quando el caballero, o el escudero del señor tenia. E si en todo esse año otro alguno lo recibiere echandolo el señor de si, o partiendose el del por esta razon, peche por el doblado, quanto del señor tenia. E si lo recibiere cauallero, o escudero que non tenga ninguna cosa del señor que lo echo de si, peche por el cient marauedis. E si cualquier destos sobredichos en esta leo, o en la ley que es ante desta, denostare a otro santo, mandamos que aya la meytad de la pena sobredicha.

LEY IV.- Que pena merecen los cibdadanos, o los moradores de las villas que fizieren el denuesto susodicho.

Cibdadano, o morador en villa, o en la aldea, que denostare a Dios o a santa Maria, por la primera vez pierda la quarta parte de todo lo que ouiere, e por la segunda vez la tercia parte, e por la tercera la meytad: e si de la tercera en adelante lo fiziere sea echado de la tierra. E si fuere otro ome de los menores qse non ayan nada, por la primera vez denle cinquenta azotes, por la segunda señalenle con fierro caliente en los beços, que sea fecho a semejança de b. E por la tercera vegada que lo faga, cortenle la lengua.

LEY V.- Que pena merece aquel que fiziere de fecho alguna cosa en denuesto de Dios, o de santa Maria, o de los otros santos.

De fecho obrando algund ome en manera de denuesto alguna cosa, como contra Dios, o contra santa Maria, escupiente

do en la imagen o en la cruz, o firiendo en ella con piedra, o con cuchillo, o con otra cosa cualquier, por la prima vegada aya toda la pena el que lo fiziere, que siximos en las leyes ante desta que deue auer por la tercera vegada, el que denuesta a Dios, o a santa Maria. E si el - que lo fiziere fuere de los menores que non aya nada, mandamos que le corten la mano por ende. Otrosi dezimos, que si alguno con saña escupiesse contra el cielo, o firiesse en las puertas o en las paredes de la Yglesia, aya la pena sobredicha que deue auer el que denostare a Dios, o a santa Maria dos vezes.

LEY VI.- Que pena merecen los judios, o los moros que denuesten a Dios, o a santa Maria, o a los otros santos, o fazen algunos de los yerros sobredichos en este titulo.

Como quier que non deuen apremiar a los judios, nin a los moros para creer en la fe delos Christianos: con todo eso non tenemos por bien que ninguno dellos sea osado nin atreuido en ninguna manera de denostar a Dios, nin a Santa Maria, nin a ninguno de los santos que son otrogados por la yglesia de Roma. Casi los Moros defienden en todos lugares do en poder a los christianos que non denuesten a Mahomat, nin digan mal de la su creencia, e los açotan por esta razon e los fazen mal en muchas maneras, e los desca-beçan aun. Mucho mas guisada cosa es que lo defendamos nos a elles, e a los otros que non creen en nuestra fe, que non osen ser atreuidos de dezir mal della, nin de la denostar. E por ende mandamos, e defendemos a todos los judios e Moros de nuestro señorío, que nunguno dellos non sea osado en denostar a nuestro señor Iesu Christo, en ninguna manera - que pueda ser, nin a santa Maria su madre, nin a ninguno de los otros santos, nin de fa zar ninguna cosa de fecho contra ello assi como escopir contra la cruz, nin contra el -

altar, nin contra ninguna magestad que este en la yglesia. o en la puerta della que sea pintada, o entallada en semejança de nuestro señor Iesu Christo, o de santa Maria, o de alguno de los otros santos, e santas: nin sea osado de ferir con mano, nin con pie nin con otra cosa - ninguna, en ninguna destas cosas sobredichas, nin de apedrear las yglesias, nin de facer, nin de dezir otra cosa semenante destas paladinamente, en desprecio, nin en desonrra de los christianos, e de su fe. Ca cualquier que contra esto fiziere escarmentargelo y amos en el cuerpo, e con el auer segun entendieremos que merece por el yerro que fiziesse. Ca guisada cosa es, e derecha, que los judios, e los Moros a quien non consentimos que biuan en - nuestra tierra, non creyendo en la nuestra fe, que non - finquen sin pena si denostaren, o fizieren de fecho alguna cosa publicamente contra nuestro señor Iesu Christo, o contra santa Maria su madre, o contra la nuestra fe catholica, que es tan santa cosa, e tan buena, e tan verdadera.

En la Novisima Recopilacion el Titulo V trata de los blasfemos y de los juramentos. Las Leyes fueron - dadas por diversos Reyes en distintas fechas y épocas, a partir del año 1.387.

LEY I.- Pena de los que reniegan y blasfeman de Dios, la Virgen o Santos.

Porque a nuestro Señor Dios desplace mucho es - desconocimiento ordenamos, que qualquier que renegare ó - denostare a nuestro Señor Dios desplace mucho el desconocimiento ordenamos, que cualquier que renegare o denostal

re a nuestro Señor Dios ó a la Virgen gloriosa su Madre ó a otro Santo o Santa, haya aquellas penas que son establecidas contra los tales en las leyes de las Partidas que hablan en esta razon; y el juez o Alcalde, de esto acaeciere, haga pesquisas de su oficio, y si le fuere denunciado, y lo supiere, y no hiciere la dicha pesquisa, que pierda el oficio.

LEY II.- Nuevas penas impuestas a los blasfemos de Dios y de la Virgen Maria.

Allende las dichas penas ordenamos, que cualquier que blasfemare a Dios o de la Virgen Maria en nuestra Corte ó a cinco leguas en deredor, que por ese mismo hecho le corten la lengua, y le den cien azotes publicamente por justicia; y si fuera de nuestra Corte blasfemare en cualquier lugar de nuestros Reynos, cortenle la lengua y pierda la mitad de sus bienes, la mitad de ellos, para el que lo acusare, la otra mitad para la Camara: y Nos no entendemos remitir esta pena por suplicación de persona alguna.

LEY III.- Facultad del que oyere blasfemar a otro, para prenderlo y conducirlo a la carcel.

Nos, veyendo que la guarda de las anteriores leyes contra qualquier hombre o mujer, que blasfemare de nuestro Señor o de la Virgen Maria, o de otro Santo o Santa, es servicio de Dios; mandamos, que sean guardadas; y mas, que cualquiera que oyere al que blasfemare, lo pueda tomar y prender por su propia autorodad, y lo pueda traer y traiga a la carcel publica, y poner en cadenas; y mandamos al carcelero que lo reciba en la carcel, y le ponga prisiones, - porque de alli los jueces puedan executar las dichas penas.

LEY IV.- Pena de los que dixeren descreo o despecho de Dios o de la Virgen, y otros semejantes palabras en su ofensa.

Mandamos y defendemos, que ningunas personas de - nuestros Reynos, de qualquier estado, condicion, preeminencia o dignidad que sean, no sean osados de decir, descreo de Dios ꝛ despecho de Dios, y mal grado aya Dios, ni ha poder en Dios, ni pese a Dios, ni lo digan de nuestra Señora la - Virgen Maria su Madre, ni otras tales ni semejantes palabras que las suso dichas en su ofensa; so pena que la primera vez sea preso, y este en prisiones un mes (1), y por la segunda, que sea desterrado del lugar donde viviere por seis meses, y mas que pague mil maravedis, la tercia parte para el que lo acusare, y la otra tercia parte para el Juez que lo juzgare, y la otra tercia parte para los pobres de la carcel del lugar do acaesciere; y por la tercera vez, que le enclaven la lengua, salvo si fuere escudero, o otra persona de mayor condición, que la pena sea destierro y de dineros doblada que - por la segunda: pero mandamos, que si algun esclavo fuere preso, porque dixere algunas palabras de las de suso declaradas, y el dueño de tal esclavo quisiere mas que le sean dados cincuenta azotes publicamente, que no tener su esclavo en la carcel el tiempo de suso contenido, que sea en su elección y que de estos dos penas aquella se de al dicho esclavo qual su dueño escogiere.

LEY V.- Execucion de las leyes anteriores y sus penas sin dispensas ni excepcion de personas.

Mandamos a los Asistentes, Gobernadores o Corregidores, que executen las leyes contra los que dicen mal a -

nuestro Señor y a nuestra Señora, y las penas en ellas contenidas, en las personas que contra ellas fueren y pasaren, sin excepción de personas de mayor ni menor condición; so pena que, si dispensaren con ellas en poco o en mucho, pasen ellos la pena que el transgresor de las dichas leyes habia de pasar.

LEY VI.- Prohibicion de los juramentos por vida de Dios y otros semejantes; y su pena.

Por quanto Nos fue hecho relacion, que muchas personas, asi hombres como mugeres, tienen costumbre de jurar por vida de Dios y no ceo en la fe de Dios, y no ha poder en Dios, y debodo a nuestro Señor Dios; Nos, queriendo pro - veer porque cesen las cosas suso dichas, defendemos y mandamos, que ninguna ni algunas personas, de cualquier estado o condición que sean, no sean osados de jurar los juramentos ni palabras de suso contenidas, ni jurar por otro ninguno de los miembros santisimos de nuestro Señor; so pena que, - cualquier persona que dixere las dichas palabras y juramentos, incurra en las penas que incurriera si dixiere qualquiera de las palabras contenidas en la ley precedente, y aquella misma pena le sea dada y executada en su persona y bienes: y mandamos a nuestras Justicias y a cada una dellas, que asi lo guarden, cumplan y executen.

LEY VII.- Pena de galeras a los que blasfemen de Dios e hicieren juramentos, ademas de las contenidas en las leyes anteriores.

Mandamos, que demas de las penas corporales que - por las leyes y pragmaticas de estos Reynos estan puestas a los que blasfemen de Dios nuestro Señor, sean condenados



en diez años de galeras; y que ansi mismo en el caso que, conforme a las leyes y pragmaticas de estos Reynos en el espacio y generos de juramentos en ellas contenidos, por la tercera vez se pone pena de enclavar la lengua, demas de la dicha pena en el dicho caso sean condenados en seis años de galeras.

LEY VIII.- Prohibición de jurar el santo nombre de Dios en vano; y pena de este delito.

Entre los pecados y delitos que man ofenden a - Dios nuestro Señor, es jurar su santo nombre en vano y con mentira; y no solo castiga Dios este pecado en la otra vida, sino tambien en esta, llenandose, los que de esta manera le ofenden, de muchos trabajos y pecados: y porque - siendo nuestra primera obligación hacer guardar, cumplir y executar la santa Ley y mandamientos de Dios en todos nuestros Reynos, según que hasta ahora lo hemos hecho y executado; teniendo noticia de abuso que hay en los juramentos, y deseando desterrar de mis Reynos este tan vil y abominable pecado, mandamos, que ninguna persona, de cualquier estado o calidad que sea, jure el nombre de Dios en vano en ninguna ocasión y para ningun efecto; y que aquel se diga y tenga por juramento en vano, que se hiciere sin necesidad: declarando, como declaramos, que solo quedan permitidos los juramentos que se hacen en juicio, o para valor de algun - conerario u otra disposición, y todos los demás absoluta y generalmente los prohibimos. Y cualquiera personas que lo: conerario hiciere, por la primera vez incurra en pena de - diez dias de calcel y veinte mil maravedis, y por la segunda, treinta de carcel y quarenta mil maravedis, y por la - tercera, demas de la dicha pena, quatro años de destierro

de la ciudad, villa o lugar donde viviere y cinco leguas; y la dicha pena de destierro se pueda conmutar en servicio de presidio por el mismo tiempo, o de galeras, segun la calidad de la persona y circunstancias del caso, y cuando el reo no tuviere bienes para pagar la pena pecuniaria, que aplicamos por tercias partes, Camara, Juez y denunciador, se conmute en otra pena correspondiente al delito.

LEY X.- Prohibicion de blasfemias, juramentos y maldiciones, palabras obscenas y acciones torpes en sitios publicos de la Corte.

El proferir por las calles blasfemias, juramentos y maldiciones se ha hecho demasiado general, y lo mismo el uso de acciones y palabras escandalosas y obscenas hasta en las conversaciones familiares, contra lo que exige la Religión, y previene la Justicia, que abominan y detestan semejante lenguaje: ni las leyes que los proscriben y condenan, ni los Ministros que han de ejecutarlas podran remediar los malos que ocasiona, si los padres de familias respecto de sus hijos, y los amos de sus criados descuidan el cumplimiento de sus deberes que les impone su estado en este punto, y continuan en el abandono de no corregir unos desahogos que acreditan por lo - menos la indiferencia con que miran la educación que les está confiada. De este principio, y acaso del de su exemplo, nace la libertad que tienen aquellos de proferir semejantes expresiones dentro de sus casas, sin contenerles los respetos de obediencia y sumisión que degradan y desautorizan los mismos interesados en sostenerlos; dando lugar a que ni los de la - Religion, ni los de las leyes les contengan para no escandalizar al publico en las calles. Confiando pues que los padres y amos no daran lugar a que se proceda contra ellos por unos ex

cesos, que si no previenen en tiempo, empleando en esto su autoridad familiar, causan los perjuicios referidos; para evitarlos, y castigar a los que no hagan caso de ella, se manda que se observen los capitulos siguientes:

1. A los que profieran blasfemias, juramentos y maldiciones en las calles y parajes públicos, se les impondrán las penas establecidas por las leyes.

2. A los que lo hagan de palabras obscenas y torpes, o executen acciones de la misma clase, se les destinará por la primera vez a los trabajos de las obras públicas por un mes, siendo hombres, y por igual tiempo a San Fernando, siendo mugeres; doble pena por la segunda; y si tercera vez reincidieren, se agravaran hasta imponerles la de verguenza pública.

3. Los dueños de las casas públicas, como tabernas, juegos de billar, cafes y otros, serán responsables de la falta de observación de los dos capitulos anteriores; y además se le impondrá la pena de cerrarlos.

A continuación, y dentro del Derecho histórico, vamos a intentar hacer una exposición de las Constituciones es  
pañolas en lo referente a la libertad religiosa.

La primera Constitución española es la Constitución de Bayona del 8 de julio de 1.808, que lleva la firma de Don José de Napoleón, concretamente dice: "En nombre de Dios Todo poderoso, José Napoleón por la gracia de Dios". El artículo primero afirma: "La religión católica, apostólica, romana, en

España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra". Conforme el artº. 5º el Rey prestará juramento sobre los Evangelios y la fórmula será: "Juro respetar y hacer respetar nuestra Santa Religión.....". El Estado confesional se manifiesta, igualmente, en la creación en el artículo veintisiete, de un ministerio de negocios eclesiásticos y en que uno de los seis Jefes de la Casa Real será un capellán mayor, conforme el artº 25. Como vemos la Constitución de Bayona no admite la libertad religiosa y junto a la prohibición de otras confesiones hace una defensa a ultranza de la religión Católica. (44).

La segunda Constitución es la de Cadiz que lleva fecha de 19 de marzo de 1.812 y que se titula "De la monarquía española". La promulgó Don Fernando VII "Por la Gracia de Dios y de la Constitución" y el Rey lleva el tratamiento de Magestad Católica. El preámbulo dice: "En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y Supremo Legislador de la Sociedad". Igual que la de 1.808, esta Constitución es de carácter confesional como lo demuestra el artículo 12: "La religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica, apostólica, romana, - única y verdadera. La nación la protege por leyes sobrias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra". El artº. 117 ordena iniciar con una misa solemne las reuniones electorales y los diputados jurarán anualmente defender y conservar la religión Católica. El Rey jurará "por Dios y los Santos Evangelios defender y conservar la religión Católica, sin permitir - ninguna otra en el Reino". El artº 336 ordena la enseñanza del catolicismo en las escuelas de primeras letras. El sostenimiento del culto y del clero es a cargo del Estado.

El Decreto de 22 de febrero de 1.813 supuso la abo-

lición del Santo Oficio, provocando la consiguiente lucha religiosa.

Si bien no se trataba de una verdadera Constitución, el Estatuto Real promulgado en Aranjuez el 10 de abril de 1.834 tuvo verdadera importancia en el tema de la libertad religiosa. Según el artículo segundo de las Cortes Generales se componían de: Próceres del Reino y Procuradores del Reino. Los procuradores del Reino serían en primer lugar los "Muy reverendos arzobispos y reverendos obispos".

La Constitución del 18 de junio de 1.837, titulada igualmente "De la monarquía española", va firmada por Doña Isabel II "por la Gracia de Dios y de la Constitución". Significa una reforma de la Constitución de Cadiz y un paso importante en la apertura a otras confesiones religiosas, pero sin abandonar en ningún momento el espíritu católico. El artículo once dice: "La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles".

A pesar del carácter confesional del Estado no se cita ninguna fórmula de juramento ni se prohíbe en concreto la tolerancia de cultos.

El 23 de mayo de 1.845 se firma en Madrid la Constitución "De la monarquía española". Firma Isabel II, no siendo ya menor de edad como lo era en la anterior Constitución. El artículo segundo afirma: "La religión de la nación española es la Católica, apostólica y romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros". Entre las personas que podían ser senadores, según el artº. 15,

están los arzobispos y obispos. No se hace ninguna referencia en relación con la prohibición de cultos.

La Constitución de enero de 1.856, promulgada por las Cortes Constitucionales, mantiene la confesionalidad del Estado pero con la particularidad de permitir otros cultos y confesiones religiosas. Es en esta Ley - Fundamental donde se inicia un nuevo camino en el terreno de la libertad religiosa. En efecto, pues el artículo 14 dice que "la nación se obliga a mantener y proteger el - culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión".

La Ley Constitucional de Reforma de 17 de julio de 1.857, que lleva la firma de Isabel II y que reforma - la Constitución de 1.856, tiene como único punto importante el artículo 14 en el que al mencionar la composición - del Senado habla de "los arzobispos y del Patriarca de las Indias".

La Constitución del 1º de junio de 1.869, que se titula igualmente de la monarquía española, mantiene la - confesionalidad del Estado y la tolerancia de cultos, afirmando en el artículo 21 que "la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El - ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de - la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren -

otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el parrafo anterior". El artº. 62 enumera el ser arzobispo u obispo entre las exigencias - para ser senador.

El 17 de julio de 1.873 se publica "La Constitu  
ción federal de la República española". Esta Ley Fundamental significa el primer paso importante para la separación de poderes, pues el artº. 35 señala que "queda separada la Iglesia del Estado". Igualmente se prohíbe el sostenimiento del culto y del clero de manera expresa. El artº. 34 - afirma que el ejercicio de todos los cultos es libre en - España. Es de destacar que esta Constitución enumera en segundo lugar dentro de los derechos naturales reconocidos el derecho al libre ejercicio de su pensamiento y de la libre expresión de su conciencia.

La Constitución de "La monarquía española" del 30 de junio de 1.876, firmada por Alfonso XII, "por la gracia de Dios, Rey constitucional, vuelve al sistema de la confesionalidad del Estado, que ya había regido hasta la anterior Constitución de 1.873. El artículo II señala la catolicidad al decir: "La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. "El articulo 22, siguiendo la línea impuesta por los principios de esta Constitución, menciona a los obispos entre las personas que pueden ser senadores. (45).

La Constitución de "La República Española", de -

fecha 9 de diciembre de 1.931, significa un verdadero cambio en el tema de la libertad religiosa. La firma Julian Basteiro como "Presidente de las Cortes Constituyentes". Esta Constitución rompe con todas las anteriores al no reconocer la catolicidad del Estado. En aquella ocasión Azaña dijo: "España ha dejado de ser católica, ya que el hecho de que haya en España millones de creyentes yo no os lo discuto, pero lo que da al ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo de su cultura". Se prohíbe en la Constitución el sostenimiento del clero y del culto al admitirse una amplísima libertad religiosa. Tampoco se menciona el requisito del juramento del Jefe del Estado y de los diputados que en anteriores Constituciones se señalaba como obligación imprescindible para el ejercicio del cargo que iba a desempeñar. El artículo tercero dice: "El estado español no tiene religión oficial", y el 27 afirma el principio de libertad religiosa al señalar: "Derecho a la libertad de conciencia y de practicar y profesar libremente cualquier religión". Es igualmente interesante mencionar que en el artº. 26 se ordena la disolución de las ordenes religiosas que impusieran además de los tres votos canónicos otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. También se declara que el presupuesto de clero será extinguido en su totalidad en dos años desde la promulgación de la Constitución. Se afirma el principio de la enseñanza laica y el de que la condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política. La presente Ley estuvo en vigor hasta la promulgación de las Leyes Fundamentales publicadas por el nuevo régimen nacido el 18 de julio de 1.936. Como hemos podido comprobar, la historia constitucio



nal española se caracteriza, en lo concerniente al aspecto religioso, por la confesionalidad del Estado y por una progresiva tolerancia de cultos, privados y públicos. Solamente dos Constituciones, ambas republicanas, declaran el laicismo del Estado. La Constitución federal de la Republica - de 1.873 establece la separación de la Iglesia y Estado, La Constitución de la Republica española de 1.931 dice: "El Estado no tiene religión oficial". Por otro lado, y como ya - vimos en su momento, la actual Constitución española de - - 1.978 garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, señalando que ninguna religión tendrá carácter estatal, aunque haciendo breve referencia a la religión católica. (46).

Vamos a hacer un breve repaso de la historia de los diversos Códigos Penales que desde 1.822 hasta nuestros días han venido configurando el aspecto punitivo del Derecho Penal español.

El Código Penal de 1.922 (9 de julio de 1.922), que tuvo una duración de un año y tres meses, fue presentado - por Calatrava. Es el promer Código de los mandados formular por la Constitución de Cadiz de 1.812 que señaló como principio: "La religión de la nación española es y será perpetuamente, la católica, apostólica y romana, única y verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra".

El Código dedica un título, el tercero, Libro I, a los "Delitos conera la religión del Estado". El primero está dedicado a los delitos contra la libertad de la nación y el segundo a los delitos contra el rey, la reina, y el - principe heredero, antes de los contra la libertad indivi-

dual de los españoles. Regula los delitos de religión:

Artículo 229.- "El que de palabra o por escrito enseñare o propagare publicamente doctrinas o máximas conerarias a alguno de los dogmas de la Religión católica, apostólica y romana, y persistiere en ellas después de declaradas tales con arreglo a la Ley por la autoridad eclesiástica competente, sufrirá la pena de uno a tres años de reclusión, quedando sujeto por otro más a la vigilancia especial de las autoridades. Si fuere extranjero no católico el que cometiere éste delito, se le impondrá una reclusión o prisión de cuatro a dieciocho meses, y después será expelido para siempre de España."

Artículo 230.- "El que sin licencia de ordinario eclesiástico respecto o sin observar, en su caso lo dispuesto por la ley, diere a luz en España por medio de la imprenta - algún escrito que verse principalmente o directamente sobre la Sagrada Escritura o sobre los dogmas de la Religión, perderá todos los ejemplares impresos, y pagará una multa de diez a cincuenta duros, o sufrirá, en vez de la multa, un arresto de veinte días a tres meses".

Artículo 231.- "Iguales penas se impondrán al que introduzca, venda o distribuya en España algún libro contrario a la Religión, sabiendo que como tal se halla prohibido por el Gobierno con arreglo a las leyes".

Artículo 232.- "El que prohibido un libro por el Gobierno con aprobación de las Cortes y con arreglo a las leyes, como contrario a la religión, lo conservare en su poder sabiendo la prohibición y no hallándose exceptuado por la ley, perderá el libro si se le aprehendiere, o deberá inutilizar-

lo en el acto a lo menos en la parte prohibida y sufrirá además una multa de uno a cinco duros".

El artículo 233 regula el delito de apostasía: "El español que apostatare de la religión católica, apostólica y romana, perderá todos los empleos, sueldos y honores que tuviere en el Reino, y será considerado como no español, pero si volviere voluntariamente al seno de la Iglesia, recobrará su consideración y honores, podrá obtener otra vez sus empleos y sueldos si el Gobierno quisiera conferírseles".

Los delitos contra la religión se examinan en los artículos 227, 228 y 241 del Código Penal de 1.822.

Artículo 227.- "Todo el que conspirare directamente y de hecho a establecer otra Religión en las Españas, o a que la Nación Española deje de profesar la Religión católica, apostólica y romana, es traidor y sufrirá la pena de muerte".

Artículo 228.- "El que de palabra o por escrito propagare máximas o doctrinas que tengan tendencia directa a destruir o trastornar la Religión del Estado, sufrirá las penas prescritas por los artículos 212, 213 y 214 en los casos respectivos".

Artículo 241.- "El eclesiástico secular o regular que del mismo modo predicare o enseñare doctrinas repugnantes a las máximas evangélicas, prácticas supersticiosas, supuestos milagros o profecías y otras cosas semejantes con perjuicio de la religión y del pueblo será denunciado a

su obispo por las autoridades lecales para que ponga el conveniente remedio. Si no lo pusiere inmediatamente, las autoridades darán cuenta al Gobierno, y podrán entretanto impedir al eclesiástico que continúe ejerciendo su predicación o enseñanza. Sin embargo, si por alguno de los medios expresados en este artículo el eclesiástico causare algún escán-dalo grave o turbación del orden público, o algún perjuicio a las buenas costumbres y tranquilidad de alguna o algunas de las personas, será procesado sin necesidad de denunciarlo a su obispo y sufrirá iguales penas que las que quedan - prescritas en el artículo precedente".

Delitos contra el culto: están regulados en los - artículos 235 al 238 inclusive.

Artículo 235.- "El que con palabras, acciones o gestos ultrajare o escarneciére manifiestamente a sabiendas, algu no de los objetos del culto religioso en los lugares desti-nados al ejercicio de éste, o en cualquier acto en que se - ejerza, sufrirá una reclusión o prisión de quince días a - cuatro meses; doblándose ésta pena si el reo fuere eclesiás-tico secular o regular, o funcionario público en el ejerci-cio de sus funciones. Compréndese en las disposiciones de - éste artículo el ultraje o escarnio manifiesto de dichos ob-jetos hecho por medio de pinturas, estampas, relieves u - otras manufacturadas de esta clase exponiéndolas en públi-co, vendiéndolas o distribuyéndolas a sabiendas de cualquier modo".

Artículo 236.- "Igual pena sufrirá el que a sabiendas - derribare, rompiere, mutilare o destruyere alguno de los -

objetos destinados al culto público".

Artículo 237.- "El que hiera o maltrate de obra, o ultraje o injurie a un ministro de la Religión cuando se halle - ejerciendo sus funciones, será castigado con una multa de - cinco a cuarenta duros, sin perjuicio de la pena que merezca por el delito contra la persona con arreglo a la segunda parte. Si el ministro de la Religión correspondiere a la clase de los funcionarios públicos, y como tal fuere ofendido, se observarán las reglas prescritas en el artículo 6º del Título III de esta primera parte".

Artículo 238.- "Los que con alguna reunión tumultuaria, alboroto, desacato u otro desorden impidieren retardaren, o interrumpieren, o turbaren el ejercicio del culto público o de alguna función religiosa en el templo, podrán ser arrestados y expelidos en el acto y conducidos a la presencia del - Juez, y sufrirán una multa de cinco a setenta duros y un - arresto de ocho días a cuatro meses, sin perjuicio de mayor pena si la merecieren por el desorden que causen".

El delito de blasfemia lo regula el Código Penal de 1.822 en el artículo 234: "Los que públicamente blasfemaren o prorrumpieren en imprecaciones contra Dios, la Virgen o los Santos, sufrirán una reclusión o prisión de quince días a - tres meses, y si lo hicieran privadamente serán castigados con un arresto de ocho a cuarenta días. Para la calificación de si la blasfemia es pública o privada, se atenderá a lo - que sobre ella se prescribe respecto de las calumnias e injurias en el capítulo I, Título 2º, 2ª parte. Si el reo de la blasfemia fuese un eclesiástico secular o regular, o algún - funcionario público cuando ejerza sus funciones, será doble mayor la pena en los respectivos casos".

El artículo 239 castiga los hurtos sacrílegos: -  
"Los que en el templo o sus dependencias o en algún acto religioso robaren o hurtaren vaso, vestidura u otro efecto sagrado, o algunas de las cosas destinadas al culto público o al adorno del mismo templo serán castigados con el máximo de la pena correspondiente al hurto o robo que cometiera, la se podrá aumenear hasta una tercera parte de dicho máximo, según el grado del delito".

Las faltas de disciplina en la calificación de - doctrina se castigan en el artículo 240: "El eclesiástico - secular que en el ejercicio de su ministerio calificada de antirreligioso, herético o sospechosa alguna persona o doctrina no declarada tal todavía por la autoridad competente con arreglo a las leyes, sufrirá la pena de represión y un arresto de uno a seis meses, privándosele entretanto de la mitad de sus temporalidades para que se aplique su importe como multa, sin perjuicio del castigo que merezca por la injuria, si la demandase el injuriado".

En 1.823 se deroga el anteor Código Penal volviendo a entrar nuevamenee en vigor la Novísima Recopilación. El Rey Fernando VII nombra en 1.829 una comisión para la redacción de un nuevo Código, pero la muerte del Rey impedirá que se llegue a discutir el proyecto. Pedro Sainz Andino realiza un nuevo proyecto y la comisión que preside Bravo Murillo - será la que hará realidad la conversión del proyecto en Ley. La estructura del Código se compone de tres libros:

- Libro Primero: Parte General;
- Libro Segundo: Delitos y sus penas;
- Libro Tercero: Faltas y sus penas.

En total conlta de 494 artículos. Este Código pre-

senta un gran avance en el tema de la tipificación de los - delitos religiosos.

Es necesario recordar que la Constitución de 1.837, después de proclamar los derechos individuales, en el artículo II hace la siguiente declaración: "La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica - que profesan los españoles".

La reforma de 1.845 deja la declaración sobre esta materia en el mismo lugar que la Constitución reformada, pero es más rotunda la afirmación de catolicidad, que fué - uno de los motivos de ella.

También en el artículo II sienta la siguiente declaración: "La religión de la nación española es la católica, apostólica y romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros".

Este es el principio que ha de desarrollar el Código Penal de 1.948. Conserva los delitos de religión, aunque en menor número y señalándoles penas más leves, como la apostasía, que exige además que sea pública, es decir, que escandalice a los antiguos correligionarios del apóstata, - así como la pública celebración de un culto que no sea el de la religión católica.

Artículo 136.- "El español que apostatare públicamente de la Religión católica, apostólica y romana, será castigado con la pena de extrañamiento perpetuo. Esta pena cesará desde el momento ~~que~~ vuelva al seno de la Iglesia."

Artículo 128.- "La tentativa de abolir o variar en España la religión católica, apostólica y romana, será castigado con las penas de reclusión temporal y extrañamiento perpetuo, si el culpable se hallare constituido en autoridad pública y cometiere el delito abusando de ella. No concurriendo estas circunstancias la pena será de prisión menor y en caso de reincidencia la de extrañamiento perpetuo".

Dentro de los mismo delitos contra la religión el artículo 129 señala: "El que celebrare actos públicos de un culto que no sea el de la Religión católica, apostólica y romana, será castigado con la pena de extrañamiento temporal".

El artículo 130, dice:

"Serán castigados con la pena de prisión correccional:

1º.- El que inculcare públicamente la inobservación de los preceptos religiosos.

2º.- El que con igual publicidad se mofare de algunos de los Misterios o Sacramentos de la Iglesia, o de otra manera, excitare a su desprecio.

3º.-El que habiendo propagado doctrinas o máximas contrarias al dogma católico persistiese en publicarlas después de haber sido condenadas por la autoridad eclesiástica. El reincidente en esos delitos será castigado con el extrañamiento temporá".

El artº. 133 dice que: "El que con palabras o actos escarneciére públicamente algunos ritos o prácticas de la Religión católica, si lo hiciere en el templo o en cualquier otro del culto".



De los delitos contra la religión hace desaparecer el del eclesiástico que propagare doctrinas repugnantes a la religión católica o realizare prácticas supersticiosas o supuestos milagros, pero trae a este título, como delitos contra la religión, la exhumación, mutilación o profanación de cadáveres.

La blasfemia la castiga entre las faltas en el número 1º del artículo 481 con la pena de multa y arresto de uno a diez días y represión, pero sólo cuando es pública.

Este Código penal, previa la revisión y reforma que imaginó periódica, pero que no tuvo más que una, la del año 1.850, tendente a la agravación de las penas y al reforzamiento del principio de autoridad impuesto por los trastornos políticos que se producen en toda Europa el año de su publicación, pero que no cambiaron sustancialmente su estructura política. Duró reformado durante veinte años - más, hasta que le sustituyó el del año 1.870. El Código de 1.870 es fruto de la Constitución liberal de 1.869. El proyecto era de Montero Rios y en el mes de mayo de 1.870 fué aprobado con carácter provisional, aunque luego estuvo en vigor durante más de medio siglo. Está compuesto de tres libros:

Libro Primero: Disposiciones generales sobre los delitos, las faltas, las personas responsables y las penas;

Libro Segundo: Los delitos y las penas;

Libro Tercero: Las faltas y las penas.

Consta de 626 artículos. Este Código se redactó en una época de un gran liberalismo y fruto de él es la -

tolerancia de cultos. El artículo 21 de la Constitución decía: "La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que no sea la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior".

Con esta base constitucional, el Código Penal de 1.870, nacido para respaldar esta Constitución, al sacar las consecuencias de el precepto transitorio se separa totalmente de sus antecesores. En cuanto a su colocación lo hace entre los delitos contra la Constitución, título nuevo para cuya redacción tan apresuradamente se formula el Código y en él hace la división de dos capítulos, uno con los delitos de lesa majestas, contra las Cortes, Consejo de Ministros y la forma de gobierno, y otro con los delitos contra los derechos individuales garantizados por la Constitución, éste con la división de tres sectores, una para los cometidos de los partidos, otra para los realizados por funcionarios públicos y una tercera con los delitos contra la libre ejecución de los cultos.

La consecuencia ~~que ha de~~ deducirse de esta sistemática es que los delitos en materia de religión, lo son contra los derechos reconocidos por la Constitución, que estos derechos son considerados de categoría distinta, aunque no superior, a los demás derechos individuales, que unos y otros son la justificación de la Constitución que es la base del Estado, son delitos contra la seguridad interior del Estado,

pues los del capítulo I de este Título II, y los del Título siguiente, los contra el orden público han tenido este carácter.

Este Código en la formulación de los delitos vá - más allá de la propia Constitución que respaldaba, pues si en aquella la libertad de cultos que se dá como excepción para los extranjeros y con las limitaciones de las reglas universales de la moral y del derecho, en el Código dichas limitaciones desaparecen y los delitos se refieren al culto sin especificar cual, en completa equiparación de todos, cuando la base constitucional lo más que autorizaba era a referirlos al culto católico o a cualquier otro permitido por no estar el que lo estuviese en contradicción de las reglas de la moral y del derecho a que se refería el texto constitucional. (47).

Aunque tiene la natural preocupación de borrar los delitos de religión y la menos natural de los contra la religión, dejando sólo los contra el culto, consigue la eliminación de los primeros, pero en cuanto a los segundos se escapan a éste propósito algunos hechos que no puede dejar de castigar, como el escarnio de los dogmas (artículo 240 nº 3: "El que escarneciére públicamente alguno de los dogmas o ceremonias de cualquiera religión que tenga prosélitos en España"), el de profanación de imágenes y vasos sagrados (Artº 240 nº 4: "El que con el mismo fin profanare públicamente - imágenes, vasos sagrados o cualesquiera otros objetos destinados al culto"), que sólo puede referirse a la religión católica y la ofensa al sentimiento religioso (artº 241: "El que en lugar religioso ejecutare con escándalo actos sin estar comprendidos en ninguno de los artículos anteriores, - ofendieren el sentimiento religioso de los concurrentes").

En los delitos contra el culto el Código da una formulación distinta a la de los anteriores Códigos y crea delitos desconocidos en ellos:

Artículo 236: "El que por medio de amenazas u otros apre  
mios ilegítimos forzare a un ciudadano a ejercer actos reli  
giosos o a asistir a funciones de un culto que no sea el su  
yo".

Artículo 237: "El que por los medios mencionados en el ar  
tículo anterior forzare a un ciudadano a practicar los actos  
religiosos o a asistir a las funciones del culto que éste -  
profese. 2º. El que por los mismos medios impidiere a un ciu  
dadano observar las fiestas religiosas de su culto. 3º. El  
que por los mismo medios le impidiere abrir su tienda, alma  
cén u otro establecimiento o le forzare a abstenerse de tra  
bajos de cualquier especie en determinadas fiestas religio-  
sas".

Artículo 239: "Los que simultaneamente impidieren, pertur  
baren o hicieren retardar la celebración de los ritos de cual  
quier culto en el edificio destinado habitualmente para ello  
o en cualquier otro sitio donde se celebraren".

Artículo 240: "El que con hechos, palabras, gestos o ame  
nazas ultrajare al ministro de cualquier clto cuando se ha-  
llare desempeñando sus funciones. 2º. El que por los mismos  
medios impidiere, perturbare o interrumpiere la celebración  
de las funciones religiosas en el lugar destinado habitual-  
mente a ellas, o en cualquier otro en que se celebrasen".

Este Código quita todo aspecto de delito en mate-  
ria de religión a las inhumaciones ilegales y a la violación

de sepulturas, formando junto con los delitos contra la salud pública un título aparte, que es el V del Libro II.

Entre las faltas contra el orden público castigaba con arreto de uno a diez dias y multa en el artículo 586 número 1º "Los que perturbaren los actos de un culto que - ofendiere los sentimientos religiosos de los concurrenees con actos no constitutivos de delito", es decir, con menos pena que los que perturbaren un espectáculo público, para los que el arresto era hasta quince dias según el número primero del artículo 588.

La blasfemia no la menciona, estableciendo únicamente en el número segundo del artículo 586 la pena de arresto hasta diez dias para "los que con actos de exhibición de estampas o grabados o con otra clase de actos ofendieren la moral y las buenas costumbres sin cometer delitos".

Los proyectos de Códigos penales de Salmerón en - 1.873, de Estrada y Danvila en 1.877 y de la Comisión en - - 1.879, así como los de Alonso Martinez en 1.882 y en 1.886, y Silvela en 1.884, no llegaron a convertirse en leyes. Es el proyecto de la Comisión de Codificación de 1.926 el que se convertiría después en el Código Penal de 1.928. Este Código consta de 856 artículos con una estructuración semejante a la de los Códigos anteriores. En efecto se compone de:

Parte general:

Libro 1º.- Delitos y sus penas;

Libro 2º.- Faltas y sus penas

En lo referente al tema que estamos estudiando tiene dos rúbricas que nos interesan: "Delitos contra la reli-

gión del Estado" y "Delitos contra la tolerancia religiosa", dentro de los "delitos contra los poderes públicos y contra la Constitución", en el Título II del Libro II.

La blasfemia estaba castigada entre las faltas con arresto de tres a treinta días y multa de cinco a 250 pesetas, englobándola con otros actos que ofendan a la decencia pública, en el que es una falta contra la moralidad pública entre las que está incluida formando el Título IV del Libro III: "El que con su desnudez o por medio de discursos, palabras o actos, blasfemias, cantares obscenos o de cualquier otro modo ofendiere la decencia pública".

Este Código examina los delitos de religión como el del artículo 270 ("los que ejecutaren cualquier clase de actos encaminados a abolir o variar por la fuerza, como Religión del Estado, la católica, apostólica y romana"), los delitos de sacrilegio como los del artículo 272 ("el que hollar, arrojar al suelo o de otra forma profanar las Sagradas Formas de la Eucaristía") o los del artículo 273 ("los que con ofensa de la religión del Estado, hollaren, destruyeren, rompieren o profanaren los objetos sagrados o destinados al culto, ya lo ejecutaren en las Iglesias ya fuera de ellas"), el delito de escarnio en el artículo 274 ("el que con ánimo deliberado hiciere escarnio de la religión católica de palabra o por escrito, ultrajando públicamente sus dogmas, ritos o ceremonias").

Los delitos contra el culto también encuentran sitio en el Código penal de 1.928 como el delito del artículo 271 ("el que practicare fuera del recinto destinado a los cultos que no sean el de la Religión católica, ceremonias o manifestaciones públicas propias de los mismos"), así como los

delitos contra la tolerancia religiosa (artº 278: "el que por medio de amenazas, violencias y otros apremios ilegítimos forzare a cualquier persona a ejercer actos religiosos o a asistir a funciones de un culto que no era el suyo" y el artículo 279: "los que empleando los medios enumerados - en el artículo anterior impidan o hurten dentro de los recintos o cementerios respectivos, el ejercicio y las ceremonias de un culto distinto al católico"). La violación de sepulturas se castiga en los artículos 280 y 281.

Existe igualmente una serie de delitos cuya naturaleza no es fácilmente determinable como los del artículo 275 ("el que practicare, fuera del recinto destinado a los cultos que no sean el de la Religión católica, ceremonias o manifestaciones públicas propias de ellos") y del artículo 276 ("el que maltratare de obra a un ministro de la Religión católica, cuando se hallare cumpliendo los oficios de su ministerio").

En la corta vigencia de éste Código, que promulgado el 13 de septiembre de 1.928 y anulado el 15 de abril de 1.931, y hasta el de 1.932, tan radicalmente opuesto a él, habían cambiado las circunstancias políticas en España. Derrocada en enero de 1.930 la dictadura que le formuló, la sobrevivió durante los gobiernos aún monárquicos que la sucedieron. Pero al día siguiente de la República del 14 de abril de 1.931 no se creyó bastante su derogación, sino que fué anulado, con lo que automáticamente volvió a regir el Código de 1.870 al que había sustituido. (48).

La Ley de 8 de septiembre de 1.932 reformaba el Código penal de 1.870 y a la vez creaba el nuevo Código de 1.932.

Pero el cambio de régimen obligó primero a una adaptación a el del antiguo Código formado por una monarquía liberal, cosa que se hizo con una circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y a la formulación después de un nuevo Código que se adaptase a la Constitución entonces vigente.

La Constitución de 1.931 en el artículo 27 señalaba: "La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública". Las manifestaciones públicas del culto habían de ser en cada caso autorizadas por el Gobierno y la condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, a la vez que no podían ser fundamento de privilegio pdítico ni jurídico las creencias religiosas.

La Constitución afirmaba igualmente el principio de que todas las congregaciones religiosas serían consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial, y fruto de dicho principio es la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas del dos de junio de 1.933, posterior, por tanto, al Código Penal y en el que no pudo influir.

Toda esta clase de delitos religiosos están comprendidos en el Código bajo la rúbrica de "delitos relativos a - la libertad de conciencia y libre ejercicio de los cultos", en la Sección 3ª del Capítulo II "De los delitos cometidos - con ocasión de los derechos individuales garantizados por la Constitución" del Título II del Libro II, es decir, siguen siendo delitos contra la Constitución.



En su articulado recoge o transcribe preceptos del Código penal de 1.870 como los artículos 231, 232, 233, 234, 235 y 236, que ya vimos en su momento, y que son ahora de los artículos 236 y 241 del Código que estamos estudiando - sin más variaciones que establecer cuatro nuevos delitos referidos a los funcionarios públicos para el que reuniendo - tal caracter "de cualquier modo coartare la libertad de conciencia de un ciudadano o le obligase a practicar actos de alguna religión" (párrafo primero del artículo 228) o "impidiese a un ciudadano la libre práctica de cualquier religión" (artículo 228 párrafo segundo) o "impidiere a una confesión religiosa el libre ejercicio de su culto" (artículo 229) u "obligare a un ciudadano a declarar oficialmente sus creencias religiosas" (artículo 230).

Las razones para la reforma del Código de 1.870 fueron de tres tipos:

1º.- Para armonizar con la Constitución de 1.931, que - como hemos visto rompe con el tradicional caracter confesional de las Constituciones españolas;

2º.- Para humanizar el texto punitivo, como se demuestra en la disminución de las circunstancias agravantes y en la supresión de la pena de muerte;

3º.- Para corregir errores de caracter técnico.

El Alzamiento Nacional de julio de 1.936 derogó el Código penal de 1.932. En el año 1.938 se restableció la pena de muerte en el catálogo de penas. La Ley de reforma de 19 de julio de 1.944 autorizaba al Gobierno para la promulgación de un nuevo Código, tras la oportuna aprobación por las Cortes. El nuevo Código lleva fecha de 23 de diciembre de 1.944. En él se vuelve a la clásica estructura de -

tres libros:

Parte General:

Libro Primero: Delitos y sus penas;

Libro Segundo: Faltas y sus penas.

Este Código es el antecedente inmediato del texto vigente. Posteriormente se publicó un texto revisado de 1.963, después de la Ley de Bases del año 1.961, que tiene como norma general el respeto al texto de 1.944. La Ley - de 8 de abril de 1.967 inserta en el texto punitivo vigente la Ley de 1.962 sobre "Uso y circulación de vehículos de motor". Posteriormente la Ley de 15 de noviembre de 1.971 junio a las reformas del año 1.952 y la del 24 de abril de 1.958, así como las constantes modificaciones de las cuantías de los delitos ~~contra~~ la propiedad y de las multas, han venido a configurar un texto lleno de modificaciones y en algunos casos de contradicciones. Sería la Ley del 15 de noviembre de 1.971 la que introduciría en el texto vigente la Sección 3ª del Capítulo II del Título II del Libro II que bajo la denominación de "Delitos contra la libertad religiosa, la religión del Estado y las demás confesiones" establecería un catálogo de delitos contra la libertad religiosa, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de libertad Religiosa del año 1.968. Dentro del apartado de "delitos y faltas ~~contra~~ la libertad religiosa" de esta tesis haremos un estudio de dicha Sección 3ª.

B) Derecho vigente .

## II

-DERECHO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL ACTUAL -

Y

-DERECHO VIGENTE-

Dentro del anterior y actual ordenamiento Jurídico español existen varios cuerpos legales que tratan el tema de esta tesis. Los principales son:

Leyes fundamentales, Código Penal y Ley de libertad religiosa 28-6-67.

El Código Penal regula el delito de blasfemia en el artículo 239, dentro del Capítulo VII ("De las blasfemias") y del artículo II ("Delitos contra la seguridad interior del Estado"). El artículo 239 castiga con arresto mayor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas al que blasfemare. El que blasfemare por escrito y con publicidad, o con palabras o actos que produzcan grave escándalo público. La acción consiste en blasfemar. Blasfemar se define como dirigir palabras injuriosas contra Dios, la Virgen o los Santos. Pero no basta con el mero hecho de pronunciar o escribir palabras blasfemas o ejecutar actos de tal entidad, sino que es preciso que tales escritos sean públicos y que las palabras o actos produzcan un escándalo público de carácter grave para que sean consideradas delictivas.

Cuando se profieren blasfemias por medio de palabras que no produzcan grave escándalo público los hechos quedan integrados dentro de la falta del nº 1 del artículo 567, que queda comprendido dentro del capítulo II "De las faltas contra el Orden Público", del Título I "De las faltas de imprenta y contra el Orden Público".

Así pues, existe dentro del Código Penal español Vigente dos formas de blasfemar:

- 1) Por escrito y con publicidad; y
- 2) Con palabras o actos que produzcan grave escándalo público.

El Código Penal regula en la sección 3ª "Delitos - contra la libertad religiosa, la religión del Estado y las demás confesiones", del capítulo II "De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes", del Título II "delitos contra - la Seguridad interior del Estado".

Esta sección 3ª ha sido modificada por la Ley de 15 de noviembre de 1.971, que reforma diversos aspectos del Código Penal, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1.967.

Antes de la reforma de 1.971 el Código Penal mencionaba en dicha sección únicamente los "Delitos contra la religión católica".

Hay que señalar que estos delitos han pasado por diversas fases, debido a las concepciones políticas y jurídicas de cada momento histórico. En una primera fase hasta el Código Penal de 1.882 se trata de delitos de religión, como la herejía y la apostasía. Posteriormente dejan paso a los delitos contra la religión, que es la orientación que tomó el Código de 1.928 y el actual.

El Código castigaba la abolición violenta de la Religión Católica como oficial del Estado (artículo 205), -

los atentados violentos contra las ceremonias propias de la Religión Católica (artículo 206), el maltratar de obra a un ministro de la Religión Católica (artículo 210: sacrilegio real), el ofender el sentimiento religioso de los concurrentes a un lugar sagrado (artículo 211: sacrilegio local), y el escarnio de la Religión Católica (artículo 209).

En la actualidad la nueva redacción de los artículos 205 a 212 toman, por lo general, el mismo catálogo de delitos contra la religión que regulaba el Código Penal anterior, pero con la importante diferencia de que junto a la Religión del Estado, la católica, apostólica y romana, protege las demás confesiones legalmente reconocidas o inscritas en el registro establecido al efecto, según requiere el artículo 210. (49).

Como ya hemos recordado anteriormente, los delitos de religión ~~se~~ transformaron en los delitos contra la religión. Lo que se sancionaba no era un ataque contra la divinidad que afectaba el fuero de la conciencia, sino contra el derecho de profesar una religión que constituye la creencia de gran parte o la mayoría de los ciudadanos o incluso forma parte integrante de la naturaleza y condición de un Estado. Estos delitos contra la religión han seguido las alteraciones consiguientes a los cambios políticos imperantes en cada momento. En los países que existe una religión del Estado los preceptos penales se han dirigido únicamente a proteger dicha religión. Tal era el caso de España hasta la aprobación de la vigente Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. En cambio, en los países en que existe libertad de cultos las leyes

penales han protegido todas las creencias religiosas. En nuestra patria se penaron los delitos de religion hasta el Código de 1.822 y posteriormente los delitos contra la religión, con más o menos rigurosidad según los tiempos y circunstancias.- Los Códigos de 1.870 y 1.932 por un lado y el de 1.928 por otro represenean dos concepciones totalmente distintas. En el de - 1.928 la sección tercera del capítulo II del Título relativo a los "delitos contra la seguridad interior del Estado", que se hallaba rubricada anteriormente con el título de "Delitos relativos a la libertad de conciencia y al libre ejercicio de los cultos", en los Códigos de 1.870 y 1.932 se denomina "Delitos contra la Religión Católica". El Código Penal de 1.928 lo modifica nuevamente hablando de "delitos contra la Religión del Estado". En este Código se inspira la nueva redacción del Código de 1.944, teniendo en cuenta el Concordato de 1.851 y el Convenio de junio de 1.941.

Actualmente, tras la Ley re reforma del Código Penal de 15 de noviembre de 1.971, y en espera de la discusión y aprobación del nuevo texto del Código Penal, los delitos - contra la religión los trata el vigente Código en el Libro II, "Delitos y sus penas", Título II, "Delitos contra la seguridad interior del Estado", Capítulo II, "De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes", en la Sección Tercera "Delitos contra la libertad religiosa, la religión del Estado y las demás confesiones", que abarca de los artículos 205 al 212, ambos inclusives.

De los delitos incluidos actualmente en el Código - Penal podemos hacer la siguiente clasificación:

1º) Obligar a otro a asistir, practicar o impedir celebrar actos religiosos por medios violentos.

2º) Ganar adeptos para una creencia o desviarlos de ella por medios violentos.

3º La abolición violenta de la Religión Católica como oficial del Estado.

4º) Los atentados violentos contra las ceremonias propias de la Religión Católica.

5º) El delito de sacrilegio personal.

6º) El delito de sacrilegio real.

7º) El delito de sacrilegio local.

8º Ofensas a la Religión Católica o confesiones reconocidas.

El artículo 205 sanciona con la pena de prisión - menos y multa de 20.000 a 200.000 pesetas, tras la modificación de las cuantías de las multas por la Ley de 8 de mayo de 1.978, varias conductas. En primer lugar el obligar a otro a asistir o practicar un acto religioso o le constriñeren al cumplimiento de un deber del mismo carácter o le impidieren ejercitarlo coartando la libertad reconocida por las Leyes, por alguno de los siguientes medios: amenaza, violencia o cualquier apremio ilegítimo. En segundo lugar este mismo artículo sanciona al que por los mismos medios intenta ganar adeptos para una determinada creencia o confesión o para desviarlos de ella. El artículo termina diciendo - que si el culpable de dichos hechos fuera una autoridad o funcionario público la pena sería, además de la ya citada, la de inhabilitación especial.

El segundo grupo de delitos contra la religión lo



sanciona el nº 2º de ese mismo artículo 205 que castiga expresamente a "los que emplearen amenazas, violencia, dádiva o engaño, con el fin de ganar adeptos para determinada creencia o confesión o para desviarlos de ella", con la misma pena de prisión menor y multa.

La violenta abolición de la Religión Católica como oficial del Estado se sanciona en el artículo 206: "Los que ejecutaren cualquier clase de actos encaminados a abolir o menoscabar por la fuerza, como religión del Estado, la Católica, Apostólica, Romana, serán castigados con la pena de prisión menor. Si el culpable estuviere constituido en autoridad y con abuso de ella cometiere el hecho, se impondrá la pena en el grado máximo". Este precepto está tomado en su redacción directamente del Código de 1.928, aunque ya figuraba en nuestra legislación penal desde el Código de 1.850, aunque los Códigos de 1.822 y 1.848 ya se referían también a esta clase de hechos. La doctrina lo considera como una cierta modalidad de la rebelión ya que se trata de variar la religión estatal por otra distinta, y que puede llevar consigo un alzamiento público y en abierta hostilidad contra el Gobierno. De todas formas en la actualidad es un precepto a modificar - pues como ya hemos visto anteriormente la vigente Constitución de 1.978 acoge el sistema de aconfesionalidad al decir el artículo 16.3, de la Constitución: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

En este sentido recordemos que el Proyecto de Ley

Orgánica del Código Penal, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 17 de enero de 1.980 al referirse en la Sección Tercera del Capítulo II del Título XIII del Libro II a "los delitos contra la libertad y sentimientos religiosos", artículos 629 a 631, no menciona en ningún momento este supuesto.

El cuarto grupo de los delitos contra la religión se refiere a los atentados violentos contra las ceremonias propias de la Religión Católica ó de las demás confesiones legalmente reconocidas.

El artículo 207 sanciona al que "con violencia, - amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de la religión católica, o los autorizados de las demás confesiones legalmente reconocidas", imponiendo distinta pena según el hecho se cometiera en lugar destinado al culto o si se realizare en cualquier otro lugar, siendo menor la pena en este segundo supuesto. Este artículo castiga tres posibles conductas:

1ª) el impedir violentamente las funciones religiosas.

2ª) el interrumpir de la misma forma violenta las ceremonias religiosas, es decir, el provocar la suspensión de dichas ceremonias o funciones.

3ª) el perturbar las funciones religiosas.

En este último sentido debemos de recordar que la perturbación de una ceremonia religiosa integra la falta descrita en el nº 2º del artículo 567 dentro de las faltas contra el orden público. Hasta la Ley de Libertad Religiosa del

28 de junio de 1.967 estas y otras conductas punibles dentro de los delitos contra la religión del Estado sólo se referían a la Religión del Estado, la Católica, Apostólica Romana, - sin expresa mención a ninguna otra religión. A partir de dicha Ley, en la que se autorizan otras confesiones religiosas legalmente reconocidas, el Código Penal añade junto a la Religión Católica, como religión oficial así establecido por - las Leyes Fundamentales, las demás confesiones religiosas - autorizadas legalmente. (50).

El proyecto de Ley Orgánica del Código Penal señala en el artículo 629 nº 1º: "Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidieren a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos del culto que profesen o asistir a los - mismos", castigandolos con pena de prisión de seis meses a tres años.

Los tres grupos siguientes de delitos se refieren a los delitos de sacrilegio distinguiendo entre el delito de sacrilegio personal, delito de sacrilegio real y delito de - sacrilegio local.

El primer delito de dicho grupo es el delito de - sacrilegio personal. El artículo 210 dice: "El que maltratare de obra a un Ministro de la religión católica o de otro culto que esté inscrito en el registro establecido al efecto cuando se hallare cumpliendo los oficios de su ministerio o con ocasión del mismo, se le impondrá la pena de prisión menor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas. El que ofendiere en iguales circunstancias con palabras o ademanes, será castigado con la pena de arresto mayor". Son necesarios, pues, tres requisitos para la existencia de este delito de sacrilegio -

personal:

1º) Que el sujeto pasivo sea un Ministro de la religión católica o de otro culto legalmente reconocido.

2º) Que dicho ministro esté en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de los mismos.

3º) Un maltrato de obra o una ofensa con palabras o ademanes.

El Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal recoge este delito en el n.º 2º del artículo 630 al sancionar a "Los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa: 2º ultrajaren públicamente, de hecho o de palabra a sus Ministros. Si el ultraje se cometiere estando aquellos realizando actos de culto u otros propios de su ministerios, se impondrá la pena en su mitad superior!"

El segundo delito de sacrilegio es el real. El artículo 208 lo resume de la siguiente forma: "El que ejecuta re actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión menor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas. Se impondrá esta pena en su grado máximo si los hechos previstos en el párrafo anterior fuesen realizados en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias del mismo, oficialmente autorizadas, siempre que este requisito fuese necesario. Cuando el hecho revistiere suma gravedad o relevante trascendencia, se aplicará la pena superior en grado".

Antes de la reforma del Código inspirada en la Ley

de Libertad Religiosa de 1.967 el artículo 207 castigaba al que "hollare, arrojare al suelo o de otra manera profanare las Sagradas Formas de la Eucaristía". Por su parte, el artículo 208 sancionaba al que "en ofensa de la Religión Católica hollaren, destruyeren, rompieren o profanaren los objetos sagrados o destinados al culto, ya lo ejecuten en las Iglesias, ya fuera de ellas". En ambos delitos la doctrina concinca en que era necesario un ánimo de ofender a la Religión.

En el artículo 630 del Proyecto de Ley Orgánica - del Código Penal se incorpora esta figura: 2 "3º - Destruyen o profanaren las cosas objetos de veneración por los miembros de una confesión religiosa".

El sacrilegio local ocupa el tercer lugar entre estos delitos. El Código Penal vigente lo tipifica en el artículo 211: "El que en lugar religioso ejecutare actos que, sin estar comprendidos en ninguno de los artículos anteriores, ofendieren el sentimiento religioso de los concurrentes, incurrirá en la pena de arresto mayor". Este artículo tiene alcance de subsidiariedad respecto a los anteriores. La doctrina exige la concurrencia de los tres siguientes requisitos:

- 1º) La existencia de concurrentes al acto religioso.
- 2º) Que esos concurrentes se puedan resentir en sus sentimientos religiosos.
- 3º) Animo o intención de ofender o herir dichos sentimientos.

El Proyecto de Ley Organica del Código Penal lo re

coge igualmente este delito en el artículo 630 nº 3º: "Los que destruyeren o profanaren..... los lugares donde practique en culto".

El último de los delitos contra la religión que encontramos en el Código Penal es el de ofender a la Religión - Católica o a las demás confesiones reconocidas. El artículo - 209, dice: "El que de palabra o por escrito hiciere escarnio de la religión católica o de confesión reconocida legalmente, o ultrajare públicamente sus dogmas, ritos o ceremonias, será castigado con la pena de prisión menor si realizare el hecho en actos de culto, o en lugares destinados a celebrarlos, y con arresto mayor en los demás casos". Los penalistas requieren la existencia de los siguientes requisitos para que tenga lugar el delito:

1º) Que se haga escarnio de la Religión Católica o de confesión reconocida legalmente con ánimo deliberado de ultrajar.

2º) Que ese escarnio se haga de los dogmas, ritos o ceremonias.

3º) Que el escarnio tenga lugar públicamente.

El Proyecto de Ley del Código Penal recoge este delito en el artículo 630 de una manera bastante parecida al Código actual: "Incurrirán en la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa:

1º) Hicieren públicamente, de palabra o por escrito, escar

nio de sus dogmas, ritos o ceremonias o vejaren tambien pú**u**blicamente a quienes los profesaren".

Finalmente hay que señalar que, según el artículo 212, los que cometieren cualquiera de los delitos anteriores incurrirán, además de las penas ya señaladas, en la de inhabilitación especial para el ejercicio de la enseñanza pú**u**blica o privada. (51).

### Libertad Religiosa

La ~~Ley~~ de libertad en materia religiosa, de 28 de junio de 1.967, toma como base el Concilio Vaticano II - - (1.962-1.965) que aprobó el 7 de diciembre de 1.965 una Declaración sobre libertad religiosa, en cuyo apartado dos se dice que el derecho a esta libertad, fundado en la dignidad misma de la persona humana, ha de ser reconocido en el ordenamiento Jurídico de la sociedad de forma que llegue a conver**u**tirse en un derecho civil.

El artículo 1º, nº 1 afirma que "el Estado español reconoce el derecho a la libertad religiosa fundado en la - dignidad de la persona humana y asegura a esta, con la protección necesaria, la inmunidad de toda coacción en el ejer**u**cio legítimo de tal derecho.

El nº 3 del mismo artículo anuncia que el ejercicio del derecho a la libertad religiosa ha de ser compatible

en todo caso con la confesionalidad del Estado español proclamada en sus Leyes Fundamentales.

El capítulo II, que se refiere a los derechos individuales comienza con un principio general, las creen cias religiosas no constituirán motivo de desigualdad de los españoles ante la Ley, para continuar enunciando una serie de derechos que no se verán modificados por el hecho de tener distintas creencias religiosas. Entre estos destacan los derechos al ejercicio de cualquier trabajo, el derecho de los padres a la educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, el derecho a la sepultura conforme a sus convicciones religiosas, los derechos de reunión y aso ciación con fines religiosos.

En especial es de señalar el derecho al matrimo nio civil cuando ninguno de los contrayentes profese la - religión católica, que establece el n.º 1 del artículo 6.º en relación con lo dispuesto por el artículo 42 del Código Civil.

El capítulo III señala los derechos comunitarios de las asociaciones confesionales religiosas no católicas a su reconocimiento, culto público en lugares debidamente autorizados, ministros del culto y enseñanza en Centros es peciales de sus miembros que serán reconocidos por el Ministerio de Justicia a vista de los Estatutos de cada una de ellas;

La Ley establece, una comisión de libertad Religiosa, en la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, como órgano encargado de todas las cuestiones relacionadas con el Derecho civil a la libertad religiosa, y un Regis-



tro de asociaciones confesionales no católicas y de ministros de los cultos no católicos en España. A los gobernadores civiles corresponde la vigilancia del cumplimiento de la Ley, y contra sus acuerdos se podrá recurrir en alzada ante el Ministerio de Justicia. En los demás casos la protección de los derechos quedan salvaguardados con el recurso de súplica ante el Consejo de Ministros cuyas resoluciones agotarán la vía administrativa. Igualmente la Ley señala el recurso contencioso-administrativo contra las disposiciones y actos de la administración pública dictadas en la materia objeto de la Ley, conforme a lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

La Ley de libertad religiosa supone un avance de extraordinaria importancia al reconocer la libertad de cultos, siempre que no sea incompatible con la confesionalidad del Estado español que está proclamado expresamente en la Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1.958 que en el principio II dice:

La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Unica Verdadera y fé inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. Esta Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional ha sido derogada de manera expresa por la disposición derogatoria primera de la Constitución.

Antes de concluir de hablar de la legislación en materia de libertad religiosa debemos referirnos al proyecto

to de ley de bases de libertad religiosa. Este proyecto será estudiado por las diversas confesiones religiosas y el Gobierno lo enviará posteriormente a las Cortes para su - aprobación.

El texto consta de tres bases con una extensión de cinco folios, y su contenido, en resumen es el siguiente:

BASE PRIMERA.- La libertad religiosa reconocida y garantizada en la Constitución comprende, para los individuos, con la consiguiente inmunidad de coacción, los siguientes derechos:

- 1.- Profesar libremente su fe, o no profesar ninguna.
- 2.- Cambiar de confesión o abandonar la que tenían,
- 3.- Practicar actos de culto, tanto pública como privadamente,
- 4.- Manifestar libremente sus propias creencias,
- 5.- Recibir enseñanza e información religiosa de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimien-to.
- 6.- Ajustar la conducta, en materia lícita, al credo o confesión religiosa que se profese,
- 7.- Elegir para si mismo y para los menores o incapacitados legalmente independientes, la clase de educación que prefieran y el centro, establecimiento o institu-ción en que hayan de recibirla,
- 8.- Recibir asistencia religiosa de su propia confesión,

- 9.- Recibir sepultura digna, sin discriminación por moti  
vos religiosos.
- 10.- Conmemorar las festividades religiosas de su propia  
confesión, en la medida en que sea compatible con el  
ordenamiento jurídico,
- 11.- Celebrar los ritos matrimoniales de la confesión reli  
giosa a que pertenezcan, sin perjuicio de que los efec  
tos legales se determinen conforme a la legillación vi  
gente,
- 12.- Asociarse, reunirse o manifestarse con fines religio-  
sos sin más limitaciones que las establecidas con ca-  
racter general,
- 13.- Reclamar y obtener amparo de las autoridades y Tribu-  
nales contra cualquier coacción o discriminación en -  
materia religiosa, así como contra la infracción u -  
obstáculo al ejercicio de cualquiera de los derechos  
reconocidos en esta ley.

#### BASE SEGUNDA.-

- 1.- Las creencias religiosas no constituirán motivo de de-  
sigualdad ante la ley, sin que puedan alegarse motivos  
religiosos para impedir el ejercicio de cualquier tra-  
bajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones  
públicas,
- 2.- Nadie podrá invocar sus creencias religiosas para excu  
sar o justificar actos contrarios a los derechos huma-  
nos reconocidos por la Constitución.

#### BASE TERCERA.-

La personalidad jurídica civil de las iglesias o confesio-

nes religiosas y de sus federaciones se adquiere por la inscripción en el registro especial del Ministerio de Justicia. Deberán solicitarlo acreditando su condición de Iglesia o confesión religiosa y su establecimiento en España, ofreciendo garantías de continuidad.

En la documentación adjuntarán: memoria de las creencias, actos de culto y actividades religiosas, y las funciones de sus ministros; esquema de organización, en el que consten sus órganos de gobierno y representación de sus titulares; relación de comunidades y lugares de culto.

Podrán establecerse libremente iglesias o comunidades locales, comunicándolo al Ministerio de Justicia para su anotación. Las Iglesias o comunidades locales de una misma confesión podrán obtener personalidad jurídica propia y podrán agruparse en entidades federativas.

Los lugares de culto gozarán de inviolabilidad con arreglo a las leyes. Las confesiones podrán solicitar la anotación en el registro de sus ministros, al efecto de que disfruten de la protección que las leyes dispensan al ejercicio de su ministerio.

En el Ministerio de Justicia se constituye una Comisión interministerial para el asesoramiento de los asuntos relacionados con esta ley, y particularmente en lo referente a las relaciones de cooperación previstas en el artº 16.3 de la Constitución.

Las Iglesias y confesiones podrán promover asocia-

ciones, fundaciones y entidades relacionadas con sus fines religiosos.

No se registrarán por esta ley las entidades que no - tengan carácter estrictamente religioso, tales como las que se dediquen a estudio y experimentación de fenómenos psíquicos, al cultivo de valores exclusivamente humanísticos o espiritualistas.

Las Iglesias o confesiones, en virtud de sus fines, deben estar sometidas, como principio general, a un régimen análogo al de las entidades sin fin de lucro.

Una disposición final señala que queda derogada la ley 44/1.967, de 28 de junio, y una transitoria que las asociaciones o entidades religiosas legalmente reconocidas se acomodarán a la nueva normativa en el plazo de dos años.

#### LEYES FUNDAMENTALES

Las Leyes Fundamentales, vigentes hasta la aprobación de la nueva Constitución, tratan en diversos momentos de la libertad religiosa y de aspectos referentes al tema.

Así, por ejemplo, la Ley de Principios del Movimiento Nacional del 17 de mayo de 1.958 señala en el principio - segundo:

"La nación española considera como timbre de honor al acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y f<sup>e</sup> inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación".

El principio séptimo afirma que el Estado español constituye una monarquía tradicional, católica y representativa.

La Ley de Referendum Nacional de 22 de octubre de 1.945 señala la intención de construir un régimen de convivencia cristiana. El Fuero de los Españoles del 17 de julio de 1.945 en el artº. 6º dice:

"La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial.

El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público".

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado del 26 de julio de 1.947 en el artículo primero señala:

"España, como unidad política, es un Estado Católico, social, y representativo, que, de acuerdo con su tradición se declara constituido en Reino".

El artº. 9º dice:

"Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad

de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional".

La Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1.967 en el artº. 12 afirma que la tutela de las personas reales menores de edad llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado ha de recaer en persona de nacionalidad española que profese la religión católica.

La Ley Constitutiva de las Cortes del 17 de julio de 1.942, derogada por la Ley de Reforma Política, no tiene ninguna referencia al tema.

En el Fuero del Trabajo del 9 de marzo de 1.983 sólo existe una pequeña referencia al señalar el principio II el derecho al descanso dominical como un derecho de todo trabajador para poder cumplir sus obligaciones religiosas.

De todas las Leyes Fundamentales que anteriormente hemos visto, son el Fuero de los Españoles y la Ley de Principios del Movimiento Nacional las que afirman con mayor exactitud y claridad la confesionalidad del Estado español. La Ley de Principios del Movimiento Nacional señala, incluso, que será la fé católica "la que inspirará su legislación". (52).

La nueva Constitución española, después de ser sometida a referendum nacional para su aprobación, en el artículo 16 dentro del Título Primero "De los derechos y deberes fundamentales", Capítulo II "Derechos y Libertades", Sección 1ª "De los derechos fundamentales y de las libertades

públicas", dice:

I. "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Es este artículo 16 el que señala la nueva situación de aconfesionalidad del Estado español. El cambio, en este aspecto, es radical, pues se pasa de un sistema en el que se admitía y protegía la religión católica, a la vez que se protegía la libertad religiosa, a otro en el que se autoriza la más amplia libertad religiosa y de cultos. Simplemente y después de múltiples enmiendas, como ahora veremos, se hace una referencia a la religión católica al tratar de las relaciones de cooperación con las distintas confesiones.

Igualmente el Preamble de la nueva Constitución no menciona en ningún momento a la religión católica ni a Dios, en diferencia con las Leyes Fundamentales anteriores.

El artº. 16, una vez terminado su trabajo la comisión correspondiente y antes de ser aprobado por el Congreso y el Senado, decía:

I. "Se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los



individuos y de las comunidades, así como la de profesión filosófica o ideológica, con la única limitación del orden público protegido por las leyes.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación".

Posteriormente, y al admitirse varias enmiendas de los diversos grupos parlamentarios, el texto definitivo quedó tal y como hemos señalado al principio. La principal innovación es la adición al párrafo tercero de la mención de la Iglesia Católica, debida a la propia sintaxis de la redacción y a que en su contenido diferencia a la posición histórica y social correspondiente a la Iglesia Católica y al resto de las confesiones religiosas.

La mención de la Iglesia Católica viene razonada por el hecho de que en la actualidad no todas las confesiones religiosas se encuentran en la misma posición de relieve social, y al ser las creencias mayoritarias del pueblo español católicas es lógico que las relaciones de cooperación sean más intensas con la Iglesia Católica.

Con la redacción definitiva dada al artº. 16 de la Constitución se reafirma el reconocimiento de la recíproca independencia en las relaciones Iglesia-Estado, dentro de una mayor libertad.

Varios artículos de la Constitución se refieren -

igualmente al tema de la presente tesis doctoral. Concretamente el artículo 14 dice: "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". De esta forma se garantiza el principio de igualdad de todos ante la ley, sin que la religión pueda ser motivo de ninguna diferencia entre los españoles. (53).

El artº. 27, que reconoce la libertad de enseñanza, dice en el número tercero: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Así pues, es el Estado el encargado de garantizar a los padres el derecho que asiste a estos de educar a sus hijos según sus creencias religiosas.

Igualmente, y a diferencia de lo que establecían la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1.947 y la Ley Orgánica del Estado de 1.967, la nueva Constitución no exige que para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requiera profesar la religión Católica ni que para ejercer la tutela de las personas reales llamadas a la sucesión mientras sean menores o estén incapacitados sea necesario profesar la religión Católica.

Finalmente, hemos de destacar el hecho de que la Constitución española, y a diferencia de muchas constituciones europeas, no menciona en su preambulo la palabra Dios, lo cual ha sido motivo de muchas críticas.

Continuando con el derecho vigente señalaremos los Reglamentos provisionales del Congreso y del Senado. El re-

glamento provisional del Congreso de Diputados del 13 de octubre de 1.977 en el capitulo quinto, "De la disciplina parlamentaria", el artº. 82 menciona cuando los diputados serán llamados al orden por el presidente, señalando el apartado b): "Cuando el diputado profiera palabras malsonantes u ofensivas para el decoro de la Cámara, de sus miembros, de las - instituciones del Estado o de terceros".

Igualmente, el Reglamento provisional del Senado del 14 de octubre de 1.977 en el capitulo séptimo, "De la disciplina parlamentaria", señala el artº. 84 cuando los senadores serán llamados al orden por el presidente, mencionando el - apartado b): "Cuando los senadores profirieren palabras ofensivas al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad".

Por lo tanto, tanto uno como otro Reglamento sancionan con la llamada al orden por el presidente de cualquier tipo de palabras ofensivas, entre las cuales se encuentran las - dirigidas a las confesiones religiosas, a sus dogmas, a sus miembros y a sus instituciones. Es decir, que la blasfemia no está acogida a una total inmunidad parlamentaria.

Finalmente, y dentro del derecho vigente, debemos de destacar el hecho de que el Código de Derecho Canónico tiene asimismo una referencia a la blasfemia. Concretamente, el cánon 2323 afirma: "El que blasfemare o cometiere perjurio fuera de juicio, sobre todo si es clérigo, debe ser castigado según el prudente arbitrio del Ordinario". De esta manera el Código del Derecho Canónico sanciona solo la blasfemia oral, no la que consiste en hecho o acciones contumeliosas. Por tanto, la diferencia entre el Derecho Canónico y el Derecho Penal a la hora de castigar la blasfemia es evidente debido a que -

aquel solo admite la oral mientras que el Derecho Penal sanciona junto a la oral la escrita o la realizada mediante actos que produzcan grave escándalo público. Igualmente, y - dentro del Derecho religioso, debemos mencionar la Declaración sobre la libertad religiosa que aprobó el Concilio Vaticano II el siete de diciembre de 1.965. En dicha Declaración se dice que el derecho a la libertad religiosa, fundado en la dignidad misma de la persona humana, ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la Sociedad, de forma que llegue a convertirse en un derecho civil. Después de la Declaración del Vaticano II surgió la necesidad de modificar el artículo sexto del Fuero de los españoles por imperativo del principio fundamental del Estado español de que queda hecho mérito.

Dentro de la gran cantidad de Tratados y Declaraciones internacionales debemos citar por su importancia, todavía en auge al cumplirse ahora el treinta aniversario de su promulgación, la Declaración de los Derechos Humanos firmada en París en el año 1.948, concretamente el 10 de diciembre. Posteriormente, España firmó su adhesión a la misma. La Declaración de los Derechos Humanos establece una larga lista de derechos tanto a escala individual como a escala colectiva. Dentro de dichos derechos ocupa lugar importante el derecho a la libertad religiosa, como derecho que permite a los individuos profesar la confesión o creencia que estimen más idónea. La Declaración dice concretamente: "Toda persona humana tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicción, así como la libertad de manifestarlas individualmente o en común, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la predicación, el culto

y el cumplimiento de los ritos".

Tambien debemos hacer mención a los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede el tres de enero de 1.979. Los acuerdos se refieren a diversas materias, entre ellas a los efectos civiles del matrimonio canónico, a la educación religiosa, a los asuntos económicos, a la asistencia religiosa, a las fuerzas armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, así como a la libertad religiosa y de expresión. El artículo 14 dice: "Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Confederación Episcopal Española". Estos acuerdos derogan diversos artículos - del Concordato del 27 de agosto de 1.953.

Dentro de la legislación vigente debemos de examinar la Ley de la Jefatura del Estado del 26 de diciembre de 1.978 sobre Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Dicha Ley deroga los incisos B, C, D y E del apartado 2 del artículo 64 de la vigente Ley de - Prensa. El artículo primero establece que "el ejercicio de - los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de la aplicación de esta Ley, gozará de las garantías jurisdiccionales que en la misma se establecen". El apartado segundo de dicho primer artículo afirma que "quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en su disposición final, las libertades de expresión, reunión y a sociación, la libertad y el secreto de la correspondencia, la libertad religiosa y la de residencia, la garantía de la inviolabilidad del domicilio, la protección jurídica frente a las detenciones ilegales y, en general, fren-

te a las sanciones impuestas en materia de orden público". Debemos de recordar que la Constitución vigente en el Título Primero "De los Derechos y Deberes Fundamentales" señala, dentro del capítulo segundo, el derecho a la igualdad ante la ley (artº. 14), el derecho a la vida (artº 15), el derecho a la libertad religiosa (artº. 16), el derecho a la libertad personal (artº. 17), el derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio (artº. 18), el derecho a la libertad de residencia y circulación (artº. 19), derecho a la libertad de expresión (artº. 20), el derecho de reunión (artº. 21), el derecho de asociación (artº. 22), el derecho de participación (artº 23), el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (artº. 27), el derecho a la libertad de sindicación (artº. 28), el derecho a la huelga (artº. 28) y el derecho de petición (artº. 29). La protección judicial de dichos derechos está reconocida en el artículo 24 de la misma Constitución que dice: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".

Es, pues, la Ley que estamos examinando la que protege jurisdiccionalmente los derechos fundamentales de la persona y que están enumerados, como hemos visto, en la Constitución.

Es de señalar que la disposición final de la ley de 26 de diciembre de 1.978 dice que "dentro de los dos meses de la entrada en vigor de la Constitución, y entre tanto se regula definitivamente el procedimiento jurisdiccional de amparo o tutela de los derechos reconocidos en la misma, el Gobierno, por Decreto legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podrá incorporar el ámbito de protección de esta Ley los nuevos derechos constitucionalmente declarados que sean susceptibles de ella".

La Ley establece una triple garantía: penal, contencioso-administrativa y civil.

A) Garantía penal.--

La garantía jurisdiccional penal comienza señalando la competencia: "Los delitos y faltas contra los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, serán enjuiciados por los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, según su propia competencia.

Para el enjuiciamiento de estos delitos y faltas se observarán las normas de procedimientos correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". A continuación dicho artículo hace una serie de modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando el conocimiento y fallo corresponda a la Audiencia Provincial.

El artículo tercero manifiesta que para el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la imprenta, el grabado u otros medio mecánicos de publicación, sonoros ó fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematográfico u otros similares, se seguirán los trámites establecidos en el Titulo V del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con las modificaciones del artículo anterior.

El apartado segundo de dicho artículo permite a los jueces al iniciarse el procedimiento el secuestro de la publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva. Contra dicha resolución cabe el recurso de apelación, que deberá ser resuelto en el plazo de cinco días.

Según el artículo 4º cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior sean los de calumnia o injurias, previstos y penados en el Código Penal, en los supuestos a que se refiere el artículo 463 de dicho texto, bastará denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal, sin necesidad de acto de conciliación. El perdón del ofendido, o en su caso, el del representante legal, extingue la acción legal o la pena impuesta o en ejecución. Entre las injurias y calumnias están incluidas las injurias livianas a que se refiere el número primero del artículo 586 del Código Penal, que las castiga como falta contra las personas. Las ofensas dirigidas a la Autoridad pública. Corporaciones o clases determinadas del Estado y lo dispuesto en el capítulo VIII del Titulo II del Libro II del Código Penal no sufrirá alteración en su actual sistema de persecución como delitos públicos.

La indemnización por perjuicios materiales y mora-



les será fijada en la sentencia expresamente. Los Tribunales tendrán en cuenta el agravio producido y el medio a través del cual se cometiera el delito o falta, así como la difusión del mismo. El artículo quinto de dicha ley señala que la tramitación de las causas a que se refieren los artículos anteriores tendrá carácter urgente y preferente y su duración desde la iniciación del procedimiento hasta la sentencia no podrá exceder de 60 días en las del artículo segundo ni a 45 en las causas del artículo tercero.

#### GARANTIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.-

La sección segunda de la Ley que estamos estudiando regula la garantía contencioso-administrativa. El artículo sexto señala que "contra los actos de la Administración pública, sujetos a Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo 1º, 2 de esta Ley, podrá interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya aplicación será supletoria".

El artº. 7º afirma que para la interposición de estos recursos no será necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro recurso administrativo.

En el escrito de interposición del recurso podrá solicitarse la suspensión de la efectividad del acto administrativo impugnado. De esta solicitud, y en la pieza separada, se dará traslado al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, y

se requerirá al órgano del que dimana el acto impugnado para que en el plazo de cinco días pueda informar acerca de la solicitud de suspensión.

Deducidos los dictámenes e informes a que se refiere el plazo anterior o transcurrido el plazo concedido al - efecto, la Sala acordará la suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general, suspensión que podrá concederse con o sin afianzamiento de los perjuicios de cualquiera otra naturaleza que pudieran derivarse.

La interposición del recurso contencioso-administrativo suspenderá, en todo caso, la resolución administrativa cuando se trate de sanciones pecuniarias reguladas por la - Ley de Orden Público, sin necesidad de afianzamiento o depósito alguno ni de los dictámenes a que se refiere al apartado anterior.

En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Reguladora del Derecho de Reunión, que no fueren aceptadas por los promotores, estos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, poniendo al mismo tiempo en conocimiento de la autoridad competente tal interposición para que ésta remita inmediatamente el expediente a la Audiencia. El Tribunal convocará dentro del plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los promotores o la persona que estos designen como representante a una audien-cia en que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso.

El artículo octavo regula que el recurso contenciou

so-administrativo se interpondrá dentro del plazo de diez días contados desde el siguiente a la notificación del acto impugnado, si fuere expreso. En caso de silencio administrativo, el plazo anterior se computará una vez transcurridos 20 días desde la solicitud del interesado ante la Administración, sin necesidad de denunciar la mora.

La Sala requerirá en el mismo día o al siguiente de la interposición del recurso al órgano administrativo correspondiente para que en el plazo de cinco días, desde la receptación del requerimiento, remita el expediente y alegue lo que estime procedente como fundamento del acto impugnado.

La Sala, recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión, pondrá de manifiesto el expediente y demás actuaciones al recurrente para que en el plazo improrrogable de ocho días pueda formalizar la demanda y aportar la documentación que estime conveniente. Acto seguido se dará traslado al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a quienes se hubieren personado, para que en el plazo común e improrrogable de ocho días efectúen, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes. A los escritos de contestación a la demanda, podrá acompañarse la documentación que se considere oportuna. La Sala decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba. El periodo de prueba no podrá exceder en ningún caso de veinte días.

Conclusas las actuaciones, la Sala, sin más trámite pero con citación de las partes, dictará sentencia en el plazo de tres días.

El artº. 9º señala que contra la anterior sentencia podrá interponerse, en su caso, recurso de apelación, en un solo efecto ante el Tribunal Supremo (Salas, 3ª, 4ª y 5ª).

El plazo de presentación del escrito razonado del recurso de apelación será de cinco días. Posteriormente se emplazará a las partes por cinco días para que puedan personarse si lo consideran oportuno. La Sala dictará sentencia en el plazo de cinco días, una vez que hubiera comparecido el apelante y transcurrido el término de emplazamiento.

El artículo diez de la presente Ley establece que la tramitación de estos recursos tendrá carácter urgente a todos los efectos orgánicos y procesales.

C) GARANTIA CIVIL.-

La garantía jurisdiccional civil está regulada a partir del artículo II de la presente Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos fundamentales de la persona. El artº. 2º dice que "Las reclamaciones por vulneración o desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, comprendidos en el ámbito de esta Ley, o para impugnar pretensiones relativas a los mismos, no comprendidas en los artículos 2º y 6º de la misma, se formularán ante los Juzgados de Primera Instancia correspondientes a la localidad donde se haya producido el hecho o donde radique el registro u oficina en que deban manifestarse. Las disposiciones de esta sección serán aplicables en todo caso cuando las Leyes reguladoras de los derechos fundamentales de la persona a que se refiere esta Ley establezcan alguna reclamación de orden civil.

La legitimación para actuar como demandantes corresponde al Ministerio Fiscal y a las personas naturales o jurídicas titulares de un derecho subjetivo que les faculte para

obtener la declaración judicial pretendida.

Podrá intervenir en el proceso, como parte coadyuvante del demandante o del demandado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés directo en el asunto.

El Ministerio Fiscal siempre será parte de estos - procedimientos.

El artículo 13 establece que el procedimiento será el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las tres siguientes especialidades:

1º.- El plazo de contestación a la demanda será común para todos los demandados e intervinientes.

2º.- No cabrá el plazo extraordinario de prueba.

3º.- La vista, en caso de solicitarse, habrá de celebrarse en el plazo de siete días desde la formulación de la petición.

Según el artº. 14 la sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos. Los legitimados como demandantes o demandados serán los únicos que podrán interponer el recurso de apelación. Así pues, los coadyuvantes no podrán recurrir con independencia de las partes principales. El recurso de apelación se sustanciará conforme a los trámites establecidos en la sección 3ª del Título VI del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil con las siguientes modificaciones:

1ª.- El plazo de pruebas, en su caso, será de diez días,

2ª.- La vista tendrá lugar dentro de los siete días siguien

tes a la conclusión del plazo concedido al ponente para instrucción.

3ª.- Entre la citación y la vista se pondrán los autos de manifiesto a las partes en la Secretaría, para que puedan instruirse de ellos.

Finalmente, es de señalar que contra la sentencia dictada en apelación podrá interponerse recurso de casación o, en su caso, de revisión ante el Tribunal Supremo.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del 15 de febrero de 1.980, publica el informe emitido por la ponencia encargada de redactar el dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad Religiosa. (54). El informe de la ponencia doce:

1.- A la denominación del proyecto de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, proponiendo el cambio de la denominación de la ley, haciendo constar su carácter de ley orgánica por tratarse de un desarrollo del artículo 16 de la Constitución y, en consecuencia, hallarse comprendida dentro del caso general que para este tipo de leyes se prevé en el artículo 81 del texto fundamental.

La Ponencia ha estimado correcta esta apreciación y propone la modificación del título del proyecto, dándole carácter de Ley Orgánica.

2.- También ha admitido la Ponencia por considerar semejantes, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya, proponiendo la modificación del preámbulo, con supresión del adjetivo "marco" que figura en el párrafo no

veno.

3.- Artículo 1º.-

La Ponencia acordó admitir las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, del Grupo Parlamentario Comunista, quedando esta última incorporada al texto como nuevo apartado 3 del presente artículo.

Se acordó, no obstante, rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya y la del Grupo Parlamentario Andalucista; la primera por entender más adecuada la redacción propuesta y la segunda por entender que la libertad de conciencia es un concepto ambiguo, de difícil diferenciación de la libertad religiosa y de culto, y no prevista expresamente, por lo demás, en el artículo 16 de la Constitución.

4.- Artículo 1º.-

Se han presentado a este apartado las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco; del Grupo Parlamentario Andalucista, todas las cuales fueron rechazadas por la Ponencia que mantuvo el texto original del proyecto.

5.-

La Ponencia acordó admitir la enmienda de Socialistas de Catalunya, coincidente en sus propios terminos - con la enmienda del Grupo Comunista, incorporando al texto un nuevo apartado 3 de este artículo del siguiente tenor:

"Ninguna confesión tendrá carácter estatal".

6.- Artículo 2º.-

Encabezamiento: Al encabezamiento del apartado 1

se han presentado las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Andalucista, enmiendas que no fueron aceptadas por la Ponencia. La primera por entender innecesaria la adición del inciso que daría un carácter ejemplificativo a la enumeración contenida en este apartado, enumeración que se considera suficiente. La enmienda del Grupo Andalucista fué rechazada por consideraciones semejantes a las tenidas en cuenta al evaluar la enmienda anterior del mismo Grupo Parlamentario. Esto no obstante, la Ponencia estimó oportuno precisar el modo de ejercerse el derecho fundamental a la libertad religiosa, añadiendo a este párrafo la expresión "con la consiguiente inmunidad de coacción".

#### 7.- Artículo 2º.-

La Ponencia acordó admitir la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, sustituyendo, en consecuencia, la palabra "fé" por "creencias". De la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista, se admitió exclusivamente la adición del inciso "o la ausencia de las mismas", rechazando el resto de la enmienda.

#### 8.- Artículo 2º.-

La Ponencia acordó no admitir la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, y, en consecuencia, mantener el inciso "sin discriminación por motivos religiosos". La enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista, fué, en cambio, admitida.

#### 9.- Artículo 2º.-

De las enmiendas presentadas a este apartado, la Ponencia acordó rechazar, del Grupo Parlamentario Vasco, por entender que la palabra "formación" es equivalente en lo sus



tancial a la palabra "enseñanza", que ya figura en el texto. Se admitió la enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, si bien sustituyendo la formula propuesta por la adición al texto de la expresión "menores no emancipados". La Ponencia estimó asimismo, aceptable la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista, y rechazó, en cambio la del propio Grupo, por entender que la formula sustitutiva propuesta resulta ambigua.

#### 10.- Artículo 2º.-

La Ponencia acordó no admitir las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, por entender equivalentes las expresiones "asociarse" y "crear asociaciones", y la del Grupo Parlamentario Andalucista, por las mismas razones expuestas al tratar de anteriores apartados. Respecho de la del Grupo Parlamentario Vasco, la Ponencia acordó en su primera parte, no admitiendo, sin embargo, su segunda, en el sentido de sustituir la palabra "credo" por "creencia".

#### 11.- Artículo 2º.-

Al apartado 2 del artículo 2º se han presentado enmiendas todas ellas del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática. De todas ellas, la Ponencia acordó no admitir en su integridad varias. Se estimó aceptables en cambio, una enmienda, con una redacción levemente distinta a la propuesta por el Grupo enmendante, con una redacción en la que la Ponencia ha pretendido lograr un término medio entre todas las posturas planteadas.

#### 12.- Artículo 2º.-

La enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, propone añadir un nuevo apartado 3, reconociendo el derecho de manifesta

tación pública de religión. Aún cuando la Ponencia estima que la mención al derecho de reunión contenida en la letra d), del apartado I, sería suficiente, acepta, no obstante, la enmienda, incorporando la referencia al derecho de manifestación en el referido apartado I, d), en lugar de integrarla como nuevo apartado, tal y como proponía el Grupo enmendante.

13.- Artículo 3º.-

De las enmiendas presentadas a este apartado, la Ponencia acordó no admitir las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco; de Don Luis Javier Rodríguez Moroy (C), y la del Grupo Parlamentario Andalucista . Se estimó, no obstante, aceptable la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al cual queda incorporada al texto, añadiendo exclusivamente una referencia a la salud como elemento constitutivo del orden público.

14.- Artículo 3º.-

De las enmiendas presentadas a este apartado, la Ponencia, acordó rechazar la del Grupo Parlamentario Andalucista, por entender indispensable la mención de las libertades - que, por no hallarse integradas dentro de la libertad religiosa, contribuyen a delimitar el ámbito de aplicación de la ley. Se admitió, en su lugar, la del Grupo Parlamentario Comunista, suprimiendo la palabra "estrictamente". En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, la Ponencia la entiende implícitamente admitida con la modificación - derivada de aceptar la enmienda antes citada.

15.- Artículo 4º.-

De las dos enmiendas presentadas a este artículo,

la Ponencia acordó admitir la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, si bien dándole una redacción que, a juicio general de los Ponentes, mejora gramaticalmente lo pro - puesto en la enmienda. No se admitió la del Grupo Parlamentario Comunista, por entender necesario el condicionamiento de la protección jurisdiccional al ejercicio de los derechos dentro de los límites que la ley señala.

16.- Artículo 5º.-

De las enmiendas presentadas a este apartado, la Ponencia acordó admitir la del Grupo Parlamentario Vasco, y la del Grupo Parlamentario Socialistas de Catalunya. La enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática; la del Socialista del Congreso, la del Grupo Parlamentario Comunista, y la del Grupo Parlamentario Andalucista, no se entendieron oportunas y, en consecuencia fueron rechazadas.

17.- Artículo 5º.-

La Ponencia acordó no admitir la única enmienda presentada a este apartado, de la que es autor Don Luis Javier Rodríguez Moroy (C), por considerar innecesaria la adición - propuesta en la misma.

18.- Artículo 5º.-

La Ponencia acordó no admitir la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, por entender improcedente la cancelación de la expresión propuesta en base a la presunción de haber - desaparecido o extinguido la entidad religiosa. Se admitió, en cambio, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del - Congreso, por entender preferible la formulación positiva a la negativa en la redacción del precepto.

19.- Artículo 6º.-

De las enmiendas presentadas a este artículo, la Ponencia acordó rechazar la del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, y la del Grupo Parlamentario Andalucista. Respecto de las restantes enmiendas del Grupo de Coalición Democrática ; del Grupo Socialista del Congreso; del Grupo Comunista, y del Grupo Andalucista, y a la vista de los criterios expuestos en la misma, la Ponencia llegó al acuerdo de proponer la redacción que figura en el texto, y en la que entiende aceptados en lo sustancial los puntos de vista expuestos en las enmiendas referidas.

20.- Artículo 6º.-

La enmienda del Grupo Parlamentario Comunista, propone la adición de un apartado 2 nuevo al artículo 6º. Asimismo, la del Grupo Parlamentario Socialista de Catalunya propone la adición de un artículo 6º bis nuevo. Ambas enmiendas han sido aceptadas por la Ponencia, dando entrada a un nuevo apartado 2 del artículo 6º, con la redacción resultante de la unión de dichas dos enmiendas.

21. Artículo 7º (totalidad).

La enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista, propone una redacción nueva completa del artículo 7º. Del texto de esta enmienda la Ponencia acordó admitir el contenido del apartado 1 del referido artículo, el cual queda incorporado al nuevo apartado 2 del artículo 6º. El resto de la enmienda fué rechazada por la Ponencia.

22.- Artículo 7º.-

De las enmiendas presentadas a este apartado, la Ponencia acordó no admitir la del Grupo Parlamentario Vasco, y la de Socialistes de Catalunya. Asimismo acordó modificar el texto del apartado en la forma que figura en el - anexo, modificación con la cual se entienden aceptadas en lo sustancial las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática; de Socialistas del Congreso y del Grupo Comunista.

23.- Artículo 7º.-

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, y del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, fueron rechazadas por la Ponencia así como la enmienda del Grupo Parlamentario de Socialistes de Catalunya. Se admitió, en su lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, con inclusión del inciso "y respetando siempre el principio de igualdad".

La enmienda del diputado Señor Garcia-Romanillos fué aceptada por la Ponencia, si bien no bajo la forma de un apartado 2 bis nuevo, sino incorporándola al texto del apartado 1, en el sentido concordante con la admisión de - otras enmiendas de sentido similar.

24.- Artículo 7º.-

La Ponencia acordó aceptar las enmiendas de supresión del Grupo Parlamentario Comunista, y del Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya. El texto de este apar

tado ha quedado incorporado al nuevo apartado 2 del artículo 6º. Por las razones antedichas no hubo lugar a considerar la - aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática.

#### 25.- Artículo 8º.-

La Ponencia, tras rechazar la enmienda del señor - Garcia-Romanillos consideró en su conjunto las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, Socialistas del Congreso y Grupo Parlamentario Comunista. A la vista de las mismas se acordó dar al artículo 8º, una nueva - redacción, pretendiendo unir los criterios contenidos en las - enmiendas referidas, tal y como figura en el texto anexo.

#### Disposición final.-

La Ponencia acordó admitir la enmienda del Grupo Socialista del Congreso, si bien no incluyendo su contenido en esta Disposición final. La directriz contenida en esta enmienda queda, en cambio, recogida en la nueva redacción dada al artículo 8º del proyecto.

#### Disposición transitoria primera.-

A esta disposición se han presentado dos enmiendas, de las cuales la Ponencia acordó aceptar la del Grupo Parlamentario Vasco, y rechazar, en cambio, la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

#### Disposición transitoria segunda.-

La Ponencia acordó no admitir ninguna de las enmien-

das presentadas a esta Disposición transitoria, que queda, en consecuencia, con su redacción original. Fueron rechazadas, en consecuencia las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, y del Grupo Socialista del Congreso.

Palacio de las Cortes, 18 de diciembre de 1.979.-

El texto del proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa sustentado por la Ponencia queda así:

Artículo 1º.-

1.- El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica.

2.- Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.

3.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Artículo 2º.-

1.- La Libertad religiosa y de culto, garantizada por la Constitución, comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:

a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar

la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas.

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente ley orgánica.

2.- Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos; a designar y formar a sus ministros; a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero.

3. (nuevo).-

Para la aplicación real y efectiva de estos derechos,



los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos - públicos militares, hospitalarios, asistenciales, ~~penitencia-~~ rios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos.

#### Artículo 3º.-

1.- El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad democrática.

2.- Quedan fuera del ámbito de protección de la presente ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parasicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos.

#### Artículo 4º.-

Los derechos reconocidos en esta Ley, ejercitados dentro de los límites que la misma señala, serán tutelados mediante amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los - términos establecidos en su ley orgánica.

#### Artículo 5º.-

1.- Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y

sus federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia.

2.- La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

3.- La cancelación de los asientos relativos a una determinada entidad religiosa solo podrá llevarse a cabo a petición de su representante legal o en cumplimiento de sentencia judicial firme.

#### Artículo 6º.-

1.- Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas - inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa y carácter propio, así como el debido respeto a sus creencias, sin perjuicio de los derechos de igualdad y no discriminación que garantizan los artículos 14 y 16 de la Constitución.

2. (nuevo)

Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas

podrán crear y fomentar, para la realización de sus fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general.

#### Artículo 7º.-

1.- El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por ley de las Cortes Generales.

2.- Los Acuerdos y Convenio, y respetando siempre el principio de igualdad, se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico.

#### Artículo 8º.-

Se crea en el Ministerio de Justicia una Comisión Asesora de Libertad religiosa compuesta de forma paritaria y con caracter estable por representantes de la Administración del Estado, de las Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas o Federaciones de las mismas, en las que, en todo caso, estarán las que tengan arraigo notorio en España, y por personas de reconocida competencia cuyo asesoramiento se considere de interés en las materias relacionadas con la presente ley. En el seno de esta Comisión podrá existir una Comisión Permanente, que tendrá también composición pa

ritaria.

A dicha Comisión corresponderán las funciones de estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación de esta ley y, particularmente, y con caracter preceptivo, en la preparación y dictamen de los - Acuerdos o Convenios de cooperación a que se refiere el artículo anterior.

#### Disposición Final.-

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Jus-ticia, dictará las disposiciones reglamentarias que sean - necesarias para la organización y funcionamiento del Registro y de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

#### Disposición derogatoria.-

Queda derogada la Ley 44/1.967, de 18 de junio, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley.

#### Disposición transitoria primera.-

El Estado reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar de las entidades religiosas que - gocen de ella en la fecha de entrada en vigor de la presen-te ley. Transcurridos tres años, solo podrán justificar su personalidad jurídica mediante la certificación de su ins-cripción en el Registro a que esta ley se refiere.

#### Disposición transitoria segunda.-

Las asociaciones religiosas que al solicitar su

reconocimiento legal de conformidad con lo establecido en la Ley 44/1.967, de 28 de junio, hubieren hecho expresa declaración de ser propietarios de bienes inmuebles, cuya titularidad dominical aparezca a nombres de terceros, y aquellas - que habiendo ya formulado ante la Administración esta declaración patrimonial solicitaren su inscripción legal con arreglo a lo prevenido en la presente ley podrán, en el plazo de un año, regularizar su situación patrimonial, otorgando los documentos en los que se reconozca la propiedad a favor de las mismas de aquellos bienes que figuren a nombre de personas interpuestas o utilizando cualquier otro procedimiento legal para justificar adecuadamente su dominio, hasta obtener la inscripción de los títulos en el Registro de la Propiedad, - exención de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que pudiesen gravar la transmisión, los documentos o las actuaciones que con tal motivo se originen.

Del Proyecto de Ley de Libertad Religiosa presentado a las Cortes podemos sacar las siguientes notas importantes:

1ª.- La libertad religiosa se enmarca dentro de los derechos fundamentales de la persona, tal y como establece la vigente Constitución.

2ª.- Principio de igualdad ante la ley: nadie podrá ser discriminado por sus creencias religiosas.

3ª.- Principio de la aconfesionalidad del Estado: de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, el proyecto de Ley de Libertad Religiosa reafirma el principio de que ninguna confesión tendrá carácter estatal, con lo que se modifica el hasta ahora vigente sistema de confesiona-

lidad.

4ª.- El proyecto enumera una serie de derechos que van implícitos en el derecho a la libertad religiosa. Tales derechos son:

- derecho de profesar cualquier creencia religiosa;
- derecho de practicar los actos de culto de cualquier confesión religiosa;
- derecho a recibir e impartir la enseñanza e información religiosa conforme a las creencias religiosas de cada individuo;
- derecho a manifestarse y reunirse con fines religiosos, así como a asociarse con idénticos fines.

5ª.- Límite al derecho dimanante del ejercicio de la libertad religiosa: la protección del derecho de los demás, la seguridad, la salud y la moralidad pública. Es decir, el orden público protegido por la ley.

6ª.- Amparo judicial: el proyecto establece el principio de la tutela de este derecho ante los Tribunales de justicia ordinarios e incluso ante el Tribunal Constitucional.

7ª.- Personalidad jurídica: se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia, Confesiones y Comunidades religiosas, tras la preceptiva inscripción en el correspondiente Registro.

8ª.- Autonomía: El proyecto reafirma el principio de plena autonomía de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas tanto para su organización como para crear y fomentar - Asociaciones, Fundaciones e Instituciones.

9º.- Posibilidad de que el Estado establezca acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Comunidades y Confesiones religiosas inscritas. Es de señalar que si bien la Constitución permite dichos acuerdos, hace mención especial de la Iglesia católica, mientras el presente proyecto solo habla de "te-niendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la so-ciedad española", sin hacer referencia a ninguna religión en con-creto.

10º.- La creación de una Comisión asesora de Libertad Religio-sa, en el Ministerio de Justicia, que tendrá por misión infor-mar, proponer y estudiar todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de la presente Ley.

11º.- Derogación de toda la materia relacionada con la liber-tad religiosa anterior a la presente Ley, entre las que destaca la ley de Libertad Religiosa del 28 de junio de 1.967.

El Boletín Oficial del Estado del 24 de julio de - - 1.980 publica la Ley Organica de Libertad Religiosa una vez que ha sido aprobada por las Cortes Generales. Las únicas diferen-cias que existen con el Proyecto de Ley antes citado son las - siguientes:

1º.- En el artículo quinto donde decía en el apartado terce-ro "a petición de su representante legal" ahora dice "a petición de sus órganos representativos".

2º.- En el artículo sexto, apartado primero, donde decía "sin perjuicio de los derechos de igualdad y no discriminación que - garantizan los artículos 14 y 16 de la Constitución", la Ley - Orgánica dice: "sin perjuicio del respeto de los derechos y li- bertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los

de libertad, igualdad y no discriminación".

El Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre de 1.979 publica el "Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos económicos, culturales y asistencia religiosa a las fuerzas armadas y servicio militar de Clerigos y Religiosos", que fue firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1.979.- Antes de la ratificación dichos acuerdos fueron aprobados por las Cortes Generales. (55).

Dichos acuerdos suponen la derogación de varios artículos del Vigente Concordato de 27 de agosto de 1.953.- Dichos Acuerdos, se firman en virtud del nº 3º del artº. 16 de la Constitución que después de afirmar que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" dice: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones" así como lo previsto en el proyecto de Ley de Libertad Religiosa cuyo artículo 7º dice: "El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España.

En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por ley de las Cortes Generales.

En los Acuerdos o Convenios y respetando siempre el principio de igualdad se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales previstos



en el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico"

"Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos".

Artículo 1º.-

1) El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el de recho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio.

2) La Iglesia puede organizarse libremente. En particular puede crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y - otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado.

La Iglesia puede asimismo erigir, aprobar y supri mir Ordenes, Congregaciones religiosas, otros Institutos de vida consagrada y otras instituciones y entidades eclesiásticas.

Ninguna parte del territorio español dependerá de Obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la so beranía de otro Estado y ninguna diócesis o circunscripción territorial española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera.

El Principado de Andorra continuará perteneciendo a la Diócesis de Urgel.

3) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española, de conformidad con los - Estatutos aprobados por la Santa Sede.

4) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas y de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros - Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas que, estando erigidas canónicamente en esta fecha, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro adquirirán la personalidad jurídica civil mediante la inscripción en el correspondiente Registro del Estado, la cual se practicará en virtud de documentos auténtico en el que conste la erección, fines, datos e identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. A los efectos de determinar la extensión y límites de su capacidad de obrar, y por tanto de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario.

Las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que, estando erigidas canónicamente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por la competente autoridad eclesiástica podrán - adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo -

dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el correspondiente Registro en virtud de documento auténtico en el que consten la erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dicho órganos.

5) Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa, será antes oída la autoridad eclesiástica competente.

6) El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Cortes episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas.

## Artículo II.-

La Santa Sede podrá promulgar y publicar libremente cualquier disposición referente al gobierno de la Iglesia y comunicar su impedimento con los Prelados, el clero y los fieles, así como ellos podrán hacerlo con la Santa Sede.

Los Ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas gozarán de las mismas facultades respecto del clero y de sus fieles.

## Artículo III.-

El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué otras festiva-

des religiosas son reconocidas como dias festivos.

#### Artículo IV.-

1) El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a al asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciario, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos.

2) El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los sacerdotes y de los religiosos en los centros mencionados que sean de caracter público serán regulados de común acuerdo entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos.

#### Artículo V.-

1) La Iglesia puede llevar a cabo por si misma actividades de carácter benéfico o asistencial.

Las instituciones o Entidades de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de sus mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficencia privada.

2) La Iglesia y el Estado podrán, de común acuerdo, establecer las bases para una adecuada cooperación entre las actividades de beneficencia o de asistencia, realizadas por sus respectivas instituciones.

## Artículo VI.-

1) El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico.

Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos, será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio.

2) Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato o no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones, eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil y se declaran ajustadas al Derecho del Estado, en resolución dictada por el Tribunal civil competente.

3) La Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen al atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales.

## Artículo VII.-

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de - común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los

principios que lo informan.

#### Artículo VIII.-

Queda derogados los artículos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, (y el Acuerdo de 16 de julio de 1.946), XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del vigente Concordato y el Protocolo final en relación con los artículos I, II, XXIII y XXV. Se respetarán, sin embargo los derechos adquiridos por las personas afectadas por la derogación del artículo XXV y por el correspondiente Protocolo final.

#### Disposiciones Transitorias.-

1) Las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada, sus provincias y sus casas y las asociaciones y otras entidades o fundaciones religiosas que tienen reconocida por el Estado la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar deberán inscribirse en el correspondiente Registro del Estado en el mas breve plazo posible. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor en España del presente Acuerdo, solo podrá justificarse su personalidad jurídica mediante certificación de tal registro, sin perjuicio de que pueda practicarse la inscripción en cualquier tiempo.

2) Las causas que estén pendientes ante los Tribunales eclesiásticos al entrar en vigor en España el presente Acuerdo seguirán tramitándose entre ellos y las sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el artículo XXIV del Concordato de 1.953.

Protocolo final.-

En relación con el artículo VI, I):

Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico el sacerdote ante el cual se celebró la entrega a los esposos de la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil, y en todo caso, el párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, transmitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que esta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas.

Corresponde al Estado regular la protección de los derechos que, en tanto el matrimonio no sea inscrito, se adquieren de buena fé por terceras personas.

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1.979 fecha del canje de los respectivos instrumentos de ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.

Las notas más importantes del Acuerdo sobre Asuntos jurídicos son:

1º) Reconocimiento por parte del Estado a la Iglesia Católica del derecho de ejercer ésta su misión y garantizar el libre y público ejercicio de sus actitudes.

- 2º) Derecho de la Iglesia a organizarse.
- 3º) Reconocimiento de la personalidad Jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española.
- 4º) Reconocimiento de la personalidad Jurídica civil y de plena capacidad de obrar de las Ordenes, Congregaciones e Instituciones religiosas.
- 5º) Garantía de inviolabilidad de los lugares de culto.
- 6º) Reconocimiento por parte del Estado de los domingos - como días festivos.
- 7º) Reconocimiento y garantía del ejercicio del derecho a la asistencia religiosa.
- 8º) Reconocimientos de efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico.

Acuerdo sobre Asuntos Economicos. -

La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia al tratar de sustituir por nuevos Acuerdos el Concordato de 1.953.

Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado.

Por otra parte, dado el espíritu que informe las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario



dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo.

En consecuencia, la Santa Sede y el Gobierno español concluyen el siguiente:

Acuerdo:

Artículo I:

La Iglesia Católica puede libremente recabar de - sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosmas y oblaciones.

Artículo II.-

1.- El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.

2.- Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello, será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada.

En ausencia de tal declaración la cantidad correspondiente se destinará a otros fines.

3.- Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que proporcione a la Iglesia Católica recursos de cuantía similar.

4.- En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Iglesia Católica, con carácter global y único, que se-  
rá actualizada anualmente.

Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación presupuestaria se minorará en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia Católica.

5.- La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, - ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de éste artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia Católica y el Estado.

### Artículo III.-

No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda:

a) Además de los conceptos mencionados en el artículo I de este Acuerdo, la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documentos de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre.

b) La actividad de enseñanza en seminarios diocesanos y religiosos, así como de las disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia.

c) La adquisición de objetos destinados al culto.

#### Artículo IV.-

1.- La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, la Ordenes y Congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:

A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles:

1) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral.

2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas.

3) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a las oficinas parroquiales.

4) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.

5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones religiosas e institutos de -

vida consagrada.

B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio.

Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle ce dido, ni a las ganancias de capital, ni tampoco a los rendimien tos sometidos a reten ción en la fuente por impuestos sobre la renta.

C) Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad.

D) Exención de las contribuciones especiales y de tasa de - equivalencia, en tanto recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de éste artículo.

2.- Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en este artículo y destinados a los fines expresados en el apartado C) darán derecho a las mismas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que las cantidades entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública.

#### Artículo V.-

Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el artículo IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benefici-docentes, médi -

cas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro, y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas.

#### Artículo VI.-

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

#### Artículo VII.-

Quedan derogados los artículos XVIII, XIX, XX y XXI del vigente Concordato y el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de 8 de diciembre de 1.946.

#### Protocolo adicional.-

I.- La dotación global en los Presupuestos Generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el plazo exclusivo de tal ayuda como durante el periodo de aplicación simultánea del sistema previsto en el artículo II, apartado 2, de este Acuerdo, mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la Memoria a que se refiere el párrafo siguiente.

La aplicación de los fondos, proyectada y realiza-

da por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente.

2.- Ambas partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos tributarios en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos III a V del presente Acuerdo.

Siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo.

3.- En el supuesto de deudas tributarias no satisfechas en plazo voluntario, por alguna entidad religiosa comprendida en el número I) del artículo IV, o en el artículo V de este Acuerdo, el Estado, sin perjuicio de la facultad de ejecución que en todo caso le corresponde, podrá dirigirse a la Conferencia Episcopal Española, para que esta inste a la entidad de que se trate al pago de la deuda tributaria.

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fé por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1.979 fecha del canje de los respectivos Instrumentos de ratificación según lo previsto en dicho Acuerdo.

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ENSE-  
ÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES.-

El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los textos concordatorios en el espíritu del Acuerdo de 28 de julio de 1.976, conceden importancia fundamental a los temas relacionados con la enseñanza.

Por una parte, el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho.

Por otra, la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las familias de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.

Los llamados medios de comunicación social se han convertido en escuela eficaz de conocimientos, criterios y costumbres. Por tanto, deben aplicarse en la ordenación jurídica de tales medios los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios que la Iglesia y el Estado profesan en materia de enseñanza.

Finalmente, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la Nación; por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento justifican la colaboración de Iglesia y Estado.

Por ello, ambas Partes contratantes concluyen el siguiente Acuerdo.

#### Artículo I.-

A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.

En todo caso, la educación que se imparte en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.

#### Artículo II.-

Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, la Educación General Básica (E.G.B.) y de Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla.

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar.

En los niveles de enseñanza mencionados, las autorida



dades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa.

### Artículo III.-

En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa, será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.

En los Centros públicos de Educación Preescolar, de E.G.B. y de Formación Profesional de primer grado, la designación en la forma antes señalada, recaerá con preferencia en los Profesores de E.G.B. que así lo soliciten.

Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.

Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos del Claustro de Profesores de los respectivos Centros.

### Artículo IV.-

La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas tendrán carácter voluntario para los alumnos.

Los Profesores de las mismas serán designados por la autoridad académica en la misma forma que la establecida en el artículo III y formarán también parte de los respectivos Claustros.

#### Artículo V.-

El Estado garantiza que la Iglesia Católica puede organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros Universitarios Públicos, utilizando los locales y medios de los mismos. La Jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de los Centros para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos.

#### Artículo VI.-

A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación.

La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán para que esta enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religión al régimen general disciplinario de los Centros.

#### Artículo VII.-

La situación económica de los Profesores de religión católica, en los distintos niveles educativos que no pertenezcan a los Cuerpos Docentes del Estado, se concertará

entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto que sea de aplicación a partir de la - entrada en vigor del presente Acuerdo.

#### Artículo VIII.-

La Iglesia Católica puede establecer seminarios menores diocesanos y religiosos, cuyo caracter específico será respetado por el Estado.

Para su clasificación como Centro de Educación General Básica, el Bachillerato Unificado Polivalente o de Curso de Orientación Universitaria se aplicará la legislación general, si bien no se exigirá ni número mínimo de matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función del - area geográfica de procedencia o domicilio de familia.

#### Artículo IX.-

Los Centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y especialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se acomodarán a la legislación que se promulgue con caracter general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades.

#### Artículo X.-

1) Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas Universitarias y otros Centros Universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica, se acomodarán a la legislación que se promulgue con caracter general, en cuanto al modo de ejercer estas actividades.

Para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios realizados en dichos Centros se estará a lo que disponga la legislación vigente en la materia en cada momento.

2) El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de entrada en vigor de este Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá de acomodarse a la legislación vigente, salvo lo previsto en el artículo XVII, 2.

3) Los alumnos de estas Universidades gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante que se establezcan para los alumnos de las Universidades del Estado.

#### Artículo XI.-

La Iglesia Católica a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer Universidades, Facultades, Institutos Superiores y otros Centros de ciencias Eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares.

La convalidación de los estudios y el reconocimiento por parte del Estado de los efectos civiles de los títulos otorgados en estos Centros superiores serán objeto de regulación específica entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se acuerde la referida regulación, las posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión de valor civil a los títulos otorgados se realizarán de acuerdo con las normas generales sobre el tema.

Y también se regularan de común acuerdo la convalidación y reconocimiento de los estudios realizados y títulos obtenidos por clérigos o seculares en las Facultades aprobadas por la Santa Sede fuera de España.

Artículo XII.-

Las Universidades del Estado, previo acuerdo con la competente autoridad de la Iglesia, podrán establecer - centros de estudios superiores de teología católica.

Artículo XIII.-

Los Centros de enseñanza de la Iglesia de cualquier grado y especialidad, sus alumnos tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a Centros no estatales y a estudiantes de tales Centros, de acuerdo con el regimen de igualdad de oportunidades.

Artículo XIV.-

Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española.

Artículo XV.-

La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, ar-

tístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivo el interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución. A Estos efectos, y a cualquiera otros relacionados con dicho patrimonio, se creará una Comisión Mixta en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor en España del presente Acuerdo.

#### Artículo XVI.-

La Santa Sede y el Gobierno Español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

#### Artículo XVII.-

1) Quedan derogados los artículos XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del vigente Concordato.

2) Quedan asegurados, no obstante los derechos adquiridos de las Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de la firma del presente Acuerdo, las cuales, sin embargo podrán optar por su adaptación a la legislación general sobre Universidades no estatales.

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-

1) El reconocimiento a efectos civiles de los estudios que se cursen en las Universidades de la Iglesia actualmente existentes seguirá rigiéndose, transitoriamente, por la normativa ahora vigente hasta el momento en que, para cada Centro o carrera, se dicten las oportunas disposiciones de reconocimiento, de acuerdo con la legislación general, que no exigirá requisitos, superiores a los que se impongan a las Universidades del Estado o de los entes públicos.

2) Quienes al entrar en vigor el presente Acuerdo en España estén en posesión de grados mayores en Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del parrafo 1 del articulo XXX del Concordato, sean Profesores titulares de las disciplinas de la Sección de Letras en Centros de enseñanza dependientes de la autoridad eclesiástica, seguirán considerados con titulación suficiente para la enseñanza en tales Centros, no obstante la derogación de dicho artículo.

## PROTOCOLO FINAL.-

Lo convenido en el presente Acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de Centros, niveles educativos, profesorado y alumnos, medios didácticos, etc., subsistirá como válido para las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de nomenclatura o del sistema escolar oficial.

El presente Acuerdo cuyos textos en lenguas española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento

del canje de los instrumentos de Ratificación.

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1.979, fecha del canje de los respectivos Instrumentos de Ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.

Los puntos principales en el Acuerdo con la Santa Sede en materia de enseñanza y asuntos culturales son:

1º.- Se establece el principio del respeto del derecho de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.

2º.- Los planes educativos incluirán la enseñanza de la -religión católica en todos los Centros de educación. No tendrá carácter obligatorio.

3º.- El Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para impartir la enseñanza religiosa.

4º.- Garantía por parte del Estado para que la Iglesia -Católica organice cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros Universitarios públicos.

5º.- Derecho a la jerarquía eclesiástica de señalar el contenido de la enseñanza y formación religiosa católica.

6º.- Derecho de la Iglesia Católica de establecer seminarios menores diocesanos y religiosos.

7º.- Los centros de enseñanza no universitarios estableci



dos o que se establezcan por la Iglesia Católica se acomodarán a la legislación general.

8º.- Reconocimiento por parte del Estado de la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en España.

9º.- Autonomía de la Iglesia Católica para establecer Universidades, Facultades, Institutos Superiores y otros Centros de Ciencias Eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares.

10º.- Derecho de las Universidades del Estado de establecer Centros de estudios superiores de teología católica.

11º.- Derecho de los Centros de enseñanza de la Iglesia a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas.

12º.- El Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos.

13º.- La Iglesia pone al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental.

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE LA ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS FUERZAS ARMADAS Y SERVICIO MILITAR DE CLERIGOS Y RELIGIOSOS.-

La asistencia religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de los clérigos y -

religiosos constituyen capítulos específicos entre las materias que deben regularse dentro del compromiso adquirido por la Santa Sede y el Estado español de revisar el Concordato de 1.953.

Por tanto, ambas partes han decidido actualizar - las disposiciones hasta ahora vigentes y concluyen en el siguiente:

#### ACUERDO

##### Artículo I.-

La asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del Vicariato Castrense.

##### Artículo II.-

El Vicariato Castrense, que es una diócesis personal, no territorial, constará de:

A) Un Arzobispado, Vicario general, con su propia Curia, que estará integrada por:

1) Un Provicario general para todas las Fuerzas Armadas, con facultades de Vicario general.

2) Un Secretario General.

3) Un Vicesecretario.

4) Un Delegado de Formación Permanente del Clero, y

5) Un Delegado de Pastoral.

B) Además contará con la cooperación de:

1) Los Vicarios episcopales correspondientes.

2) Los Capellanes castrenses como parrocos personales

#### Artículo III.-

La provisión del Vicariato General Castrense se hará de conformidad con el artículo 1, 3 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1.976, mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de - común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede.

El Rey presentará, en el termino de quince dias, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice.

#### Artículo IV.-

Al quedar vacante el Vicariato Castrense, y hasta su nueva provisión, asumirá las funciones de Vicario General el Provicario general de todas las Fuerzas Armadas, si no lo hubiese, y si no el Vicario episcopal más antiguo.

#### Artículo V.-

Los clérigos y religiosos están sujetos a las disposiciones generales de la Ley sobre el Servicio Militar.

1) Los Seminaristas, postulantes y novicios podrán aco-

gerse a los beneficios comunes de prorrogas anuales por razón de sus estudios específicos o por otras causas admitidas en la legislación vigente, así como a cualquiera otros beneficios que se establezcan con caracter general.

2) A los que ya sean presbiteros se les podrá encomendar - funciones específicas de su ministerio, para lo cual recibirán las facultades correspondientes del Vicario general castrense.

3) A los presbiteros a quienes no se encomienden las referidas funciones específicas y a los diáconos y religiosos profesos no sacerdotes se les asignarán misiones queno sean incompatibles con su estado, de conformidad con el Derecho Canónico.

4) Se podrá considerar de acuerdo con lo que establezca la Ley, como prestación social sustitutoria de las obligaciones específicas del Servicio Militar, la de quienes durante un periodo de tres años, bajo la dependencia de la Jerarquia Eclesiástica, se consagren al apostolado como presbiteros, diáconos o religiosos profesos en territorios de misión o como capellanes de emigrantes.

#### Artículo VI.-

A fin de asegurar la debida atención pastoral del - pueblo se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones militares, en toda circunstancia, los Obispos y asimilados en derecho. En caso de movilización de reservistas se procurará asegurar la asistencia parroquial proporcional a la población civil.

A este fin el Ministerio de Defensa oirá el informe del Vicario general castrense.

## Artículo VII.-

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello - en los principios que lo informan.

## Artículo VIII.-

Quedan derogados los artículos XV, XXXII y el protocolo final en relación al mismo del Concordato de 27 de agosto de 1.953 y, consecuentemente el Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas de 5 de agosto de 1.950.

## PROTOCOLO FINAL.-

En relación con el artículo VIII:

1) No obstante la derogación ordenada en el artículo VIII, subsistirá durante un plazo de tres años la posibilidad de valerse de la disposición prevista en el nº 1 del artículo XII del Convenio de 5 de agosto de 1.950.

2) Los sacerdotes y diaconos ordenados antes de la fecha de entrada en vigor del Presente Acuerdo y los religiosos que hubieren profesado igualmente con anterioridad conservarán, cualquiera que fuera su edad, el derecho adquirido a la exención del Servicio Militar en tiempo de paz, conforme al artículo XII del citado Convenio que se deroga.

3) Quienes estuvieren siguiendo estudios eclesiásticos de preparación para el sacerdocio o para la profesión religiosa, en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, podrán solicitar prorroga de incorporación a filas de segunda clase, si desean acogerse a este beneficio y les corresponde por su edad.

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.

#### ANEXO I.-

##### Artículo I.-

Los capellanes castrenses ejercen su ministerio bajo la jurisdicción del Vicario general castrense.

##### Artículo II.-

La jurisdicción del Vicario general castrense y de los Capellanes es personal. Se extiende, cualquiera que sea la respectiva situación militar, a todos los similares de Tierra, Mar y Aire, a los alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares, a sus esposas, hijos y familiares que viven en su compañía, y a todos los fieles de ambos sexos ya seglares, ya religiosos, que presten servicios establemente bajo cualquier concepto o residan habitualmente en los cuarteles o lugares dependientes de la jurisdicción militar. Igualmente se extiende dicha jurisdicción a los huérfanos menores o pensionistas y a las viudas de militares mientras conserven este estado.

##### Artículo III.-

Los Capellanes castrenses tienen competencia parroquial respecto a las personas mencionadas en el artículo precedente.

En el caso de celebrarse el matrimonio entre el Capellán castrense, éste deberá atenerse a las prescripciones canónicas.

#### Artículo IV.-

1) La jurisdicción castrense es acumulativa con la de los Ordinarios diocesanos.

2) En todos los lugares o instalaciones dedicadas a las Fuerzas Armadas u ocupados circunstancialmente por ellas, usarán de dicha jurisdicción, primaria y principalmente, el Vicario general castrense y los Capellanes. Cuando estos falten o estén ausentes, usarán de su jurisdicción subsidiariamente, aunque siempre por derecho propio, los Ordinarios diocesanos y los Párrocos locales.

El uso de esta jurisdicción acumulativa se regulará mediante los oportunos acuerdos entre la jerarquía diocesana y la castrense, la cual informará a las autoridades militares correspondientes.

3) Fuera de los lugares arriba señalados y respecto a las personas mencionadas en el artículo II de este Anexo, ejercerán libremente su jurisdicción los Ordinarios diocesanos y, cuando así les sea solicitado, los Párrocos locales.

#### Artículo V.-

1) Cuando los Capellanes castrenses por razón de sus fun-

ciones como tales tengan que officiar fuera de los templos, establecimientos, campamentos y demás lugares destinados regularmente a las Fuerzas Armadas, deberán dirigirse con anticipación a los Ordinarios diocesanos o a los Parrocos Rectores locales para obtener el oportuno permiso.

2) No será necesario dicho permiso para celebrar actos de culto al aire libre para fuerzas militares desplazadas con ocasión de campañas, maniobras, marchas, desfiles u otros actos de servicio.

#### Artículo VI.-

Cuando lo estime conveniente para el servicio religioso-pastoral el Vicario castrense se pondrá de acuerdo con los Obispos diocesanos y los Superiores mayores religioso para designar un número adecuado de sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en sus dióce-sis e institutos, presten ayuda a los Capellanes castrenses. Tales sacerdotes y religiosos ejercerán su ministerio a las órdenes del Vicario general castrense, del cual recibirán - las facultades "ad notum" y serán retribuidos a título de - gratificación o estipendio ministerial.

#### ANEXO II.-

#### Artículo I.-

1) La incorporación de los Capellanes castrenses tendrá lugar según las normas aprobadas por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno.



Para el desempeño de la función de Vicario episco  
pal seré preciso:

a) Poseer una licenciatura, o título superior equivalente, en aquellas disciplinas eclesiásticas o civiles que el Vicario general castrense estime de utilidad para el ejercicio de la asistencia religioso-pastoral a las Fuerzas Armadas.

b) Haber sido declarado canónicamente apto, según las normas que establezca el Vicario General castrense.

2) El nombramiento eclesiástico de los Capellanes se hará por el Vicario general castrense.

El destino a Unidad o Establecimiento se hará por el Ministerio de Defensa a propuesta del Vicario general castrense.

## Artículo II.-

Los capellanes, en cuanto sacerdotes y "ratione loci", estarán también sujetos a la disciplina y vigencia de los Ordinarios diocesanos, quienes en casos urgentes podrán tomar las oportunas providencias canónicas, debiendo en tales casos hacerlas conocer enseguida al Vicario general castrense.

## Artículo III.-

Los Ordinarios diocesanos, conscientes de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia espiritual a todos - los que prestan servicios bajo las armas, considerarán como parte de su deber pastoral proveer al Vicario general castrense de un número suficiente de sacerdotes, celosos y bien preo

parados, para cumplir dignamente su importante y delicada mi  
sión.

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de di-  
ciembre de 1.979, fecha del canje de los respectivos Instru-  
mentos de Ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.

En materia religiosa las notas principales del Acuer  
do entre el Estado Español y la Santa Sede sobre la asisten-  
cia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de -  
clérigos y religiosos son:

1º) La asistencia religiosa a los miembros católicos de las  
Fuerzas Armadas se ejercerá por medio del Vicariato Castrense.

2º) Se regula la composición y provisión de dicho Vicaria-  
to.

3º) Los clérigos y religiosos están sujetos a las disposi-  
ciones generales de la Ley sobre el Servicio Militar. Se esta-  
blece el sistema de prórrogas, las funciones que prestarán y  
demás misiones a desarrollar.

4º) Se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones mili-  
tares en todas circunstancias a los Obispos y asimilados en -  
derecho.

5º) Se puede considerar de acuerdo con lo que establezca la  
Ley como prestación social sustitutoria de las obligaciones -  
específicas del Servicio Militar la de quienes durante un pe-  
riodo de tres años, bajo la dependencia de la jerarquía Ecle-  
siástica, se consagren al apostolado como presbíteros, diáco-  
nos o religiosos profesos en territorios de misión o capella-

nes de amigrantes.

6º) La jurisdicción del Vicario general castrense y de los Capellanes es personal.

7º) Los Capellanes castrenses tienen competencia parroquial.

8º) La jurisdicción castrense tiene acumulación con la de los Ordinarios diocesanos.

9º) La incorporación de los Capellanes castrenses tendrá lugar según las normas aprobadas por la Santa Sede de acuerdo con el Gobierno.

10º) Los Capellanes estarán sujetos a la disciplina y vigilancia de los Ordinarios Diocesanos.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados del 17 de enero de 1.980 publica el Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal, señalando de plazo hasta el 31 de marzo de 1.980 para la presentación de enmiendas. (57). Dentro del Título XIII de Ley se regulan los delitos contra la libertad religiosa bajo el siguiente epígrafe: Libro II "Delitos y sus penas", Título XIII "Delitos contra la Constitución", Capítulo II "De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona garantizados por la Constitución, Sección 3ª "De los delitos contra la libertad religiosa y sentimientos religiosos", en los artículos 629, 630 y 631.

El artículo 629, dice:

"Incurrirán en las penas de prisión de seis meses a tres años:

1º.- Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidieren a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos del culto - que profesen o asistir a los mismos.

2º.- Los que por iguales medios forzaren a otro a practicar o concurrir a actos de un culto que no fuese el suyo, o a mudar de religión.

Si el culpable de esos hechos fuere Autoridad y funcionario público, será sancionado, además con la pena de inhabilitación especial por tiempo de ocho a catorce años.

El artículo 630 del proyecto afirma:

"Incurrirán en la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses los que para - ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa:

1º.- Hicieren públicamente, de palabra o por escrito, escarnio de sus dogmas, ritos o ceremonias o vejaren también públicamente a quienes los profesaren.

2º.- Ultrajaren públicamente, de hecho o de palabra, a sus Ministros. Si el ultraje se cometiere estando aquellos realizando actos de culto u otros propios de su ministerio, se impondrá la pena en su mitad superior.

3º.- Destruyeren o profanaren las cosas objeto de veneración por los miembros de una confesión religiosa o los lugares donde practiquen su culto.

4º.- Perturbaren gravemente las funciones, ceremonias o ma-

nifestaciones de culto de cualquier confesión religiosa".

Artículo 631:

"El que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos violare los sepulcros o sepulturas, vilipendiare un cadaver o sus cenizas, o, con ánimo de ultraje, destruyere o dañare las urnas funerarias, tumbas o cualquier otra cosa destinada al reposo o al culto de los difuntos será castigado con la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana y multa de tres a seis meses".

Dentro de las faltas contra el Orden Público en el artículo 684 se sanciona la blasfemia. Dicho artículo dice:

"Serán castigados con las penas de arresto de uno a cinco fines de semana o multa de uno a dos meses, siempre que el hecho no constituya infracción más grave.:

1º.- Los que profirieren blasfemias ofendiendo el sentimiento de los presentes.

2º.- Los que perturbaren de manera leve un acto religioso o una reunión pacífica.

3º.- Los que con la exhibición de estampas o grabaciones, o con actos realizados en público, ofendieren la moral, las buenas costumbres o la decencia publica".

En relación con el vigente Código Penal encontramos las siguientes diferencias:

1ª.- En el Código actual se sancionan los delitos contra la religión en el Título II, "delitos contra la seguridad inte-

rior del Estado, Capítulo II, "de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes", Sección 3ª, que se denomina "delitos contra la libertad religiosa, la religión del Estado y las demás confesiones", y que abarca desde el artículo 205 al 212 inclusivo. Mientras que el proyecto castiga estos delitos en la Sección 3ª "de los delitos contra la libertad y sentimientos religiosos", del Capítulo II, "de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona garantizados por la Constitución", del Título XIII, "delitos contra la Constitución", del Libro II, "delitos y sus penas". Comprende los artículos 629, 630 y 631, inclusive.

2ª.- En el proyecto se suprime la violenta abolición de la religión católica como oficial del Estado, artículo 206 del Código vigente, en concordancia con el principio de aconfesionalidad que la Constitución establece.

3ª.- Tanto el proyecto como el texto vigente castigan el forzar a otro a practicar o asistir a actos de un culto por medio de amenaza, violencia, intimidación o cualquier apremio ilegítimo. Igualmente sancionan el impedir a un miembro de una confesión religiosa por los medios anteriormente señalados asistir o practicar los actos del culto que profese. (artículos 205 del Código y 629 del proyecto).

4ª.- El Código castiga los actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos (artículo 208), el escarnio de palabra o por escrito de la religión católica o de confesión reconocida y el ultraje públicamente de sus dogmas, ritos o ceremonias (artículo 209), el maltrato de obra a un ministro de la religión católica o de otro culto que esté ins-

crito en el Registro cuando se hallare cumpliendo los oficios de su ministerio o con ocasión de ellos (artículo 210), así como cualquier tipo de actos que ofendieren el sentimiento religioso de los concurrentes (artículo 211), mientras que el - proyecto castiga en el artículo 630 las siguientes conductas, pero refiriéndose siempre a la ofensa de los sentimientos religiosos de los miembros de una confesión pero sin hacer mención a la religión católica como hace el Código actual:

- el escarnio o la vejación públicas,
- ultraje público de palabra o por escrito o de hecho de los ministros de una religión,
- profanación o destrucción de las cosas objeto de veneración por los miembros de una confesión,
- la perturbación grave de las funciones, ceremonias o manifestaciones de un culto,

5ª.- El proyecto incluye en el artículo 631 la violación de sepulturas o sepulcros o el vilipendio de un cadáver o sus cenizas o la destrucción de las urnas o tumbas funerarias faltando el respeto debido a los muertos. Mientras que el Código castiga dichas conductas en el Título V, "De la infracción de las Leyes sobre inhumanaciones, de la violación de sepulturas y de los delitos de riesgo en general", sancionando los artículos 339 y 340 la inhumación contraviniendo lo dispuesto por las leyes o reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, así como la violación de sepulcros o sepulturas o la práctica de cualesquiera actos de profanación de cadáveres, faltando el respeto debido a la memoria de los muertos, pero no considerándolo un delito de los ya descritos contra la religión sino contra las Leyes sobre inhumaciones, por lo que se consideraba un tipo en blanco.

6ª.- El proyecto suprime el delito de los que por amenaza, violencia, dádiva o engaño, con el fin de ganar adeptos para determinada creencia o confesión o para desviarlos de ella (número 2º del artículo 20).

7ª.- El artículo 207 del Código, que se refería a "impedir, interrumpir o perturbar" los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de la religión católica o de otra - confesión legalmente reconocida, se reduce en el proyecto al nº 4º del artículo 630, como ya hemos visto, que sólo habla de "perturbar" gravemente las funciones, ceremonias o manifestaciones de cualquier confesión religiosa.

8ª.- Se suprime el artículo 212 del Código que castigaba, además, a los autores de este tipo de delitos con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la enseñanza pública o privada.

9ª.- La blasfemia sufre una importante modificación en el proyecto.

En primer lugar pasa de ser delito (artículo 239) a ser considerada como falta contra el orden público (artículo 684).

Anteriormente la blasfemia ocupaba un capítulo aparte, el Capítulo VII, del Título II, "delitos contra la seguridad interior del Estado", del Libro II, "delitos y sus penas". En el proyecto forma parte del Libro III, "faltas y - sus penas", Título V, "faltas contra el Orden Público", artículo 684.

Como ya vimos en su momento, se exigía que la blasfemia fuese:



- o por escrito y con publicidad.
- o con palabras o actos que produzcan grave escándalo público.

En caso de que no se produjese uno de estos dos supuestos estaríamos ante una falta contra el orden público del número primero del artículo 567: "los que proferirien blasfemias por medio de palabras que no produzcan grave escándalo público".

El proyecto del Código califica de falta la blasfemia en el artículo 684:

1º.- Los que proferirien blasfemias ofendiendo el sentimiento de los presentes".

Es de destacar que el proyecto parte de un concepto de blasfemia mucho más amplio que del que partía el vigente - Código al acoger dentro de los sentimientos religiosos ofendidos por el blasfemo no sólo los de los católicos, sino también los creyentes de cualquier otra confesión religiosa.

Sin embargo, el proyecto mantiene la posibilidad de que ciertas conductas estén encuadradas dentro del delito de escándalo público que castiga en el Capítulo III del Título - III, dentro de los delitos contra la libertad sexual.

Finalmente, debemos de señalar que este mismo artículo 684 del proyecto castiga también la perturbación leve de un acto religioso así como la exhibición de estampas o grabaciones, o actos realizados en público, que ofendieren a la moral, a las buenas costumbres o a la decencia pública.

En el orden administrativo encontramos, igualmente,

algunas referencias a la blasfemia. Casi todas ellas se producen en las reglamentaciones de trabajo al considerar la blasfemia como falta, ya sea grave o muy grave.

La Reglamentación de Trabajo para los obreros que trabajan en empresas harineras (Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de julio de 1.945) establece en el artículo 35 como falta muy grave la blasfemia habitual.

El Decreto del Ministerio de Justicia de 8 de febrero de 1.946 que regula la Reglamentación de trabajo penitenciario señala en el artículo 44 la blasfemia entre las faltas muy graves en que pueden incurrir los trabajadores. Es decir, no es necesario la habitualidad, una sólo blasfemia es motivo de estimarla como falta muy grave.

La orden del Ministerio de Trabajo de 17 de junio de 1.946 que establece la Reglamentación de trabajo para los trabajadores de puertos y faros señala en el artículo 66 como falta grave la blasfemia no habitual, mientras que el artículo 67 califica como falta muy grave la blasfemia habitual.

La Reglamentación de trabajo para los trabajadores de empresas siderometalúrgicas, por Orden de 27 de julio de 1.946, en el artículo 78 establece como falta muy grave la blasfemia habitual.

Por Orden del Ministerio de Trabajo de 28 de agosto de 1.946 se regula la Reglamentación del trabajo para los obreros de industrias de captación, elevación, conducción y distribución de aguas, canales y pantanos. El artículo 69 señala, entre las faltas muy graves, la blasfemia siempre que esta sea habitual.

La Orden de 26 de septiembre de 1.946 sobre Reglamentación Nacional de Trabajadores de Bancos Privados califica en el artículo 48 como falta muy grave la blasfemia, sin que sea preciso que sea habitual.

La Reglamentación Nacional de Trabajadores del vidrio de 21 de septiembre de 1.946 considera la blasfemia habitual como falta muy grave en el artículo 59.

La Orden del 10 de octubre de 1.946, que regula el trabajo de los trabajadores de ferrocarriles y tranvías, señala en el artículo 138 como falta grave la blasfemia, y como falta muy grave la blasfemia habitual.

La Reglamentación de trabajo de la pesca marítima, según la Orden de 28 de octubre de 1.946, establece como falta muy grave la blasfemia habitual en el artículo 48.

La Reglamentación Nacional de la Industria Corchera, Orden del 30 de noviembre de 1.946, considera en el artículo 75 falta muy grave la blasfemia habitual.

La Orden del 12 de diciembre de 1.946 regula la Reglamentación del Trabajo para industrias del curtido y califica de falta muy grave la blasfemia habitual.

La Orden del Ministerio de Trabajo de 4 de enero de 1.947 sobre la Reglamentación de Trabajo en la industria de cervezas considera en su artículo 58 falta muy grave la blasfemia habitual.

Igualmente la Orden de 22 de enero de 1.947, referente a la industria de guantes, califica como falta muy grave la blasfemia siempre que ésta sea habitual.

La Reglamentación de Trabajo en factorías de bacalao de 18 de enero de 1.947 establece en el artículo 69 - como falta muy grave la blasfemia habitual.

Asimismo, la Reglamentación Nacional para la industria maderera por Orden de 3 de febrero de 1.947 considera como falta muy grave la blasfemia habitual en el artículo 94.

La Reglamentación de Trabajo en Industrias vinícolas de 20 de marzo de 1.947 en el artículo 58 señala entre las faltas muy graves la blasfemia habitual.

Igualmente la Reglamentación de Trabajo en aceite, jabón, glicerina y aceituna de 18 de abril de 1.947 considera en el artículo 63 como falta muy grave la blasfemia habitual.

La Orden de 14 de marzo de 1.947 sobre el trabajo en puertos y faros en el artículo 73 cita a la blasfemia habitual entre las faltas muy graves.

Igualmente, la Orden 1ª de enero de 1.947 referente a las industrias navieras señala en el artículo 71 como falta muy grave en primer lugar la blasfemia, sin necesidad de que sea habitual.

La Reglamentación del Trabajo de consignatarios de buques del 1º de mayo de 1.947 califica igualmente como falta muy grave la blasfemia en el artículo 71.

La Reglamentación nacional de trabajo del personal de coches-camas del 15 de abril de 1.947 establece en el artículo 117 la blasfemia como falta muy grave.

La Reglamentación nacional de personal de teléfonos

de 20 de junio de 1.947 señala en el artículo 3º a la blasfemia, siempre que ésta sea habitual, como falta muy grave.

La Orden de 30 de junio de 1.947, que regula el trabajo de las salineras, califica como falta muy grave a la blasfemia habitual en el artículo 53.

Asimismo, la Reglamentación del personal de aviación civil del 4 de abril de 1.947 considera la blasfemia habitual como falta muy grave en el artículo 72.

La Reglamentación nacional de industrias del fósforo de 17 de julio de 1.947 señala en el artículo 68 como falta - muy grave la blasfemia siempre que esta sea habitual.

Por la Orden de 14 de agosto de 1.947, se establece la Reglamentación nacional para los trabajadores en contratas ferroviarias señalando la blasfemia como falta muy grave.

La Reglamentación de trabajo en las industrias de conservas vegetales de 29 de septiembre de 1.947 sanciona como - falta muy grave en el artículo 75 la blasfemia habitual.

La Orden de 20 de septiembre de 1.948 para las industrias del frío industrial considera en el artículo 74 como falta muy grave la blasfemia habitual.

La Reglamentación nacional de trabajo en las industrias lácteas de 6 de octubre de 1.947 señala en el artículo - 74 la blasfemia habitual como falta muy grave.

La Reglamentación nacional para las industrias de - galletas considera en el artículo 60 la blasfemia como falta

muy grave. La Reglamentación se puso en vigor a través de la Orden de 28 de noviembre de 1.947.

La Orden de 15 de noviembre de 1.947, que regula el trabajo de las industrias de bebidas carbónicas y jarabes, califica en el artículo 54 la blasfemia habitual como falta muy grave.

La Ordenanza de 3 de diciembre de 1.947 del Gobierno General de la Colonia de Guinea Ecuatorial sobre contratos de trabajo y aprendizaje hace una diferenciación según sea o no habitual la blasfemia. El artículo 69 señala entre las faltas graves "las blasfemias o expresiones groseras fuera del trabajo", y el artículo 70 considera como falta muy grave "la blasfemia habitual en el trabajo."

La Reglamentación del servicio de trabajo portuarios, por Orden del 15 de diciembre de 1.947, establece como falta muy grave la blasfemia en el artículo 97.

Por Orden del 2 de enero de 1.948 se regula el trabajo para el personal de laboratorio de prótesis dental y en el artículo 50 considera como falta muy grave la blasfemia siempre que ésta sea habitual.

La Reglamentación nacional para el trabajo de empresas fotográficas señala, por Orden del 31 de enero de 1.948, la blasfemia habitual como falta muy grave en el artículo 87.

La Reglamentación nacional para el comercio de 10 de febrero de 1.948 considera igualmente como falta muy grave la blasfemia habitual en el artículo 72.

La Orden del Ministerio de Hacienda del 23 de marzo

de 1.948 sobre el trabajo en el Banco de España, señala en el artículo 326 la blasfemia como falta muy grave, sin que sea necesario que sea habitual.

El Reglamento General de achicoria, café y malta del 23 de febrero de 1.948 establece en el artículo 55 como falta muy grave la blasfemia habitual.

En el mismo sentido está el Reglamento de Trabajo para Torrefactores de 10 de febrero de 1.943.

Por Decreto de 5 de marzo de 1.948 del Ministerio de Justicia se señala en el artículo 162 como falta muy grave el hecho de "proferir blasfemias, irreverencias o insultos contra las creencias religiosas".

La Orden de 21 de abril de 1.948 castiga como falta muy grave en el artículo 64 la blasfemia habitual, en el Reglamento para despachos y oficinas.

La Orden de 30 de abril de 1.948 para farmacéuticos señala igualmente como falta muy grave la blasfemia habitual en el artículo 54.

La Orden de 21 de mayo de 1.948 para confiterías, mazapán y churrerías regula como falta muy grave en el artículo 74 la blasfemia habitual.

En el mismo sentido están las Ordenes de 30 de junio de 1.948 y 22 de julio del mismo año para las minas y para las minas de Almadén, respectivamente, al considerar faltas muy graves la blasfemia habitual en los artículos 58 y 72.

La Orden de 9 de agosto de 1.948 regula la Reglamentación para Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, la cual señala como falta la blasfemia en el artículo 87.

La Reglamentación para el personal de pastas del 30 de septiembre de 1.948 establece asimismo en el artículo 65 - como falta muy grave la blasfemia.

En idéntico sentido está la Orden del 21 de diciembre de 1.948 para el Banco Exterior de España al regularlo en el artículo 88.

La Reglamentación de Trabajo en fábricas de botones, vestidos y tocado (Orden del 31 de diciembre de 1.948) señala en el artículo 67 como falta muy grave la blasfemia habitual.

La Orden del 31 de marzo de 1.949 para las industrias del pimentón sancional como falta muy grave la blasfemia habitual en el artículo 73.

La Reglamentación de la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" de combustibles líquidos y lubricantes S.A. por Orden del 23 de abril de 1.949 señala en el artículo 74 como falta grave la blasfemia no habitual y como falta muy grave la blasfemia habitual.

La Reglamentación para personal civil de establecimientos militares por Decreto de 16 de mayo de 1.949 establece como falta de despido la blasfemia en el artículo 70.

La Orden de 30 de abril de 1.949 para establecimientos de tintorerías regula en el artículo 64 como falta muy grave la blasfemia habitual.



En el mismo sentido la Orden del 18 de junio de - 1.949 para industrias de frutos secos al regular las faltas en el artículo 56.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que crea en el Ministerio de Justicia el Registro Público de Entidades Religiosas, y la disposición final de la citada Ley, que autoriza al Gobierno a dictar, a propuesta del Ministerio de Justicia, las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la organización y funcionamiento del citado Registro, el Boletín Oficial del Estado del 31 de enero de 1.981 publica el Real Decreto de 9 de enero de 1.981 sobre Organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros.

El artículo primero señala: "El Registro de Entidades Religiosas, creado de conformidad con lo establecido en el artículo quinto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, radicará en el Ministerio de Justicia, con carácter de Registro General y Público, y dependerá de la Dirección General de Asuntos Religiosos".

El artículo segundo señala las entidades religiosas que se inscribirán:

A) Las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas.

B) Las Ordenes, Congregaciones e Institutos Religiosos.

C) Las Entidades asociativas religiosas constituidas como

tales en el ordenamiento de las Iglesias y Confesiones.

D) Sus respectivas Federaciones.

La inscripción se practicará a petición de la respectiva Entidad mediante escrito al que se acompañe el testimonio literal del documento de creación debidamente autenticado o el correspondiente documento notarial de fundación o establecimiento en España.

Según el artículo tercero son datos necesarios para la inscripción:

A) Denominación de la Entidad, de tal modo que sea idónea para distinguirla de cualquier otra.

B) Domicilio que fije la Entidad.

C) Fines religiosos con respeto de los límites establecidos en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de cinco de julio de 1.980, al ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa.

En el caso de Entidades asociativas religiosas a que hace referencia el apartado C) del artículo anterior, el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse mediante la oportuna certificación del Órgano Superior en España de las respectivas Iglesias o Confesiones.

D) Régimen de funcionamiento y Organismos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

E) Potestativamente, la relación nominal de las personas que

ostentan la representación legal de la Entidad. La correspon  
diente certificación registral será prueba suficiente para acre  
ditar dicha cualidad.

Este mismo artículo tercero señala que, en lo no pre  
visto en este Reglamento, las inscripciones y anotaciones co-  
rrespondientes a Iglesias, Confesiones y Comunidades religio-  
sas que tengan establecido acuerdo o convenio de cooperación  
se practicarán de conformidad con lo que en los mismo se dis-  
ponga.

Después de presentada la petición de inscripción se  
rá examinada la misma y a continuación el Ministro de Justicia  
acordará lo procedente, previo informe cuando lo solicite de  
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Recordemos que di-  
cha Comisión la crea la Ley Orgánica de Libertad Religiosa en  
el artículo octavo y que estará compuesta de forma paritaria y  
con carácter estable por representantes de la Administración -  
del Estado, de las Iglesias, Confesiones o Comunidades Religioo  
sas o Federaciones de las mismas, en las que, en todo caso, es-  
tarán las que tengan arraigo notorio en España y por personas  
de reconocida competencia cuyo asesoramiento se considere de -  
interés en las materias relacionadas con la presente Ley. A la  
Comisión corresponden las funciones de estudio, informe y pro-  
puesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación de es  
ta Ley, y particularmente, y con carácter preceptivo, en la -  
preparación y dictamen de los Acuerdos o Convenios de cooperaa  
ción a que se refiere el artículo septimo de la Ley Orgánica  
de Libertad Religiosa.

Posteriormente se comunicará a los interesados el -  
acuerdo y si es positivo se les comunicará los datos de iden-

tificación de la inscripción practicada. La inscripción sólo podrá denegarse cuando no se acrediten debidamente los requisitos a que se refiere el artículo tercero.

El artículo quinto señala que la modificación de las circunstancias reseñadas en el artículo tercero será comunicada al Ministerio de Justicia en la forma prevista en dicho artículo para las peticiones de inscripción.

Tales alteraciones serán inscritas o anotadas , en su caso, en el Registro por acuerdo del Director General de Asuntos Religiosos y producirán los oportunos efectos legales desde el momento de la anotación. Contra dicho acuerdo procederá el correspondiente recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia.

Las resoluciones del Ministro de Justicia agotarán la vía administrativa y los interesados podrán ejercitar las acciones que previene el artículo tercero de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

El artículo séptimo regula el funcionamiento del Registro. El Registro se llevará por el sistema de hojas normalizadas, numeradas correlativamente, en las que se consignarán los datos requeridos por el artículo tercero, así como cualquier alteración de los mismos y, si se produce, la disolución de la Entidad.

Se habilitará una Sección especial para las inscripciones y anotaciones correspondientes a las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas con las que se hubieren establecido Acuerdos o Convenios de Cooperación.

Anejo al Registro y formando parte del mismo existi-

rá un expediente o protocolo por cada una de las Entidades que han sido inscritas, en el que se archivarán por orden cronológico, numerados correlativamente, cuantos documentos se produzcan en relación con la Entidad.

Según el artículo octavo, la cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosas no podrá llevarse a cabo si no es a petición de sus representantes legales debidamente facultados o en cumplimiento de sentencia judicial firme.

La disposición transitoria primera señala que las Entidades religiosas que gozan de personalidad jurídica sin hallarse inscritas en ningún Registro del Estado podrán solicitar su inscripción en cualquier momento, pero transcurrido el plazo de tres años desde la entrada en vigor del presente Reglamento sólo podrán acreditar su personalidad jurídica mediante la correspondiente certificación de hallarse inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

La disposición transitoria segunda dice que las inscripciones practicadas en los Registros establecidos por Decreto de doce de marzo de 1.959 y por la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1.967, que fué expresamente derogada por la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa, se trasladarán al Registro de Entidades Religiosas.

Se requerirá a las mismas a que, en su caso, aporten o completen la documentación a que se refiere el artículo tercero.

Transcurrido el plazo a que hace referencia la disposición transitoria primera, no se expedirán certificaciones re-

gistrales sino de aquellas Entidades que tengan completa su documentación.

Finalmente tenemos que recordar que, según dispone el número primero del artículo quinto de la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa, las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público que se crea en el Ministerio de Justicia.

#### ESTATUTOS DE AUTONOMIA

El Boletín Oficial del Estado del 22 de diciembre de 1.979 ha publicado los Estatutos de Autonomía para el País Vasco y Cataluña. (56). Ambos textos apenas hacen referencia a la cuestión religiosa, pero en ambos encontramos un artículo que salvuarda los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, y entre los que se encuentran la libertad de profesar cualquier tipo de confesión religiosa así como la práctica de cualquier acto de culto. La Ley Orgánica del 18 de diciembre de 1.979 de Estatuto de Autonomía para el País Vasco señala en el artículo noveno que: "1. "Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del país vasco son los establecidos en la Constitución". "2. Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia:

a) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos".

La Ley Orgánica del 18 de diciembre de 1.979 del Estatuto de Autonomía de Cataluña señala igualmente en el artículo octavo que "Los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Corresponde a la Generalidad, como poder público y en el ámbito de su competencia, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Recordemos que el Título Primero de la Constitución vigente se refiere a "Los derechos y deberes fundamentales" y en el artículo 16 se afirma y garantiza el derecho a la libertad ideológica y religiosa como derecho fundamental de la persona.

El Boletín Oficial del Estado del 14 de marzo de - 1.980 publicó la Ley de 10 de marzo del mismo año del Estatuto de los Trabajadores. En la misma la única referencia que - encontramos a la materia religiosa es en el artículo cuarto que regula los derechos laborales y en el apartado segundo letra c) señala el derecho "A no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, por la edad dentro de los límites enmarcados por esta Ley, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.

Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que se hallaren en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate".

El Boletín Oficial del Estado del día 11 de enero de 1.982 publica tres Leyes Orgánicas del 30 de diciembre de 1.981 por las que se aprueban los Estatutos de Autonomías para Andalucía, Asturias y Cantabria.

En el Estatuto de Autonomía para Andalucía encontramos en relación con el trabajo de la presente Tesis el artículo II, dentro de Título Preliminar, en el que se dice: "Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son los establecidos en la Constitución". Como ya hemos visto con anterioridad, el Título I de la vigente Constitución dentro de la denominación "De los derechos y deberes fundamentales", en el artículo 16 garantiza la libertad ideológica y religiosa.

El Estatuto de Autonomía para Asturias en el artículo noveno introduce la misma regla: "Los derechos y deberes fundamentales de los asturianos son los establecidos en la Constitución".

El Estatuto de Autonomía para Cantabria recoge en el artículo quinto un precepto parecido cuando dice: "Los ciudadanos de Cantabria son titulares de los derechos y deberes establecidos en la Constitución". Es interesante destacar el apartado segundo de este mismo artículo por la relación que tiene con el apartado primero en cuanto que dice: "Corresponde a la Diputación Regional de Cantabria, en el ámbito de sus competencias, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.



La Ley Orgánica de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 25 de junio de 1.983 (B.O.E. de 27 de junio de - - 1.983) ha supuesto una importante modificación en el Derecho Penal, y por tanto, en varios puntos objeto de estudio en la presente tesis.

En primer lugar debemos resaltar que, a pesar de ser otra la opinión general en el mundo de derecho, el delito de blasfemia continúa igual después de la reforma. El artículo 239 del Código Penal sólo ha sido modificado en cuanto a la cuantía de la pena de multa, que antes era de 20.000 a 100.000 pesetas y que ahora ha sido elevada de 30.000 a 150.000 pesetas. La misma elevación de la cuantía de la pena de multa se ha producido en la falta de blasfemia, del nº 1º del artículo 567 del Código Penal.

En segundo lugar debemos destacar el hecho de dejar sin contenido la circunstancia agravante nº 17 del artículo 10 del Código Penal (ejecutar el hecho en lugar sagrado). La exposición de motivos de la Ley Orgánica razona dicha supresión en que "suficientemente protegida en los oportunos tipos de delitos de libertad religiosa y el debido respeto a los sentimientos de esa índole, así como a los actos, cultos y miembros o ministros de todas las confesiones religiosas legalmente reconocidas, no se aprecia razón alguna para la subsistencia de la agravante genérica de ejecución del hecho en lugar sagrado, toda vez que entre aquellos delitos contra la libertad religiosa aparece modificado el artículo 206, que funde en una amplia fórmula los actuales artículos 205 y 206, de manera tal que no parece en modo alguno necesario aumentar la protección penal de la religión, su práctica y sus edificios con reglas punitivas que, en conexión con otros delitos distintos de los antes mencionados, carecen de sentido".

En la misma línea debemos de citar la supresión de la circunstancia agravante específica del nº 1º del artículo 516 en el delito de hurto ("si fuere de cosas destinadas al culto o se cometiere en acto religioso o en edificio destinado a celebrarlos"), así como en el delito de robo en el artículo 506 nº 2º ("edificio destinado al culto o en algunas de sus dependencias"). Ambas agravantes específicas han sido suprimidas y en su lugar se ha añadido la agravante del nº 2º del artículo 516 (en el hurto) y la nº 7 del artículo 506 (en el robo) de "cuando recaiga sobre cosas de valor histórico, cultural o artístico".

Finalmente, debemos de señalar la reforma que ha sufrido la Sección Tercera del Capítulo II del Título II del Libro II. Los antiguos "Delitos contra la libertad religiosa, la religión del Estado y las demás confesiones", han pasado a denominarse "Delitos contra la libertad de conciencia". La exposición de Motivos de la Ley Orgánica de 25 de junio de 1.983 señala que dicha Sección Tercera "aún no se había acomodado a un principio como el contenido en el artículo 16.3 de la Constitución que, además de establecer la aconfesionalidad del Estado, declara la libertad de conciencia y el respeto por igual a todas las creencias religiosas. Siendo así resulta evidente que la actual configuración de este grupo de delitos se opone al mandato constitucional, tanto por llevar implícita en su rúbrica misma una imagen de confesionalidad manifiesta abiertamente en el artículo 206, cuanto por tratar de modo expreso y preferente a la religión católica frente a otras creencias".

Todo ello ha supuesto, además de dejar sin contenido el artículo 206 ("ejecutar actos encaminados a abolir o menoscabar por la fuerza, como religión del Estado, la Católica - Apostólica Romana"), el suprimir cualquier mención a la Religión Católica refiriendose ampliamente a las confesiones reli-

gias no exigiendo que estuvieran "autorizadas" o "reconocidas" ni "inscritas" en el registro establecido al efecto", - (Registro de entidades religiosas" Real Decreto 142/1.981 de 9 de enero).

Al concluir la presente Tesis Doctoral llega a nuestro conocimiento la existencia de un "Anteproyecto de nuevo Código Penal" elaborado por el Ministerio de Justicia que se encuentra actualmente en estudio por varios profesionales del derecho y que supone una transformación profunda tanto en la tipología de los delitos como en la de las penas. Prueba de ello es que su entrada en vigor no se producirá hasta "al año de su completa publicación en el B.O.E.).

Dicho Anteproyecto suprime el delito de blasfemia - en base a no penalizar la ofensa a Dios, sino a los sentimientos religiosos o agnósticos. Se castigará con arresto de 12 a 24 fines de semana o multa de 6 a 12 meses tanto a los que hagan públicamente escárnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión alguna, como a los que ofendan los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa.

Tal ofensa podrá realizarse haciendo públicamente, de palabra o por escrito, "escarnio de sus dogmas, ritos o ceremonias" o vejando, también públicamente, a quienes los profesen; ultrajando públicamente, de hecho o de palabra, a sus ministros; destruyendo o profanando los objetos de veneración por los miembros de una confesión religiosa o los lugares donde practiquen su culto, o perturbando gravemente las funciones, ceremonias o manifestaciones de culto de cualquier confesión religiosa.

Asimismo, incurrirán en las penas de prisión de seis meses a tres años los que, por medio de violencia, intimidación

fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo, impidan a uno o varios miembros de una confesión religiosa practicar los actos del culto o asistir a los mismos, y los que, por iguales medios, fueren a otro a practicar o concurrir a actos de culto, a profesar una religión o a mudar de la que profesa. Si el responsable de estos hechos fuera una autoridad o funcionario, será sancionado, además, con la pena de inhabilitación especial de 8 a 14 años.

Finalmente, el Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 1.982, publica la Ley Orgánica de 9 de junio de - 1.982 referente al Estatuto de Autonomía de la Rioja así como la Ley Orgánica de la misma fecha referente al Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. (58).

En el Estatuto de Autonomía de La Rioja debemos destacar el artículo séptimo que dice: "Los ciudadanos de la Rioja son titulares de los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como poder público, y en el ámbito de sus competencias, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas".

El Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia en su preámbulo señala: "La Región de Murcia, en el pleno respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, impulsará el desarrollo de las distintas comarcas de la región sobre la base de unas relaciones armónicas que permitan terminar con los desequilibrios regionales internos". A continuación, y en el artículo noveno, debemos de destacar la referencia que hace a los derechos y deberes fundamentales: "Los derechos y deberes fundamentales de los murcianos son -

los establecidos en la Constitución para los españoles", y sigue diciendo que la Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia y a través de sus órganos, velará por garantizar el - adecuado ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de cuantos residen en la Región, así como la observancia de sus deberes, así como promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos - que impidan o dificulten su plenitud.

En el mismo sentido se pronuncian los Estatutos de - Autonomía aprobados con posterioridad.

c) J U R I S P R U D E N C I A

## J U R I S P R U D E N C I A

A continuación vamos a realizar un examen de las diversas sentencias que sobre la materia estudiada en la presente tesis doctoral encontramos.

Primero haremos una transcripción de las sentencias para después realizar un estudio de todas ellas sacando algunas conclusiones al estudiarlas en conjunto.

Respetando el orden cronológico, en primer lugar - encontramos la Sentencia de 8 de noviembre de 1.902. En ella se define la blasfemia como una ofensa a la moral y a las buenas costumbres, puesto que reconociendo como raíz y fundamento la idea de Dios, significa un menosprecio de Dios, la Santísima Virgen y los Santos, y se atenta contra los sentimientos de religiosidad a que todos deben de rendir respeto público.

La sentencia de 4 de enero de 1.906 no estima el - hecho como constitutivo de blasfemia, puesto que la sentencia recurrida afirma que, en presencia de varias personas, profirió algunas blasfemias, lo cual basta para incurrir en la sanción del artículo 586 nº 2 del Código Penal, sin que sea necesario especificar las frases inculpas en que aquellas consistieron, pues siendo blasfemia toda palabra injuriosa contra Dios o sus Santos, es evidente que al pronunciarlas en público se ofende a la moral y a las buenas costumbres, integrándose con ello la falta a que se refiere el citado precepto legal.

Tampoco se estima como delito el hecho motivo de la sentencia de 29 de marzo de 1.954. Señala que si el artículo 239 requiere para que las blasfemias constituyan delito el requisito de que produzcan grave escándalo público, cuya circunstancia niega la sentencia misma concurriese, los hechos procesales deben de calificarse de una falta incidental del nº 1º del artículo 567 del vigente Código Penal.

En el mismo sentido, la Sentencia de 2 de julio de 1.964 desestima el recurso fundándose en que las palabras - "grave escándalo público" con las que expresa el artículo - 239 del Código Penal, el requisito necesario para que la - blasfemia oral sea delito han de entenderse en su sentido literal y no cabe prescindir de una de ellas y sustituirla por una ampliación del significado de las restantes, por lo que, no constando en este caso que la blasfemia fuera oída por - más personas que la única que estaba presente, el escándalo no fué público.

SENTENCIA. 29 de marzo de 1.954. Injurias a la autoridad.-  
Blasfemia

Se declara probado, entre otros extremos que el - procesado con motivo de una discusión con su hermano en su casa del pueblo de J, pronunció las frases incriminadas, sin - que el hecho tuviera trascendencia pública.

La Audiencia estimó que los indicados hechos constituirían las faltas del nº 1º del artículo 567 y número 5º del 570, por lo que procedió a absolver al procesado de los delitos que se le imputaban con remisión de las actuaciones al - Juzgado correspondiente para la celebración del oportuno jui



cio de faltas.

Contra dicha sentencia se interpone por el Ministerio Fiscal: 1º Infracción del artículo 244 del Código Penal por inaplicación= 2º Infracción igualmente por inaplicación del artículo 239 del mismo Código.

El Tribunal Supremo declara haber lugar al motivo primero del recurso y no haber lugar al segundo.

CONSIDERANDO: Que procede aceptar el motivo primero del recurso pero no el segundo, pues así como la sentencia expone con manifiesto error que el artículo 244 del Código Penal exige trascendencia al público de las injurias dirigidas a la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, cosa incierta según aclara la lectura de ese texto legal, si requiere en cambio el artículo 239 para que las blasfemias - constituyan delito, el requisito de que produzcan grava escándalo, cuya circunstancia niega la sentencia misma concurriese, por lo que los hechos procesales deben calificarse de un delito de aquella clase nombrada al principio y de una falta incidental del nº 1º del artículo 567.

SENTENCIA. 24 de junio de 1.954. Blasfemia, Quebrantamiento de forma por predeterminación de fallo en los hechos probados.

Condenado el procesado en concepto de autor de un delito de blasfemia del artículo 239 del Código Penal, en virtud de los hechos que se deducen de la lectura de los consi-

derandos que a continuación se inserta, hechos que ya se consignaron por Auto de 16 de marzo de 1.954 (Rep. Jurisp. 580), se interpone a su nombre el presente recurso cuyo segundo motivo, amparado en el número 1º del artículo 851 de la Ley Procesal, -el primero fué enadmitido por el citado Auto-, alega que consigna en los hechos probados un concepto que por su caracter jurídico implica la predeterminación del fallo.

El Tribunal Supremo desestima el recurso.

CONSIDERANDO: Que la norma procesal que veda el empleo de los conceptos definidores de las infracciones penales en la declaración de hechos probados, quiebra cuando el delito que se persigue y juzga es el previsto en el artículo 239 del vigente texto refundido del Código Penal porque sería irreverente reproducir con toda su crudeza el ultraje a la Divinidad y a las cosas santas que la blasfemia encierra en su manifestación externa, única sancionable en la esfera penal, y como tanto en sentido gramatical, como jurídico e incluso en lenguaje vulgar se entiende por blasfemia toda expresión injuriosa proferida contra Dios, la Virgen o los Santos, al decir la sentencia recurrida que en el procesado con ocasión de una disputa con su conyuge blasfemó a grandes voces y repetidamente con grave escándalo de sus convecinos al hacerlo contra Dios y la Virgen, bien claramente dejó expresados los elementos integrantes del tipo penal, constituidos por la palabra blasfemia y - por el grave escándalo público que al ser oída produjo y no precisa retrotraer el procedimiento para que se dicte nueva sentencia en la que se omita la locución "blasfemó" y se sustituya por las frases vertidas por el recurrente, no solo por que como estas no se recogen en las paginas sumariales ni en el acta del juicio oral, no podría la Sala de instancia consignarlas, venciendo su justificado escrúpulo, y se vería - -

obligada a pronunciarse de nuevo en los mismos terminos, sino porque lo delicado de la materia aconseja no divulgar frases soeces y sacrílegas que manchan la boca del que las pronuncia y denigran al que las reproduce y que, sin transcribirlas literalmente, parece que resuenan en los oídos por tratarse de un vicio que, por desgracia, está muy arraigado y que se exterioriza con vocablos sobradamente conocidos que repugnan llevar al texto de una resolución judicial porque supondría una inelegancia espiritual y si esas consideraciones, se aña de que, de aceptarse la tesis que se propugna en el único motivo del recurso admitido, puesto que el de fondo se inadmitió por auto de esta Sala de 26 de marzo de 1.954 (Rep. Jurisp. 580), se iría francamente a la impunidad de tan execrable conducta, quedará más de relieve la necesidad de compartir en este caso especial, el punto de vista del Tribunal sentenciador, que tampoco quebrantó la forma, a tenor del número primero del artículo 851 de la Ley reformada de Enjuiciamiento criminal, al manifestar que las expresiones proferidas causaron grave escándalo, puesto que, si esas frases se hubieren omitido, quedaría imperfecta la figura delictiva que se sanciona y por todo ello, no puede prosperar el recurso de forma interpuesto.

SENTENCIA. 28 de octubre de 1.954. Delito de blasfemia.

Absuelto el procesado del delito de blasfemia del que fué acusado, con remisión del sumario al Juez de Paz correspondiente para que en ellas conozca en el correspondiente juicio. Se interpone a nombre del Ministerio Fiscal el presente recurso, con infracción del artículo 239 por inaplica-

ción.

El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso.

CONSIDERANDO: Que de la declaración de hechos probados aparece no solamente que las palabras injuriosas a Dios y a la Sagrada Eucaristia que profirió el procesado tiene el concepto penal de blasfemias, sino que esas reprobables expresiones se hicieron ante numerosas personas, en un lugar concurrido por ser a la salida de un baile público, y siendo esto así, es innegable que hubo una ofensa a los sentimientos religiosos de aquel vecindario, y que produjeron un verdadero alboroto e indignación a los muchos vecinos que las oyeron, por lo que las características del grave escándalo público, que el artículo 239 del Código Penal exige para que la blasfemia verbal sea delito se dan perfectamente y que, por consiguiente, el Tribunal de instancia debió calificar el hecho como constitutivo del delito de blasfemia, del artículo 239 del Código Penal, en vez de estimarlo, indebidamente como lo hizo, tan solo, como la falta del número primero del artículo 567, y en su virtud, el recurso de casación por infracción de la Ley, que fundado en este unico motivo, acogido al número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formuló el Ministerio Fiscal debe ser estimado para casar y anular la sentencia recurrida, dictando en su lugar la que proceda.

SENTENCIA. 17 de noviembre de 1.959. Blasfemia.

Condenado el procesado a la pena correspondiente, como autor de un delito de blasfemia del articulo 239 del Código Penal, se interpone a su nombre el presente recurso en -

cuyo único motivo se aduce, la infracción, por aplicación indebida del citado precepto, así como la del número primero del artículo 567 del citado Código, por su inaplicación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso.

CONSIDERANDO: Que al declararse probado en la sentencia de instancia que el procesado pronunció públicamente ante un conglomerado de vecinos, que las oyeron, frases insultantes para Dios, la Virgen y la Hostia Consagrada, no hay duda alguna que estas blasfemias proferidas por el recurrente en la vía pública produjeron el grave escándalo a que se refiere el artículo 239 del Código Penal, porque tuvieron que herir necesariamente los sentimientos religiosos de todos los que las escucharon y al estimarlo así el Tribunal (a quo) no infringió por aplicación indebida el precepto indicado, ni el artículo 567, número primero del mismo Cuerpo Legal, por su inaplicación, que está reservado para los casos en que - por el lugar, ocasión y demás circunstancias en que se blasfeme, aunque constituya siempre una ofensa a la moral y buenas costumbres no se produzca el grave escándalo que se sanciona como delito en el artículo citado en primer lugar, por todo lo que tiene que ser rechazado el único motivo del recurso que se ha formulado al amparo del número primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SENTENCIA. 15 de febrero de 1.960. Blasfemia. Imprudencia temeraria.

Se declara probado que el procesado, que había -

ingerido en unión de otros amigos abundante vino, en diversos establecimientos, y que se encontraba en estado de embriaguez, penetró en unión de estos, es el establecimiento de bebidas de doña Almudena G.P., continuando bebiendo vino, consumiendo primero un porrón y después, ante su insistencia y alboroto, le sirvieron otro, continuando promoviendo escándalo con su conducta y agredió a un convecino sin causarle heridas, profiriendo, en tal estado de embriaguez y a presencia de todos los concurrentes, frases ofensivas contra Dios y la Virgen, siendo expulsado entonces del local, cuya puerta de acceso fué cerrada, y al continuar escandalizando y aporreando la puerta, abrieron esta, dando entonces el procesado un golpe en ella, y al ceder y tener en tal momento doña Almudena la mano cerca de la pared, le aprisionó la mano la referida puerta, produciéndole heridas que tardaron en curar 93 días, habiéndole quedado una anquilosis en las articulaciones interfalángicas del dedo meñique de la mano izquierda, que le impiden su movilidad.

El procesado fué absuelto de los delitos de imprudencia temeraria y de blasfemia de que le acusaba el Ministerio Fiscal y fué condenado, como autor de una falta de blasfemia y de obra contra dos personas, con la concurrencia en ambas de la atenuante de embriaguez, a las penas de cinco días de arresto menor y multa de 500 pesetas por la primera y tres días de arresto menor y multa de 50 pesetas por la segunda.

Contra dicha sentencia, el Ministerio Fiscal recurre en casación, alegando: 1º. La infracción, por aplicación indebida, del nº 1º del artículo 567 del Código Penal, y la del 239 del mismo, por su inaplicación. 2º. La infracción del -

artículo 8º número 3º del citado Código, por su indebida aplicación, así como la del párrafo primero del 565, en relación con el número tercero del 420, por su inaplicación.

El Tribunal Supremo estima el recurso, casa y anula la sentencia de la Audiencia y condena al encartado, como autor de un delito de blasfemia, con la concurrencia de la atenuante de embriaguez, a la pena de un mes y un día de arresto mayor y multa conjunta de 1.000 pesetas y como autor también de un delito de imprudencia temeraria que, de mediar malicia constituiría el de lesiones del número tercero del artículo 420 del Código Penal, con la citada atenuante, a la de un mes y un día de arresto mayor, dejando subsistente los pronunciamientos de la recurrida en cuenta a la condena por la falta del nº 1º del artículo 585.

CONSIDERANDO: Que ante el recurso de casación interpuesto - por el Ministerio Fiscal, por entender infringido el artículo 239 del Código Penal, al no aplicarse, habiéndose hecho uso en cambio, e indebidamente, del párrafo primero del artículo 567 del mismo Cuerpo Legal, debe precisarse como la esencia del problema planteado estriba en la calificación de grave, o no, del escándalo determinado por haber proferido el procesado blasfemias en la ocasión a que se refieren los hechos probados y si se recuerda una clásica distinción, se tendrá que hubo grave escándalo activo al denostar el blasfemo las más veneradas denominaciones de la Divinidad misma y de máxima santidad, con escarnio a Dios y a la Santísima Virgen; en este aspecto, la entidad es irrebasable y hubo, del mismo modo, grave escándalo pasivo, indudable y enjuiciado así por los propios concurrentes al establecimiento público donde los hechos sucedieron como los arrojan estos mismos, en la medida del lu

gar y ocasión, sin mas que recordar como el procesado, embriagado y alborotador y a presencia (de todos los concurrentes) escandalizó y agredió a uno de ellos y fué no obstante, tolerado, pero a continuación profirió (frases ofensivas contra Dios y la Virgen, siendo expulsado entonces del local), o sea, que desde ese momento se agotó la transigencia, se determinó la repulsa traducida en acción, el total desagrado, la incompatibilidad ocasional, elementos todos demostrativos de un - grave escandalo, pasivo y activo, por lo que ante la estimación de esa calificación de gravedad, se impone la aplicabilidad del articulo 239 del Código Penal, lo que debe determinar por acogerse el motivo de recurrir, la casación de la sentencia.

CONSIDERANDO: Que del mismo modo debe recogerse el segundo motivo del mismo recurso por infracción de la ley, por cuanto no puede determinarse la presencia de caso fortuito ante una actuación que se inicia por el no lícito y si violento intento de irrumpir en un establecimiento de bebidas del que el - agente, por escandalizador y agresivo, ha sido expulsado y haciendolo no diligente y comedidamente, sino con aporreo de la puerta, con un fuerte golpe a la misma y con continuación de la violencia aprisionando la mano de persona que en establecimiento se encontraba; todo esto al faltar la licitud y la diligencia, aleja la posibilidad de aplicar el párrafo 8º del artículo 8º del Código Penal como lo hace la sentencia recurrida, y lleva, con relación de causa a efecto, a entroncar las lesiones sufridas por la perjudicada con la acción imprudencia, contraria a la más elemental previsión y diligencia de abrir violentamente una puerta de lugar que se conoce como concurrido en el momento y un golpe fuerte al abrir, aprisionando la mano de persona que entre otras se hallaba en el establecimiento, elementos todos en su lógico enlace llevan a la aplicabi-



lidad del artículo 565 del Código Penal, en su mayor gravedad de calificación de imprudencia punible, ya que la cometida, de haber mediado malicia configuraría el delito del artículo 420 número 3º del Código Penal, por lo que del mismo modo debe ser casada la sentencia en cuanto a este propósito.

SENTENCIA. 5 de diciembre de 1.961. Blasfemia.

Se declara probado que el procesado se dirigía a M. ocupando con varios viajeros un autobús de su propiedad y, en la carretera, dicho autobús, coincidió con otro que circulaba en dirección contraria, conducido por su propietario, Dionisio T.R. y, como quiera que este encendió innecesariamente al parecer, las luces de mayor intensidad de su autobús, deslumbrando al conductor del que avanzaba en sentido opuesto, el procesado se molestó por el proceder de Dionisio T. y ordenó que parase el automovil, y, descendiendo el procesado se acercó al otro omnibús y llevado de aquella molestia que vino a agudizar los resentimientos que abrigaba contra Dionisio, a causa de servir con sus vehículos la misma línea de viajeros, se dirigió a él excitado, y, en actitud colérica le dijo a voces que descendiera del autobús, que había de matarle, profiriendo, acto seguido, repetidas frases ofensivas contra Dios y la Virgen, que produjeron una acusada conmoción e intranquilidad entre los viajeros de los vehículos de referencia, que presenciaron los actos expuestos, realizados por el procesado, que continuó repitiendo las fra

ses ofensivas aludidas, hasta que fué reintegrado por algunos de aquellos viajeros a su autobús, sin que llegara a intentar acto alguno de agresión material contra Dionisio, que permaneció sentado en el interior de su coche.

El procesado fué condenado, como autor de un delito de blasfemias, del artículo 239 del Código Penal, a la pena de un mes y un día de arresto mayor y multa de 1.500 pesetas, y contra dicha sentencia se plantea el siguiente recurso de casación, en cuyo único motivo aduce la infracción del citado precepto, por su indebida aplicación.

CONSIDERANDO: Que las (freses ofensivas contra Dios y la Virgen) son ciertamente blasfemas y si de este género fueron las proferidas por el procesado, por cierto con reiterada persistencia, sin necesidad de ~~por~~ menorizaciones no útiles, sí, además se dió la nota de grave escándalo, será pertinente la aplicación del artículo 239 del Código Penal, que es el que el recurrente considera infringido en el presente recurso; tal escándalo está explícito en la relación de hechos probados, por cuanto los ocupantes de los dos autobuses, en número que no consta, pero que en el considerando primero de la sentencia impugnada no precisa eran numerosas personas y a ellas las blasfemias que el procesado profería (produjeron acusada conmoción e intranquilidad), perturbaciones emocionales las más típicas del escándalo pasivo, que por afectar a varios y en forma (acusada) hay que calificar de graves y sin que con la relación fáctica a la vista puede achacarse la conmoción y la intranquilidad a las amenazas, y no a las blasfemias, pues constando en los hechos que el procesado decía a su contrario (que había de matarlo profiriendo acto seguido frases ofensivas contra Dios y la Virgen que produjeron una acusada, etc) la copulativa -

(que) enlaza los efectos con las frases, no con las más lejanas amenazas las que según los hechos ni al mismo amenazante conmovieron, pues continuó sentado en su vehículo, en cambio si las frases blasfemas que el procesado (continuó profiriendo.... hasta que fué reintegrado por algunos viajeros a su - autobús), por todo lo cual presente, como se ha dicho, el escándalo grave, persistente, que afectó a numerosos sujetos pasivos hace precisa la desestimación del recurso, o por haberse atemperado el Tribunal (a quo), al aplicar el artículo 239 del Código, exactamente a lo que ordena el precepto legal.

SENTENCIA. 2 de julio de 1.964. Blasfemia.

Preceptos estudiados: C.P. artículos 239 y 567 nº 1º.

En el Resultando de hechos probados de la sentencia de la Audiencia se declara que el procesado, detenido en la Comisaria de Policía, al ser interrogado por un Inspector de Guardia, y sin estar presente ninguna otra persona, profirió la - frase que allí se cita.

Absuelto el procesado del delito de blasfemia de que le acusaba el Ministerio Fiscal, recurre este en casación, alegando la infracción, por inaplicación del artículo 239 del Codigo Penal.

El Tribunal Supremo estima el recurso, casa y anula la sentencia de la Audiencia, condenando al acusado, como autor de una falta de blasfemia del artículo 567 nº 1º, concurriendo la agravante 16 del artículo 10, ambos del Código Penal, a la

pena de diez dias de arresto menor y multa de 300 pesetas.

CONSIDERANDO: Que ante la interpretación restrictiva que en favor del reo merecen los preceptos penales las palabras (grave escándalo público) con las que se expresa el artículo 239 del Código Penal, el requisito necesario para que la blasfemia oral sea delito han de entenderse en su sentido literal y no cabe prescindir de una de ellas y sustituirlas por una ampliación del significado de las restantes, por lo que, no constando en este caso que la blasfemia fuera oída por más personas - que la única que estaba presente, el escándalo no fué público, ni era por consiguiente aplicable en la sentencia recurrida el citado precepto, si bien al quedar en ella impune el hecho, no obstante estar sancionado como falta en el artículo 567 nº 1º, de dicho Código, procede acoger en este sentido el único motivo del recurso alegado al amparo del artículo 849 nº 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SENTENCIA. 14 de noviembre de 1.966. Recurso de casación por quebrantamiento de forma: denegación de diligencia de prueba en procedimiento de urgencia; predeterminación del fallo en hechos probados. Recurso de casación por infracción de Ley; blasfemia, atentado; atenuante muy calificada de embriaguez.

Se declara probado que el procesado Blas M.B. que se encontraba fuertemente embriagado, pese a no ser ello habitual en él, penetró en una cafetería y como a consecuencia de ese estado de embriaguez en que se hallaba, molestase con actitudes y frases incorrectas a algunas de las personas allí congregadas, fué reconvenido en forma amigable y correcta por el Fiscal de Paz de la localidad Don Tomás M.C., concurrente también en

el establecimiento, más lejos de deponer el procesado, ante la reconvención que se le hacía, su inconveniente actitud, se encaró con el mencionado Fiscal de Paz -cuya condición le era perfectamente conocida-, insultándole con frases injuriosas, a la vez que, a grandes voces, profería graves y soeces ofensas contra el Santo Nombre de Dios y la Virgen, que todos los allí reunidos pudieron escuchar con la natural indignación y repulsa, ante lo cual el expresado señor M.C., en uso, no solo de las facultades de su cargo, sino en cumplimiento del deber que el mismo le imponía, manifestó al encartado que quedaba detenido al no poder tolerar tales ofensas contra la Divinidad, -mandando en consecuencia al dueño del establecimiento que requiriera la presencia de la Guardia Civil para la ejecución -de su orden de detención, ante cuya decisión reaccionó violentamente el encartado, quien esgrimiendo una navaja acometió, con evidente ánimo agresivo, a la mencionada autoridad, si bien la rápida intervención de algunos de los allí presentes, impidió que la agresión se consumara.

La sentencia de la Audiencia condenó al encausado, como autor de un delito de blasfemia del artículo 239 y otro de atentado a la autoridad del artículo 231, en relación con el último párrafo del 232, concurriendo la atenuante 2ª del artículo 9, todos del Código Penal, a las penas correspondientes.

Contra la expresada resolución la representación del encausado recurrió en casación, por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, alegando la predeterminación del fallo en hechos probados y la denegación de diligencia de prueba en los dos motivos de forma y en los de infracción de Ley la infracción del artículo 239, por su indebida aplicación, la del artículo 567 nº 1ª, por inaplicación en los dos primeros motivos, la del artículo 231 nº 2ª, por aplicación indebida, en el ter

cero y la de los artículos 9, circunstancia 2ª y 61 regla 5ª en los dos últimos motivos.

El Tribunal Supremo desestima el recurso.

CONSIDERANDO: Que de la lectura comparativa del parrafo 4º del artículo 659 y del árrafo 2º del artículo 793 ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en la redacción que dió al último el artículo 1º de la Ley de 3 de junio de 1.957 (Rep. 775), - claramente se desprende que mientras en el proceso penal ordinario cabe el recurso de casación, al amparo del nº 1º del artículo 850 de la misma Ley, cuando propuesta en forma una diligencia de prueba pertinente en el escrito de calificación, el Tribunal rechaza en el auto a que se refiere el citado artículo 659, siempre que se prepare oportunamente con la correspondiente protesta, en el procedimiento de urgencia para determinados delitos, objeto del Titulo III, Libro IV, de la Ley Procesal Penal, no se da dicho recurso cuando el Tribunal en el auto al que alude en el párrafo 1º del artículo 798 mencionado, inadmite pruebas de las propuestas en el escrito de calificación, pues en este caso, la parte agraviada ha de reproducir su petición en el momento previsto en la regla 1ª del artículo 800 y solamente si en dicho momento vuelve a ser rechazada la prueba, podrá la parte que la propuso preparar a interponer el recurso de casación que autoriza el referido nº 1º - del artículo 850; doctrina ya sentada anteriormente por este - Tribunal, entre otras, en la sentencia del 28 de enero de - - 1.963 (Rep. 322), que impide la estimación del segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, toda vez que el hoy recurrente no reprodujo su petición o proposición de prueba - documental en el momento antes aludido, a pesar de tramitarse la causa por el llamado procedimientos de urgencia.

CONSIDERANDO: Que al expresarse en la relación de los hechos declarados probados que el procesado (profería graves y soeces ofensas contra el Santo Nombre de Dios y de la Virgen), no incidió la sentencia en el vicio de forma que el artículo 851 número 1º inciso 3º, sanciona con la nulidad del fallo, pues tambien es Doctrina de esta Sala, proclamada en la sentencia del 24 de junio de 1.954 (Re. 1.694), (que la norma procesal que veda el empleo de los conceptos definidores de las infracciones penales en la declaración de hechos probados, quiebra - cuando el delito que se persigue y juzga es el previsto en el artículo 239 del Código Penal, porque sería irreverente reproducir con toda su crudeza el ultraje a la Divinidad y a las cosas Santas que la blasfemia encierra en su manifestación externa) y (porque lo delicado de la materia aconseja no divulgar frases soeces y sacrílegas que manchan la boca del que las pronuncia y denigran al que las reproduce y que, sin transcribirlas literalmente, parece que resuenan en los oídos, por tratarse de un vicio que, por desgracia está muy arraigado y se exterioriza con vocablos sobradamente conocidos que repugna llevar al texto de una resolución judicial, porque supondría una inalegancia espiritual).

CONSIDERANDO: Que al consignarse en aquella relación que el inculpado (acometió con evidente ánimo agresivo), tampoco incurrió la sentencia impugnada en el vicio procesal indicado en el considerando precedente, porque el verbo empleado: (acometer), lejos de encerrar un concepto estrictamente jurídico, - aunque coincida con uno de los utilizados por el legislador en el artículo 231 nº 2º del Código Penal, es una voz del lenguaje usual, cuyo significado puede ser aprendido por cualquier persona de cultura media, y porque en cuanto a los terminos referentes al (animus) que guió al procesado al esgrimir la navaja y acometer con ella al ofendido son totalmente supérfluos - para valorar en derecho la acción del encartado, cuando se cuen

ta con otros datos fácticos que paladinamente revelan el móvil y fin de la acción; razones que unidas a la del fundamento de derecho anterior, llevan a la desestimación del motivo primero de casación por quebrantamiento de forma.

CONSIDERANDO: Que son inconsistentes los dos primeros motivos de casación por infracción de Ley, en primer lugar, porque no es cierto que el Tribunal (a quo) omita en los hechos probados toda referencia al escándalo producido por las blasfemias proferidas por el acusado, ya que afirma de modo categórico que - (todos los allí reunidos pudieron escuchar con la natural indignación y repulsa), y, en segundo lugar, porque las circunstancias concurrentes en la ejecución del hecho, tanto las personales, como las relativas al lugar, tiempo, forma y ocasión, abonan la recta calificación formulada por el juzgador de instancia.

CONSIDERANDO: Que tampoco merece ser acogido el motivo tercero de fondo, pues para negar la concurrencia del dominado (dolo específico) se vale el recurrente de hechos extravagantes a los fijados formalmente por la Audiencia extremeña y para negar el (dolo genérico) se apoya en una tesis inaceptable, cual es la de la incompatibilidad de la intencionalidad de la acción con una embriaguez que, según el Tribunal de instancia, no llegó a excluir la imputabilidad del autor, valoración que ha de quedar incólume en casación por no haberla impugnado el recurrente.

CONSIDERANDO: Que los dos últimos motivos de casación por infracción de Ley, han de correr igual suerte desfavorable, ya que es doctrina constante de esta Sala que para apreciar una circunstancia atenuante como muy calificada es imprescindible que los hechos de que se derive sean capaces de producir en el ánimo - del agente una influencia que exceda en intensidad a la normal



señalada para que pueda ser estimada como genérica; condición que no concurre en el presente caso, respecto a la atenuante de embriaguez apreciada por la Audiencia, pues para ello no - basta que esta diga que el procesado se encontraba fuertemente embriagado.

SENTENCIA. 30 de enero de 1.968. Blasfemia.

Precepto estudiado: Código Penal artículo 239.

La sentencia de la Audiencia absolvió al procesado Santos U.B. del delito de blasfemia que se le imputaba y le - condenó como autor de una falta contra el orden publico del artículo 567 nº 1º del Código Penal, a la pena de diez dias de - arresto menor y multa de 1.000 pesetas.

Contra la expresada resolución el Ministerio Fiscal recurrió en casación alegando la infracción del citado precepto, por su indebida aplicación, y la del artículo 239 del mismo Código, por inaplicación.

El Tribunal Supremo estima el recurso y condena al procesado como autor de un delito de blasfemia del artículo - 239 con la concurrencia de la agravante 14 del artículo 10 del Código Punitivo, a la pena de cuatro meses y un dia de arresto mayor y multa de 5.000 pesetas.

CONSIDERANDO: Que la diferencia esencial del delito de blasfemia que prevé y castiga el artículo 239 del Código Penal y la falta de igual naturaleza sancionada en el nº 1º del artículo

567 del mismo texto legal, estriba únicamente, en que el hecho produzca o no grave escándalo público, y en el caso de autos, - las expresiones injuriosas contra Dios y la Santísima Virgen, se vertieron en el (Bar Manila) de M. motivando que al procesado le llamara la atención el dueño del establecimiento y uno de los - clientes, que ante la negativa del blasfemo a callarse, se vió obligado a ir en busca de un Agente de la Autoridad, produciendo indudablemente gran escándalo con la trascendencia consiguiente; independientemente, de que al ser detenido poco después el procesado en otro Bar, por el guardia y conducido a la Comisaria - de Policía, no volviera a proferir palabras injuriosas, el escándalo quedó consumado, cuando las profirió en el primer Bar - públicamente, hiriendo los sentimientos religiosos más íntimos de los allí presentes, por lo que procede acoger el único motivo de casación formulado por el Ministerio Fiscal, amparado en el N° 1º del artículo 849 de la Ley Procesal, casando la sentencia recurrida que se anula.

SENTENCIA. 6 de marzo de 1.969. Blasfemia: gravedad.

Precepto estudiado: Código Penal, artículo 239.

La sentencia de la Audiencia, entre otros pronunciamientos absolvió al procesado del delito de blasfemia de que era acusado y le condenó como autor de una falta de blasfemia del artículo 567 n° 1º del Código Penal, a la pena de tres días de - arresto menor y 3.000 pesetas de multa.

El Ministerio Fiscal recurrió en casación alegando la infracción del citado precepto, por su indebida aplicación, y la del artículo 239 del mismo Código, por inaplicación.

El Tribunal Supremo estima el recurso y en nueva sentencia que dicta, condena al encartado como autor de un delito de blasfemia del artículo 239 del Código Penal, concurriendo la atenuante de embriaguez y la agravante de reiteración, a la pena de tres meses de arresto mayor y multa de 5.000 pesetas, manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia casada.

CONSIDERANDO: Que la conducta del procesado, profiriendo palabras injuriosas contra Dios y la Virgen Maria, en plena via publica, ante 5 ó 6 hombres, minutos antes de las 2 de la noche del 26 de julio de 1.965, en el pueblo de Palacios de la Sierra, donde se celebraban las fiestas patronales, envuelve una actuación que rebasa con creces los limites de la falta de blasfemia sancionada en el nº 1º del artículo 567 del Código Penal, para entrar de lleno dentro de los supuestos del artículo 239 del mismo, dada la forma en que se desarrollaron los acontecimientos, vertiéndose las blasfemias ante 5 ó 6 personas, conglomerado de vecinos suficiente a producir el grave escándalo, al herirse sus sentimientos religiosos más íntimos, bastante por si solo, para su encuadramiento en la figura delictiva, a lo que ha de sumarse las circunstancias especiales del caso, hora, relativamente temprana, por ser pleno verano, estar la población celebrando fiestas locales y porque al final, dado el estado de embriaguez del procesado, tuvo que ser llevado al Ayuntamiento donde en un acceso de furor rompió a puñetazos una puerta y una estufa, lo que logica y naturalmente fué conocido por gran parte del vecindario, máxime tratándose de población no muy grande, por lo que procede acoger el recurso formulado por el Ministerio Fiscal al amparo del nº 1º del artículo 349 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por notoria infracción de los preceptos del Código Penal antes citados, casando la sentencia recurrida que se anula.

SENTENCIA. 2 de marzo de 1.971. Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Atentado. Blasfemia. Daños. Preterintencionalidad. Embriaguez. Reiteración.

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la representación del procesado Luis F.S. contra sentencia de la Audiencia en causa seguida al mismo por atentado a Agente de la Autoridad, blasfemias, daños y delito contra la seguridad del tráfico.

CONSIDERANDO: Que los cuatro motivos impugnatorios articulados en el presente recurso se amparan en el nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero, aduce la infracción por indebida aplicación del artículo 340 bis a) del Código Penal, la inaplicación indebida de la circunstancia 2ª del artículo 9º del propio Código, y de la agravante reiteración 14 del artículo 10. Basta contrastar la resultancia probatoria con la tipificación legal contenida en el números 1º y 2º del artículo 340 bis a), para afirmar que si se conducía en estado de embriaguez bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y que ello daba lugar a que se circulara dando bandazos con la creación de un riesgo inmediato y evidente para los demás usuarios de la vía pública, riesgo que estuvo a punto de convertirse en resultado dañoso al obligar a un conductor a salirse de la calzada para evitar la colisión; todo lo cual impone desestimar radicalmente este motivo, por cuanto la ingestión de bebidas alcohólicas con el efecto de conducir peligrosamente es la materia delictiva de este injusto penal, sin que la embriaguez muy frecuente en el acusado que la Sala de instancia califica después de habitual pueda ser apreciada como atenuante, - pues precisamente forma parte del tipo delictual y es el conducir embriagado con la peligrosidad que representa, la sustancia del precepto que ha servido de base de condena por este delito;

y aunque ciertamente debió aplicarse a este delito la agravante de reiteración por que en la escala general de penas la pena de arresto mayor esta reputada más grave que la de multa y privación del permiso de conducir, por lo cual si la anterior condena fué por lesiones a dos meses y un dia de arresto mayor esta pena es superior a la de multa y privación del permiso de conducir, lo que hacía aplicable la circunstancia 14 del artículo 10 del Código Penal, no obstante lo más el Tribunal condenó en la parte dispositiva solo por el grado mismo de las penas conjuntas de multa y privación del permiso de conducir, sin aplicar la agravación, pero debiendo tenerse en cuenta que no venía obligado a someterse a las reglas de aplicación de penas del artículo 61 según expresamente ordena el párrafo final de este artículo 340 bis a). Por lo expuesto este motivo es desestimable.

CONSIDERANDO: Que tambien lo es el segundo motivo que supone - infringido el artículo 236 en relación con el 231 y no aplicado el artículo 570 4º y 5º del propio Código. Efectivamente, si la resultancia afirma los graves insultos a los guardias municipales en acto de servicio y debidamente uniformados, el amenazarles gravemente con una navaja hasta el extremo de que no pudieron actuar contra él y necesitaron solicitar el concurso de la Guardia Civil que lo desarmó, no cabe la menos duda que pues - se dió una grave intimidación encuadrable en el nº 2º del artículo 231 en su relación con el artículo 236, vienen a resultar que los preceptos base de la condena por atentado fueron correcta y adecuadamente aplicados, y que no hay forma habil de degradar este ilícito proceder a la simple falta como pretendia el - recurrente

CONSIDERANDO: Que el tercer motivo pretende indebidamente aplicado el artículo 239 e inaplicado el nº 1º del artículo 567. -

Tampoco debe prosperar, pues los hechos probados evidencian que blasfemo el Santo nombre de Dios en presencia de numerosas personas que se encontraban en el bar, con tal trascendencia y perturbación del ambiente, que tuvo el dueño que requerir la presencia de los guardias municipales llegando a obligarle a abandonar el establecimiento varias personas de las que allí se encontraban; se dieron por consiguiente los tres esenciales elementos de publicidad; ofensa a la Divinidad; y grave escándalo y trascendencia entre los circunstantes, sin que pueda tampoco esta actuación, francamente delictiva, degradarse a los límites de una simple falta del nº 1º del artículo 567 reservado para las blasfemias sin publicidad y que no acaresen grave escándalo público. Es por consiguiente procedente rechazar este motivo de impugnación, como hizo antaño la doctrina de esta Sala en sentencia de 15 de febrero de 1.960, (R. 293) que contempla un supuesto plenamente parigual y coincidente.

CONSIDERANDO: Que el cuarto motivo siguiendo una directriz recurrente de impugnar todas las condenas y a toda costa, a pesar de la falta de viabilidad de las razones argumentales, pretende esta vez infringiendo por aplicación indebida el artículo 563 base de la condena por daños, e inaplicado el 559 y la circunstancia 4ª del artículo 9º, todos del vigente Código Penal. Si se dice en los hechos probados que voluntariamente se causaron daños en el mobiliario del bar valorados en 2.900 pesetas, estos hechos se encuadran ante la falta de cualificación en el artículo 563 base de condena, sin que se vislumbre la posible aplicación del artículo 559, que sin duda por error se alega, puesto que su aplicación excediendo de los daños, causados de 2.500 pesetas y teniendo en su consecuencia un caracter delictual, supondría imponer una pena superior a la que se contradice; y sin que haya tampoco posibilidad de encajar la conducta dañosa del recurrente, dada la entidad de los daños y la forma

de realización, en ninguno de los supuestos de faltas de daños, siendo por último desestimable la pretensión de que se estimara la falta de intención atenuatoria-preterintencionalidad 4ª del artículo 9º, pues nada hay, ni en la forma de realizar los hechos, ni en su producción dañosa, que permita aceptar que entre los actos y sus consecuencias haya una manifiesta inadecuación y que los resultados hayan ido más allá de la volición del acusado. Desestimados todos los motivos debe confirmarse la benévola sentencia del Tribunal Provincial en todas sus partes.

SENTENCIA. 30 de mayo de 1.973.- Recurso de casación por quebrantamiento de forma; contradicciones en hechos probados. Recurso de casación por infracción de ley; blasfemia y escándalo público; pluralidad de delitos.

Se declara probado que sobre las 21 horas del 11 de noviembre de 1.971 el procesado Jesus L.T., con ocasión de salir del Club C. Textil, hallándose en dicha calle acompañado - de dos amigos, se desabrochó la bragueta y sacó sus órganos genitales, exhibiéndolos y produciendo el consiguiente alboroto entre las varias personas que pasaban por la calle, a la vez que dando grandes voces decía:(me cago en Dios).

La sentencia de la Audiencia condenó al encartado como autor de un delito de escándalo público del artículo 431 - del Código Penal a la pena de tres meses de arresto mayor y - multa de 10.000 pesetas y como autor de un delito de blasfemia del artículo 239 del mismo Código, a la pena de tres meses de arresto mayor y 10.000 pesetas de multa.

Contra la anterior resolución recurrió en casación el encartado aduciendo los motivos que se estudian en los siguientes considerandos.

El Tribunal Supremo desestima su recurso.

CONSIDERANDO: Que en el primer motivo que se ampara en el nº 1º del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega que en la sentencia recurrida se incurre en manifiesta contradicción entre los hechos que se consideran probados, por cuanto que es evidente que (C Textil), no es un Club, sino el establecimiento mercantil del denunciante; y ha de ser desestimado, pues lo que resulta evidente es que la contradicción que se destaca no se produce entre los hechos declarados probados, que es lo que el precepto invocato y en determinadas circunstancias, por el resultado comparativo de las dos afirmaciones contenidas en el relato, sanciona con la nulidad de la sentencia, a medio de la casación, pero no abarca el caso planteado, en el que se contrapone lo afirmado en el relato, sanciona con la nulidad de la sentencia, a medio de la casación, pero no abarca el caso planteado, en el que se contrapone lo afirmado en el relato, con la realidad exterior, - que se dice es diferente, debido a la mala interpretación de la prueba, lo que en su caso, de existir documentos auténticos que lo acrediten y ser verdaderamente importante el error para la acertada calificación jurídica, sería posible su acogida de haberse elegido otro cauce distinto.

CONSIDERANDO: Que el segundo motivo, ya en el campo de la infracción de ley, se formula al entender que no han sido considerados y por tanto infringidos en el momento de dictar sentencia, los artículos 68 y 71 del Código Penal, por cuanto no han existido los delitos independientes punibles de por sí, sino que a tenor de dichos artículos no se puede hablar mas que uno solo; preceptos que no son aplicables al caso debatido, porque el artículo 68 se



refiere al llamado concurso de leyes, osea, como literalmente dice esta norma, cuando los hechos sean susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos del Código, lo se-rán por aquel que aplique mayor sanción al delito o falta come-tidos; es decir, que se requiere una sola acción, que sea in-cardinable en dos o más preceptos legales que se excluyan entre sí, resolviéndose el conflicto dando preferencia al que mayor sanción señala; y el artículo 71 se refiere a no ser aplicables las disposiciones sobre cumplimiento sucesivo de penas a que - alude el articulo anterior, cuando un solo hecho constituya - dos o más delitos, cuando uno de ellos sea medio necesario pa- ra cometer otro, en que se impondrá la pena del delito más gra- ve, en su grado máximo, con la limitación de no rebasar la su- ma de las penas de los dos delitos; de todo lo que se deduce - que los dos preceptos, contemplan el caso de una sola acción hecho, y en el sometido a nuestra consideración, se trata de - dos hechos distintos y separados entre si, castigados en distin- tos titulos del Código, cada uno, con su propia naturaleza e - intención delictiva, pues en la blasfemia, se ofende a Dios, fal- tando a la reverencia que se le debe, y en el escándalo públi- co se atenta al pudor y a las buenas costumbres; por todo lo - cual un solo hecho no puede dar origen a delitos tan distintos en su origen y en su fin, aunque tengan de común el escándalo que produzcan, el uno por las palabras pronunciadas, y el otro por los hechos realizados y esta consecuencia no puede unir la sustancia de los delitos.

SENTENCIA. 18 de marzo de 1.975. Blasfemias. Desordenes públi- cos.

El Tribunal de Orden Público condenó al procesado -

Manuel P.G. como autor de un delito de blasfemia y otro de desórdenes públicos, concurriendo la agravante 2ª del artículo 9 del Código Penal, a las penas de dos meses de arresto mayor por cada uno y además por el primero multa de 10.000 pe  
setas.

Contra la anterior resolución recurrió en casación el encartado alegando los motivos que se analizan en los siguientes considerandos.

El Tribunal Supremo estima el recurso y dicta nueva sentencia en la que absuelve al procesado de los delitos de blasfemias y desórdenes públicos de que era acusado y le condena por una falta de blasfemia a la pena de diez días de arresto menor y multa conjunta de 1.000 pesetas y por la falta contra el orden público a 1.000 pesetas de multa y represión privada.

CONSIDERANDO: Que en los cuatro motivos del recurso, todos ellos amparados en el nº 1º del artículo 849 se denuncia: en el primero la inexistencia del delito de blasfemia previsto en el artículo 239 por no haber provocado las proferidas, gr  
ave escándalo; en el segundo, que al faltar el grave escándalo, solo constituye la falta de blasfemia del artículo 567-1º; en el tercero, que no existe el delito de desórdenes públicos del artículo 248 porque no se produjo alteración del órden  
público, y en el cuarto, que solo existió una falta contra el orden público causante de perturbación o escándalo con su embriaguez. El haberse realizado los hechos constitutivos de las infracciones penales simultaneamente, en el mismo lugar y oca  
sión, ante pública concurrencia, en un establecimiento públi  
co, y sin práctica solución de continuidad permite un examen unilateral y conjunto de las cuatro motivaciones impugnato -  
rias.

CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que las blasfemias fueron proferidas con publicidad en un momento de exaltación alcohólica que le resta intensidad volitiva en un delito predominantemente intencional, también lo es, que no hay en la resultancia probatoria elemento alguno que permita afirmar que el pronunciamiento de las frases blasfematorias produjeran en los circunstantes, escándalo y mucho menos que fuera grave, y que ni tan siquiera los presentes se sintieron molestos ni heridos en sus sentimientos religiosos por lo que no hay términos hábiles para estimar cometido el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal, que exige y requiere en las blasfemias verbales, aparte la publicidad, la producción del grave escándalo. La no constancia de este esencial presupuesto delictivo relega la responsabilidad contraída a la simple falta de blasfemias sin escándalo del nº 1º del artículo 567 del Código Penal, lo cual supone que deben estimarse los motivos primero y segundo del presente recurso.

CONSIDERANDO: Que también deben prosperar los motivos tercero y cuarto, aunque con ligero cambio de la valoración calificadora pues las frases pronunciadas en plena euforia alcohólica aunque lo fueron en lugar público, en establecimiento público, y ante unas veinte personas, no puede deducirse de los hechos probados, por falta de intencionalidad muy disminuida en un embriagado, que tengan la entidad suficiente para excitar a la rebelión, o sedición ni alterar gravemente el orden público, - sin que el haber pronunciado las frases que la resultancia - detalla procedentes de un beodo, haya tenido más trascendencia que causar leve perturbación del orden público prevista como falta no como delito en el número 4º del artículo 570.

CONSIDERANDO: Que estimable el recurso debe anularse la sentencia recurrida y dictar segunda en el sentido expresado.

SENTENCIA de 14 de mayo de 1.977.- Desacato; blasfemia; atenuante por analogía.

La sentencia de la Audiencia, entre otros pronunciamientos, condenó al procesado Antonio A. L. como autor de un delito de desacato a la autoridad y de otro de blasfemias, a las penas e indemnizaciones correspondientes.

Contra la anterior resolución recurre en casación el procesado, alegando los motivos que se estudian en los considerandos que transcribimos.

El Tribunal Supremo desestima el recurso.

CONSIDERANDO: Que el artículo 240 del Código Penal regula el llamado delito de desacato propio, es decir, aquel en el que la injuria, el insulto, la calumnia o la amenaza se dirigen al Ministro o Autoridad, que se halla en ejercicio de sus funciones, o en contemplación de las mismas, de hecho o de palabra, en su presencia, o en escrito que les dirijan, obedeciendo al mayor rigor punitivo respecto al desacato impropio descrito en el artículo 244 del Código Penal, a que el legislador, con acierto indiscutible, estima mucho más ofensivo y denigrante para el principio de la Autoridad que encarna y representa el sujeto pasivo, que la injuria, la calumnia o la amenaza verbales o reales, se dirijan al recipiendario o destinatario de las mismas, con el mayor descaro e irrespetuosidad, directamente y sin intermediarios, ante su propia faz y ser físico, o bien por escrito que, al dirigirse a la propia autoridad, ha de ser conocido directamente por la misma, la que sufre el escárnio y el ultraje afrentoso tan pronto lea y se percate del contenido del citado escrito, experimentando, con zozobra y sobresalto, la mengua

y el vilipendio emanados de los terminos agraviantes en que ha sido redactado el mismo.

CONSIDERANDO: Que, en el caso presente, solo la retorsión del relato fáctico de la sentencia de instancia y la mutilación del mismo, amputando parte de su contenido o añadiéndole por menores que dulcificarían la conducta del procesado de ser ciertos pero que, desgraciadamente para el, no constan en el texto de dicho relato, permitirían sostener que las desvergonzadas y groseras palabras dirigidas al señor Juez de Instrucción de S. y las amenazas de muerte y de destrucción de sus bienes, fueron vertidas fuera de su presencia, toda vez que, el mencionado relato, bien claramente, y de modo rotundo, expresa que, el imputado, mirando agresivamente -lo que no hubiera podido ocurrir de no hallarse ante él- a la Autoridad referida, y alzando los brazos amenazadoramente, en plena vía pública, a unos cinco o seis metros de distancia, y conociendo perfectamente quien era, de los presentes, es señor Juez, le dirigió las frases soeces que no es preciso reproducir; todo lo cual significa, inequívocamente, que, sin necesidad de violar la ley física de impenetrabilidad de los cuerpos, el procesado se hallaba delante de la mentada Autoridad, a muy poca distancia, y que quiso y consiguió que ésta percibiera, directa y en grave detrimento de su prestigio, de su honor y de su condición pública, las afrentosas y ofensivas frases, logrando, de este modo, el efecto mortificante e intimidador pretendido, y produciendo, ineluctablemente, -cuando la Autoridad está de cuerpo y espíritu presente, y recibe de modo inmediato y sin paliativos, la injuria, la falsa imputación o el anuncio de un mal determinado, futuro o posible, ilícito e independiente de la voluntad de quien lo hace. Procediendo, en consecuencia, la desestimación del primer mo

tivo del recurso fundado en el n° 1° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que ciertos epítetos o calificativos llevan consigo tal carga ofensiva que, "in re ipsa", es decir, por sí mismo y casi sin necesidad de examinar el entorno o la circunstancialidad en que fueron proferidos, deben reputarse injuriosos a efectos de los artículos 457 y 458 del Código Penal, - así como vertidos con la presencia del elemento subjetivo del injusto denominado "animus injuriandi", siendo el agente, en su caso, al que corresponderá acreditar que fué otro el propósito que le guió, y que no estaba en su ánimo o en su intelecto la idea de zaherir, agraviar o vilipendiar a otro; y, en el caso aquí analizado, y prescindiendo de las frases constitutivas de amenazas que no han sido el tema del "dubio" de este recurso, las otras, que no es preciso citar expresamente, son de tan grosera magnitud y tan gravemente insultantes, que resultan empeño vano y hasta pueril e irrisorio, el pretender - que se dijeron en un estado de excitación no probado o que el procesado no deseaba vejar o deshonestar al señor Juez a pesar de calificarle con soeces términos, de marido engañado y consentidor de su deshonor, atribuyéndole, además, filiación ilegítima derivada de una genitora indigna y deshonesto. Así pues, procede la desestimación del segundo motivo del recurso basado en el n° 1° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal, en relación con el "animus injuriandi".

CONSIDERANDO: Que el delito de blasfemia, previsto y penado en el artículo 239 del Código Penal, ostenta un doble carácter antijurídico pues, de un lado, es un delito religioso por cuanto supone una ofensa a la Divinidad, y de otro, constituye una -

infracción de las normas de convivencia ciudadana así como una vulneración de los sentimientos religiosos y de cultura de la comunidad. En el Derecho Canónico conserva el doble carácter de herética y vulgar, es decir que se distingue entre la herejía y la mera blasfemia imprecativa, pero en el Código Penal se incluye entre los delitos contra la seguridad interior del Estado porque no es propiamente la injuria a la Divinidad lo que se incrimina (la "Lesá Magestad Divina" de la que se trataba en la Novella 77 de la Copilación Justiniana) sino la ofensa a las más elementales normas de convivencia ciudadana y al sentimiento de las personas cultas, pudiendo provocar encontradas opiniones y secue alteración del orden público; pudiendo agregar que la denominada blasfemia dogmática no subsiste en casi ninguna legislación dada la libertad religiosa imperante, superviviendo únicamente la blasfemia imprecativa o de simple y grosera burla o de soez epíteto dedicado a las personas divinas o a los atributos esenciales de la fé. Por blasfemias, con arreglo al Diccionario, se entiende "palabra injuriosa contra Dios y sus Santos", pero como, además de las palabras caben actos, abstracción hecha de las blasfemias orales o escritas pueden haber gestos blasfemos de burla, de mofa o de escárnio, entendiendo la doctrina que se castiga sólo las blasfemias inmediatas contra Dios, lo cual significa contra cualquiera de las tres personas que integran la Santísima Trinidad, o contra las Sagradas Formas como Corporización del Cuerpo y Sangre de Cristo, siendo evidente que no es extender el concepto demasiado cuando se dice que las blasfemias son "convitium contra Deum vel Santos", y así el artículo 234 del Código Penal de 1.822 las definía como "imprecaciones contra Dios la Virgen o los Santos", y el artículo 470 del Código de 1.848, se refería, como contravención, a la blasfemia pública de Dios, la Virgen, los Santos o de las cosas sagradas, y la Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1.945, estimó que blasfemar era proferir palabras injuriosas para Dios, la Virgen o los Santos.

CONSIDERANDO: Que el Código vigente dedica a la blasfemia un doble tratamiento punitivo, como delito, en el artículo 239 ya citado requiriendo forma escrita y con publicidad, o palabras o actos que produzcan grave escándalo público, y como falta, en el nº 1º del artículo 567, cuando sean orales y no produzcan grave escándalo público. Y a los efectos del presente recurso, cabe añadir que las sentencias de este Tribunal de 15 de febrero de 1.960, 5 de diciembre de 1.961, 14 de noviembre de 1.966, 30 de enero de 1.968 y 6 de marzo de 1.969 estimaron que concurría el grave escándalo público, entendido como lesión y ofensa de los sentimientos religiosos de los demás, cuando las blasfemias orales se profirieron en establecimientos públicos, ante los pasajeros de dos autobuses, en presencia de los clientes de una cafetería, en un bar, y, en general, ante varias personas en la vía pública, cuyo sentido de convivencia pacífica y de respeto a las convicciones ajenas, quedó ultrajado y menospreciado con las imprecaciones que públicamente se dirigieron contra Dios, contra la Virgen o contra los Santos.

CONSIDERANDO: Que, en el caso estudiado, las frases defecatorias o escatológicas dedicadas por el procesado a Dios y a la Virgen, fueron proferidas a las 19,45 horas, en las inmediaciones del Juzgado de Instrucción, en plena vía pública de una localidad que es sede episcopal, ante el señor Juez de Instrucción del Partido, y ante los señores Fiscal Comarcal, Médico forense y agente judicial, más otra persona que les acompañaba, siendo oídas por ellos y por algunos transeuntes, "con la natural y lógica repulsión", lo que significa que, independientemente de los testigos presenciales de tan bárbaras e inciviles palabras heridos en sus sentimientos religiosos, lo sucedido ante personas tan calificadas, tuvo necesariamente que resonar, trascender y divulgarse en todos los ámbitos de la localidad referida, originando forzosamente la indignada



repulsa y la execración que constituyen la esencia del grave escándalo requerido inexcusablemente por el artículo 239 del Código Penal, siendo procedente por tanto, la repulsión conjunta de los motivos tercero y cuarto del recurso sustentado en el nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por aplicación indebida del mentado artículo 239 e inaplicación del artículo 567 nº 1º del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que lo pretendido por la representación jurídica del procesado, más que la aplicación de una atenuante analógica comprendida en el nº 10 del artículo 9 del Código Penal, en relación con el nº 9 del mismo precepto, es la estimación de una atenuante incompleta, figura todavía no admitida en la legislación española, toda vez que reconociendo lo tardía y extemporáneo de la satisfacción deferida al ofendido y la falta de auténticos estímulos de dolor, contricción, pesar o aflicción que determinaron al procesado a solicitar el perdón del Señor Juez de S., resulta sin embargo que, el mentado acusado, dirigió, desde la carcel, una carta al mencionado señor Juez, pidiéndole perdón y solicitando, al propio tiempo, la libertad, lo que, según el recurrente, no constituye el "subtractum" - fáctico de la atenuante novena del artículo 9 del Código Penal despojada de sus elementos psicológicos -a aimpusos de arrepentimiento espontáneo y cronológico- antes de conocer la apertura del procedimiento judicial, sino una circunstancia parecida, similar o análoga a la citada; procediendo la resulsión del quinto motivo basado en esa fundamentación, no sólo porque, - como ya se ha dicho, no se trata de una circunstancia análoga a la novena del artículo 9, sino la misma circunstancia carente de dos de sus elementales requisitos, sino porque el perdón que el procesado quiso obtener del señor Juez ofendido, más - parece astuto e hipócrita expediente para lograr la cesión de su justa detención que íntimo pesar nacido de su íntima convicción, adquirida con la meditación, de haber obrado cerril, - -

irrespetuosa y desconsideradamente con quien no mereció tan inadecuado trato, y sobre todo, porque de cualquier manera, ha biendo aplicado, el Tribunal "a quo", las penas procedentes en el límite inferior del grado mínimo, no podría tener ninguna - consecuencia práctica y beneficiosa para el reo la estimación de la susodicha atenuante.

SENTENCIA. 12 de enero de 1.978. Audiencia Provincial de Vitoria.

RESULTANDO: Que en referidas diligencias preparatorias se dictó sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Instrucción del nº 1 de los de esta capital, en funciones en el nº 2, con fecha 29 de octubre de 1.977, cuyo Resultando de hechos probados dice literalmente así: Resultando probado y así se declara: Que el día 4 de junio del corriente año, sábado, sobre las veintidos horas, el acusado en la presente causa T.C., mayor de edad, y ejecutoriamente condenado por un delito de circulación ilegal, se encontraba cenando en compañía de varios amigos en el Restau rante del Círculo de Amigos Vitorianos de esta ciudad, hallándo se dicho local casi lleno por otros clientes, momento en el que el acusado pronunció la frase "me cago en Dios", en voz y repetidamente, lo que fué advertido por las personas allí presentes, hasta el punto de que tuvo que acudir el gerente del establecimi ento para acallar al acusado, advirtiéndolo de la expulsión si persistía en su actitud.

RESULTANDO: Que el fallo de dicha sentencia es del tenor literal siguiente: Fallo: Que debo condenar y condeno al acusado en la presente causa, Teódulos Camarzana Maillo, como autor res-

ponsable de un delito de blasfemia, a la pena de dos meses de arresto mayor, diez mil pesetas de multa, con arresto sustitutorio de diez días en caso de impago, accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante la condena, así como al pago de las costas procesales. Ratifico el auto de insolvencia dictado en la correspondiente pieza de responsabilidad.

CONSIDERANDO que los hechos declarados probados en la sentencia apelada, en esta aceptados, son legalmente constitutivos de un delito de blasfemia previsto y penado en el artículo 239 del Código Penal, porque del relato fáctico surgen con evidencia - las circunstancias del lugar, hora y concurrencia de personas que revelan no sólo la publicidad, sino la gravedad del escándalo que se produjo en los clientes del restaurante del Circulo Vitoriano de esta capital, a la sazón casi lleno, a las veintidos horas del 4 de junio del pasado año, llegando los asistentes, ante la persistencia del acusado en su actitud y la repetición de la frase blasfema, a requerir la intervención del gerente o encargado del restaurante, que amonestó al encartado - hasta el punto de conminarle con la expulsión, todo lo cual revela una gravedad en los hechos que excede de la simple falta - prevista en el artículo 567, número 1º del Código Penal, sin - que sea de aplicación la sentencia del Tribunal Supremo, que - se cita por la parte recurrente, de fecha 18 de marzo de 1.975 (Rfa. Ar. 1.983), en cuyo supuesto de la "resultancia probatoria" no se deducía elemento alguno que permitiese afirmar que "el pronunciamiento de las frases blasfematorias produjese en los circunstantes escándalo ni mucho menos que fuera grave, y que ni tan siquiera los presentes se sintieron molestos ni heridos en sus sentimientos religiosos", siendo así que, por el contrario, en el caso de autos los numerosos clientes del res-

taurante -uno de los más céntricos de la ciudad-, se llegaron a sentir tan escandalizados y molestos -no importa la determinación de si en sus sentimientos religiosos o de cultura- que requirieron la intervención del gerente del establecimiento, quien hubo de llamar seriamente la atención del inculcado, conminándole con el abandono del local, circunstancias de lugar, ocasión, hora y número de personas presentes, que obligan a la aplicación de la doctrina contenida en sentencias tales como las de 5 de diciembre de 1.961 y 6 de marzo de 1.969, del Tribunal Supremo, en cuya virtud la persistencia en el pronunciamiento de frases injuriosas contra Dios ante varias personas en lugar público rebasa con creces los límites de la simple falta para entrar de lleno en los supuestos del artículo 239 del Código Penal, en atención a las mencionadas especiales circunstancias del caso al darse el grave escándalo público que contempla el tipo penal.

SENTENCIA. 31 de marzo de 1.979. Injurias al Jefe del Estado. Blasfemia. Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas: privación del permiso de conducir.

La sentencia de la Audiencia condenó al procesado - como autor de los delitos de injurias al Jefe del Estado, desacato, blasfemias y conducir el vehículo de motor bajo influencias alcohólicas, con la atenuante calificada de transtorno mental transitorio, a las penas de 6 meses y un día de prisión menor por el primero de los delitos y a las penas de multa de - - 10.000 pesetas y de 5.000 pesetas ambas multas para cada uno - de los delitos siguientes, y a la de 10.000 pesetas y privación del permiso de conducir por un año para el último de los delitos.

Contra la anterior resolución recurrió el procesado en casación alegando los motivos que se analizan en los siguientes Considerandos.

El Tribunal Supremo estima el recurso por el motivo quinto y dicta nueva sentencia en la que previa su absolución por el delito de blasfemia de que venía acusado, condena al procesado como autor de un delito de injurias contra el Jefe del Estado, otro de desacato por injurias al Jefe del Gobierno, otro de conducción de vehículo de motor en estado de embriaguez y una falta de blasfemias que no produjeron grave escándalo público, con la atenuante de trastorno mental transitorio incompleto, a las penas de seis meses y un día de prisión menor por el primero, a la de 10.000 pesetas por el segundo, a la de 10.000 pesetas de multa y privación del permiso de conducir por un año por el tercero y a la de cinco días de arresto menor y multa de 2.500 pesetas por la falta.

CONSIDERANDO: Que son elementos esenciales del delito de injurias, expresiones proferidas o acciones ejecutadas en descrédito, deshonra o menosprecio de una persona, cuando ésta sea la intención de quien realiza tales actos, requisito este que siempre se supone, a menos que por la forma y manera de la realización de los hechos se demuestre por modo claro y evidente ser otro el propósito de quien pronunció tales palabras o realizó tales acciones.

CONSIDERANDO: Que las frases consignadas en el Resultando correspondiente de la sentencia contradicha, anteriormente inserto, reúnen por su significación gramatical y acepción común la condición de gravemente injuriosas, infiriéndose el ánimo de denigrar, escarnecer, desacreditar, menospreciar y desprestigiar a las personas a las que se dirigen del modo y lugar en que se

profirieron y de la ocasión y móvil que las determinaron, sin que el estado de embriaguez no habitual en que se encontraba el agente, cualquiera que fuese su importancia, caracteres y condiciones en el orden moral y físico, y que dió motivo a la estimación de la dudosísima eximente incompleta de trastorno mental transitorio, afecta a la naturaleza y calificación de los hechos perseguidos, porque sólo extiende su influencia - respecto al grado de responsabilidad del condenado, conforme a constante doctrina de este Supremo Tribunal.

CONSIDERANDO: Que, por lo espuesto, procede desestimar los tres primeros motivos del recurso y, de paso, el cuarto motivo también, pues formulado éste con carácter subsidiario respecto del primero, es evidente que si las palabras proferidas contra la superior dignidad del Rey se consideran como gravemente injuriosas para su persona, nunca podría aplicarse el párrafo 2º "in fine" del artículo 147 del Código Penal, que requiere, para degradar la pena, que las expresiones y conceptos vertidos sean de carácter leve.

CONSIDERANDO: Que al afirmarse contundentemente en los hechos probados de la resolución impugnada que el procesado, hablando fuerte y dando voces, pronunció palabras y frases insultantes para Dios y la Virgen en la barra de un Bar abierto al público, en el que sin embargo no consta hubiese más interlocutor que el camarero con el que acaloradamente discutió, es claro que tales blasfemias no pudieron producir el grave escándalo a que se refiere el artículo 239 del Código Penal, del que dicho sea de paso si ni siquiera se hace mención en la sentencia recurrida, y siendo ello así, es evidente que, al no incurrir tan elemental requisito, procede estimar este - quinto motivo del recurso, degradando a la vía del artículo 567 del Código sustantivo citado la conducta del recurrente -

respecto de dichas desafortunadas locuciones.

CONSIDERANDO: Que, finalmente, el sexto y último de los motivos articulados debe correr la misma suerte que la de los cuatro primeros que se formulan, en primer lugar, porque si bien es cierto que la circunstancia de atenuación estimada, que es la de trastorno mental transitorio incompleto, obliga a los Tribunales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 66 del Código Penal, a rebajar en uno o dos grados la pena señalada al delito tipo, no debe olvidarse que esa degradación resulta imposible en los supuestos de privación del permiso de conducir, porque para ello hubiera sido necesario que dicha pena estuviese incluida en las escalas graduales del artículo 73, que es sobre el que el 74 proyecta su eficacia, lo que conlleva, de paso, a la inaplicación, también, de la regla 5ª del artículo 61 del indicado texto legal punitivo, y, en segundo término, porque impuesta la pena de privación del permiso de conducir en el grado mínimo de su duración, que abarca desde tres meses y un día hasta un año y ocho meses es indudable que la Sala sentenciadora no cometió error de derecho alguno, sino que, por el contrario, hizo correcta aplicación de los preceptos penales sustantivos que en el recurso se citan al fijarla en un año de duración cuando pudo imponerla, en uso de su derecho, en toda la amplitud que la Ley señala, es decir, desde tres meses y un día hasta cinco años, por no existir prohibición alguna que así se lo impida.

CONSIDERANDO: Que por lo expuesto, procede estimar el recurso por el quinto de sus motivos, rechazándolo por los demás.

Después de recoger las principales sentencias que relacionadas con el tema de la blasfemia hemos encontrado, pasamos a hacer un breve estudio de las notas que más destacan en la Jurisprudencia española sobre la blasfemia. Las principales son:

I.- En primer lugar, destaca el escaso número de sentencias que hay sobre el tema de la blasfemia. Esto viene motivado por dos razones: primero porque la mayoría de las blasfemias no pasan a ser simples faltas contra el orden público, siempre que no produzcan grave escándalo público, y segundo debido a que - siendo escasa la pena que el Código Penal impone por tal delito son pocos los asuntos que llegan al Tribunal Supremo a través - del recurso de casación.

II.- Es de destacar, asimismo la casi total coincidencia - que existe en la Jurisprudencia al definir la blasfemia. Pongamos como ejemplos las sentencias de 6 de marzo de 1.969, "palabras injuriosas contra Dios, la Virgen Maria y los Santos", la de 28 de octubre de 1.954, "palabras injuriosas a Dios y a la Sagrada Eucaristía", la de 24 de junio de 1.954, "expresión injuriosa contra Dios, la Virgen o los Santos", la de 17 de noviembre de 1.959, "frases insultantes para Dios, la Virgen y la Hostia Consagrada", la de 2 de marzo de 1.971, "ofensa a la Divinidad", e incluso la sentencia de 30 de mayo de 1.973 menciona la frase que pronunció el penado. Sin embargo, la mayor parte de las sentencias no transcriben las frases pronunciadas por considerarlo de mal gusto al ser soeces y sacrílegas. Finalmente debemos señalar la definición de la ~~sentencia~~ <sup>definición</sup> de la sentencia de 24 de junio de 1.954 que dice que la blasfemia señala un ultraje a la Divinidad y a las cosas Santas que ella encierra en su manifestación externa.

III.- Por lo general el delito de blasfemia es un delito que no se realiza solo, sino que lleva aparejado otro u otros deli-



tos en el momento de su producción. Así los delitos de escándalo público (sent. de 30 de mayo de 1.973), atentado a agentes de la autoridad (sent. de 14 de noviembre de 1.966), imprudencia temeraria (sent. de 15 de febrero de 1.960), injurias a la autoridad (sent. de 29 de marzo de 1.954), desórdenes públicos (sent. de 18 de marzo de 1.975), daños, atentado y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas (sent. de 2 de marzo de 1.971), etc.

IV.- Otra nota a destacar es la de la publicidad. Al exigir el artículo 239 del Código Penal la publicidad o grave - escándalo público, el Tribunal Supremo en sus sentencias la recoge constantemente. La publicidad viene señalada unas veces por el lugar donde se producen los hechos, como pueden ser bailes públicos (sent. de 28 de octubre de 1.954), cafeterías (14 de noviembre de 1.966), autobuses (sent. de 5 de diciembre de 1.961), bares (sent. de 30 de enero de 1.968) y por lo general en cualquier lugar o establecimiento público, y otras veces por el hecho de producirse ante un número considerable de personas, así la sent. de 17 de noviembre de 1.959 señala un conglomerado de vecinos y la sent. de 6 de marzo de 1.969 en plena vía pública ante 5 ó 6 personas.

V.- Por lo general el delito de blasfemia se produce en estado de embriaguez. Es esta una nota interesante pues puede ser beneficiado el blasfemo con la apreciación de la circunstancia atenuante nº 2 del artículo 9º del Código Penal. La sent. de 15 de febrero de 1.960 habla de un momento de exaltación o euforia alcohólica y la de 15 de febrero de 1.960 igualmente señala que el inculpado se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. La sent. de 14 de noviembre de 1.966 aprecia la atenuante muy calificada de embriaguez.

VI.- El hecho de que se requiera que la blasfemia produz-

ca grave escándalo público para poder ser constitutiva de delito, es una de sus dos formas, es decir, oral o escrita, hace que - sea necesario que la ofensa produzca un atentado a los sentimientos religiosos de los presentes. Así la Jurisprudencia lo recoge con frases como indignación general, conmoción, inquietud o incluso, como señala la sent. de 2 de marzo de 1.971, perturbación del ambiente. Por lo tanto, el grave escándalo que requiere el Código Penal es un aspecto subjetivo, pues se exige que - produzca en aquellas personas que están presentes en el momento de pronunciarse las blasfemias una indignación por atentar contra sus sentimientos religiosos más íntimos.

VII.- Como última consecuencia que podemos sacar de la doctrina jurisprudencial está el hecho de que en cuanto falten algunos de los requisitos exigidos por el Código Penal para constituir delito, debemos acudir al artículo 567 y considerarlo como falta.

- III -

EL DERECHO COMPARADO

A continuación vamos a realizar un estudio del Derecho Constitucional Comparado en el ámbito de las libertades religiosas, para posteriormente hacerlo de los diversos Códigos Penales extranjeros que hacen referencia a la problemática de la blasfemia.

Alemania Occidental tiene establecido el sistema de separación de la Iglesia y el Estado en la Ley Fundamental de Bonn de ocho de mayo de 1.949. La población religiosa se compone de protestantes, católicos y hebreos. El Derecho Alemán permite la libre asociación para las sociedades de carácter religioso. Estas asociaciones tienen capacidad jurídica con arreglo al derecho civil.

El mismo sistema de separación Iglesia-Estado es el que fige en Bélgica, donde existe una plena libertad de culto y el Estado subvenciona al culto mientras es patente su no intervención en los asuntos religiosos, tal y como es la designación de los ministros de cualquier culto. La población religiosa es de mayoría católica, existiendo unos cien mil protestantes.

En Dinamarca se establece un régimen de confesionalidad. En efecto, la confesionalidad luterana es la que adopta el Estado como religión oficial. El Estado mantiene a la Iglesia Evangélica luterana y la inmensa mayoría de la población es protestante, junto a unos pocos miles de católicos.

En Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano del año 1.789 decía en su artículo diez: "Nadie debe ser inquietado por sus opiniones incluso religiosas, siempre que su manifestación no perturbe el orden público estable

cido por la Ley". La vigente Constitución francesa del 28 de septiembre de 1.958 señala en su artículo 2º: "Francia es una república indivisible, laica, democrática y social". Dicha - Constitución asegura la igualdad ante la Ley de todos los ciu-  
dadanos sin distinción de origen, raza o religión. Existe una auténtica libertad de cultos. La República no subvenciona nin-  
guna religión. El Concordato de 1.801 declaraba que el Estado asumía la Religión Católica, Apostólica y Romana como religión oficial y ejercida en Francia con culto público. La Iglesia - renunciaba a sus antiguos bienes temporales. Posteriormente tras la expulsión de los jesuitas en 1.880 y la restricción de las Ordenes religiosas, el siete de diciembre de 1.905 se publica una ley por la que se establece la separación de la - Iglesia y el Estado, declarándose un Estado laico. Ese laicis-  
mo continuaría en la Constitución de 1.946 y, como hemos vis-  
to, en la de 1.958.

En Francia la mayor parte de la población es católi-  
ca (el 83 %) junto a los protestantes y hebreos que no suman más de dos millones de creyentes. (59).

En Grecia rige el sistema de confesionalidad ortodoxa.

La Constitución griega de 9 de junio de 1.975 en el artículo 3º dice que la religión dominante en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa Oriental de - risto. La Iglesia Ortodoxa de Grecia, que reconoce como cabeza a Nuestro -  
enor Jesucristo, está indisolublemente unida, en cuanto al dogma, a la Gran -  
glesia de Constantinopla y a las demás Iglesias Cristianas homodoxas". Se-  
ala que es autocéfala y administrada por el Santo Sínodo. El art. 13 afir-  
a que la libertad de conciencia religiosa es inviolable, así como que será  
ibre toda religión conocida, prohibiendo todo proselitismo.

En Holanda el sistema vigente es de la separación de la Igle-  
sia y el Estado, junto a una plena libertad religiosa para -  
cualquier tipo de creencia así como para la práctica de cual-  
quier acto de culto. El Rey tiene como una de las misiones en

comendadas la vigilancia de que todas las religiones obedezcan las leyes del Estado. La población religiosa se divide casi a partes iguales entre católicos y protestantes.

El sistema de confesionalidad anglicana es el establecido en Inglaterra. La Carta Magna del Rey Juan decía ya en 1.215: "La Iglesia en Inglaterra debe ser libre y conservar todos sus derechos sin menoscabar sus libertades". El 26 de mayo de 1.679 el "Habeas Corpus Amendment Act" otorga una serie de libertades entre las que se encuentran la libertad de religión y de cultos. El "Bill de Derechos" del 13 de febrero de 1.689, como "Ley de declaración de los derechos y libertades de los súbditos y determinando la Sucesión de la Corona", declara su intención de impedir cualquier ataque a la religión o a cualquiera de los derechos y libertades con ella relacionados. El "Act of Settlement" del 12 de junio de 1.701 como ley para establecer nuevas limitaciones a la Corona y lograr una mejor garantía de los derechos y libertades de los súbditos, señala una serie de garantías para la religión establecida. El "Parliament Act" de 18 de agosto de 1.911, modificado el 16 de diciembre de 1.949, determina las facultades de la Cámara de los Lores. Finalmente debemos de destacar la promulgación el 2 de diciembre de 1.931 del Estatuto de Westminster. En dicha Ley se afirma que el Rey o la Reina es la cabeza de Inglaterra. Se reconoce una plena libertad religiosa así como para la práctica de cualquier acto de culto. En Inglaterra la población religiosa es sobre todo anglicana, unos 66 millones, mientras los católicos, 9 millones, y los presbiterianos, unos dos millones, forman el resto de los creyentes de las principales religiones.

En Italia se acepta el sistema de confesionalidad católica, pero al mismo tiempo se establece el principio de que todas las

confesiones religiosas son libres ante la Ley. La Constitución del 22 de diciembre de 1.947 establece una serie de "Principios Fundamentales", a la vez que otorga validez constitucional a los Pactos de Letrán de 1.929 que resolvieron la llamada "cuestión vaticana". El artículo tercero dice: "Todo ciudadano tiene igual dignidad social y son iguales ante la Ley, sin distinción de sexo, de raza, de lengua, de religión, de opinión política, de condición personal y social". Después de señalar el principio de igualdad, el artículo séptimo afirma el de independencia y soberanía de la Iglesia y el Estado: "El Estado y la Iglesia Católica son, cada uno en su propio orden, independientes y soberanos". Sus relaciones son reguladas por los Pactos Lateranenses, y la modificación del Pacto, aceptada en su parte, no requiere procedimiento de revisión constitucional. El artículo 8º dice: "Toda confesión religiosa es igualmente libre ante la Ley. La confesión religiosa diversa de la Católica tiene derecho de organizarse según su propio estatuto, en cuanto no esté en contra del ordenamiento jurídico italiano. Sus relaciones con el Estado son reguladas por Ley con la base del interés de la relativa representación. "Así pues los principios de la Constitución italiana se pueden definir en: 1º) Igual libertad de las confesiones religiosas, lo que no quiere decir igual tutela; 2º) Organización de la confesión acatólica; 3º) No paridad entre religión católica y otras religiones; y 4º) El principio de confesionalidad católica. Es de destacar el artículo 19 del texto constitucional que dice: "Todos tienen derecho de profesar libremente la propia fe religiosa en cualquier forma, individual o asociada, de ejercer en privado o en público el culto, siempre que no se trate de rito contrario a las buenas costumbres". El artículo 20 evita todo tipo de limitaciones al decir: "El carácter eclesiástico y el fin religioso o de culto de una asociación o institución no puede ser causa de especial limitación legislativa, ni de especial gravamen fiscal por su constitución, capacidad jurídica y toda forma de actividad". Finalmente el artículo 17, -

apartado 3º, regula la libertad de reunión religiosa. En la jurisprudencia italiana vemos una serie de sentencias de enorme interés entre las que destacamos la del 18-II-58 en la que se define la libertad religiosa como "El derecho de todos de profesar la propia fé religiosa, en cualquier forma, individual o socialmente, y ejercitar en público o privado el culto, siempre que no sea contrario al bien común"; la sentencia del 31-5-65 señala - que "el derecho a la libertad religiosa no significa derecho a una igualdad tutela penal. Significa la protección del sentimiento religioso de la mayoría de los ciudadanos". No existe, pues, contraste con el artículo octavo de la Constitución. Finalmente, es interesante la sentencia del 30-II-1.957 que se refiere a la aclaración que parecía necesaria para que no existiese contradicción entre lo dicho por el artículo 7º de la Constitución y lo dicho por el artículo 8º del mismo texto legal. La sentencia - dice: "El constituyente ha dictado en los artículos 7º y 8º de la Constitución, respectivamente, para la Iglesia Católica y las otras confesiones religiosas, norma explícita, la cual no establece la "paridad", pero tampoco diferencia en cuanto a la situación jurídica, que sí dá igual libertad (como dice el artículo 8º, párrafo 1º), pero no idéntica regulación en la relación con el Estado". Mientras el artículo 7º, párrafo 1º dice que "El Estado. ....", el artículo 8º, párrafo 2º, señala que "la confesión religiosa.....". Asimismo, mientras el artículo 8º párrafo 3º dispone que las relaciones del Estado con confesión religiosa diversa de la católica "son reguladas por Ley cuya base de interés sea la respectiva representación", el artículo 7º, párrafo 2º, dice que las relaciones con la Iglesia Católica "son reguladas por el Pacto Lateranense" y que "la modificación del Pacto aceptada en parte no requiere procedimiento de revisión Constitucional". (60).

En Italia el 99% de la población es católica, y así la sentencia del 17 de diciembre de 1.958 califica la religión católica como "la religión de la cuasi totalidad de los ciudadanos".



En Noruega rige el sistema de confesionalidad luterana, siendo la mayor parte de la población compuesta por luteranos, el 96% Islandia, igual que Dinamarca, tiene como sistema el de confesionalidad luterana. El Estado tiene como religión oficial la Evangélica luterana, estando a cargo de los presupuestos generales el sostenimiento de la misma. La mayor parte de la población profesa la religión luterana, siendo muy pocos los católicos. La Constitución de Islandia dice: "La religión evangélica luterana permanecerá como la religión pública del Estado, Los habitantes que la profesan están obligados a educar en ella a sus hijos. El Rey dará las directrices para todo aquello que concierne al servicio público divino".

En Suecia rige el sistema de confesionalidad luterana igualmente. El Rey debe de profesar siempre la pura doctrina evangélica. Asimismo, los consejeros de Estado, que tienen como misión asesorar al Rey, tienen como obligación profesar la doctrina evangélica.

La población es en mayoría protestante, junto a unos cuantos miles de católicos, cerca de setenta mil.

En Suiza impera desde hace muchos años el sistema de libertad religiosa con el que se permite profesar cualquier tipo de creencia. Todas las confesiones religiosas son iguales ante la Ley y el Estado no se pronuncia a favor de ninguna en concreto.

En Estado Unidos se reafirma el principio de libertad de conciencia y culto como el derecho de profesar y practicar cualquier religión. La Declaración de Derechos de Virginia del 12 de Junio de 1.776 señala en su apartado XVI: "La religión o el deber que tenemos para nuestro Creador y la forma de cumplirlo, sólo pue-

de estar dirigido por la razón y la convicción, y no por la fuerza o la violencia; y, por consiguiente, todos los hombres están igualmente autorizados al libre ejercicio de la religión de acuerdo con los dictados de su conciencia y es un deber mutuo de todos practicar la benevolencia cristiana y el amor y la caridad de los unos para con los otros". La Constitución de los EE.UU. de América del año 1.787, firmada por George Washington, en el artículo sexto dice: "Jamás se podrá exigir profesión de fé religiosa para desempeñar ningún empleo o cargo público en los EE.UU.". El artículo primero ya decía: "El Congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna, ni a prohibir el libre ejercicio de ninguna de ellas". La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales en el artículo noveno dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o creencias, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente en público o en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas y el cumplimiento de los ritos. La libertad de manifestar la propia religión o creencias no puede ser objeto de otras restricciones sino aquellas que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias para la seguridad pública, la protección del orden, la salud o la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de otro". Así pues, los dos principios sobre los que se apoya la Constitución americana, en relación con la materia de la religión, son: libertad de conciencia y de culto y prohibición de establecer una religión en todo el país.

La Constitución portuguesa de 1.933 establece como normas fundamentales las de la doctrina social católica.

En la URSS la Ley de 5 de diciembre de 1.936, Ley -

Fundamental de la URSS, señala en el artículo 124: "Con el fin de asegurar a los ciudadanos la libertad de conciencia, la - - Iglesia en la URSS está separada del Estado y la Escuela de la Iglesia. La libertad de practicar cualquier culto religioso y la libertad de la propaganda antirreligiosa, están reconocidos a todos los ciudadanos de la URSS". La Constitución de 1.918 establecía igualmente el principio de libertad de conciencia en el artículo 14. Lo mismo hace la de 1.923. En Rusia se considera el derecho a la libertad de conciencia y cultos como - una propiedad estatal, dentro del dirigismo imperante en dicho país. (61).

Dentro de los Códigos penales extranjeros vamos a - ver la distinta acogida que en los mismos se hace de los delitos de religión o contra la religión y, en especial, de la blasfemia. Muchas veces esta variedad la veremos en la legislación de un mismo país, según el régimen político de cada momento. Buena prueba de ello lo es la historia de la blasfemia en el - Código Penal español. Aunque lo trataremos con extensión en - otra parte de nuestra tesis, no podemos dejar de mencionar que en el Código Penal de 1.932 se sancionaba la blasfemia simplemente como falta, concretamente en el artículo 562, mientras que en el actual, que tiene como antecedente más inmediato el de 1.944, la castiga como delito, en el artículo 239, y que en el proyecto de nuevo Código Penal se vuelve a sancionar como - falta. (62).

Debemos de recordar que la blasfemia se mantiene como materia punible en los Códigos de Alemania, Austria, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Suecia y Suiza. A estas legislaciones - hay que añadir la de Holanda, que habiéndola abandonado ha vuelto a reanudarla a través de la Ley de 4 de noviembre de 1.932.

No obstante, su forma de tipificación es muy varia. La más amplia y tradicional de todas las vigentes es la inglesa, contenida en los "Statutes" 9 y 10 de Guillermo III (de 1.698), en los que se castiga el "hecho de escribir, enseñar o hablar contra una de las Personas de la Santa Trinidad o sostener la pluralidad o la inexistencia de Dios, la verdad de la Religión o de las Santas Escrituras". Bien que el concepto, por lo que respecta sólo a la Santísima Trinidad, haya sido cambiado por Acta del Parlamento de 1.913, para dar satisfacción a la secta de los Unitarios, el resto sigue en vigor y ha sido alegado ante los Tribunales ingleses, por lo menos hasta 1.922. Por su dureza, la prescripción más grave, en el Derecho comparado actual, es la del artículo 172 del Código polaco, que prevé una pena de prisión de hasta cinco años. Muy restrictivo es el precepto del párrafo 166 del Código alemán, para el que la blasfemia (Gotteslästerung) ha de referirse concretamente a Dios y ser pública. Parecido carácter ostenta el Código penal austriaco, en cuyos artículos 122 a 124 se prevén sin embargo, las tres posibilidades de expresión oral, escrita (impresa) y de actos. En el Código Suizo el artículo 261 sanciona la "ofensa a los sentimientos religiosos en forma vil, especialmente a la creencia en Dios", integrando la figura delictiva dentro del título XII, es decir, entre las que atentan a la paz pública. En Italia, como ya veremos, el Código Rocco es verdad que ha relegado la blasfemia como tal al libro de las faltas, en el que el artículo 724 castiga contravencionalmente las "invectivas" o "palabras ultrajantes contra la Divinidad, símbolos o personas veneradas en la Religión del Estado"; sin embargo, como quiera que subsiste en el libro I como delito el de "público vilipendio" a la Religión en el artículo 402, así como el de ofensas del artículo 403, se posibilita la calificación delictual cuando, sobre el dolo genérico de la blasfemia contravencional, apa

reciere el específico de vilipendiar a la Religión. En Francia la ley de 9 de diciembre de 1.905 sobre separación de la Iglesia y el Estado derogo los artículos 560 a 564 del Código Penal que protegían la libertad de cultos, pues la blasfemia en sí no estuvo nunca tipificada en los Códigos franceses. No obstante, en dicho país ha sido solicitada su adopción por algun penalista, que estima grave imperfección del Código el desamparo a los sentimientos religiosos de gran parte de los ciudadanos franceses. (63).

Vamos, pues, a hacer un breve estudio de los diversos Códigos penales extranjeros.

El Código penal alemán tiene como antecedente el de 1.870. El actual lleva fecha de 25 de agosto de 1.953. En la Parte II, sección XI, dentro de los "Delitos relativos a la religión", están los artículos 166, que dice que "Será castigado con tres años o más de prisión todo individuo que haya provocado un escándalo profiriendo públicamente blasfemias contra Dios, o haya en público insultado a una Iglesia cristiana o a una comunidad religiosa de Derecho público establecida sobre el territorio nacional, o las ceremonias o ritos de estos cultos, o que, en una Iglesia o cualquier otro lugar destinado a estas reuniones confesionales haya cometido actos injuriosos y escandalosos". El artículo 167 sanciona igualmente con la pena de tres o más años de prisión el impedir el ejercicio del culto de una Iglesia establecida en el Estado.

Finalmente, el artículo 168 castiga con la misma pena el hecho de sustraer cadáveres.

El Código Penal austriaco de 1.852 en su Parte 1ª, Capítulo XIII, regula "los desórdenes causados a la religión".

"El artículo 122 que fué modificado por la Ley de 25 de mayo de 1.868, señala que "comete el crimen de desorden de la religión:

a) Aquel que por palabras, actos u obras, impresas o escritas, difunde blasfemias contra Dios.

b) Aquel que en el ejercicio de un culto reconocido por el Estado o que, por actos de profanación cometidos sobre los objetos consagrados al servicio divino, o en general, por actos, palabras, obras escritas o impresas difunden públicamente su desprecio de la religión.

c) Aquel que busca de incitar a un cristiano a la apostasía.

d) Aquel que busca propagar la falta de religión o propaganda una herejía contraria a la religión cristiana"

El artículo 123 dice que "Si, por consecuencia de estos desórdenes, un escándalo público ha sido provocado o una persona es apartada de su fe, o si un peligro colectivo es el resultado, será castigado de un año a cinco años de reclusión, llegando hasta diez años cuando es acompañado de circunstancias peligrosas y procede de una intención particularmente grave".

El artículo 124 señala que en ausencia de las circunstancias vistas en precedentes párrafos, los desórdenes de la religión serán castigados de seis meses a un año de reclusión.

El Código penal de Belgica de 8 de junio de 1.867 regula los delitos de religión en el Libro II, Título II, Capítulo II. El artículo 142 castiga el impedir ejercer o asistir a cultos, celebrar fiestas religiosas o guardar ciertos días de descanso. El artículo 143 sanciona el impedir, retrasar o inte-

rrumpir los ejercicios de un culto en lugar destinado a su celebración. El artículo 144 dice: "Toda persona que por hechos, palabras, gestos o amenazas ultraje los objetos de un culto sea en los lugares destinados o reservados habitualmente a esos ejercicios, o sea en las ceremonias públicas de éste culto, será castigado con prisión de 15 días a seis meses y con multa de 26 a 500 francos". El artículo 145 castiga el ultraje a un ministro del culto en el ejercicio de su ministerio. Si el ultraje consiste en agrasión física será castigado con pena superior. Finalmente, el artículo 146 sanciona con la pena de seis meses a cinco años y multa de 100 francos a mil al que, a consecuencia de la agresión que trata el artículo anterior, cause efusión y sangre, heridas o enfermedad de cualquier tipo.

El Código penal búlgaro de 1.951 establece los "delitos contra los cultos" en los siguientes artículos:

Artículo 303: "La propaganda de odio en materia religiosa - por la palabra, por escrito o por otro medio, lleva consigo la privación de la libertad hasta tres años y multa de diez mil - levass".

Artículo 304: "El hecho de impedir por violencia o amenaza a los ciudadanos o a los grupos religiosos reconocidos de practicar libremente sus religiones y de celebrar sus ceremonias y - servicios religiosos no presentan ninguna infracción a las leyes, al orden social y a las reglas de la comunidad socialista, entraña la privación de la libertad durante un año. La misma pena se impondrá por el hecho de obligar a una persona por los mismos medios a tomar parte de ceremonias y servicios religiosos de un culto".

Artículo 305: "La propaganda por escrito u oral contra el po

der popular será castigado con las mismas penas señaladas en los artículos anteriores".

El artículo 306 castiga con la confiscación del patrimonio y con la pérdida de los derechos prescritos en el artículo 28 al reo de alguno de estos delitos.

El Código penal argentino no menciona ninguno de los delitos contra la religión, ni claro está, tampoco la blasfemia en su texto de 29 de octubre de 1.921.

Bolivia, a través del Código de 6 de noviembre de - 1.834, regula en el Libro II, Capítulo III del Título I, los - "Delitos contra la Religión del Estado". El artículo 139 llega a castigar con la pena de muerte el hecho de establecer religión distinta a la oficial, que era la Católica, Apostólica y Romana, según el texto constitucional entonces vigente. Posteriormente, aún siguiendo vigente el Código penal antes señalado, el Capítulo III que se refería a los "Delitos contra la religión del Estado" fué derogado por la ley de 29 de agosto de 1.907.

El Código Penal de Brasil de siete de diciembre de - 1.940 establece en el Capítulo VIII, artículo 208, el delito de ultraje al culto y el impedimento o perturbación de acto a él - relativo. El artículo 209 regula el delito contra el respeto a los muertos.

El Código penal de Colombia de 14 de septiembre de - 1.936 señala en el artículo 247 el delito contra la moral pública y en el artículo 312 el delito contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos.

El Código penal de Cuba, o como se denomina "Código de Defensa Social de Cuba", en el Libro II, Título III, Capitu-



lo VI, regula los "delitos contra los derechos individuales". El artículo 210 señala los delitos contra la libertad de cultos registrados en la Secretaria de Justicia. El artículo 453 sanciona la profanación de sepulturas y cadáveres, e inhumaciones y exhumaciones ilegales.

En Chile el Código lleva fecha del 12 de noviembre de 1.874. Un sólo artículo se refiere al tema de los delitos contra la religión. El artículo 138 trata de los crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos en la República.

El Código penal de Costa Rica del 21 de agosto de 1.941 no dice nada referente al tema que estamos tratando.

Sin embargo, el "Código de Policía de Costa Rica", en el Título VII, sección 4ª, señala en los artículos 134 a 136 las perturbaciones a los sentimientos morales y religiosos.

El 20 de agosto de 1.884 se publica el Código penal de la República Dominicana. Dicho texto sanciona en el artículo 199 la perturbación del orden público producido por los ministros de los cultos en el ejercicio de su ministerio, distinguiendo dos tipos de actos: en la celebración de matrimonios y en los discursos pastorales.

El Código penal del Ecuador, del 22 de marzo de - - 1.938, sanciona en el artículo 152 los delitos contra la libertad de conciencia y pensamiento.

El Código penal del Salvador del 14 de octubre de - 1.904 tampoco hace ninguna referencia al tema.

El Código Penal de Dinamarca del 10 de febrero de 1.866 fué modificado por ley de 24 de junio de 1.939. En el Capítulo XV, dentro de los "crímenes y delitos contra la paz y el orden público", el artículo 140 dice: "Aquel que públicamente pone en ridículo o insulta los dogmas o el culto de una comunidad religiosa legalmente reconocida en Dinamarca, es factible de detención simple, o en caso de circunstancias atenuantes de una multa. Las diligencias tendrán lugar por orden del procurador general". El artículo 139, en el apartado primero, regula el delito de violación de sepulturas, y, en el apartado segundo, castiga al culpable de actos contra objetos pertenecientes a una Iglesia o empleados en actos religiosos".

El Código penal de Guatemala del 25 de mayo de 1.936, reformado el 8 de septiembre de 1.945, en los artículos 230 a 238 castiga la infracción a las leyes sobre inhumaciones y la violación de sepulturas. El Libro III, "faltas contra el orden público", sanciona en el artículo 452 la ofensa de la moralidad pública y las buenas costumbres.

El Código penal de Grecia del 17 de agosto de 1.950 en el Libro II, Capítulo VII, dentro del Título "atentado a los cultos", castiga en el artículo 198 la "blasfemia injuriosa" en los dos siguientes casos:

1) Aquel que, publicamente e injuriosamente insulta a Dios de cualquier manera, será castigado con la pena de prisión de dos años o más.

2) Aquel que, fuera del caso del párrafo precedente, expresa públicamente insultos o una falta de respeto a Dios, será castigado con pena de prisión de tres meses o más". El artículo 199 sanciona el "insulto a los cultos": Aquel que, publicamen

te e injuriosamente, insulta de cualquier manera a la Iglesia Cristiana Ortodoxa o un culto reconocido en Grecia, será castigado con pena de prisión de dos años o más. "El artículo 200 sanciona con la pena de dos años o más los desórdenes en asambleas religiosas en los dos siguientes casos:

1) en asamblea admitida por la Constitución y reunida para ejercer culto o cerenomia;

2) en actos injuriosos e inconvenientes en una Iglesia o local al servicio de un culto reconocido por la vigente legislación. Finalmente, el artículo 201 castiga el insulto a los muertos con penas similares a las anteriores.

El Código penal de Groenlandia es de fecha 5 de marzo de 1.954. En el Capitulo VIII sanciona los delitos contra la paz y el orden público". El artículo 25 dice: "Será condenado por violación de la paz especialmente protegida aquel que viola la paz de una sepultura o comete actos contra la guarda de un cadaver o de objetos pertenecientes a una Iglesia y medios de uso religioso, o de monumentos oficiales u otras cosas semejantes".

El Código penal de Haití de 11 de agosto de 1.835, en la Ley Cuarta, Titulo I, Capítulo III, sección tercera, en los artículos 160 a 169 regula una serie de delitos bajo la común denominación de "De las alteraciones del orden público por los ministros de los cultos en el ejercicio de su ministerio". Los principales son:

I.- De las contravenciones que pueden comprometer el estado civil de las personas;

II.- De las críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública en un discurso pastoral pronuncia

do públicamente;

III.- De las críticas censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública en un escrito pastoral.

IV.- De la correspondencia de los ministros de los cultos con Cortes o potencias extranjeras sobre materias de religión.

El Código penal de Honduras es de 3 de febrero de 1.906. En el Libro II el Título II trata de los "delitos contra la Constitución". Dentro de dicho título el Capítulo II, Sección 3ª, se refiere a los "delitos relativos al libre ejercicio de los cultos", del artículo 208 al 212, ambos inclusive. El artículo 208 castiga el forzar a ejercer actos religiosos o asistir a actos del mismo tipo. El 209 sanciona el impedir practicar actos de culto o asistir a dichos actos. El artículo 210 castiga el impedir abrir tienda, almacén o establecimiento, o forzar a abstenerse de trabajar o retardar la celebración de actos religiosos. Finalmente, el artículo 212 castiga el ofender en lugar religioso el sentimiento religioso de los concurrentes. La pena en todos los supuestos precedentes es la de reclusión menor, variando el tiempo de duración.

El Código penal de Finlandia del 19 de diciembre de 1.898 trata en el Capítulo X, seis tipos de delitos:

1) El que públicamente blasfemare contra Dios será castigado con una pena de reclusión de cuatro años o más de prisión, o una pena de multa;

2) El que públicamente ultraje el Santo nombre de Dios o la doctrina, los sacramentos, las costumbres del culto de -

una religión admitida, permitida o tolerada en Finlandia, será castigado con una pena de prisión de seis meses o más, o una - pena de multa;

3) El que impidiere por violencia o amenaza los servicios divinos u otro acto de culto, o interrumpir intencionadamente el servicio divino u otra ceremonia o práctica religiosa, será - castigado con iguales penas que en el supuesto anterior;

4) El que interrumpiera una reunión de miembros de una asam-blea privada;

5) El que por fuerza, astucia o promesas de orden temporal haga perder su fé a un miembro de una secta religiosa; y

6) El que por los mismo medios descritos en el número ante-rior impidiere a otro asistir a un servicio divino será casti- gado con la pena de multa.

El Código penal francés es del año 1.810. El Título I, del Libro III, Capítulo III, establece este tipo de delitos bajo la común denominación de "Los desórdenes de orden público - causados por los ministros de los cultos en el ejercicio de su ministerio". El artículo 199 dice: "Todo ministro de un culto - que proceda a la ceremonia religiosa de un matrimonio sin que - esté justificado el permiso del acto reconocido por los oficia- les del estado civil, será sancionado con multa. "La Ley del 9 de diciembre de 1.905 derogó los artículos 201 al 208. Los artí- culos 201, 202 y 203 sancionaban las críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública en un discurso pastoral pronunciado públicamente. Los artículos 204, 205 y 206 castigaban el hecho de criticar, censurar o provocar dirigiéndo- se contra la autoridad pública en un escrito pastoral. Los artí

culos 207 y 208 sancionaban la correspondencia de los ministros de los cultos con los poderes extranjeros sobre materia religiosa. Es de destacar, finalmente, que el artículo 360 dentro del Título II, Capítulo I, Sección VI, sanciona la violación de sepulturas, no encontrándose derogado este artículo - por la Ley de 1.905.

El Código penal de Holanda de 1.881 se refiere a dos tipos de delitos en la cuestión religiosa. Por un lado están los delitos contra el orden público, en los cuales se recogen todos aquellos actos que perturben la paz pública en el ejercicio de un acto del culto. Por otro lado, están los delitos - contra las exhumaciones ilegales y los delitos de violación de sepulturas.

El Código de Hungria es del año 1.950, o como dice su título "Ley II del año 1.950". En la parte 1ª, dentro de los "Crímenes", que son los que infringen la ley, se encuentran los delitos "contra el orden público, social o económico de la Republica Popular de Hungria, o contra las personas o derechos de los ciudadanos". La Parte 2ª, de las "contravenciones", se refiere a los atentados contra la ley, ordenanza de policia o autoridad autorizada, entre cuyas infracciones se encuentran las que atentan contra la buenas costumbres.

Islandia a través del Código penal del 12 de febrero de 1.940 sanciona este tipo de delitos en dos artículos. Los artículos 124 y 125 están encuadrados dentro del capítulo XIII bajo la rúbrica de "Delitos contra la paz y el orden público". El artículo 124 dice: "Aquel que viola la paz de sepulturas o es culpable de actos contra la guarda de un cadaver será castigado con la pena de multa o prisión. Será, tambien, -

castigado con multa o prisión de seis meses ó más aquel que es culpable de actos contrarios a la guarda de objetos pertenecientes a una Iglesia o empleados en usos religiosos". El artículo 125 sanciona a "aquel que vuelve en redículo o insulta el dogma o el culto de una comunidad religiosa legalmente reconocida en Islancia, siendo castigado con multa o detención simple. Las acciones sólo tienen lugar por orden del Ministerio Público".

Al estudiar la legislación italiana hay que hacer - un poco de historia. "El "Reglamento di polizia per gli stati estensi" publicado el 14 de diciembre de 1.855 en el Título - I del Libro II regula los "delitos contra la religión". El artículo 104 decía: "La blasfemia erética proferida con plena conciencia de causa y deliberación de ánimo será castigada con trabajos forzados a no menos de cinco años". El artículo 105 señalaba:

"Cuando la blasfemia fuese proferida en ímpetu de cólera, la pena será de carcel no menor de seis meses". A su vez el artículo 106 decía:

"Si la blasfemia erética fuese consignada en cualquier papel o escrito que viniese dado a la publicidad, se aplicará el máximo de la pena de trabajos forzados. Quien dolosamente coopera a la publicación, será tenido por cómplice".

El Código de 1.853, fiel reflejo del Concordato de - 1.851, señala en el artículo 136:

I.-"La blasfemia proferida con ánimo deliberado, será castigada con carcel de uno a cinco años".

II.- La blasfemia proferida por "malvagia abitudine", o -

por impetu de cólera, será castigada con pena de uno a seis meses". En la actualidad el "Codigo Rocco" del 19 de octubre de 1.930, en vigor desde el primero de julio de 1.931, regula la materia que nos interesa en el Libro II, Titulo IV, bajo la común denominación de "delitos contra el sentimiento religioso y contra el respeto de los muertos" en los artículos 402 a 406, capítulo I.- Delitos contra la religión del Estado y cultos admitidos y en los artículos 407 a 413, capítulo II.- Delitos contra el respeto de los muertos.

El artículo 402 dice: "Vilipendio de la religión del Estado". "Aquel que publicamente trata con menosprecio la religión del Estado será castigado con la pena de reclusión hasta un año".

Artículo 403: "Ofensa a la religión del Estado por vilipendio de personas". Aquel que ofende públicamente la religión del Estado, denigrando a aquellos que la profesan, será castigado con reclusión hasta dos años". Se aplica la reclusión de un año a tres años al que ofende la religión del Estado, denigrando a un ministro del culto católico".

Artículo 410: "Ofensa a la religión del Estado por vilipendio de cosas". Aquel que, en un lugar destinado al culto, o en un lugar público o abierto al público, ofende la religion del Estado denigrando los objetos del culto, o consagrados al culto, o necesariamente destinados al ejercicio del culto, será castigado con reclusión de uno a tres años. La misma pena es aplicada al que comete el hecho con ocasión de ceremonias religiosas celebradas en un lugar privado por un ministro del culto católico".

Artículo 405: "Desordenes causados en ceremonias religiosas del culto católico". Castiga al que, en lugar destinado al culto o en un lugar público o abierto al público, o con asistencia de un ministro del culto, causa desordenes en ceremonias del culto católico.



El artículo 406 regula "los delitos contra los cultos admitidos por el Estado". Son los mismos hechos previstos en los artículos 403, 404 y 405 pero contra un culto admitido por el Estado. Las penas son inferiores a las señaladas en los artículos anteriores.

El artículo 407 castiga la violación de sepulturas o de "tumbas, sepulcros o urnas", como dice textualmente el artículo.

El artículo 408 sanciona los actos de vilipendio contra las sepulturas.

El artículo 409 castiga los desórdenes causados a los servicios funerarios.

Los actos de menosprecio hacia un cadaver, actos de "brutalidad o de obscenidad", son sancionados en el artículo - 410.

La destrucción, supresión o sustracción de cadáveres o de parte de ellos se castiga en el artículo 411.

El artículo 412 castiga la ocultación de un cadaver.

El uso ilegítimo de un cadaver se sanciona en el artículo 413 exceptuándose los usos con fines científicos o didácticos.

El Libro III del Código penal italiano regula "las contravenciones en particular". El Capítulo II de dicho Libro castiga "Las contravenciones concernientes a la policía administrativa social". El artículo 724, dice: "Blasfemia y manifestaciones ultrajantes hacia los muertos". "Aquel que blasfema públicamente, por escritos o palabras ultrajantes contra la Divi-

nidad o los símbolos o las personas veneradas en la religión del Estado, será castigado con multa. La misma pena se impone a toda manifestación pública ultrajante hacia los muertos".

El Código penal de Liechtenstein sanciona en el artículo 122 los desórdenes en el ejercicio de la religión. Lo comete el que por ejercicio, acto, discurso o blasfemia actúe contra Dios; el que perturba el ejercicio de un culto reconocido por el Estado o comete actos de profanación contra los objetos consagrados al ejercicio divino o, en general, por actos, discursos u obras imprimidas o escritos difundidos, manifestando públicamente su desprecio de la religión; lo cometen, igualmente, los que incitan a un cristiano a la apostasía. (69).

El artículo 128 castiga al atentado al pudor y el 129 el atentado a los muertos.

Dentro de los delitos contra la paz y el orden público se sanciona en el capítulo V la "incitación a actos hostiles contra las comunidades nacionales y religiosas". El artículo 302, dice: "Cualquiera que incita a otro a actos hostiles - contra diversas nacionalidades, comunidades religiosas u otros, contra clases o estados particulares de la sociedad burguesa, o contra cuerpos constituidos legalmente reconocidos, es castigado con la pena de tres a seis años de severo encarcelamiento".

El artículo 303 sanciona las injurias proferidas hacia una Iglesia o una asociación religiosa legalmente reconocida. "Cualquiera que públicamente o delante de varias personas, sea por obras impresas sea por medio de estampas o escritos - difundidos, busca burlarse o desconsiderar los actos, costumbres o las instituciones de una Iglesia, o de una asociación religiosa legalmente reconocida en el Estado, o el que injuria a un -

sirviente del culto en el ejercicio de su sacerdocio o tambien se comporte durante los servicios religiosos públicos de una manera irreverente o buscando provocar el escándalo en los demás, es culpable de un delito en la medida en que los agitaciones no constituyan el previsto en el artículo 122, y será castigado de seis a un año de severo encarcelamiento". El artículo 304 castiga el "estimulo a una secta religiosa declarada ilegal por el Estado". La pena es de uno a tres meses de carcel.

El Código penal de Luxemburgo sanciona en el Libro II las "Infracciones y su represión en particular". El capítulo II regula los "delitos relativos al libre ejercicio de cultos".

El artículo 142 dice: "Toda persona que, por violencia o amenazas, haya obligado o impedido a una o varias personas de ejercer un culto, asistir al ejercicio de ese culto, celebrar - ciertas fiestas religiosas, observar ciertos dias de descanso, y en consecuencia, abrir o cerrar talleres, tiendas o almacenes, o de hacer o quitar ciertos trabajos, será castigado de encarcelamiento de ocho dias a dos meses y de una multa de 26 a 200 francos".

El artículo 143 señala que "los que, por disturbios o desórdenes, hayan impedido, retrasado o interrumpido los ejercicios de un culto que se practica en un lugar destinado o que habitualmente sirve al culto, o en las ceremonias públicas de dicho culto, serán castigados con encarcelamiento de ocho dias a tres meses y de multa de 26 a 500 francos".

Artículo 144: "Toda persona que por hechos, palabras, gestos, amenazas, escritos o dibujos, haya ultrajado los objetos de un culto, sea en los lugares destinados o sirviendo habitualmente a su ejercicio sea en las ceremonias públicas de ese culto, será castigados de encarcelamiento de quince dias a seis meses y de una multa de 26 a 500 francos".

Artículo 145.- dice que será castigado con las mismas penas el que de hechos, palabras, gestos, amenazas, escritos o dibujos, haya ultrajado al ministro de un culto en el ejercicio de su ministerio.

Si le ha golpeado será castigado de encarcelamiento de dos meses a dos años y de multa de 50 a 500 francos".

Finalmente, el artículo 146 dice que "si los golpes han sido causa de efusión de sangre, de heridas o de enfermedad, el culpable será castigado con encarcelamiento de seis meses a cinco años y una multa de 100 a 1.000 francos".

El capítulo VIII regula las "infracciones cometidas por los ministros de cultos en el ejercicio de su ministerio".

El artículo 267 dice que "será castigado con multa de 50 a 500 francos todo ministro de un culto que proceda a la bendición nupcial antes de la celebración de la boda civil.

En caso de nueva infracción de la misma especie, podrá, además, ser condenado a encarcelamiento de ocho días a tres meses".

El artículo 268 señala que "los ministros de los cultos que, en discursos pronunciados o por actos leídos, en el ejercicio de su ministerio, y en asamblea pública, o por un escrito conteniendo infracciones pastorales, en la forma que sea, hayan atacado directamente al Gobierno, una ley, un decreto real, o cualquier otro acto de la autoridad pública, serán castigados con encarcelamiento de ocho días a tres meses y de una multa de 26 a 500 francos. Si la instrucción pastoral, el discurso o el escrito contienen una provocación directa a la de-

subordinación a las leyes o a los actos de autoridad pública, o si tienden a sublevar o armar una parte de los ciudadanos, contra los otros, el ministro de culto que lo haya publicado o leído, será castigado de encarcélamiento de tres meses a dos años, si la provocación no ha sido seguida de ningún efecto, y de encarcélamiento de diez meses a tres años si ha dado lugar a la desobediencia, toda vez que hubiere degenerado en sedición o revuelta.

El culpable será, además, condenado a una multa de - 100 a 1.000 francos".

El Código penal de México del 13 de agosto de 1.931 no hace ninguna referencia a la cuestión religiosa, no tratando ninguno de los delitos de religión ni los delitos contra la religión.

El Código penal de Mónaco lleva fecha del 17 de diciembre de 1.874. El Libro III trata de los "Crímenes y delitos y su punición". El capítulo III se refiere a los crímenes y delitos contra la paz pública. Dentro de dicho capítulo la sección tercera regula los desórdenes causados al orden público por los ministros de los cultos en el ejercicio de su ministerio.

El artículo 161 señala:

"Todo ministro de un culto que procediera a la ceremonia religiosa de una boda, sin que le haya sido justificado por un acta de matrimonio recibida anteriormente por el oficial del estado civil, será castigado por la primera vez, con una multa de 2.400 a 15.000 francos".

El artículo 162 dice: "En caso de nuevas infracciones de la especie expresada en el artículo precedente, el ministro

del culto que lo haya cometido será castigado, a saber: por la primera reincidencia a encarcelamiento de seis meses a dos años; y por la segunda, de encarcelamiento de dos a cinco años".

El artículo 163 se refiere a "las críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública en un discurso pastoral pronunciado públicamente. Dice textualmente:

"Todo ministro de un culto que pronunciara, en el ejerccio de su ministerio, y en asamblea pública, un discurso conteniendo la crítica o la censura del Gobierno, de una ley, de una ordenanza soberana, o de cualquier otro acto de la autoridad pública, será castigado con encarcelamiento de tres meses a dos años".

Dentro del mismo libro, en el Capítulo III del Título I, se regulan las "trabas al ejercicio de los cultos". Concretamente el artículo 236 dice:

"Toda persona que, por vías de hecho o de amenazas, haya obligado o impedido a una o varias personas de ejercer el culto católico u otro culto autorizado, de asistir al ejercicio de ese culto, de celebrar ciertas fiestas, de observar ciertos días de reposo, y en consecuencia, de abrir o cerrar sus talleres, - tiendas o almacenes, y de hacer o quitar ciertos trabajos, será castigada por ese sólo hecho, de una multa de 2.400 a 30.000 francos y de encarcelamiento de seis días a dos meses".

El Código penal de Nicaragua es del 8 de diciembre de 1.891. En el Libro II, Título III, regula los "Delitos contra la religión", en los artículos 205 a 208, ambos inclusivos. El artículo 205 castiga con la pena de arresto mayor a los que traten de impedir el ejercicio de un culto, así como de destruir, inutili-

zar objetos consagrados. Sanciona igualmente el hecho de maltratar o injuriar a un ministro de la religión, así como todo tipo de ultraje. El artículo 207 castiga como reos de intolerancia:

1º - los que con amenazas, reprensiones u otros medios procuran que otras personas cambien de religión;

2º - los que perturban a otra persona en el ejercicio de su culto para hacerla suspender sus practicas religiosas.

La pena es de multa de 25 a 200 pesos.

El Código penal noruego del 22 de mayo de 1.902, tras diversas modificaciones en los años 1.950, 1.953 y 1.955, establece en el Capítulo XIII, "Crímenes contra el orden y la paz - públicos", diversos delitos en los artículos 135 y siguientes. Es de destacar el artículo 138 que sanciona con la pena de multa o prisión de seis meses a aquel que interrumpe o perturba una ceremonia religiosa.

El Código penal de Panamá es del 17 de noviembre de 1.922. El Título V regula los "delitos contra la libertad", y el Capítulo II los "Delitos contra el culto", en los artículos 127 a 131, ambos inclusivos. El artículo 127 sanciona al que perturbe el ejercicio de algún culto permitido en la nación. El artículo 130 sanciona los daños causados en los cementerios. Finalmente, el artículo 131 castiga dos tipos de conductas: el cometer actos de profanación con un cadaver y el violar sepulturas.

En Paraguay el Código penal lleva fecha de 13 de junio de 1.914. El artículo 291 tipifica el impedir, con hechos, violencias o amenazas, la celebración de las ceremonias del culto

católico o cualquiera de los otros cultos permitidos en la República.

El artículo 292 castiga el escarnio público de algún culto. El 293 señala tres tipos de conductas merecedoras de sanción:

- 1º Ultrajar los objetos de un culto;
- 2º ultrajar un ministro de un culto en el ejercicio de su ministerio;
- 3º destruir, inutilizar o deteriorar monumentos, estatuas o inscripciones de carácter religioso.

El artículo 294 castiga el exhumar un cadáver humano para mutilarlo o injurarlo.

El Código penal del Peru del 23 de julio de 1924 no hace ninguna referencia al tema tratado en la presente tesis doctoral.

El Código penal de Puerto Rico del 1º de marzo de 1902 trata únicamente la cuestión en un artículo del Título XV "Los delitos contra la paz pública". El artículo 353 sanciona la perturbación de congregaciones dedicadas a cultos religiosos, haciendo especial mención a todo tipo de hechos o palabras profanas.

El Código penal de San Marino sanciona en el Título IV "Los delitos contra la religión". El Capítulo Primero trata del "obstáculo al libre ejercicio del culto y de la perturbación de las ceremonias religiosas", en la sección primera, y "de cualquiera otro ultraje a una ceremonia religiosa y del sacrilegio de objetos del culto", en la sección segunda.

El artículo 323 dice: "Cualquiera que por amenazas, violencias o vías de hecho, impide a alguien de cumplir actos religiosos asistir a una ceremonia religiosa u observar los días de fiesta o de descanso establecidos



por el culto católico, es castigado con encarcelamiento de uno a tres meses o multa de 50 a 100 liras, salvo aplicación de una pena mayor si el medio empleado constituye de por sí una infracción más grave".

El artículo 324 señala: "Cualquiera que impida o perturbe una celebración religiosa de la religión católica romana por amenazas, violencias u otras vías de hecho, es castigado con encarcelamiento de tres a seis meses o multa de 100 a 150 liras, salvo aplicación de una pena mayor si el medio empleado constituye en sí una infracción más grave".

Dentro de la Sección Segunda de este Capítulo el artículo 325 dice: "Cualquiera que de palabras o gestos ridiculice o trate con desprecio de cualquier manera una ceremonia de la religión católica romana será castigado con encarcelamiento de uno a tres meses o multa de 50 a 100 liras, salvo aplicación de una pena mayor si el sacrilegio degenera en la perturbación prevista en el artículo precedente o en una infracción más grave".

Finalmente, el artículo 326 sanciona: "El que rompa, destruya, golpee o ensucie los objetos del culto de la religión católica romana, expuestos o destinados a la veneración pública, será castigado según la importancia del caso, con pena de encarcelamiento de seis meses a un año, o de encarcelamiento de tres a seis meses y multa conjunta de 50 a 100 liras, salvo aplicación de una pena mayor si el medio empleado constituye de por sí una infracción más grave".

El artículo 327 castiga la violación de sepulturas y de tumbas con la pena de prisión de seis meses a

a un año o la pena de multa.

El artículo 323 sanciona los delitos cometidos contra las personas de los ministros de la religión católica romana en el ejercicio de sus funciones.

Los artículos 329 y 330 castigan los delitos contra el respeto a la religión del estado. El artículo 329 dice:

"La blasfemia o cualquier otra injuria proferida en presencia de dos o más personas, contra el Santo nombre de Dios, de la Virgen, del santo fundador de la República o de cualquier otro Santo, es castigada con encarcamiento de uno a tres meses, teniendo en cuenta la naturaleza de la blasfemia o de la injuria, del estado de espíritu del que la ha proferido, del lugar y del momento en que ha sido pronunciada, y al escándalo que ha seguido".

El artículo 330 señala: "El hotelero, cabaretero, bodeguero, cafetero, el detallista de alcoholes, el dueño de un billar o de cualquier otro juego, que tiene su tienda abierta al público durante la celebración de los Santos Oficios del domingo y de otros días de fiesta de obligación, es castigado con una multa de 20 a 50 liras. Si vuelve a reincidir, la multa es elevada de 50 a 100 liras.

En caso de nueva reincidencia se le aplica la multa de 50 a 100 liras juntamente a la prohibición de ejercer su profesión durante un periodo de uno a cuatro meses".

El Código penal sueco sanciona las siguientes

conductas en el Capítulo XVI dentro de "Las infracciones contra el orden público".

El artículo nueve dice: "El que hace públicamente ofensa a lo que está considerado como sagrado por la Iglesia Sueca o por cualquier otra Comunidad religiosa que exista en el Reino será condenado por infracción al respeto a la religión, a multa o a encarcelamiento por seis meses lo más."

Artículo 10: "Si alguien desplaza indebidamente, estropea o trata injuriosamente un cadaver o las cenizas de un muerto, abre una sepultura, o de cualquier otra manera se libra a depreciaciones o a un escándalo sobre un ataúd, una urna funeraria, una tumba u otro lugar de reposo para los muertos o sobre un monumento funerario será condenado por infracción a la paz de las sepulturas, a una multa o a encarcelamiento por seis meses lo más".

Artículo 11: "Si alguien hiere el pudor y las buenas costumbres por una descripción por texto o por imagen, o poniendo en venta, o exponiendo, o propagando de cualquier otra manera escritos o imágenes, será condenado por ultrajes al pudor y a las buenas costumbres, a una multa o a encarcelamiento por seis meses lo más.

La misma condena será aplicable si alguien, por sus palabras o por sus actos hiere el pudor y las buenas costumbres en un lugar público o de cualquier otra manera en público".

El artículo 12 dice: "El que entre niños o jóvenes, propaga escritos o imágenes, que por su naturaleza, puedan favorecer los instintos groseros o de todas

formas constituir un peligro serio para la educación moral de los jóvenes, será condenado, por corrupción moral de la juventud, a una multa o a encarcelamiento por seis meses lo más ".

El Código penal suizo trata el tema en el Título XII dentro de "Los crímenes o delitos contra la paz pública. El artículo 261 dice: "Atentado a la libertad de creencias y de cultos": "El que públicamente y de manera vil, haya ofendido o escarnecido las convicciones de otros en materia de creencias, en particular de creencia en Dios, o haya profanado los objetos de la veneración religiosa.

El que de mala manera haya impedido celebrar o perturbar o públicamente escarnecido un acto del culto garantizado por la Constitución.

Será castigado con la pena de encarcelamiento por seis meses lo más o una multa".

El Código penal turco regula en el Capítulo V los "Delitos concernientes a los imanes, oradores, predicadores, altos dignatarios religiosos".

El artículo 241 dice: "El ministro de un culto, tal el imán, el predicador, el orador sagrado, el cura y el rabino, que, en el ejercicio de sus funciones, insulte o ridiculice públicamente al Gobierno, a las leyes del Estado o los actos del Gobierno, será castigado de un mes a un año de encarcelamiento y con la multa de 150 libras lo más, o de una de esas penas solamente".

El Código penal turco en el artículo 242 señala:

"Cualesquiera, entre las mencionadas personas en el artículo anterior, que prevaliéndose de su calidad, incite al menosprecio de las instituciones, de las leyes, de las órdenes de la autoridad o de los deberes inherentes a una función pública, será castigado de tres meses a dos años de encarcelamiento, de una multa de 200 libras como máximo, así como de la interdicción a perpetuidad o al tiempo de ejercer sus funciones, y de la interdicción de percibir las ventajas y las remuneraciones de esa función.

Si estos actos han sido cometidos en público, el encarcelamiento será de tres años lo más.

Incurren en la pena prevista en el artículo anterior los ministros y funcionarios del culto que, prevaleciéndose de su calidad obliguen o lleven a una persona a cometer actos o a hacer declaraciones contrarias a las leyes o contrarias a los derechos adquiridos en virtud de las leyes.

Si uno de los ministros del culto, prevaleciéndose de su calidad de ministro, comete un delito distinto que los delitos previstos en el artículo precedente, la pena prevista por el delito cometido, será agravada en un sexto.

Sin embargo, si el Tribunal ya ha tomado en consideración su calidad religiosa para determinar la pena, la agravación no será pronunciada".

El Código penal de Portugal de 1866 en el Libro Segundo, dentro de las "Infracciones en particular", en

el Título Primero, "De los delitos cometidos contra la religión y los delitos cometidos por abuso de funciones religiosas", al estar derogados los artículos 130 al 135, ambos inclusivos, que constituían el Capítulo Primero, "Delitos contra la Religión", quedan únicamente los regulados en el Capítulo Segundo, "Delitos cometidos por el abuso de funciones religiosas". En efecto, el artículo 136, único no derogado de este capítulo, señala:

" Todo ministro del culto que utiliza sus funciones religiosas a un fin temporal reprobado por las Leyes del Reino, será castigado con una pena de prisión y una multa, de una duración de un mes a tres años.

1- El que abusa de sus funciones religiosas, cuando el abuso consiste en la revelación del secreto de la confesión, o en la seducción de uno de sus penitentes con un fin inmoral, será castigado con una pena de prisión mayor de ocho a doce años.

2- Si el abuso consiste en proceder o hacer proceder a la celebración de una boda, sin que las formalidades requeridas por las Leyes civiles hayan sido previamente cumplidas, será castigado con una pena de prisión de una duración de un mes a un año".

El Código penal soviético , a través de una ley del 25 de julio de 1962, castiga en el artículo 227 el atentado a la persona y a los derechos de los ciudadanos bajo el disimulo de ceremonias religiosas. El artículo 227 dice:

"El hecho de organizar o dirigir un grupo de personas cuya actividad, llevada bajo el disimulo de predicación de dogmas religiosos y de cumplimiento de cere-

monias religiosas, se acompañe de daños causados a la salud de los ciudadanos u otros atentados a la persona y a los derechos de los ciudadanos, o se acompañe de incitación de los ciudadanos a rehusar toda actividad social o la ejecución de sus obligaciones de ciudadanos, o se acompañe del hecho de arrastrar menores a hacer parte de ese grupo, es castigado con la privación de la libertad por un periodo de cinco años lo más o de residencia forzosa por el mismo tiempo, o de trabajos correctivos por un año lo más.

Silos actos de las mencionadas personas en el apartado segundo del presente artículo y las personas ellas mismas que los han cometido, no representan un peligro social, pueden ser objeto de medidas de presión social".

El artículo 228 castiga: "La fabricación o venta de objetos pornográficos". "La fabricación, difusión o publicidad de obras pornográficas, que sean obras imprimidad, imágenes o de cualquier otro objeto de carácter pornográfico, lo mismo que el comercio con dichos objetos o su difusión, será castigado con la privación de libertad por un periodo de tres años lo más, o de una multa de 100 rubloa como máximo, con confiscación de los objetos pornográficos y de los medios que sirven a su fabricación".

"La profanación de una tumba, como el robo de objetos que se encuentran dentro de la tumba o sobre la tumba, son castigados con la privación de libertad por un periodo de tres años lo más o de trabajos correctivos por un año lo más".

El Código Penal yugoslavo, modificado sustancialmente por la Ley del 2 de julio de 1.959, castiga el uso abusivo de la religión y de la Iglesia con fines políticos. El artículo 311 dice:

"Todo ministro de un culto que haya hecho un uso abusivo de la libertad de ejercer actividades o de tener ceremonias religiosas con fines contrarios al orden constitucional, será castigado con encarcelamiento".

El artículo 313 sanciona las trabas a las ceremonias religiosas. Dice: "El que haya turbado o impedido el orden de las ceremonias religiosas, será castigado con multa o encarcelamiento por un año lo más".

El artículo 313-A castiga la profanación de una tumba: "El que, sin estar autorizado, haya revuelto, destruido o dañado una tumba o cualquier otro lugar donde estén enterrados muertos, o bien haya cometido una grosera profanación será castigado con multa o encarcelamiento por un año lo más".

El Código penal de Uruguay del 4 de diciembre de 1.933 regula en el Libro II, Título XI, los "Delitos contra la libertad", y dentro del Capítulo V los "Delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento "religioso". El artículo 304 sanciona con prisión la ofensa al culto por el impedimento o la perturbación de las ceremonias". El 305 la ofensa al culto por el ultraje de los lugares o de los objetos a él destinados. El artículo 306 castiga la ofensa y el ultraje al ministro del culto. El 307 sanciona el vilipendio de cadáveres o sus cenizas. Y el 308 el vilipendio de sepulturas, urnas o cosas destinadas al culto de los muertos. El artículo 309 castiga el vilipendio o sustracción de cadáveres o sus cenizas.



El Código penal de Venezuela de 15 de julio de 1.926 castiga en el Libro II, Título II, "Delitos contra la libertad" dentro del Capítulo II, "Delitos contra la libertad de cultos", con las siguientes conductas:

El artículo 168 sanciona el ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca, así como el impedir o perturbar sus cultos o ceremonias.

El artículo 169 sanciona el vilipendio de la persona que profese algún culto.

El artículo 170 castiga el destruir, maltratar o dañar en un lugar público las cosas destinadas al culto.

El artículo 171 sanciona estas mismas conductas cuando se realizasen dentro de los cementerios.

Finalmente el artículo 172 sanciona los actos de profanación en los cadáveres o sus cenizas, así como de las demás cosas destinadas al culto de los muertos. (65).

I V

C O N C L U S I O N E S

## CONCLUSIONES

La presente tesis doctoral resultaría incompleta de no llegarse a unas conclusiones. Y es lo que ahora pretendemos, aunque sean pocas y siempre relacionadas con lo ya expuesto con anterioridad. Es de resaltar que las conclusiones que a continuación vamos a establecer pueden llegar a ser una realidad en muy poco tiempo al estar el país en constante cambio en todos los aspectos y sobre todo en el orden legislativo. Son varios los proyectos de ley que en fechas próximas van a ser discutidos en las Cortes, destacando sobre todos ellos el Proyecto de Ley Orgánica del Código penal, al cual nos hemos referido en repetidas ocasiones en este trabajo.

1ª) La primera conclusión que debemos destacar es la de considerar la libertad religiosa como un Derecho Fundamental. Hemos visto como varias legislaciones extranjeras (Constituciones de Francia, URSS, Suiza, EEUU, Portugal ..... ) así como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948, reafirman el derecho a la libertad religiosa como un derecho fundamental. La Constitución española actualmente en vigor desde el año 1.978 señala en el artículo 16, dentro del Título I, "De los derechos y deberes fundamentales", el derecho a la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

La Iglesia, igualmente, ha resaltado en varias ocasiones el derecho a la libertad religiosa. Así el Papa Juan XXIII, en la Encíclica "Pacem in Terris", decía: "Entre los derechos del hombre se ha de enumerar el de que puedan venerar a Dios - según la recta norma de su conciencia y profesar la religión -

privada y públicamente". Asimismo la Declaración "Dignitatis Humanae" sobre la libertad religiosa dice: "Nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de actuar según ella privada o públicamente, sólo o en sociedad con otros, dentro de los límites debidos", continuando más adelante: "es necesario que se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas".

Por lo tanto, como primera conclusión mantenemos que - hay casi unanimidad en considerar ya el derecho a la libertad religiosa como un derecho fundamental, y así se comprueba en la mayoría de las Constituciones:

2ª) La segunda conclusión que interesa destacar es el ámbito de ese derecho a la libertad religiosa. Hasta aquí hemos visto varios puntos de vista sobre el concepto de libertad religiosa, pero sin embargo ahora importa resaltar el de Amadeo de Fuenma - yor que afirma: "El derecho a la libertad religiosa es un puro es tatuto de inmunidad en la esfera religiosa, tanto para las perso nas individuales como para las comunidades o confesiones. Es un - derecho subjetivo, y por tanto, es un derecho de la persona huma na". Igualmente nos enumera los componentes del derecho a la li - bertad religiosa:

- 1.- Derecho a la libertad de fé;
- 2.- Derecho a la libertad de culto;
- 3.- Derecho a la libertad de asociación religiosa;
- 4.- Derecho a la propaganda religiosa;
- 5.- Derecho religioso de caracter familiar.

Igualmente, es interesante la definición que hace Jacques Maritain: "La libertad que tiene cada persona humana, cara al Estado o cualquier poder temporal, de velar por su destino eterno buscando la verdad con toda su alma y conformándose a ella como ella la conoce y obedecer según su conciencia - aquello que ella considera como verdadero en relación a las cosas religiosas".

Es de destacar también lo expuesto por Francesco Ruffini en su obra "La libertad religiosa", en 1.901, cuando dice que "no es un concepto filosófico, ni teológico, como la eclesiástica, es un concepto o principio esencialmente jurídico. Es la libertad de conciencia, de fé, o de confesión. (66).

La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales del 4 de Noviembre de 1.950, en el artículo 9º, dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamientos, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o creencias, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, en público o en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas y el cumplimiento de los ritos".

Por lo dicho, se puede afirmar que la libertad religiosa comprende a su vez varios tipos de libertades: la libertad de fé, la libertad de cultos, la libertad de asociarse....

3ª) La libertad religiosa tiene unos límites, como todo tipo de libertades. El artículo 16 de nuestra Constitución lo afirma al decir: "sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

Amadeo de Fuenmayor dice que "el ejercicio de la libertad religiosa deberá estar limitado y aún suprimido por - exigencias del bien común de la sociedad civil, es decir, - para no dañar el orden público".

La Convención de Salvaguardia de los Derechos del - Hombre y las Libertades Fundamentales, de 1.950, en el párrafo segundo del artículo 3º, señala igualmente los límites al derecho a la libertad religiosa: "La libertad de manifestar la propia religión o creencias no puede ser objeto de otras restricciones sino aquellas que, previstas por la ley, congtituyen medidas necesarias para la seguridad pública, la protección del orden público, la salud o la moral públicas, o la protección de los derechos y libertades de otro".

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5 de julio de 1.980 en el artículo tercero trata sobre los límites al derecho a la libertad religiosa: "El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos tiene como único límite la protección del derecho de los demás al - ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en el ámbito de una sociedad - democrática.

Quedan fuera del ámbito de la protección de la presente Ley las actividades, finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psiquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos".

Por todo lo expuesto podemos llegar a la conclusión

de que el derecho a la libertad religiosa tiene como límite el orden público protegido por la Ley, y que a su vez abarca la salvaguardia de la salud, la moralidad, la seguridad,.....

4ª) Como hemos venido exponiendo en la presente tesis doctoral durante la realización de la misma en nuestro país se han venido sucediendo importantes modificaciones en todos los órdenes y, sobre todo, en el aspecto legislativo siendo la promulgación de la Constitución de 1.978 el máximo exponente de dicho cambio legislativo.

Hasta la promulgación de la vigente Constitución, regían en nuestro país las Leyes Fundamentales. Entre ellas estaba el Fuero de los Españoles que en el artículo 6º decía: "La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial". En el mismo sentido, la Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional decía en el segundo de dichos principios: "La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, apostólica y romana, única verdadera e inseparable de la conciencia nacional que inspira su legislación".

Igualmente debemos hacer mención del Concordato entonces vigente con la Santa Sede de fecha 17 de agosto de 1.953 que en el artículo primero decía: "La religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el Derecho canónico".

La vigente Constitución española, que en su Disposición Derogatoria deroga las llamadas Leyes Fundamentales y expresa - mente el Fuero de los Españoles y la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en el artículo 16 dice textualmente:

1.- "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2.- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, - religión o creencias.

3.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal, Los poderes - públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. (67).

Después de la lectura del anterior artículo de la vigente Constitución y relacionándolo con los anteriores del Fuero de los Españoles y Principios del Movimiento Nacional vemos que en nuestro país, después de muchos años, se ha realizado en materia de libertad religiosa un enorme cambio. Hemos pasado de ser un país confesional a ser un país aconfesional, de tener la religión católica como "la única de la nación española" y "la - del Estado español", a que "ninguna confesión tendrá carácter - estatal". Hemos pasado, pues, de tener la religión católica como la única posible de seguir a aceptarse plenamente el derecho a la libertad religiosa y de cultos como un derecho fundamental de las personas. Sin embargo, debemos de reconocer que nuestra Constitución al referirse en ese mismo artículo 16 a las "relaciones de cooperación con la Iglesia Católica", admite expresamente la religión Católica como la de mayor número de adeptos en nuestro país.

Como conclusión podemos sacar de dicho cambio que la religión Católica es admitida junto al resto de otras religiones



y creencias, y que al ser mayoritaria se encuentra en una situación de cierta preferencia respecto a las demás. Sin embargo, la religión católica ha perdido la protección y ayuda estatal por lo que deberán ser sus propios fieles y seguidores los que se comprometan a ayudarla en sus necesidades, como igualmente deberán hacer los seguidores de cualquier otra creencia, con respecto a la misma.

Todo esto lleva consigo una nueva situación al haber sido durante muchos años el Estado el principal protector de la religión Católica. Serán, pues, los propios fieles los que deberán concienciarse de que pertenecer a una religión significa algo más que el mero hecho de afiliarse. Debemos de reconocer que en algunas materias, como la enseñanza, el principio de la libertad religiosa en un país que ha tenido bastantes años una religión oficial y única es de difícil aplicación y puede llevar consigo la falta de preparación religiosa, conduciéndonos a una sociedad atea.

5ª) Como última conclusión podemos señalar que el derecho a la libertad religiosa, tutelado y admitido en la inmensa mayoría de las legislaciones, no significa despreocuparse de toda cuestión religiosa, sino que al contrario significa una mayor participación y responsabilidad por parte de los seguidores de cualquier religión, puesto que de su participación, ayuda y protección dependerá la subsistencia, a aún la existencia, de la religión que persiguen. La participación en los cultos y manifestaciones de una religión significará no sólo seguir las normas dadas por esa religión para sus fieles, sino también respetar las demás confesiones por muy dispares que nos puedan parecer.

6ª) Como sexta conclusión, y ya dentro de las que se refie

ren directamente a la blasfemia, nos interesa concretar qué es lo que se entiende por blasfemia. En este sentido parece que - hay acuerdo en considerar la blasfemia como palabra o acto injurioso para Dios, la Virgen o los Santos. La Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo del 31 de enero de 1.945 entendía por blasfemia "la palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los Santos". Igualmente el Código Penal italiano la define como "parola o discorso ingiurioso contro la Divinità". Recordemos que en el Nuevo Testamento se definía la blasfemia como "convicium contra Deum vel sanctos".

En cuanto a su naturaleza jurídica, hemos llegado a - la conclusión con Carrara de que la blasfemia se castiga por ser un acto antijurídico, pero podíamos igualmente llegar con Binding a la de que lo es por ser contrario al derecho, o con Merkel por violar las normas de cultura, o con Garófalo por ofender el sentimientos de piedad causando un mal moral. Es decir, que desde cualquier punto de vista, se llega a la conclusión de constituir un delito.

La sentencia del 14 de mayo de 1.977, después de recordarnos que por blasfemia "se entiende toda palabra injuriosa - contra Dios o sus Santos", nos dice que el delito de blasfemia ostenta un doble carácter antijurídico pues, de un lado, es un delito religioso por cuanto supone una ofensa a la Divinidad, y de otro, constituye una infracción de las normas de convivencia ciudadana así como una vulneración de los sentimientos religiosos y de cultura de la comunidad.

Finalmente debemos de recordar que el vigente Código Penal en el artículo 230 exige para que exista el delito de blasfemia forma escrita y con publicidad, o palabras o actos que produzcan grave escándalo público, y como falta exige el artículo

567 que sean orales y no produzcan grave escándalo público.

7ª) La blasfemia ha sido sancionada siempre y en la mayoría de los países de religión Católica. Si bien también es verdad que nuestra legislación codificada se caracteriza por una atenuación progresiva de su punición, no podemos olvidar en ningún momento que siempre, ya sea como delito o como falta, ha sido castigada la blasfemia.

Recordemos que el Código penal de 1.922 imponía la prisión de quince días a tres meses a los que públicamente blasfemaren o prorrumpieren en imprecaciones contra Dios, la Virgen o los Santos, y un arresto de ocho a cuarenta días a los que cometieren estos excesos privadamente; en el Código de 1.848 las penas son de uno a diez días, multa de quince a setenta y cinco pesetas y represión para la blasfemia pública; el Código de 1.870 no nombra la blasfemia como tal, limitándose a castigar con arresto de uno a diez días y multa de cinco a cincuenta pesetas a los que con exhibición de estampas o grabados o con otra clase de actos ofendieren a la moral o las buenas costumbres sin cometer delito; el Código penal de 1.923 supone una reacción ya que castiga los delitos contra la religión del Estado y contra la tolerancia religiosa y, entre las faltas, la blasfemia con arresto de treinta días y multa de cinco a doscientas cincuenta pesetas.

Debemos señalar que actualmente la blasfemia se castiga como delito en el artículo 239 del Código Penal con la pena de arresto mayor y multa de 20.000 a 100.000 pesetas, y como falta en el artículo 567 con las penas de uno a diez días de arresto menor y multa superior a 1.000 pesetas e inferior a 20.000, según la Ley de 8 de mayo de 1.978 que fijó la cuantía de las multas.

Finalmente debemos de recordar que el Proyecto de Ley Orgánica del nuevo Código Penal castiga la blasfemia en el Libro III entre las faltas, en el Título V "Faltas contra el orden público", y concretamente en el artículo 624 con las penas de arresto de uno a cinco fines de semana o multa de uno a dos meses, - siempre que el hecho no constituya infracción más grave.

3ª) Como ya vimos en su momento, el sujeto pasivo del delito de blasfemia es el Estado como protector de los sentimientos y costumbres de la comunidad católica organizada. El Estado debe de tutelar los sentimientos religiosos de la mayoría de los ciudadanos. Pero si esto es normal en un sistema de estado confesional o de religión oficial, la situación cambia cuando se pasa a un estado aconfesional o de plena libertad religiosa o de cultos, y esto es lo que ha pasado en nuestro país, que como ya hemos visto, de decir el artículo 6º del Fuero de los Españoles: "La profesión y practica de la religion catolica, que es la del Estado español, gozará de la proteccion oficial", hemos pasado al artículo 16 de la vigente Constitucion de 1.978: "Ninguna confesion tendra caracter estatal".

Entonces, y a la vista del mencionado artículo 16 de la Constitucion, se nos plantea el problema de si el sujeto pasivo del delito de blasfemia deberia ser ampliado a otras confesiones o credos legalmente establecidos como tutelados o protegidos por el Estado que, en el mismo artículo 16, la Constitucion garantiza la libertad ideologica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Indudablemente lo que es cierto es que en un sistema de plena libertad religiosa deberá de ser castigado de igual manera la ofensa o injuria de Dios, la Virgen o los Santos, lo que no podemos en ningún momento olvidar es que la religión católica es la profesada por la inmensa mayoría de los españoles por lo que su protección debe de ser mayor que la de otras religiones, sin que esto suponga ningún ataque al principio de li-

bertad religiosa, y buena prueba de ello es que la propia Constitución, en el n.º 3º del repetido artículo 16, menciona expresamente a la religión católica cuando dice: "Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

Por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que el Estado como sujeto pasivo del delito de blasfemia, y dentro de un sistema de libertad religiosa, debe de proteger no solo a la Iglesia Católica sino también a las demás confesiones religiosas, pero no olvidando cual es la religión mayoritaria en el país. Por lo dicho se podía llegar a afirmar que la blasfemia es la palabra o acto injurioso contra Dios, la Virgen o los Santos o contra cualquier otra persona representante de una confesión religiosa.

9ª) Y, finalmente, ante la excesiva frecuencia con que se produce en nuestros días la blasfemia sería nuestro deseo buscar una solución a este problema. Es bien cierto que hoy en día en cualquier plaza, bar o local público de nuestras ciudades se escuchan con demasiada frecuencia palabras que de por sí son constitutivas de claras blasfemias. Indudablemente la solución no es llenar los Juzgados de asuntos incoados por presuntas blasfemias, pues la actuación judicial siempre sería posterior a la blasfemia y actuaría como represión ante un hecho constitutivo de delito o de falta, aunque nunca podríamos olvidar el enorme efecto intimidatorio que la pena produce en las personas lo cual obligaría a muchas de ellas a no realizar actos o pronunciar palabras injuriosas contra Dios, la Virgen o los Santos. Sin embargo, y no olvidando nunca como última solución la actuación judicial, podríamos concluir diciendo que la solución a la blasfemia está en un problema de educación ciudadana y, sobre todo, de enorme respeto de las ideas y creencias de los demás. No podemos olvidar lo que afirmaba Fermin Urmeneta (68) en su

obra "Delitos contra el Estado" y el profesor Sanchez Tejerin  
que decían que el Código sancionaba la blasfemia cualificada o  
"escandalosa" y no la "simple", pues exige que sea mediante pala  
bras o actos que produjesen grave escándalo público, y ante la  
posibilidad de que dicho precepto quedase incumplido o en desu-  
so señalaban si no sería preferible "el consejo humilde y evan-  
géllico", y que siendo un vicio español muy arraigado sería mejor  
solución la educación de los ciudadanos.

NOTAS

N O T A S

- 1 - Amadeo de Fuenmayor: "La libertad religiosa". Universidad de Navarra.- Pamplona. -1.974-
- 2 - Amadeo de Fuenmayor: "La libertad religiosa y el IUS HUBER<sub>II</sub>" en el Ordenamiento español. Pamplona -1.965-.
- 3 - Documentos pontificios "JUAN XXIII Pacem in Terris". Editorial apostolado de la Prensa S.A.
- 4 - Documentos pontificios "JUAN XXIII: Mater et magistra". - Editorial apostolado de la Prensa S.A.
- 5 - Constitución española. -1.974-.
- 6 - Francesco Ruffini: "La libertad religiosa" -1.901-.
- 7 - Amadeo de Fuenmayor: "La libertad religiosa del pueblo de Dios". -1.966-.
- 8 - Doctrina Pontificia.- Documentos Juridicos -1.960-.
- 9 - Guizot: "Historia de la civilización de Europa".
- 10 - Documentos pontificios - Editorial apostolado de la Prensa S.A.
- 11 - Jacques Maritain: "El campesino de Garona". 1.946.
- 12 - "El desarrollo penal del Fuero de los Españoles".- Revista de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación - 1.953 (2º Semestre).



- 13 - Ver "El delito de blasfemia" - Terial Carralero.- Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales -1.951-.
- 14 - Documentos pontificios - BAC -.
- 15 - León XIII -Encíclica "Inmortale Dei".- Colección de A.C. y "Rerum Novarum" de la Editorial Apostolado de la Prensa S.A. -1.964-.
- 16 -JUAN XXIII.- Encíclica "Mater et Magistra" y "Pacem in Terris".- Documentos Pontificios -1.965-.
- 17 - Jimenez Urresti.- "La libertad religiosa" -1.965-.
- 18 - D'Avack.- "Il problema Storico-Giuridico della libertà religiosa". Roma -1.966-.
- 19 - "Gaudium et spes" -1.965-.
- 20 - Pavan.- "Libertá religiosa e pubblici poteri".- Milano -1.965-.
- 21 - Maier - "Religionsfreiheit in den setaatlichen Verfassungen".- Munich. -1.966-.
- 22 - JUAN XXIII.- "Pacem in Terris".
- 23 - Millán Puellas.- "Persona humana y Justicia social" - Madrid -1.962-.
- 24 - Dignitatis humanae -nº 2, ap. 2.
- 25 - -Castán- "Los derechos del hombre" Madrid -1.966- y Sanchez Agesta.- "Tecnica Jurídica de la libertad" -1.963-.

- 26 - Lamilo De'Cocci.- "Considerazioni sulle libertà costituzionali" -1.953-.
- 27 - Dignitatis humanae-. n. 6, ap. 2.
- 28 - Jimenez Urresti.- "La libertad religiosa en la España de hoy". -1.967-.
- 29 - Murray.- "Le problème de la liberté religieuse". Paris. -1.965-.
- 30 - Código Penal.- Boletín Oficial del Estado; -1.962-.
- 31 - "Constitución española- 31 de octubre; -1.978-.
- 32 - Ambrosio Negri.- "Dei delitti contra la libertà" -1.888-.
- 33 - Carrara.- "Programa di diritto criminale; -1.925-.
- 34 - Binding.- "Handbuch des Strafrechts".- Leipzig -1.885-.
- 35 - Rodríguez Devesa.- Derecho Penal.- "Parte Especial".
- 36 - Códigos Antiguos de España.- Martínez Alcubilla.- Madrid. -1.885-.
- 37 - Circulares Fiscalía del Tribunal Supremo.- Madrid.-1.945-.
- 38 - Puig Peña.- "Derecho Penal.- Parte especial.- Madrid.- -1.969-.
- 39 - Manzini.- "Diritto penale italiano"; -1.939-.
- 40 - Gomez Urbaneja y Herce Quemada.- "Derecho procesal penal.- Madrid -1.975-.

- 41 - Memoria Fiscalia del Tribunal Supremo; -1.968-.
- 42 - Gomez Orbaneja.- "Derecho procesal penal.- Madrid -1.975-.
- 43 - Códigos Antiguos de España .- Martinez Alcubillo.- Madrid.  
-1.885-.
- 44 - "Breve historia Constitucional de España.- Pedro Farias -  
-1.975-.
- 45 - "Constituciones y Leyes Fundamentales de España.- Padilla.  
-1.947-.
- 46 - "Constituciones y Leyes Fundamentales de España.- Sanchez  
Agesta -1.954-.
- 47 - "El Código Penal del 70, comentado y concordado" - Groi-  
zard.- Madrid; -1.914-.
- 48 - "Novisimo Código Penal.- Jaramillo.- Salamanca -1.926-.
- 49 - "Derecho penal" Puig Peña.- Barcelona; -1.944-.
- 50 - "Derecho penal-Parte especial".- Cuello Galan.- Barcelona.  
-1.972-.
- 51 - Boletin Oficial de las Cortes - Enero -1.980-.
- 52 - "Estado y Religión".- Amadeo Fuenmayor.- Madrid -1.967-.
- 53 - Constitución española.- 31 de octubre de 1.978.
- 54 - Boletin Oficial de las Cortes; Febrero -1.980-.
- 55 - Boletin Oficial del Estado.- Diciembre -1.979-.

- 56 - Estatutos de Autonomia -1.979-.
- 57 - Boletín Oficial de las Cortes.- Enero -1.980-.
- 58 - Estatutos de Autonomia.- -1.982-.
- 59 - Recopilación de las Constituciones vigentes en Europa y Ame  
rica".- Heredia.
- 60 - "La Costituzione italiana comentada con la decisione della  
Corte costituzionale" Lavagna -1.970-.
- 61 - "Recopilación de las Constituciones vigentes en Europa y -  
America".- Heredia.
- 62 - "Derecho penal" Cuervo Galan.- -1.970-.
- 63 - "Les Codex Penaux Européus".- Marc Ancel.- Paris -1.953-.
- 64 -"Programma di diritto criminale" .- Carrara -1.925-.
- 65 - "Les Codex Penaux Européus".- Marc Ancel.- Paris -1.953-.
- 66 - "La libertad religiosa".- Ruffini -1.901-.
- 67 - Constitución española.
- 68 - "Delitos contra el Estado".- F. Urmeneta -1.972-.

B I B L I O G R A F I A

## B I B L I O G R A F I A

- ABAITUA, Carlos, La doctrina sobre la libertad política en el magisterio del Papa León XIII, Doctrina pontificia.
- ANGEL; Marc, Les Codex Penaux Européens, Paris, 1.957-1.958.
- ANDRES GALLEGO, J. Regeneracionismo y politica confesional en España (1.889-1.899), Sevilla, 1.971.
- Planteamiento de la cuestión religiosa en España. (1.899-1.902), Revista "Ius Canonicum" nº 24; 1.972.
- La politica religiosa en España, 1889-1.913, Madrid 1.975.
- ANTOLISEI, F. Manuale di Diritto penale. Parte Speciale, Milano 1.954.
- ANTON CHECA, J. Los antecedentes del nuevo Código Penal, Madrid 1.929.
- Historia del Código Penal de 1.822, "Anuario de Derecho penal", XVIII (1.965).
- El Código Penal de 1.848 y D. Joaquin Francisco Pacheco, "Anuario de Derecho Penal" XVIII (1.965).
- El Código Penal de 1.870 "Anuario de Derecho Penal" XXIII (1.970).
- Los proyectos decimonónicos para la reforma del Código penal español. "Anuario de Derecho penal" 1.972.
- ANTON CHECA-RODRIGUEZ MUÑOZ-RODRIGUEZ DEVESA, Derecho penal (parte especial) Madrid -1.949.

BALMES, J., Obras completas, BAC, Madrid -1.956-.

BARBA, La religione dello Stato e la Costituzione della Repubblica, -1.950-.

BARILE, Religione Cattolica, religione dello Stato religione privilegiata, Diritto Ecclesiastico, -1.951-.

BATLLE, M., Consideraciones sobre la nueva ley de libertad religiosa y el derecho privado civil, "Revista General de Legislación y Jurisprudencia". -1.967-.

BAYET Albert, Historia de la libertad de pensamiento, Libertad religiosa.

BENITO, E. de, Delitos contra el libre ejercicio de los cultos, "Enciclopedia Jurídica Española", vol. X.

BERNARDEZ CANTOR, Legislación eclesiástica del Estado, Madrid -1.964-.

BERTOLA, Appunti sulla nozione giuridica di laicità dello Stato Roma, -1.953-.

BETTIOL, Bene giuridico e reato, Riv. It. Diritto penale -1.936-

BINDING, Handbuch des Strafrechts, Leipzig, -1.885-.

BISCARETTI Y ROZMARYN, La Constitution comme loi fondamentale dans états de l'Europe occidentale et dans les états socialistes, Turin -1.966-.

BRUNIALTI, Lo Stato e la Chiesa in Italia, Torino -1.892-.

CAMANO ROJA, A., Delitos contra la libertad, "Anuario de Derecho penal". -1.967-.

CAMPOLONGO, F. I delitti contro la religione e la piet  dei difunti, Napoli -1.931-.

CAROVAS DEL CASTILLO, Aspecto-jur dico legal de la blasfemia, Madrid, -1.917-.

CANTERO, P. Reflexiones acerca de la libertad religiosa en el ordenamiento jur dico actual de Espa a, volumen colectivo, Madrid, -1.964-.

CARIELUTI, Teoria Generale del reato, Padova -1.930-.

CARRILLO ALBORNOZ, La libertad religiosa y el Concilio Vaticano II, Cuadernos para el dialogo, edit -1.966-.

CARRARA, F. Programma di diritto criminale. Parte speciale, 9  edic.-1.925-.

CASABO RUIZ, J.R. Los origenes de la codificaci n penal en Espa a: el plan del C digo criminal de 1.787, "Anuario de Derecho penal". -1.967-.

CASTEJON, F. G nesis y breve comentario del C digo penal de 23 de diciembre de 1.944; "Revista General de Legislaci n y Jurisprudencia", tomos IX y X, -1.945-.

COMELLAS, J.L., La teoria del regimen liberal espa ol, Madrid, -1.962-.

CONCILIO VATICANO II, La libertad religiosa 1.962-1.965, Pa-



cultad de Derecho Canónico, Madrid.

CONSOLI, A. Il reato di vilipendio della religione Cattolica, Milano, -1.957-.

CORRAL SALVADOR, Carlos, La libertad religiosa en la Comunidad Europea, Libertad de cultos, Iglesia y Estado.

CORRIENTE, J.A. El proyecto de Constitucion Internacional de Las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o creencia, Revista "Ius Canonicum", nº 24, -1.972-.

COSTA, Derecho Penal español, Madrid, -1.929-.

COSTIN y WATSON, The Laward Working of the Constitution, London, -1.952-.

CRESPI, Il nuovi presupposti istituzionali e i delitti di vilipendio della religione cattolica e di ingiure publi che contro la persona del Sommo Pontifice, -1.951-.

CRESPOLANI, Dei delitti contro la liberta dei culti, -1.951-.

CUELLO CALON, E. La proteccion penal de la religión, Revista Española de Derecho Canonico, septiembre-diciembre -1.944-. Las normas penales de las modernas constituciones, "Anuario de Derecho penal", Tomo IV, -1.951-. Derecho penal. Parte especial. Barcelona, -1.961-. Derecho penal. Parte especial, revisado y puesto al dia por Cesar Camargo Hernández, Barcelona, -1.972-.

CHIAROTTI, F., Delitti contro la piet  dei difunti, "Novissimo Digesto italiano".

D'AVACK, P.A., Il problema storico-giuridico della libert  religiosa.

DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, -1.930-.

DEL GILDICE, I deliti contro i culti e l'esercizio delle potest  ecclesiastiche, Milano -1.923-.

Storia del diritto italiano, Milano -1.923-.

DENISOU y KIRICHEVNO, Soviet State Law, Moscu -1.960-.

DIRITTO ECLESIASTICO, La bestemmia di fronte al Diritto -1.939-.

DOCTRINA PONTIFICIA II, Documentos politicos, BAC, n. 174, Madrid -1.958-.

DOCTRINA PONTIFICIA III, Documentos Sociales, BAC, n. 178, Madrid, -1.959-.

DOCTRINA PONTIFICIA V, Documentos juridicos, BAC, n. 194, Madrid, -1.960-.

DUVERGER, Constitutiones et documents Politiques, -1.966-.

ELORZA, A. La ideologia liberal de la Ilustraci n espa ola, Madrid, -1.970-.

FABRO, C. La libertad en el pensamiento contempor neo, Atl ntida, n. 24 -1.966-.

FERRER S  A, A. Comentarios al C digo penal, Murcia, -1.948-.

FLORIAN, Il sentimento religioso e la pietà verso y defunti,  
Milano, -1.935-.

Delitti contro il sentimento religioso de la pietà  
dei difunti, Milano, -1.935-.

Delitti contro la libertà individuale, Milano -1.936-

FUENMAYOR CAMPIR, Amadeo, La libertad religiosa, Universidad  
de Navarra, Pamplona -1.947-.

Voz libertad, "Gran Enciclopedia Rialp, tomo 14.

Problemas actuales de la confesionalidad del Estado,  
Madrid, -1.966-, Separata;

Estado y Religion (el articulo 6º del Fuero de los Es-  
pañoles), Madrid, -1.967- Separata.

La noción conciliar de libertad religiosa, Madrid, -  
-1.974-, Separata.

La libertad Religiosa del pueblo de Dios -1.966-.

La libertad Religiosa y el "ius nubendi" en el orde-  
namiento español.

GABRIELI Francesco Panteleo, Delitti contro il sentimento reli-  
gioso e la pieta verso ide difunti, Milano, Dott, A,  
Giuffré, -1.961-.

GALANTE, Diritto Ecclesiastico, Milano, -1.923-.

GIAMPIETRO, Lotta contro la bestemmia e l'inmoralità, Palermo  
-1.929-.

GOMEZ PEREZ, R. Etica politica iusnaturalista, Revista "Persona  
y Derecho" vol. I, Pamplona, -1.974-.

GONZALEZ LLANOS, Antonio, La blasfemia, -1.949-.

GRILLO, G. Il dolo nei delitti contro la pietà dei defunti, La  
Giustizia penale II, -1.954-.

- GROIZARD, A., El Código Penal del 70, comentado y concordado, Madrid, -1.902-1.914-.
- HALMAN, Fredon of Speech, New York -1.966-.
- HEGLER, Subjektive Rechtswidrig Keits momenté.
- HERA, A. de la, Pluralismo y libertad religiosa, Sevilla -1.971-.
- HEREDIA, Recopilación de las Constituciones vigentes en Europa y America -1.884-.
- HIROJOSA, E. de, Historia general del derecho español, Madrid, -1.887-.
- JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico Milano, -1.957-,  
La natura e la portata.  
Religione dello stato e confessioni ammesse, -1,930-.
- JIMENEZ ASENJO, E. Teoria del Derecho Penal especial,  
"Anuario de Derecho penal". -1.949.
- JIMENEZ DE ASUA, L. La legislación Penal de la República española, Madrid -1.932-.
- JIMENEZ LOZANO, Jose, Meditación española sobre la literatura religiosa, -1.966-. Destino.
- JIMENEZ URRESTI, E. La libertad religiosa vista desde un país católico : España, "Concilium", n.18 -1.966-.  
Comentarios a la declaración sobre libertad religiosa, -1.966-.
- JANSSENS, Louis., Liberté de conscience et liberté religieuse -1.964-; Ed. Desclée de Brouwer.
- KAHL, Religionsvergehen, Berlin, -1.906-.

- LANDROVE DIAZ, G. La libertad religiosa y la reforma de 1.971  
"Anuario de Derecho Penal", XXV -1.972-.
- LAVAGNA, La Costituzione italiana commentata con le decisio-  
ne della Corte costituzionale, -1.970-.
- LEGAZ LACAMBRA, L., voz Derechos del hombre, "Gran Enciclope-  
dia Rialp", tomo 7.
- LIGNOLA, C. Alcune osservazioni in merito ai reati che offendo-  
no la Religione, Napoli -1.957-.
- La bestemmia di fronte al Diritto, Rivista di Dirit-  
to Ecclesiastico", -1.939-.
- LISZT, Lehr buch des deutschen Strafrechts, Berlin y Lipzig,  
- 1.927-.
- LOCKHART, KAMISAR y CHOPER, The American Constitution, -1.964-.
- LOMBARDI, Intorno ai delitti contro la libertà dei culti.
- LOMBARDIA, P., La confesionalidad del Estado hoy, "Ius Canoni-  
cum", -1.961-.
- LOPEZ AMO, A., El Derecho penal español de la Baja Edad Media,  
Madrid, -1.956-.
- LUCARINI, La bestemmia come reato (Sin. Giur., fasc. 434).
- LLOPIS MORET, Francisco, Consideraciones sobre la blasfemia,  
-1.946-.
- MACCHIARELLI, La libertà religiosa ed il codice penale. Dir.  
Eccles, -1.921-.
- MAGGIORE, G. Derecho penal, Bogotá, -1.954-55-.
- MANZI, J.D. Sacrorum Conciliorum nova amplissima collectio,  
Graz, -1.960-1.962-.

MANZINI, V. Trattato di diritto penale, Torino, -1.950-.

Taattato di diritto penale italiano, Torino -1.948-

Trattato di diritto penale italiano, 2ª ed. Torino,  
-1.942-43-.

MARITAIN, Jacques., Religi3n et Culture, Paris., -1.946-.

MARONGIU, Storia del diritto pubblico, Milano -1.956-.

MARTIN MARTINEZ, Isidoro, Doctrina sobre relaciones iglesia-esta-  
do.

MARTIN RETORTILLO, L. Libertad religiosa y orden publico (un es-  
dio de Jurisprudencia), Madrid, -1.970-.

MEER, F. de. La cuestion religiosa en las Cortes Constituyentes  
de la II Republica, Eunsa, Pamplona, -1.975-.

MENDIZABAL OSES, L. Derechos del hombre: declaraciones de dere-  
chos, "Gran enciclopedia Rialp", tomo 7.

MENENDEZ Y PELAYO, M. La ciencia espa3ola, 3ª ed. Madrid, 1.-87-  
1.888-.

MEZGER, Strafrecht, Leipzig, -1.931-.

MINETTI, Sull'elemento psicologico del delitto di vilipendio de-  
lla religioni a differenza della bestemmia (Arch. Ric.  
Giurid -1.951-958-.

MOMMSEN, T. El derecho penal romano, Madrid, La Espa3a Moderna  
s.a. Traducido del aleman por el profesor Dorado.

MONACHINO, V. Il fondamento giuridico delle persecuzioni nei pri-  
mi due secoli, "La Scuola Cattolica 2, vol. CXXXI -  
-1.953-.

MONTERO, E. ElCodigo de 1.843 y los delitos contra la religi3n,

"Revista Juridica de Cataluña", LIV-XVI -1.943-.

MONTES, P. El crimen de herejia, San Lorenzo del Escorial, -  
-1.918-.

Derecho penal español, San Lorenzo del Escorial, -  
- 1.929-.

NEGRI, Ambrogio, Dei delitti contro la libertà, -1.888-.

La Costituzione italiane, Milano -1.958-.

NEUSS, W. Historia de la Iglesia, Madrid, -1.961-1.962

NUEVA ENCICLOPEDIA JCA, Seix, Barcelona -1.951-, Tomo III.

MUNEZ BARBERO, La reforma penal de 1.870, Salamanca, -1.969-

OLLERO TASSARA, A. Filosofia del derecho como contra secular-  
rizacion, Granada, -1.974-.

ORLANDIS, J. Historia de la Iglesia I: La Iglesia Antigua y  
Medieval, Madrid, -1.974-.

Sobre el concepto de delito en el derecho de la Alta  
Edad Media, Madrid, -1.945-.

Las consecuencias del delito en el derecho de la  
Alta Edad Media, Madrid, -1.947-.

ORTEGO, J. Ensayo sobre la parte esencial del derecho ~~penal~~  
Universidad de la Laguna, -1.959-.

PACHECO, J. El Código penal concordado y comentado, Madrid,  
- 1.856 -.

PADILLA, Constituciones y Leyes Fundamentales de España,  
-1.947-.

Constituciones y Leyes Fundamentales de España,  
Prologo de Luis Sanchez Agesta, Universidad de Gra-  
nada, -1.954-.

PALAZZOLO, La libertà religiosa nei suoi riflessi penali, Nuovo Diritto -1.954-.

PANTALEO, Gabrieli, F. Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti, Milano, Dott. A. Giuffrè - 1.961 -.

Profili costituzionali della libertà religiosa, - Scritti giuridici in onore de Alfredo Marsico, Vol. I. Milano -1.960-.

PEAS LEE, Constituciones of the Nations, -1.956-.

PEDRAZZI, Il fine dell'azione delittuosa, -1.953-.

PEDREGAL, L.J. Evolución del delito de violación de Sepulturas en el derecho histórico, "Revista de la escuela de Estudios Penitenciarios", IX-1.953.  
A proposito de sustracciones realizadas en el cementerio de San Fernando, "Revista de la Escuela de Estudios Penitenciarios", -1.953-.

PEREZ ALHAMA, J. La Iglesia y el Estado. Estudio histórico jurídico a través del Concordato de 1.851, Madrid, - - 1.967-.

PEREZ LLANTADA Y GUTIERREZ, Jaime., La libertad religiosa en España y el Vaticano II. I. Lis. relig.- Doctrina conciliar, 2 Lis. relig. España -1.967-.

PEREZ MIER, L. Iglesia y Estado nuevo, Madrid, -1.490-.

PEREZ SERRANO, Constituciones vigentes de los estados americanos, -1.929-.

PERLADO, Pedro Antonio., La libertad religiosa en las constituyentes del 69. I Lib. de cultos. España -1.369-



Hª 2 España. Hª 1.808-1.869. 3. Iglesia y Estado.  
Esp. 1.808-69-.

PETSCHEW, S. La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de 1.869, "Miscelanea", XXXIII, n. 60, Madrid -  
- 1.974-.

PIACENTINI, M. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, "La Giustizia penale" -1.935-  
Voz Bestemmia, Novissimo Digesto Italiano, vol. II,  
-1.958-.

I Delitti contro la religione e la pietà dei defunti, Napoli, -1.930-.

I culti ammessi nello Stato italiano, Milano -1.934-

POLETTINI, Sulle offese alla persona del Sumo Pontifice, Riu.  
it. dir. pen. -1.950-.

PORTILLO, A. del. Fieles y laicos en la Iglesia, Pamplona -  
-1.969-.

Moral y Derecho, Revista "Persona y Derecho", vol.  
I, Pamplona, -1.974-.

PRIZANTARO, II diritto di sepolcro nelle sue evoluzioni storiche e nelle attinenze col diritto privato. Torino,  
-1.905-.

PUIG PENA, F. Derecho penal, Madrid, -1.955-.  
voz. Delitos contra la religión católica, Nueva  
Enciclopedia Jurídica española. Barcelona.

QUINTANO RIPOLLES, A. Comentarios al Código Penal Madrid -  
-1.946-.

Blasfemia, 1.951, Seix.

La motivación moral en el derecho penal, "Revista General de Legislación y Jurisprudencia" 1.949-.

La evolución del Derecho penal moderno, "Anuario de Derecho penal". -1.957-.

Curso de Derecho Penal, Madrid, -1.963-.

RANIERI, S. Manuale di Diritto penale. Parte Speciale, Padova, -1.962.

Commemoración del centenario de la ley provisional sobre organización judicial y del Código penal de

1.870, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Madrid, -1.970-.

RECASENS SICHES, L. voz. Derechos del hombre, "Gran Enciclopedia Rialp". Tomo 7.

REPETTO Y REY, G. La incautación del cadáver humano con fines terapéuticos, "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", XLI, -1.960-.

Monografía sobre la libertad religiosa. Revista - Atlantida, nº 24.

Monografía sobre la libertad religiosa. Revista - Concilium, nº 18.

BERNIER, Della bestemmia come reato, in Consultore giuridico, - 1.868-.

RUFFINI, La libertad religiosa, Torino -1.901-

RUPEREZ, Javier, Estado confesional y libertad religiosa, Cuadernos para el dialogo. -1.970-.

SABATINI, G. Instituzioni di diritto penale, parte speciale,

Catania -1.935-, vol. II.

SALTELLI ROMANO DI FALCO. Commento teorico-prattico del  
nuovo Codice Penale -1.940-, vol. IV.

SANCHEZ AGESTA, Luis., Derecho Constitucional Comparado  
- 1.965-.

SANDULLI, Delitti contro la religione dello stato e i -  
culti ammessi, "La Giustizia penale", II 1.939  
Delitti contro la piet  verso e difunti, "Re-  
vista Penale" -1.938-.

SAITORO, A. Sentimento religioso e piet  dei defunti. -  
(delitti contro il), "Novissimo Digesto Italia-  
no", tomo XVI, Torino, -1.969-.

SAVER, Allgemeine Strafrechtslehre, Berlin, -1.949-

SERRA, Vilipendio della Religione dello Stato -1.950-

SEVILLA ANDRES, D. voz Libertad religiosa, "Nueva Enciclo-  
pedia Juridica", tomo XV, -1.974-.  
Historia Constitucional de Espa a (1.800-1.936)  
Valencia, 1.966.

SIGNOLA, G. La bestemmia de fronte al diritto -1.939 -

SILVELA, L. Derecho Penal II, Madrid, -1.879-

SIMON, La libert  di coscienza, Torino, -1.892-.

STOCCHIERO, G. Diritto penale della Chiesa e dello Stato  
italiano, Vicenza, -1.932-.

STUBBS, Select Charters and other illustrations of English

constitucional History, Oxford, -1.929-.

SUAREZ, F. Planteamiento ideológico del s. XIX español,  
"Arbor", Madrid, -1.953-.

Genesis del Concordato de 1.351, "Ius Canoni-  
cum", 3. -1.963-.

TERUEL CARRALERO, D. El delito de blasfemia, "Anuario de  
Derecho penal", IV, -1.951-.

Los delitos contra la religion entre los deli-  
tos contra el Estado, "Anuario de Derecho penal"  
IV. -1.960.

Panorámica de las infracciones contra el Estado,  
"Revista de Derecho Español y Americano" n. 7. -  
- 1.965-.

TOMAS Y VALIENTE, F. El derecho penal de la monarquía abso-  
luta (siglos XVI, XVII, XVIII), Madrid -1.969-.

URMENETA, F. Delitos contra el Estado. -1.972-.

VECCHIA, G. della, Violazione di sepolcro, Requisito dell'  
animus iniurandi. Rilevanza. "Revista Penale", 2,  
- 1.951 -.

VERA URBANO., La libertad religiosa como derecho de la per-  
sona.

VICO, GA., La Scienza nuova, Bari laterza, -1.911-.

VICO, P. El reato de bestemmia, "Annali di diritto e proce-  
dure penale", -1.937-.

VITALI, E. Vilipendio della religione di stato, Padova - 1.964-

WELZEL; Das neue Bild des Strafrechtssytem, -1.952-.